Pasquale
Villani

La edad contemporánea, 1800-1914

Ariel Historia

Una delimitación cronológica de edad contemporánea que satisfaga a los historiadores de todas las tendencias es una empresa ardua y todavía inconclusa. Si es fácil fijar su límite final en nuestros días, su comienzo varía según se tome como fenómeno determinante del cambio la Revolución industrial, la Revolución francesa o las guerras mundiales. Al iniciar esta obra con la afirmación del poder napoleónico y la difusión de las conquistas de la Revolución industrial, el autor opta por la división que más se adapta a un enfoque principalmente político-social. El presente libro abarca el período que va de 1800 a 1914. Concluye, por lo tanto, en vísperas del estallido de la primera guerra mundial. Pasquale Villani analiza, uno tras otro, los procesos políticos, económicos y sociales que arrastraron a la humanidad a la primera gran tragedia de nuestro tiempo y también sentaron las bases de la historia presente.

Otros dos trabajos del autor (*La edad contemporánea, 1914-1945* y *La edad contemporánea, hasta hoy*) completan la historia de dos siglos de sorprendentes transformaciones que han conducido a lo que algunos historiadores franceses han definido como «la historia de hoy», que se resuelve entre los temores y las esperanzas de nuestra vida cotidiana.



Ariel Historia

Ariel Historia

Pasquale Villani

La edad contemporánea, 1800-1914

Editorial Ariel, S.A.
Barcelona

Diseño cubierta: Nacho Soriano

Título original:
L'età contemporanea

Traducción de
SALVADOR DEL CARRIL

1.ª edición: febrero 1996
1.ª reimpresión: septiembre 1999

Córcega, 270 - 08008 Barcelona

ISBN: 84-344-6581-7

Depósito legal: B. 37.228 - 1999

Impreso en España

INTRODUCCIÓN

EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Este volumen trata de la historia contemporánea prestando especial atención a la historia europea.

Existen algunos problemas preliminares para fijar el período que abarca la Edad Contemporánea. Aun cuando se haya determinado una fecha *a quo* —y la cuestión está lejos de estar asentada— es sin duda imposible fijar un límite claro *ad quem* que no sea la expresión genérica *hasta nuestros días*: un límite no sólo poco preciso, sino extremadamente móvil, que cambia año a año, si no día a día.

Si esta ausencia de un final datable con seguridad, del que parecen beneficiarse otros períodos históricos, establece realmente una diferencia apreciable, podría ser el primer carácter distintivo de la historia contemporánea. Y lo es en cierta medida. Aun en las otras edades, en las que se suele distinguir y dividir el *continuum* histórico (Edades Antigua, Medievo, Edad Moderna), los límites de los períodos siempre son motivo de discusiones y pueden variar notablemente según los problemas que se consideren. Sin embargo, la fecha que convencionalmente cierra un período, al mismo tiempo abre otro que ya es *pasado*, que ya es *historia*... En la Edad Contemporánea no es tanto la movilidad o la indeterminación respecto del período anterior lo que hace la diferencia, sino la singularidad de terminar en el presente y de abrirse al futuro, o sea, a lo desconocido. Pero no hay que olvidar que las raíces de ese futuro se hunden en el pasado y, por ello, establecen esa relación presente-pasado-futuro que es la fuente inagotable del conocimiento y de la investigación histórica.

Tal vez algún ejemplo podrá aclarar mejor estas consideraciones y, también, llegar al fondo de los hechos y los problemas que luego deberán ser examinados más analíticamente.

En la discutida cuestión de los orígenes de la historia contemporánea hay que considerar si, más que de esta o aquella fecha (tradicionalmente se mencionan los años 1815 o 1870), se debe hablar de

dos procesos: la Revolución industrial y la Revolución francesa. Es necesario ser muy conscientes de que ambos procesos, profundamente arraigados en lo que suele llamarse la Edad Moderna, tienen seguramente origen en el siglo XVIII. Pero sería una pretensión excesiva pretender incluir ese siglo en la Edad Contemporánea.

Por otra parte, es evidente que el impulso de ambas revoluciones, si indudablemente cierran el siglo XVIII y se vinculan por múltiples aspectos a precedentes más lejanos, marcan en mayor medida un corte con el pasado, a menudo desgarrador y profundo, e inician nuevos procesos que se desarrollarán y articularán como objeto de la historia contemporánea. Como todos los acontecimientos de relevancia histórica, tienen dos caras: una que mira al pasado y otra al porvenir. Este ejemplo puede insinuar qué difícil es trazar una clara línea divisoria entre una edad y otra, pero no deja dudas sobre el carácter de hitos entre períodos que caracteriza a la Revolución francesa y al proceso de industrialización.

En cuanto al final de la Edad Contemporánea, el único rostro que se alcanza a ver es el que mira al pasado. Sin embargo, es todavía más fuerte la sensación, o la convicción, de que en los últimos años, y sobre todo desde 1989, se ha cerrado un período y se abre otro cuyos signos de inestabilidad y de incertidumbre son evidentes. Acontecimientos muy recientes, que no sin razón se definen frecuentemente de revolucionarios, terminan claramente con el orden político y territorial que las grandes potencias vencedoras habían dado a Europa y al mundo después de la segunda guerra mundial. El desmembramiento de la Unión Soviética abre un proceso todavía más profundo cuyo desarrollo es imprevisible. Al final de la segunda guerra mundial se había establecido un equilibrio fundado en el terror atómico pero socialmente estable. Con el final del «socialismo real», la reunificación alemana y la caída de la URSS, ha terminado también la estabilidad relativa, consolidada en los años cincuenta —aunque conviene recordar que ese período, que hoy nos parece relativamente estable, fue considerado por muchos como la *edad de la incertidumbre*— y las consecuencias son insospechadas. Se ha roto el equilibrio mantenido hasta la mitad de los años ochenta, y no a causa de una guerra, sino por el derrumbe de los regímenes del «socialismo real» en la Unión Soviética y en los países de la Europa oriental. De ello habrá que hablar más detenidamente. Aquí interesa destacar cómo el presente se asoma a un futuro incierto cuyas raíces se hunden en el pasado, en la historia; como sucede con la cuestión alemana, el renacer de las diferencias étnicas y nacionales y los grandes problemas de la organización de la economía y del Estado. Por lo tanto, la historia contemporánea se cierra sobre un panorama del que sólo es posible avanzar conjetu-

ras fundadas en pasadas experiencias pero, por cierto, no se puede anticipar su desarrollo real.

Una visión sumaria de la historia de los últimos doscientos años aparece fuertemente caracterizada por la transferencia masiva de la agricultura a la industria y los servicios de la población activa y de la base productiva en Europa y en los países más desarrollados económicamente. Para referirse al proceso de industrialización se emplean a menudo los conceptos y las expresiones «producción» y «sistema productivo». Se trata de conceptos económicos. El aumento y la disminución de la producción pueden enunciarse en términos cuantitativos, en medidas estadísticas.

Cuando en verdad hablamos de *sistema productivo*, nos referimos a una realidad más compleja, en la que el componente puramente económico es importante, por cierto, pero que también implica la organización del trabajo y las relaciones sociales, de manera que abarca todos los aspectos, materiales y culturales, de la vida humana. Varios aspectos se reúnen en las motivaciones y la realización de los actos humanos; el hombre, aunque lo haga en distintos niveles de conocimiento, piensa y actúa como una unidad orgánica. Pero, cuando analizamos la organización de la sociedad en su devenir histórico, aun sin olvidar la fundamental unidad del individuo, debemos distinguir no sólo por razones didácticas, sino también por exigencias de claridad y de análisis científico, las instituciones jurídico-formales (por ejemplo, el Estado y sus distintas articulaciones), la lucha por la conquista y la administración del poder, las relaciones internacionales, las actividades económicas y las inclinaciones religiosas y culturales.

En el marco de estas distinciones, mientras la sublevación de las colonias americanas y el nacimiento de Estados Unidos, y aún más, la Revolución francesa, llevan al primer plano facetas políticas e institucionales, no se puede dejar de subrayar los aspectos económicos y tecnológicos de la Revolución industrial. Ello no significa que la Revolución francesa tenga también importantes repercusiones económicas, o que la Revolución industrial no tenga importantísimas consecuencias políticas, y que ambos procesos no incidan profundamente en el tejido sociocultural.

En el plano ideológico, político e institucional, se han desarrollado proyectos, realizaciones, polémicas y conflictos —a veces a través de rupturas revolucionarias y choques armados— en torno a los temas del liberalismo, de la democracia y del socialismo; en torno a la construcción y la evolución de los regímenes políticos, a la formación de los Estados nacionales, a la rivalidad nacionalista e imperialista.

En estos breves indicios asoma ya la importancia fundamental que han tenido en la historia contemporánea la difusión de la industriali-

zación y la herencia de la Revolución francesa. Un papel aún más destacado ha cumplido en los últimos ciento cincuenta años el entretejido de relaciones entre aspectos económicos, políticos y sociales, que ha llevado de la sociedad aristocrática del Antiguo Régimen a la sociedad de masas y sus manifestaciones.

Con propósitos de aprendizaje y didácticos, se proponen dos períodos para dividir el tiempo transcurrido desde comienzos del siglo XIX hasta 1914, años de los que trata este libro: 1800-1871 y 1871-1914. (En otros volúmenes nos ocuparemos de dos períodos más: 1914-1945 y 1945-1992.)

Como toda separación en períodos, se trata de una división cómoda para la que, sin embargo, no es difícil encontrar razones plausibles que, esperamos, aparezcan en el curso de la narración. Dentro de cada período, además, es posible, y acaso necesario, hacer distinciones y posteriores variantes. Sobre todo conviene observar que algunos de los límites cronológicos señalados para algunos aspectos y fenómenos son absolutamente insuficientes. Valga para ellos lo que se ha dicho brevemente de la Revolución industrial y la Revolución francesa. Quizá convenga en la historia contemporánea dar a los «acontecimientos» mayor espacio del que ocupan en edades más lejanas, pero no se puede olvidar la enseñanza de la *historiografía de grandes ciclos*. Ella contribuye a romper esquemas tradicionalmente demasiado anclados en ciertos acontecimientos en particular y, sobre todo, llama la atención sobre tendencias seculares y ciclos de mayor o menor extensión que son instrumentos indispensables para la historia económica y cuantitativa y para el análisis de sistemas jurídicos o estructuras antropológicas.

De cada período se pueden considerar aspectos propios y particulares, rupturas y cambios que lo diferencian de los demás, o bien subrayar tiempos más extensos, permanencias, entretejidos que establecen una línea de continuidad. Proceder de esta manera implica la comparación y la confrontación.

A la determinación de coordenadas temporales, cronológicas, debe corresponder la indicación de coordenadas espaciales, geográficas. Ni unas, ni otras son absolutas aunque marcan ritmos y límites que contribuyen a definir un contexto. También las coordenadas espaciales —quizá conviene recordarlo porque a menudo se les presta poca atención— cambian con el tiempo. Y justamente del análisis de estas coordenadas deriva otra de las características distintivas que se puede atribuir a la Edad Contemporánea y que se afirma todavía más a partir de los últimos años del siglo XIX: la interdependencia mundial.

Durante cierto período —con mayor empuje y evidencia entre 1870 y 1914, como se verá— los países fueron protagonistas de una expan-

sión mundial acompañada por el éxito de la economía industrial y capitalista y por la difusión, o el intento de imposición, de modelos políticos y culturales. No hay que olvidar, sin embargo, que la expansión europea tenía precedentes antiguos y que, al menos desde el siglo XVI, las relaciones con América y Asia habían contribuido a extender y reforzar el comercio internacional y las transacciones financieras, componentes esenciales del nuevo capitalismo.

Pero, entre el final del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX aparecen nuevos elementos que modifican el anterior marco de relaciones internacionales y los equilibrios políticos y económicos. La fundación de los Estados Unidos de América, las conmociones provocadas en Europa por la Revolución francesa, las guerras y la dominación napoleónica, el dominio de los mares y del gran comercio internacional consolidado en manos inglesas y reforzado por el proceso contemporáneo de industrialización, la discusión y experimentación de nuevos modelos políticos y constitucionales, la nueva idea de nación, el principio de la soberanía nacional y popular, son componentes y factores del nuevo marco.

Las distintas fases de la Revolución francesa —el intento de instaurar una monarquía constitucional basada en la soberanía popular y en la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, la guerra patriótica, la movilización popular y nacional, la república y el terror, la reacción de Termidor, la oscilante política del Directorio, el golpe de Estado de Napoleón— acumulan un patrimonio de experiencias políticas y sociales del que se alimentan, aunque sea a beneficio de inventario, todos los países de Europa y aun de otros continentes.

En cuanto a la industrialización, sobre todo en Inglaterra, pero no sólo allí, se convierte durante el mismo período en un laboratorio y un modelo, al que algunos observan con temor o francamente con horror, y otros, con admiración y esperanza. Crece la confianza en que las innovaciones tecnológicas, el uso y el perfeccionamiento de las máquinas, puedan no sólo aumentar los beneficios de los empresarios, sino también mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Se inaugura la «era del progreso», marcada contradictoriamente por prejuicios raciales y voluntad de dominio o por las ilusiones pacifistas y socialistas que se rompen en el choque contra la realidad de conflictos sanguinarios y, luego, del «socialismo real». Más allá de los temores y de las esperanzas, la nueva economía capitalista e industrial muestra un poder de penetración que impulsa con fuerza la «cuestión social», aun en aquellos lugares donde tardará en afirmarse, con las formas que más habían despertado la fantasía y la imaginación de los contemporáneos (grandes fábricas, concentraciones obreras y urbanas,

construcciones ferroviarias). Las condiciones de vida y de trabajo de la población de un sector cada vez más amplio del mundo serán profundamente modificadas, el sistema de comunicaciones y la información adquirirán un protagonismo creciente; se afirmarán los regímenes, los partidos y el consumo masivo; pero en la búsqueda de nuevos equilibrios y valores renacerán frecuentemente sentimientos y pasiones que parecen obedecer a antiguos enconos y temores, a primarias solidaridades étnicas y a fanatismos religiosos. Mientras los progresos de las comunicaciones y de la tecnología vuelven cada vez más pequeño al mundo, a veces se tiene la impresión de que aumenta la distancia entre los hombres. El curso de los acontecimientos contemporáneos confirma que la historia no sólo no ha terminado, sino más bien, en vez de reducirse a un proceso de racionalización, replantea interrogantes sobre la naturaleza del hombre y la convivencia social.

Primera parte

1800-1871

PREMISA

VISIÓN PANORÁMICA

La primera parte de este volumen abarca un amplio segmento cronológico que va desde el final del siglo XVIII hasta 1871, y parte de la Revolución francesa y la Revolución industrial para llegar al nuevo orden internacional y político establecido en Europa con la constitución de dos nuevos estados nacionales: Italia y Alemania.

Es un largo período que no es fácil dibujar con una línea sintética y unitaria, aun cuando no hayan faltado propuestas para definirlo, como «el triunfo de la burguesía» o «la formación de los estados nacionales». Últimamente, retomando viejas tesis, se ha subrayado más la permanencia de muchos aspectos del Antiguo Régimen hasta el final de la primera guerra mundial, que el nacimiento y la maduración de nuevas circunstancias.

En una primera y rápida mirada nos ajustaremos a la división que hemos adoptado, organizando la narración en tres grandes capítulos.

Para respetar exigencias didácticas, el planteamiento también atribuye un peso importante a los tradicionales cortes cronológicos. El primer capítulo, que cubre *grosso modo* los años que transcurren entre 1800 y 1815, se desarrolla alrededor de dos temas: la Revolución industrial inglesa y la política interna y europea de Napoleón. Una época de guerras y de cambios económicos y sociales. Gran Bretaña, potencia naval y comercial y, en el futuro, cada vez más modernamente industrial, sale victoriosa del conflicto que la enfrenta a Francia y que durante algunos años se concentra en el «bloqueo continental». Consigue una primacía mundial que será absolutamente evidente a partir de los años treinta y cuarenta del siglo XIX, coincidiendo con el final del primer ciclo de la industrialización y con la política del «imperialismo del libre cambio».

La Revolución y la aventura napoleónica reducen a Francia, que en el siglo XVIII todavía competía con Gran Bretaña en el comercio y en el mar, a una dimensión esencialmente continental. Pero es una posición

de gran importancia en el plano de las ideologías y de las instituciones políticas ligadas al principio de la «soberanía popular» y de la «voluntad nacional», y destinada a superar todos los límites; una herencia de la Revolución francesa que terminará por volverse contra el mismo Napoleón, quien, en otros aspectos no puede ser considerado heredero de la revolución. En el área de Europa continental, directa o indirectamente implicada en los proyectos napoleónicos, importantes transformaciones afectan sobre todo a las estructuras y ordenamientos estatales (por ejemplo, la monarquía administrativa, el nuevo prestigio de los militares y de los funcionarios del Estado) y a los intentos de reorganización territorial en Italia y Alemania. Por otra parte, la ocupación militar y el predominio franceses despertarán inquietudes y resistencias étnicas y nacionales que a veces conjugan de maneras diferentes y aun contradictorias, movimientos conservadores de inspiración monárquica, aristocrática y católica con instancias liberales y democráticas.

Esta situación impregnará los años de la Restauración, ricos en fermentos innovadores, en proyectos y experimentos culturales y políticos, en emprendimientos económicos y sociales, y el congreso de Viena también la recogerá en sus decisiones en el plano territorial y diplomático.

Debemos partir de la comprobación de que el orden dado a Europa en Viena, fundado en principios de legitimidad y de equilibrio, respondía a una necesidad generalizada de tranquilidad y de paz tras las conmociones y las guerras de la revolución y del período napoleónico.

Las cuatro grandes potencias vencedoras (Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia) a las que se sumaría muy pronto la Francia de Luis XVIII, el borbón restaurado, asumían explícitamente la misión de impedir «revoluciones» y apoyar a los gobiernos legítimos.

El juicio sobre los resultados del congreso de Viena es controvertido. La principal objeción es que se entorpecieron proyectos liberales y constitucionales deseados por las nuevas clases burguesas y se ignoraron las aspiraciones y la voluntad de las capas populares que en tiempos de la revolución habían demostrado ser una fuerza muchas veces irresistible, sobre todo cuando interpretaban y expresaban la «voluntad de la nación». Por otra parte, se reconoce que el sistema construido por el congreso aseguró a Europa un largo período de paz y consiguió el triunfo de los métodos y las negociaciones diplomáticas sobre la prepotencia y la violencia de las guerras.

Ambas interpretaciones sólo son parcialmente verdaderas. Es notorio que la época de la Restauración no significó un retorno absoluto al pasado, como soñaban los legitimistas reaccionarios, sino que fue un período culturalmente fecundo y de estabilización y consolida-

ción, aunque no siempre de un progreso económico apreciable y, sobre todo, generalizado. Por otro lado, si bien se evitaron conflagraciones generales y se hizo valer el principio dieciochesco del equilibrio, no fueron de poca importancia las modificaciones en las relaciones entre las grandes potencias, ni el orden político y territorial permaneció inmóvil.

Es verdad que hasta 1830 el sistema fue capaz de resistir las presiones de las fuerzas renovadoras y, luego, de sobrevivir a las generalizadas agitaciones de 1848. Pero muy pronto, aparecieron indicios de que los cambios que ocurrían en la base misma de la sociedad civil y política sólo podían ser contenidos con un régimen de represión policial cada vez más insuficiente y, de cualquier modo, contrario a las exigencias de un desarrollo económico y político, aunque sólo fuera moderado. Entre estos signos se contaron la revolución parisiense de 1830 —que tuvo eco en algunos países europeos— y la reforma electoral inglesa de 1832.

Entre mediados de los años treinta y cuarenta parecieron desvanecerse los impulsos de cambio originados en la revolución parisiense de julio, al menos en las manifestaciones más evidentes de la política y la diplomacia. Lo demuestran el ocaso del acuerdo franco-británico y las colisiones anglo-rusa y franco-prusiana. También fue atenuándose la conflictividad social con el fracaso del cartismo y de las primeras tentativas tradeunionistas en Inglaterra y con la relativa paz social en la última década de la monarquía orleanista en Francia.

La industrialización conseguía sus primeros éxitos importantes dejando atrás el rechazo y las reacciones primarias; se abría a toda Europa la edad del hierro y del ferrocarril y, sobre todo, se intensificaban las relaciones comerciales internas e internacionales. El nivel de vida de las masas populares, desde los campesinos hasta los obreros, aún no superaba el de la simple subsistencia, y la terrible carestía que castigaba sobre todo a Irlanda hizo que los cuarenta merecieran el título de «los años del hambre». No obstante, ya se comenzaba a atisbar que la nueva capacidad productiva podía mejorar también las condiciones de los trabajadores.

¿Se entraba en la era del progreso y la prosperidad? ¿Triunfaba la burguesía, o subsistían las estructuras y el poder del Antiguo Régimen? Es verdad que las condiciones y las situaciones diferían mucho de una región a otra de Europa. Con todo, tampoco faltan sugestivos indicios recientes para sostener que hasta 1914 el Antiguo Régimen dominó decididamente en Europa, y la primera guerra mundial fue «fruto de una renovada movilización de los antiguos regímenes europeos. Aun perdiendo terreno respecto al capitalismo industrial, las fuerzas del viejo orden eran todavía suficientemente obstinadas y po-

derosas como para entorpecer y demorar el curso de la historia, si era necesario apelando a la violencia... El viejo orden europeo era preindustrial y preburgués de punta a punta» (A. Mayer).

En esta tesis unilateral hay algunas verdades parciales y algunos equívocos de fondo. Ante todo hay un empleo extenso e impropio del concepto de *viejo orden*, pero hay, sobre todo, una subestimación del significado político, institucional, económico y cultural de algunos acontecimientos y procesos que modificaron el orden político, económico y social de los estados europeos (incluso de Estados Unidos y Japón) y que pusieron en primer plano la cuestión de la unificación nacional de países como Italia y Alemania; y luego la difusión del nacionalismo que, de ser aspiración y programa de minorías intelectuales y políticas más o menos amplias, se afirmó como fenómeno de masas. Se trata de aspectos nuevos de la cuestión social, que en este mismo período vive el desarrollo del asociacionismo obrero, el mutualismo, el cooperativismo, las uniones sindicales y, también, el nacimiento de las organizaciones políticas del proletariado industrial; pero, sobre todo, está condicionada por la ampliación y el crecimiento de los mercados internos e internacionales y por la construcción y fortalecimiento de los estados nacionales. Ya en la mitad del siglo, los procesos de integración, favorecidos por el progreso de la tecnología y promovidos por los grupos dirigentes, anuncian la formación y la nacionalización de la sociedad de masas.

No eran acontecimientos y procesos nacidos de la nada, lo que, por lo demás, nunca sucede en la historia. Más bien se pueden detectar los múltiples vínculos, a veces profundos y subterráneos, a veces evidentes y manifiestos, que los unen a la Revolución francesa y a la Revolución industrial. Son, además, sorprendentes las contradicciones y oposiciones internas que convierten a este período en una época particularmente animada y, de cualquier manera, terminan por incidir en el orden político territorial de Europa y en las estructuras de la vida económica y social. Los sucesos extraordinarios de 1848, «la primavera de los pueblos», la aparentemente incontenible marcha de la revolución, pueden muy bien representar simbólicamente la importancia de la transformación. Pero conviene no dejarse llevar por la sorprendente rapidez de cambios a menudo efímeros aunque indicadores de los nuevos equilibrios que estaban madurando. Los acontecimientos de aquel año se inscriben en un contexto más general que permite considerar todo el período 1848-1871 desde una perspectiva más amplia y compleja. En el plano más específico de las relaciones entre las grandes potencias europeas después de 1848 —y, sobre todo, después de la llegada de Napoleón III que favorece la cristalización de la unidad nacional italiana y alemana en función antiaustriaca— el sistema

político, territorial y diplomático construido en Viena sufre la última conmoción, y comienzan veinte años de gran inestabilidad que culminan en las guerras de 1866 y 1870.

Mientras tanto, el horizonte europeo se extendía cada vez más en una perspectiva mundial y los intereses de la economía y de las potencias europeas se preparaban para celebrar su triunfo en el mundo. Aunque no faltaban inquietudes por la conflictividad social, la difusión de la industrialización y las conquistas científicas habían impuesto un nuevo clima de confianza en una era «positiva» y en el auspicioso futuro de la humanidad.

Capítulo 1

LA INGLATERRA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA EUROPA DE NAPOLEÓN

1. La Inglaterra de la Revolución industrial

A comienzos del siglo XIX, Inglaterra era una monarquía en la que el poder hereditario del monarca estaba limitado por el Parlamento, dividido en una Cámara de los Comunes, electiva, y una Cámara de los Lores, cuyos escaños ocupaban los representantes de las más antiguas familias aristocráticas. Las elecciones para la Cámara de los Comunes estaban dominadas por la aristocracia terrateniente y por los grandes propietarios inmobiliarios, que también controlaban las administraciones locales, configurando así un verdadero y cabal sistema aristocrático al que sólo se sustraía Londres. Con sus setecientos mil habitantes, su concentración de intereses mercantiles y financieros, su fuerte presencia artesanal, la ciudad también tenía un peso considerable en las decisiones políticas. Pero hay que agregar que la aristocracia inglesa, pese a sus privilegios, era una clase abierta, que asimilaba a las fuerzas y las fortunas emergentes y tenía un profundo sentido de su responsabilidad como clase dirigente.

Desde 1760 reinaba Jorge III, de la dinastía Hannover, que trató de imponer su propia influencia en el Parlamento al largo predominio de la aristocracia *whig*, heredera y beneficiaria de la pacífica revolución parlamentaria de 1688-1689.

El rey encontró en la emergente personalidad del joven Pitt (1758-1806), convertido en jefe del partido conservador *(tory)*, a un fiel e inteligente hombre de Estado que supo interpretar la voluntad y los intereses nacionales de la política hacia Francia. En efecto, promovió la pacificación tras la guerra con las colonias americanas (1873) intentando abrir, con el tratado comercial de Eden (1876), el mercado francés a los productos y al comercio británicos. Logró extender el dominio británico en la India, que se había convertido en la posesión colo-

nial más valiosa una vez perdidas las colonias americanas, y elaboró un acuerdo para la administración de los territorios y para la gestión del comercio que conciliaba los vínculos tradicionales de la Compañía de las Indias con la necesidad de un mayor control estatal. También reorganizó Canadá, separando la zona de influencia lingüística y cultural francesa de las regiones donde se podía desarrollar la inmigración y la población de origen británico, en aquel entonces muy minoritaria. Más tarde se opuso con firmeza a la Francia revolucionaria y napoleónica.

La opinión pública favorable a la Revolución francesa fue siempre una pequeña minoría que se redujo aún más tras la ejecución de Luis XVI y la proclamación del Terror. Pero por temor a que el contagio revolucionario pudiera extenderse a la monárquica y aristocrática Inglaterra impuso medidas represivas que llegaron a la suspensión del *habeas corpus*, garantía fundamental de la inviolabilidad de la persona y, por lo tanto, del sistema liberal y judicial británico. En este clima, los *whigs* se vieron obligados a renunciar a la batalla por una reforma parlamentaria que eliminara o limitara los corruptos procedimientos electorales y por la plena emancipación de los católicos. La cuestión católica estaba estrechamente vinculada a la difícil relación con los irlandeses a los cuales apeló frecuentemente la Francia republicana y napoleónica —hubo algún intento de desembarco en Irlanda— para debilitar y doblegar la resistencia inglesa. Estos problemas, desde la reforma parlamentaria hasta la cuestión católica e irlandesa, eran una herencia histórica de la sociedad y de la política británicas, pero sólo podrán avanzar hacia una solución a partir de los años treinta del siglo XIX, con el final del predominio *tory* consolidado por la guerra y la victoria contra Francia.

En la tercera década del siglo XIX, las consecuencias de la Revolución industrial habían modificado profundamente los fundamentos de la vida económica y social. En efecto, el proceso de transformación económica, conocido con el nombre de «Revolución industrial» es lo que caracterizará históricamente a Inglaterra entre el final del siglo XVIII y las primeras décadas del siguiente. Hay quien discute que se pueda hablar de «revolución», puesto que no se trata de un acontecimiento al que se pueda datar en un año determinado, sino de un proceso que tiene sus antecedentes más o menos lejanos en el desarrollo de la economía británica, en el comercio internacional y transoceánico, en la acumulación capitalista, en las tradiciones manufactureras, en las tendencias religiosas, ideológicas y culturales, en las condiciones favorables para la libre iniciativa individual y, en general, en la historia de la civilización occidental. Estas observaciones pueden ayudar

a subrayar la importancia de la continuidad histórica, pero al dar excesivo peso a los antecedentes terminan por negar o atenuar y subestimar el significado y la profundidad de la fractura, disolviéndola en un largo proceso temporal. No hay que ignorar que es legítimo tener en cuenta la continuidad y lentitud de los procesos de transformación, pero tampoco hay que dejar de lado la realidad y caer en la contradicción de una historia inmóvil.

Por consiguiente, se puede emplear la ya clásica y habitual denominación de «Revolución industrial», con la conciencia de los problemas que implica, pero con la convicción de su influencia sustancial en la primera fase de una enorme transformación.

Un concepto, o bien una metáfora que ilumina el tema que tratamos es la del *take off*, del «despegue» industrial. El término «despegue» no fue escogido al azar por los historiadores y los economistas. Es el momento en que el avión, después de haber alcanzado la máxima potencia de los motores, se separa de la tierra e inicia su veloz ascenso. Para la producción industrial, es el momento en que los índices comienzan a elevarse rápida e inusitadamente comparados con los niveles anteriores. Pero no es suficiente: la producción de los sectores motrices, y luego de todo el sistema, se autopropulsa y continúa creciendo —salvo los momentos de recesión y de crisis— en una espiral continua que se alimenta a sí misma.

El fenómeno del «crecimiento» y del «desarrollo» es un factor que parece caracterizar específicamente al sistema capitalista industrial respecto de la economía de la era preindustrial; que también tenía sus fases de crecimiento y desarrollo, aunque no pueden compararse en dimensiones, intensidad y fuerza de propagación con las del capitalismo industrial.

Los largos períodos de estancamiento y de crisis de la economía del Antiguo Régimen —una de cuyas manifestaciones evidentes eran las condiciones de vida de la población, golpeada catastróficamente por las guerras, la carestía y las epidemias— anulaban casi todos los progresos conseguidos anteriormente. Sólo en el siglo XVIII maduraron en Europa las condiciones para un crecimiento, continuado hasta nuestros días, que son consideradas las premisas de la Revolución industrial.

Estas condiciones se dieron por primera vez en Inglaterra, donde la agricultura había logrado importantes mejoras en el rendimiento y en la productividad; donde la actividad comercial interna, pero sobre todo, en los intercambios coloniales e internacionales, había conquistado importantes mercados de salida y permitía una considerable circulación de mercancías y capitales; donde ya existían experiencia y tradición manufacturera, principalmente en la producción de paños

de lana, sostenida por grandes extensiones de tierras dedicadas a la cría de ovejas.

A propósito de la gran importancia que había alcanzado la ganadería en la economía inglesa, el antiguo esquema de interpretación del impulso del proceso de industrialización, clásico de la ortodoxia marxista, vinculaba estrechamente la formación de grandes empresas agrarias capitalistas, destinadas al cultivo de cereales y al pastoreo de ovinos y bovinos, con la expropiación y la expulsión de los campesinos de sus tierras y la consiguiente creación de mano de obra proletaria disponible para el trabajo industrial. La transferencia fue, por cierto, más compleja de lo que refleja el esquema marxista; aunque éste contiene algunas verdades y, sobre todo, es útil para poner de relieve la relación, al menos en las etapas iniciales, entre desarrollo agrícola y desarrollo industrial. Solamente la mayor productividad —o sea, la posibilidad de obtener igual o mayor producto con menos personal y tiempo— permitía sostener a los trabajadores que se desplazaban al sector industrial y a la creciente población urbana.

No menos importantes para explicar el despegue son las innovaciones técnicas, que abreviaron algunas fases del trabajo manufacturero y permitieron aprovechar fuentes de energía alternativas a las tradicionales, que se apoyaban en la fuerza física del hombre y de los animales, del viento y del agua. Estas invenciones fueron el primer paso hacia la construcción de máquinas cada vez más complejas y costosas. Hacía ya tiempo que existían prototipos, incluso de notable complejidad aunque no siempre muy eficientes, y desde el siglo XVII se le puede atribuir a Italia cierto primado en la materia gracias al tejido mecánico de la seda. Pero la difusión del *maquinismo*, o sea el empleo masivo de las máquinas y su concentración en las fábricas es algo muy diferente. El fenómeno debía ser estimulado por una demanda y un mercado en importante expansión que no podía existir ni para la seda, producto de lujo, ni para la lana que requería tiempos y costos de producción muy elevados. Por ello no es raro que los primeros inventos, más simples y eficaces, como la lanzadera de Key (1733) y la máquina para hilar (1738), proyectadas para la industria lanera, tuvieran gran éxito y encontraran una aplicación más amplia en la industria textil algodonera.

2. El desarrollo comercial, la mecanización, la cuestión social

El área más importante para el total de las exportaciones inglesas hacia el final del siglo XVIII fueron las islas y los territorios america-

nos. Entre 1700 y 1701 absorbieron el 10 por ciento de las mercaderías exportadas; entre 1772 y 1773, el 37 por ciento, y entre 1797 y 1798, cerca del 57 por ciento. Aunque hasta las primeras décadas del siglo XIX el algodón no alcanzó una posición preeminente, contribuyó al aumento de las exportaciones y al desarrollo global de las manufacturas británicas. De todas maneras, estos datos demuestran la importancia que tenía para el empuje de la Revolución industrial la posición dominante que había alcanzado Gran Bretaña en el dominio de los mares y en el comercio nacional e internacional. La construcción y la actividad de una gran flota militar y mercante contribuían a mantener el alto nivel de la demanda, de la renta y de la circulación de capitales. Esta referencia a la posición del Estado, que favorecía el desarrollo mercantil y manufacturero con otras medidas, especialmente el apoyo a la libre iniciativa económica de individuos y grupos, es un dato que no se debe olvidar en el cuadro global, tanto menos cuando algunas investigaciones actuales exponen, de manera quizás demasiado exclusiva, el carácter regional de la Revolución industrial.

Sin embargo, hay que aceptar sin reservas la idea de estos planteos recientes sobre la concentración, en un espacio relativamente limitado, de la suma de condiciones y energías necesarias para dar el gran salto hacia adelante y comenzar un proceso de propagación que alcanzó a otras regiones, aunque no siempre con el mismo éxito. En ese sentido es clásico el ejemplo de Lancashire como primera localización del nuevo proceso.

En el noroeste de Inglaterra, adquirió especial fama la ciudad de Manchester, la manufactura del algodón originó una expansión que se transmitió e impulsó también a otros sectores: la fabricación de máquinas, sobre todo de calderas a vapor, la explotación minera del carbón, la modernización y mejora de las vías de comunicación y el sistema crediticio.

La hiladora mecánica, que poco a poco se fue perfeccionando, podía realizar por sí sola el trabajo de más de doscientos obreros y producía un hilo más resistente y fino que el elaborado a mano. El perfeccionamiento de la máquina de vapor, usada en la minería desde las primeras décadas del siglo, puso a disposición de las actividades industriales una nueva fuente de energía, que luego también tendría muchísima influencia en el sector del transporte (locomotoras a vapor, buques), contribuyendo a abrir, junto con el progreso de la fundición y la elaboración del hierro, lo que se considera la segunda fase de la industrialización: la era del ferrocarril.

La gran cantidad de hilado que podían producir los procesos mecánicos y que, aunque se utilizaran telares más perfeccionados, todavía eran tejidos a mano, aceleraron la investigación y el desarrollo del

telar mecánico, que alrededor de 1830 ya podía sustituir el trabajo de cuatro tejedores. Aproximadamente en esa fecha ya había terminado su ciclo la mecanización y la concentración de la elaboración del algodón en las fábricas, y había producido una renovación revolucionaria de todos los sectores productivos, la economía y la sociedad de Inglaterra. La producción de rieles y locomotoras había dado un impulso poderoso a la industria siderúrgica, que en los años treinta se aprestaba a relevar a la industria algodonera como sector motriz de la industrialización.

Tanto en Inglaterra como en otros países, el formidable aumento de la productividad del trabajo y el progreso de los sistemas de fabricación se habían convertido en los dos factores fundamentales de la transformación industrial. Ambos estaban ligados al uso de las máquinas y a la conveniencia de concentrar en lugares apropiados los equipos y la mano de obra. Se trataba de un cambio importante en la organización del trabajo. El empresario industrial, que reunía máquinas y obreros en una «fábrica», dirigía, controlaba y comercializaba la producción, se imponía a los comerciantes que entregaban la materia prima a los trabajadores a domicilio, dispersos especialmente en el campo, y recogía el producto final para ponerlo en el mercado. A medida que el sistema se extendía, crecía en consecuencia el número de los «obreros de fábrica», que al comienzo, sobre todo en la industria algodonera, eran mujeres y niños; aumentaba el éxodo de campesinos y nacía el proletariado industrial, la clase obrera, a la vez que se diferenciaban las tareas de dirección, control y comercialización en el sector industrial. Para analizar estos procesos —especialmente fuera de Inglaterra, donde fueron más rápidos y, a veces, más tumultuosos— hay que considerar largos lapsos de tiempo. En especial, hay que recordar que durante mucho tiempo coexistieron las formas nuevas y las antiguas; que la concentración urbana, que en Inglaterra acompañó a la transformación industrial, pudo asumir en otros lugares formas completamente diferentes; que la producción artesanal muchas veces sobrevivió largo tiempo en el campo y la ciudad, o adoptó nuevas formas como servicios o actividades terciarias inducidas por el mismo desarrollo industrial.

Sin embargo, es evidente que, sobre todo a partir de los años treinta, la *cuestión social*, ligada a la transformación de la economía, se convierte en tema central de la historia de muchos países europeos, y que en las décadas siguientes el proletariado industrial adquirió fuerza e importancia ideológica y política.

3. Napoleón y la Revolución francesa

Vista desde una perspectiva distante, la historia de Inglaterra en las primeras décadas del siglo XIX está acentuadamente marcada por el desarrollo de la Revolución industrial. Sin embargo, no hay que olvidar que entre 1793 y 1815, Gran Bretaña se vio envuelta en la guerra contra Francia que, tras el golpe de Estado del 18 de brumario, fue una guerra contra Napoleón. Durante quince años, el general corso, heredero de la Revolución francesa, desempeñó un papel decisivo en los destinos de Francia y de Europa.

El golpe de Estado del 18 de brumario que llevó al poder a Napoleón fue posible porque Francia estaba cansada de la revolución, porque la clase dirigente deseaba terminar con la política oscilante del Directorio, porque el ejército había alcanzado una posición decisiva en la vida social y porque en la imaginación popular Bonaparte seguía siendo, pese al paréntesis egipcio, el general vencedor en la milagrosa campaña de Italia.

¿Terminaba la Revolución en una dictadura militar? Aunque hay muchos elementos que podrían inducir a responder afirmativamente, la situación es, en realidad, mucho más compleja, tanto que el *bonapartismo* se ha convertido en una categoría con connotaciones propias.

La relación entre Napoleón y la revolución es contradictoria; en muchos aspectos, el primer cónsul y el emperador renuncian a la herencia revolucionaria; en otros, la aceptan y —frente a Europa— la difunden. El hecho mismo de que un oficial de origen corso pueda comandar a los veintisiete años el ejército de la campaña de Italia y, con poco más de treinta, imaginar que puede fundar en la Francia de los capetos y los borbones una nueva monarquía y una nueva dinastía, sería inconcebible e inexplicable sin las perturbaciones revolucionarias que habían abatido al Antiguo Régimen, llamando a la acción a las masas populares y renovando un espíritu nacional que alimentaba nuevas esperanzas y una mentalidad inédita.

Un consenso casi universal saluda la proclamación del primer cónsul, y la práctica del *plebiscito* introduce un nuevo instrumento en la praxis política demostrando que, al menos en los primeros tiempos, no es posible obviar la soberanía popular para decretar una delegación excepcional del poder. Luego se imponen la personalidad prepotente y el despotismo del general; muy pronto, los partidarios y colaboradores del golpe de Estado, comenzando por Sieyès, son reubicados o marginados, y Napoleón construye un sistema político y estatal en el cual el ejército tiene un peso importante, pero cuyo fundamento radica esencialmente en la nueva organización jerárquica de la sociedad,

en la fuerza reconocida e intencionalmente aumentada de una nueva clase de «notables», hombres fuertes del régimen, en la competencia y la eficiencia de los funcionarios al servicio del Estado. Napoleón construye, o, si se quiere, perfecciona el Estado «administrativo». Esta construcción —posible gracias a la obra destructiva pero reordenadora de los años revolucionarios, y en parte ya preparada por la monarquía «absoluta» pese a las limitaciones impuestas por los privilegios aristocráticos y feudales— muestra que Napoleón no fue solamente un «genio» militar, sino también un hombre de Estado, como él mismo pretendía serlo no sin razón.

En el nuevo régimen cumplió una función importante, sobre todo en los primeros años, el Consejo de Estado, al cual fueron convocados hombres de experimentada competencia con los cuales Napoleón gustaba discutir libremente y cuyas opiniones tenía muy en cuenta. Dividido en cinco secciones especializadas —legislación, interior, finanzas, guerra y marina—, el Consejo redactaba el texto de las leyes que debían ser sometidas al Tribunado y al cuerpo legislativo y que luego sancionaba directamente la autoridad imperial. Con la creación de los *auditores* del Consejo de Estado (1803) se abrió a los jóvenes de talento la posibilidad de prepararse para cubrir importantes tareas en la burocracia estatal. A menudo se confiaron a los *auditores* misiones especiales de cuyo resultado debían informar directamente a Napoleón. En la administración civil, la institución de los *prefectos* y de los funcionarios de prefectura fue otra innovación destinada a permanecer y a convertirse, en muchos países europeos, en el modelo de conexión entre el gobierno central y la administración periférica en un Estado eficiente y centralizado.

Muy pronto queda claro que Napoleón renegaba de algunos valores esenciales de la variada y compleja herencia de la revolución, como la libertad y la representación democrática; mientras buscaba asegurar, sobre todo con el Código, la libertad civil, la igualdad jurídica y la defensa de la propiedad. Decía a su hermano Jerónimo, a quien había nombrado rey de Westfalia: «En Alemania, como en Francia, Italia y España, el pueblo aspira a la igualdad y al liberalismo. Las ventajas del *Código de Napoleón*, la regularidad y publicidad de los procesos, el jurado, éstos son los rasgos por los que se debe distinguir tu monarquía... Tus súbditos deben gozar de una libertad y de una igualdad desconocidas en el resto de Alemania.»

Por cierto, libertad e igualdad muy distintas de las concebidas por muchos de los constituyentes que habían elaborado y votado la *Declaración de los derechos* en 1789. Ya la dictadura jacobina había golpeado duramente la libertad de expresión y de prensa que había flo-

recido dando vida a miles de periódicos y panfletos en París y en toda Francia. Napoleón la reducirá y la «regulará» ordenando que en París no se impriman más de trece diarios y no más de uno en cada departamento; pero sobre todo, someterá a la prensa a una rigidísima censura policial que solamente permitirá la publicación de informaciones oficiales o «sugeridas». No hay ninguna duda, por lo tanto, que el régimen administrativo de Napoleón fue un régimen autoritario y despótico; sin embargo, la igualdad ante la ley, la estructura de una administración civil y judicial eficiente, el camino abierto al talento, el acceso de hombres nuevos a la burocracia y al ejército, la gloria y el prestigio de las victorias militares y la expansión en Europa le aseguraban una amplia base de consenso en Francia. Respecto a Europa, Napoleón mostraba dos caras; por un lado era el continuador de la revolución que abatía las instituciones del Antiguo Régimen e imponía las conquistas de la libertad civil, el Estado laico, el reordenamiento administrativo y financiero; por el otro, era el tirano que alteraba el orden tradicional, pisoteaba los derechos de los pueblos, imponía pesadísimos tributos, arruinaba el comercio y subordinaba toda actividad a los intereses de Francia y de su clan familiar.

Más allá de estas consideraciones generales, y de cuanto indique que, en su presunta clarividencia, Napoleón tenía todo previsto y predispuesto desde el comienzo, hay que distinguir diferentes momentos que se articulan con los avatares de la historia europea y con la reacción que una coalición de fuerzas, finalmente victoriosas, opone a las energías despertadas por la revolución y conducidas por Napoleón hacia un objetivo indefinible e indeterminado.

Uno de los mayores historiadores de la era de la Revolución francesa, de la que son parte Napoleón y su tiempo, ha observado que las ambiciones napoleónicas sólo son realistas en la ejecución de sus planes. En la concepción, son todo lo contrario. «También vive en él otro hombre con algunos rasgos del héroe que, desde los tiempos del colegio, debe nacer del deseo de dominar un mundo en el que se sentía despreciado; y sobre todo, de emular a los personajes semilegendarios de Plutarco y de Corneille. Lo que ambiciona está más allá de todo, es la gloria... Su mente se vuelve a los dominadores del mundo: Alejandro que, vencedor del Oriente, soñaba conquistar la Tierra; César, Augusto, Carlomagno, creadores los primeros y restaurador el último, del Imperio romano, cuyos nombres implicaban la idea de lo universal. No se trata de una noción concreta que pueda servir de regla, límite y medida a una empresa política: son ejemplos que fecundan la imaginación y confieren a la acción una fascinación inexpresable... Es el Napoleón romántico, una fuerza que se expande y para la que el mun-

do sólo es una ocasión para actuar peligrosamente... Por eso es inútil buscar qué meta asignaba Napoleón a su propia política y en qué punto pretendía detenerse: no existen» (G. Lefebvre, *Napoleón*).

4. La monarquía administrativa. Consenso y oposición

Entre 1799 y 1804 Bonaparte consolidó su dominio personal atribuyéndose los poderes constituyente y legislativo. Con la institución de los colegios electorales, nombrados vitaliciamente entre los seiscientos mayores contribuyentes de cada departamento, se creaban verdaderos cuerpos intemedios sobre base fiscal. Sus poderes eran muy limitados, se reunían presididos por una personalidad designada por Napoleón, examinaban la distribución de los impuestos en cada departamento y proponían a los candidatos, entre los cuales el gobierno escogía a los jueces de paz, los administradores locales y los representantes nacionales.

Emanación de los más ricos propietarios locales, representaban los nuevos intereses que se habían creado durante la revolución a través de la venta de los bienes eclesiásticos. Con el regreso de los emigrados, muchos de los cuales solicitaron y obtuvieron el permiso para volver a Francia, se concretó un logrado proyecto de conciliación nacional en nombre de la riqueza, especialmente inmobiliaria, y del servicio al Estado. Luciano Bonaparte expresaba en 1803, presidiendo el colegio electoral del departamento del Sena, la concepción en que se fundaba el nuevo sistema político y representativo: «Los principios de nuestro nuevo distrito electoral... no se apoyan más en ideas quiméricas, sino en la misma base de la sociedad civil, en la propiedad que inspira un sentimiento de conservación del orden público. Hoy, el derecho de elegir se ha convertido, gradual y moderadamente, en el patrimonio exclusivo de la clase más ilustrada y más interesada en el buen orden.»

Orden y propiedad, reconocimiento de los derechos civiles, confirmación del principio revolucionario que abolía todos los privilegios de nacimiento, salvo la propiedad y la riqueza. Se reservaba una posición privilegiada a los más altos grados del ejército, conquistados en los campos de batalla, y a los más altos representantes y funcionarios del Estado. Los mariscales, senadores, consejeros de Estado, gozaban de ricas retribuciones, asignaciones y subsidios que creaban una nueva elite dirigente. La *Legión de Honor* se instituyó como un reconocimiento público por los servicios prestados a la patria. Cuando se fundó el Imperio, los parientes de Napoleón fueron elevados al rango de

príncipes, y algunos de ellos gobernaron como procónsules varios países europeos. La nobleza napoleónica se escogió entre la nueva clase de dignatarios; era una especie de nuevo feudalismo, una de las más claras contradicciones de los principios revolucionarios; pero debemos recordar que esta nobleza reciente no se fundaba en privilegios de nacimiento, no era hereditaria, y los antiguos aristócratas la observaban escandalizados.

Con la creación de la nobleza napoleónica (1808) Napoleón se alejaba cada vez más de los orígenes democráticos y revolucionarios y, también en Francia, su despotismo podía apoyarse solamente en la gloria de las victorias militares y las ventajas de las conquistas. En los países vencidos, y especialmente en aquellos confiados a los príncipes napoleónicos, la reacción fue a menudo de una doble y opuesta naturaleza. La abolición del feudalismo, la confiscación y la venta de los bienes eclesiásticos, las reformas administrativas y el reordenamiento del Estado parecían satisfacer algunas exigencias —ya expresadas por los grupos progresistas y reformistas desde las últimas décadas del siglo— y convocar a la burguesía terrateniente a asumir responsabilidades de gobierno. Incluso las inquietudes y aspiraciones constitucionales, aunque tímida y acaso indirectamente, se veían reforzadas por los colegios electorales censales y los consejos cantonales y departamentales.

Por otra parte, la ocupación extranjera, la alteración de los valores tradicionales —desde el sentimiento y las supersticiones religiosas hasta la fidelidad a las antiguas monarquías y a costumbres e instituciones arraigadas— no podían dejar de provocar oposición y resistencias difundidas en mayor o menor medida. Ya durante los años de las conquistas revolucionarias habían estallado «sublevaciones» populares antifrancesas y «antijacobinas» en nombre de la Santa Fe y del monarca legítimo. Es verdad que las reformas napoleónicas fueron muy cautas y se cuidaron de no ofender los sentimientos populares, sobre todo en el terreno religioso. Pero el desmantelamiento de las instituciones del Antiguo Régimen por un lado, y la imposición de un despotismo cada vez más exigente y belicoso por el otro, favorecían, como reacción y, al mismo tiempo, por influencia del nacionalismo de la *Gran Nación*, la propagación de un espíritu de oposición que se expresaba de diferentes maneras en las distintas clases, pero que avivaba manifestaciones de inspiración nacional frente al predominio, la prepotencia y las pretensiones francesas. Los ingleses estimulaban y alimentaban tales reacciones y allí donde, como en España, eran más directas su presencia y su ayuda, la resistencia contra los franceses fue más fuerte y organizada. Al mismo tiempo y al lado de la reacción popular se manifestaron también aspiraciones constitucionales. Así su-

cedió en parte, en Italia, donde en Sicilia, los ingleses alentaban, además del contrabando contra el bloqueo continental, la oposición al régimen napoleónico.

Uno de los casos más interesantes de oposición a la prepotencia francesa fue la consolidación del sentimiento nacional y la reforma del Estado de Prusia.

Napoleón no percibió hasta que fue demasiado tarde, que despejar el terreno de los restos del Antiguo Régimen e imponer la hegemonía francesa provocaba el desarrollo de sentimientos nacionales y de oposiciones no sólo en el ámbito intelectual, sino también en algunas capas populares.

5. **La rivalidad anglofrancesa**

Gran Bretaña fue constante animadora de la resistencia al proyecto hegemónico de Francia durante la época de las guerras y de la expansión napoleónicas.

Entre 1801 y 1803 se vivió un breve momento de tregua en el conflicto que había comenzado en 1792 y que ya había visto formarse y disolverse las primeras dos coaliciones contra la Francia revolucionaria. En aquellos años pudo parecer que Bonaparte, el general victorioso, al que los franceses confiaron plebiscitariamente el gobierno de su país, quisiera hacer triunfar la paz adondequiera, no sólo reconciliándose con el enemigo más tenaz e irreductible, Gran Bretaña, sino también solucionando el conflicto religioso que, durante la revolución había dividido profundamente el país. En julio de 1801, concluyó, en efecto, el concordato con la Santa Sede y las negociaciones con Inglaterra condujeron, en octubre del mismo año, a la paz de Amiens de marzo de 1802.

Para los intereses coloniales, sobre todo de Inglaterra, pero igualmente de otras potencias como la misma Francia, España, Holanda y Portugal, la guerra también tenía repercusiones fuera de Europa. Pero, en todo caso la iniciativa expansionista partía del viejo continente. La única excepción importante había sido la rebelión de las colonias americanas y el nacimiento de Estados Unidos, atentos por entonces a incrementar y defender sus exportaciones. Después de 1806, la invasión y la ocupación napoleónica de España provocaron el comienzo de las sublevaciones en sus colonias de América Latina.

La expedición francesa a Egipto (1798-1799) es un signo posterior de la directa implicación de otras partes del mundo en los acontecimientos europeos y muestra cómo los confines del mundo eran cual-

quier cosa menos infranqueables para los designios aventureros de Napoleón. Por lo demás, en el siglo XVIII Francia había sido el más temible competidor de Gran Bretaña en la expansión colonial y en el tráfico internacional. Pero la empresa egipcia, decidida poco después de comprobar que el paso de la Mancha era impracticable, parece estratégicamente descabellada. Es probable que el Directorio la consintiera para alejar a un general que se había vuelto demasiado molesto más que por convencida adhesión a los planes napoleónicos. Las consecuencias fueron desastrosas. No obstante las muchas victorias que obtuvo el genio militar de Napoleón, Nelson aniquiló en Abukir las naves que habían transportado a las tropas francesas; el zar Pablo I, inquieto e irritado por la amenaza francesa al Imperio otomano obtuvo la apertura de los Dardanelos para que la flota y las tropas rusas pasaran al Mediterráneo. Otras fuerzas llegaron a Austria por vía terrestre. Rusos, austriacos e ingleses se habían unido así en una alianza (la segunda coalición antifrancesa después de la de 1792-1793) que en pocos meses destruyó las posiciones francesas en Italia y Suiza (primavera-verano de 1799). Cayeron entonces las repúblicas «jacobinas» establecidas en Italia en 1796 y 1799 (cisalpina, romana y napolitana). También en el Rin los franceses fueron obligados a retirarse. Pero la situación política y militar dio un vuelco total con el imprevisto retorno a París de Napoleón, que había burlado la vigilancia y el acoso de Nelson (octubre de 1799).

El golpe de Estado del 18 de brumario del año VII (9 de noviembre de 1799) ponía el destino de la República francesa en las manos de Bonaparte. Rusia, que había soportado el peso mayor de las operaciones bélicas, se retiraba de la coalición y el zar, al que Napoleón había devuelto 7.000 prisioneros de guerra sin contrapartida, se mostraba sensible a las propuestas de la diplomacia francesa contra Inglaterra. En junio de 1800, con la victoria de Marengo sobre los austriacos, Bonaparte, primer cónsul, confirmaba su suerte y sus virtudes militares y reconquistaba Italia. Austria, derrotada también en Hohenlinden, se veía obligada a firmar la paz de Lunéville (febrero de 1801). En el campo sólo quedaba Inglaterra.

Las razones de la rivalidad entre Francia e Inglaterra eran antiguas. Se podría retroceder a la guerra de los Cien Años y a Juana de Arco, acontecimientos que sólo recordamos porque habían cuajado en la imaginación colectiva y, por lo tanto, podían despertar resonancias místicas y propagandísticas.

Pero más recientes y concretas eran las razones que desde mediados del siglo XVII habían enfrentado a las dos potencias. Los ingleses se habían opuesto al proyecto hegemónico de Luis XIV y desde entonces habían dado a entender su determinación de impedir que una

sola potencia dominara Europa y, sobre todo, que Francia se apoderase de los Países Bajos. Otros, y no menos importantes, conflictos de intereses, se sumaban en los aspectos marítimo y comercial. Vencida y casi exhausta Holanda, decaída España, Francia se había convertido en la antagonista más poderosa de Inglaterra en el mar y las colonias. Los puntos de contacto, y de discordia, se ubicaban en el mar Caribe, América septentrional a lo largo de la línea del valle de San Lorenzo hacia el Norte (Nueva Francia, Canadá), del Mississippi hacia el Sur (Louisiana) y sobre las costas de la India. Durante la guerra de los Siete Años (1755-1763) Francia sufrió graves pérdidas en las colonias y finalmente cedió Canadá a los ingleses. Una ocasión para el desquite se presentó con la rebelión de las colonias norteamericanas, cuya lucha por la independencia fue activamente alentada por Francia, que se alió con los rebeldes. No por azar el acta diplomática que reconocía el nacimiento del nuevo Estado fue firmada en Versalles (1783).

La cuestión más importante no era tanto el dominio de los territorios coloniales, como la primacía en la industria de armamentos, en el número de naves de guerra y de transporte y en el tráfico comercial. Desde este punto de vista, la pérdida de las colonias americanas no significó un daño grave e irreparable para Gran Bretaña. Conservaba el dominio de los mares pese a que las otras tres mayores potencias navales de su tiempo, Francia, España y Holanda se aliaron contra ella. Es más, justamente en esos años, innovando la tradicional política mercantilista y proteccionista adoptada por las grandes potencias, tomaba fuerza en los gobiernos una actitud favorable a la libertad de comercio. El hecho más significativo en muchos aspectos fue el tratado comercial entre Francia e Inglaterra de 1786 (Tratado de Eden) con el que Francia abría prácticamente sus fronteras a las mercaderías extranjeras reduciendo al mínimo los derechos aduaneros. Era un gran éxito para Inglaterra, pero duró poco.

La revolución agregó otro motivo de enemistad entre ambas naciones. Las críticas de Edmund Burke indican cómo, desde el comienzo, el curso de la Revolución francesa fue casi incomprensible para la mayoría de los ingleses. Pero, más que las razones ideológicas y políticas, que tuvieron su peso, fue la preocupación por la expansión de la Francia revolucionaria hacia Bélgica y Holanda y la ruptura del equilibrio europeo las que llevaron a Gran Bretaña a la guerra. La insularidad británica hacía difícil un encuentro directo en el campo de batalla. Más que participar en las operaciones bélicas con sus propias tropas, Inglaterra financiaba a sus aliados europeos con millones de libras, defendía su primacía naval y bloqueaba las costas enemigas infiriendo gravísimos daños a la marina mercante y al tráfico interna-

cional de los franceses. Bloqueo y contrabloqueo, en otras palabras, guerra económica, se convirtieron en las principales armas del conflicto y asumieron dimensiones e importancia nunca vistas.

Los gobernantes franceses, convencidos de que cerrando su propio mercado a las exportaciones inglesas podrían castigar a la economía británica y, por otro lado, favorecer el desarrollo de las manufacturas nacionales, habían prohibido desde 1793 la introducción de mercaderías inglesas aunque se hiciera bajo bandera neutral. Estas medidas se atenuaron o revocaron más tarde porque comenzaban a faltar las mercancías coloniales e incluso los productos necesarios para el abastecimiento y el equipamiento del ejército. En 1798, cuando Inglaterra había quedado sola para combatir a Francia se renovaron las medidas restrictivas, o más bien se las endureció, incluyendo en las mismas a los neutrales, que eran los mayores intermediarios.

Pero cada vez era más notorio que estas disposiciones no podían ser eficaces si no abarcaban a todos, o la mayor parte, de los puntos de llegada de las mercaderías de origen inglés. El contrabando habría procurado su circulación. Por lo tanto, más allá de los motivos ideológicos y de la ambición de poder, la lucha de Gran Bretaña por la superioridad comercial y financiera presionaba también sobre la política de expansión francesa en Europa. Aun antes de que Bonaparte asumiera el poder, la radical hostilidad contra el predominio mercantil y financiero inglés había hecho madurar algún germen de «bloqueo continental».

La paz de Amiens —a la que habían conducido circunstancias particulares y la ilusión de los ingleses de que caerían los obstáculos al libre comercio— se trasformaría en un breve armisticio apenas Napoleón demostró que no tenía ninguna intención de abandonar una política de expansión y que uno de sus principales objetivos era abatir la potencia económica inglesa.

En efecto, el primer cónsul había sido proclamado presidente de la república italiana, había anexado el Piamonte a Francia y ocupado Suiza, había consolidado su poder haciéndose nombrar cónsul vitalicio mediante un plebiscito popular (agosto de 1802), intervenía en los asuntos de Alemania con el propósito de reducir su fragmentación y alentar el crecimiento de los mayores principados alemanes. Así conseguía reconocimiento, prestigio e influencia entre ellos, humillando aún más a los Habsburgos que, como titulares del Sacro Imperio romano, todavía eran garantes del equilibrio territorial de Alemania. En mayo de 1803, Gran Bretaña declaró nuevamente la guerra, a la que no renunció hasta que Napoleón fue abatido.

6. Guerra y paz en Europa

Las cuatro potencias más importantes de Europa —fuera de Francia— eran Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. La expansión revolucionaria primero, y luego el advenimiento y las ambiciones imperiales de Napoleón, eran una grave amenaza para el orden y la estabilidad dinástico-social de Europa. Sin embargo, no era fácil que las grandes potencias llegaran a un acuerdo pleno. Los éxitos de Napoleón se explican, además de por su genio estratégico, por las posibilidades de mantener divididos a sus adversarios aprovechando en cada momento los intereses contradictorios que los separaban. Estas divisiones le permitieron a veces conseguir el apoyo, o al menos la neutralidad, de alguna de las mayores potencias, y firmar acuerdos por separado con otras; en esencia, separar a sus enemigos en el campo de batalla y en las negociaciones diplomáticas.

Pero, tras la campaña de Rusia ello ya no le fue posible. La coalición que lo venció finalmente fue mérito de la tenacidad del gobierno inglés de Canning y de Castlereagh, de la habilidad del nuevo diplomático y estadista austriaco Metternich, de la decisión del zar Alejandro, del renacimiento nacional prusiano, de la resistencia española, de la experiencia de generales como Wellington y el archiduque Carlos de Habsburgo (formado en cierto sentido en la misma escuela que Napoleón); pero también fue consecuencia del desgaste de las fuerzas y de la ilusión de los franceses, empeñados por Napoleón en una empresa con objetivos cada vez más indeterminados e inalcanzables.

Dos hechos contribuyeron a preparar la reanudación de las hostilidades en el otoño de 1805: la ejecución del duque de Enghien y la proclamación del Imperio.

Son dos hechos vinculados de cierta manera entre sí y ocurridos con apenas un mes de distancia. El descubrimiento de una conspiración para restaurar a los borbones indujo a Napoleón a secuestrar en el territorio neutral de Baden, y luego, tras un juicio sumario, ejecutar al duque emigrado de la familia de los borbones (14-20 de marzo de 1804). Por acuerdo del Senado, ratificado por un plebiscito, la República se transformó en Imperio y la familia Bonaparte fue proclamada dinastía hereditaria. Pío VII fue invitado a asistir a la ceremonia —inmortalizada en el cuadro de David, también convertido de los ideales republicanos y revolucionarios a los napoleónicos— que se celebró el 2 de diciembre en Nôtre Dame y en la que el emperador, sugestionado por el ejemplo de Carlomagno, se coronó a sí mismo.

Las relaciones diplomáticas entre Napoleón y el zar Alejandro I, se deterioraron después de la ejecución del duque de Enghien, y en sep-

tiembre fueron interrumpidas. Se entablaron entonces negociaciones entre Inglaterra, donde Pitt había vuelto al gobierno, y Rusia, hasta llegar a un acuerdo cuyo punto más claro y mejor definido era que Gran Bretaña concedía un subsidio de un millón doscientas cincuenta mil libras destinado a los cien mil hombres alistados en Rusia para luchar contra Francia (abril de 1805). Austria y el reino de Nápoles se adhirieron al acuerdo sin vacilar. Se formaba así la tercera coalición, que no contó con el apoyo de la Prusia de Federico Guillermo.

Napoleón había bautizado con el nombre de *Gran Armada* a su ejército, acampado cerca de Boulogne en el verano de 1805, a la espera de una ocasión favorable, que no se presentó, para desembarcar en Inglaterra. La Gran Armada era el mejor ejército del mundo cuando, en los últimos días de agosto, marchó hacia Alemania contra las fuerzas austro-rusas. «Casi la cuarta parte de los soldados había hecho toda la guerra de la revolución, y otro cuarto, o poco menos, la campaña de 1800; el resto, incorporado durante el consulado, había tenido tiempo de amalgamarse con los veteranos; casi todos los oficiales y suboficiales habían combatido y también eran veteranos... Al contrario, los oficiales superiores eran muy jóvenes y soberbios» (Lefebvre). Respecto a las guerras del siglo XVIII no había grandes innovaciones en el armamento; el éxito de Napoleón se debió muchas veces a la rapidez de movimientos y a la capacidad, después de haber empeñado la batalla a todo lo largo del frente, para emplear las reservas como fuerza de choque que rompía las líneas enemigas. La persecución sin tregua al enemigo permitía cerrar el combate victoriosamente. Guerras breves, aprovisionamiento del ejército en el territorio ocupado, operaciones rápidas y golpes vigorosos eran las características de la táctica y la estrategia de Napoleón.

En octubre de 1805 las tropas francesas traban el primer contacto con los austriacos en Baviera, en las cercanías del Danubio y el 15 del mismo mes, en Ulm, el general Mack fue derrotado y capituló con 30.000 soldados dejando libre el camino hacia Viena, donde entró Napoleón el 13 de noviembre. Pero la victoria mayor y decisiva la obtiene el emperador de los franceses el 2 de diciembre, primer aniversario de su coronación, en Austerlitz, Moravia, contra las fuerzas unidas de los austriacos y los rusos. El mismo día, Napoleón recibe la noticia de que la flota francesa había sido destruida por Nelson en Trafalgar (21 de octubre). Si bien Austria se veía obligada a firmar la dura paz de Presburgo (26 de diciembre) y Prusia, que había dudado entre la neutralidad y la guerra, debía aceptar la alianza con Francia a cambio de Hannover, todavía quedaban en el campo de batalla la Rusia de Alejandro I e Inglaterra, la dueña de los mares.

Sin embargo, mientras Napoleón organizaba el *Gran Imperio*, de-

sacuerdos y sospechas dividían a los dos aliados. En Italia, el reino napoleónico arrebataba a Austria las provincias vénetas; Fernando de Borbón y María Carolina eran expulsados del reino de Nápoles, asignado a José Bonaparte; el otro hermano de Napoleón, Luis, fue nombrado rey de Holanda y Joaquín Murat, gran duque de Berg. En Alemania occidental se constituye la Federación del Rin de la que Napoleón es nombrado «protector». La Confederación comprendía los reinos de Baviera, Württemberg y algunos grandes ducados que incorporaban un centenar de pequeños estados y cuyos titulares (nobles feudales del Sacro Imperio romano) conservaban la propiedad de sus territorios pero perdían sus antiguos y anacrónicos derechos de soberanía. Se daba así un paso hacia la unificación de Alemania y se vaciaba de contenido al Sacro Imperio romano que ya no tenía razón de ser. En efecto, en agosto de 1806, Francisco II renunció al título de «emperador romano» para convertirse en Francisco I, emperador de Austria.

En octubre de 1806, la arrogancia despótica de Napoleón provocó la reanudación de la guerra por iniciativa de Prusia, donde el renovado espíritu nacional no permaneció indiferente ante la ejecución de un librero de Nuremberg, a quien un tribunal francés condenó a muerte por publicar un opúsculo antinapoleónico. La Gran Armada, que acampaba en Alemania occidental se trasladó rápidamente al Norte y en dos batallas, Jena (14 de octubre) y Äuerstädt, dio cuenta del ejército prusiano, considerado el mejor de Europa tras las empresas de Federico II. El 25 de octubre los franceses ocupaban Berlín. Al decretar, justamente desde esta ciudad, las disposiciones destinadas a debilitar la economía británica, Napoleón reconocía que su más tenaz y peligroso adversario era Inglaterra. Todavía quedaba por superar el obstáculo ruso, pero el emperador no desesperaba de llegar a un acuerdo.

El ejército francés acampaba en Prusia oriental y en Polonia. En Varsovia, Napoleón y los oficiales franceses disfrutaban del reposo del guerrero y alimentaban esperanzas de una insurrección polaca contra las potencias que se habían repartido su territorio (Austria, Prusia y Rusia). En esos meses nace la relación con María Walewska, que tanto contribuyó a exaltar la figura romántica del emperador.

El 8 de febrero de 1807 se produce en Eylau (Prusia oriental) un sangriento y no definitivo encuentro con los rusos que el jefe francés describe dramáticamente en los boletines de guerra, convertidos en su herramienta preferida para hablar a los soldados, a los franceses, a los adversarios y al mundo. «Una imagen como ésta —concluía— debía inspirar a los gobernantes el amor por la paz y el odio por la guerra.»

Y en aquel momento, lejos de Francia y en una posición estratégica precaria, deseaba verdaderamente la paz con Rusia y con Prusia, pero una paz bajo sus condiciones, que ayudara a su proyecto de dar un vuelco definitivo a la lucha económica contra Inglaterra.

Después de la victoriosa batalla de Friedland (siempre en Prusia oriental), consiguió su objetivo. Con la reunión de Tilsit, en una barcaza en el río Niemen, se firmaron la paz e importantes tratados secretos. Por un momento el zar Alejandro I, de carácter inestable y fantasioso, pareció totalmente seducido por los planes de Napoleón. Rusia fue tratada con todos los miramientos y el acuerdo entre ambos emperadores marcó otra etapa de la marcha de Napoleón hacia horizontes ilimitados. Prusia fue castigada con la pérdida de todos los territorios occidentales al oeste del Elba, que pasaron a formar parte del nuevo reino de Westfalia, creado por Jerónimo Bonaparte. Los polacos obtuvieron una pequeña satisfacción con la constitución del Gran Ducado de Varsovia. Ahora Napoleón podía intensificar la lucha contra Inglaterra.

7. **El bloqueo continental**

Se presentó la declaración del bloqueo (Berlín, 21 de noviembre de 1806) como una represalia contra medidas tomadas por los ingleses. Después de denunciar «el abuso monstruoso del derecho de bloqueo» por los británicos, que «no tiene otro fin que impedir las comunicaciones entre los pueblos, que encumbrar el comercio y la industria de Inglaterra sobre las ruinas de la industria y el comercio del continente», el decreto vedaba «todo comercio y toda correspondencia con las islas británicas», declaraba «presa legítima todo depósito, toda mercancía, toda propiedad de cualquier naturaleza perteneciente a un súbdito de Inglaterra» y prohibía recibir en los puertos las embarcaciones provenientes de Inglaterra o de las colonias inglesas. Sin embargo, el decreto tenía cierta ambigüedad que todavía permitía un amplio intercambio entre las potencias neutrales. Los decretos de Fontainebleau (13 de octubre de 1807) y de Milán (23 de noviembre y 17 de diciembre de 1807), posteriores al acuerdo con Alejandro I, precisan el proyecto que Napoleón había madurado en el curso de ese año: cerrar totalmente el continente europeo al comercio británico, usar el bloqueo continental como arma ofensiva para desquiciar el sistema comercial y económico de su gran rival y causarle la ruina. No permitían más el comercio de los neutrales, el bloqueo se extendía de los puertos al mar abierto y todo navío que tuviera cualquier clase de relaciones con los ingleses era considerado objetivo bélico.

De esta manera, el bloqueo continental se convirtió en una de las principales preocupaciones y uno de los puntos centrales de la política de Napoleón. La necesidad de impedir su violación terminó por empeñar a las fuerzas francesas en una desmedida tarea de control y dio nuevo impulso a la política de expansión y de conquista. En julio de 1807, Napoleón pedía la adhesión de Portugal al bloqueo y luego, de acuerdo con España, intentaba su conquista y reparto. Así, abría otro frente muy distante de Francia. La familia real portuguesa (los Braganza) se retiró a Brasil, y Portugal se convirtió para Inglaterra en una importante base de la que partiría el apoyo a los rebeldes españoles y la contraofensiva conducida por el general Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington. Napoleón, que consideraba débil y poco fiable a la monarquía española, obliga al rey a abdicar y confía el trono a su hermano José, a quien había reemplazado en Nápoles por su cuñado Joaquín Murat. El pueblo de Madrid se rebela y, pese a la despiadada represión, retratada en las realísimas pinturas de Goya, la revuelta se extiende a gran parte del país. El ejército francés, reforzado con tropas provenientes del Reino de Nápoles se vio enredado en una guerra de guerrillas y nunca pudo obtener una victoria decisiva. La resistencia de Zaragoza y de Girona demostraron que se podía resistir heroicamente a los conquistadores.

El ejemplo español, la reorganización del ejército austriaco después del desastre de Austerlitz, las opiniones de Metternich, el nuevo embajador en París —señalaba que los franceses estaban desanimados y cansados y que corrían vientos de fronda—, explican por qué los Habsburgos decidieron retomar las armas contra Francia en abril de 1809. Una vez más, la reacción de Napoleón fue fulminante y victoriosa. Ninguna ayuda llegó de Alemania para el intento de reconquista dinástica de los Habsburgos, aun cuando en la mutilada Prusia nacían las primeras inquietudes nacionalistas. Napoleón ocupó Viena el 13 de mayo, y cruzó el Danubio para enfrentarse al ejército del archiduque Carlos. Fue un durísimo encuentro (Esseling y Aspern) en el que ninguno de los contendientes venció ni fue vencido. Napoleón seguía dueño de Viena; pero ahora el ejército austriaco estaba sobre las armas. El triunfo del emperador llegó el 6 de julio tras un encarnizado combate en Wagram, a poca distancia de la capital austriaca, cuando los franceses quebraron el centro enemigo forzando la retirada de los austriacos. La paz se firmó en el palacio de Schönbrunn, en Viena, el 14 de octubre. Austria debía ceder las provincias ilíricas, territorio habitado por cerca de tres millones de personas, a los aliados de Napoleón y a Francia, que las incorporó al Imperio. Metternich, nombrado entre tanto ministro del Exterior, se vio obligado a adoptar una política de pacificación y favoreció el matrimonio de la archiduquesa

María Luisa con el déspota francés, que impuso el divorcio a Josefina Beauharnais. Las bodas se celebraron el 1 de abril de 1810. El «usurpador» del trono de Francia, aliándose con la mayor dinastía de la Europa del Antiguo Régimen buscaba legitimar su posición, y sobre todo, la de un futuro heredero.

Como nunca antes, Napoleón se presentaba como el dominador de Europa; aun cuando la guerra en España continuaba siendo una espina clavada en su costado, y la indomable resistencia inglesa su mayor preocupación. Ahora sus esperanzas estaban ligadas al éxito del bloqueo continental.

En efecto, en algunos momentos el bloqueo representó una grave amenaza para la economía británica, sobre todo cuando —como en 1808 y 1811-1812— coincidió con la hostilidad, con el embargo y con la guerra de Estados Unidos contra Inglaterra. Pero nunca constituyó un peligro mortal. Su eficacia dependía, antes que nada, del control de las innumerables vías por las que podían ingresar al continente las mercaderías inglesas; control que nunca fue realizable plenamente, pero que se volvió imposible cuando, con Francia empeñada en la insurrección española primero, y luego en la guerra con Rusia, se abrieron cómodas salidas comerciales a Inglaterra. Los ejércitos napoleónicos tenían otras tareas más urgentes que la vigilancia de los puertos y las costas.

Además, la aplicación rigurosa del bloqueo empeñaba los intereses de amplios sectores populares y burgueses contra la política de Napoleón. No haber evaluado el poder de esta hostilidad fue un grave error originado, como otros de Napoleón (intervención en España, guerra con Rusia, subestimación de Estados Unidos), por una política egocéntrica y autoritaria, fundada cada vez más en la fuerza y menos en el consenso.

A estas consideraciones hay que agregar la capacidad de resistencia y expansión del joven y emprendedor capitalismo británico.

Los mercados ingleses se dividían en tres grandes sectores geográficos: los países europeos, Estados Unidos y los territorios del Imperio británico o ligados a él. Esta última área, invulnerable gracias al dominio inglés de los mares, absorbía en los años previos al bloqueo cerca de los dos quintos de las exportaciones británicas, mientras que Europa —desde Rusia hasta España— sólo captaba poco más de un tercio, y Estados Unidos la parte restante. Por lo tanto, aunque Napoleón hubiera logrado cerrar todo el continente europeo no habría podido destruir íntegramente el comercio inglés. Sin embargo, los británicos, no sólo compensaron en otros continentes las pérdidas sufridas en Europa, sino también lucharon con tenacidad y con éxito para conservar

el mercado europeo. En 1806, por ejemplo, bloqueados los puertos prusianos, las naves inglesas se dirigieron a Hamburgo y Bremen. Ocupados éstos por los franceses, el comercio inglés continuó desarrollándose, incluso gracias a la complicidad interesada de funcionarios y militares imperiales y aliados, a través del cercano puerto de Tönningen. Aplicado rigurosamente el bloqueo en toda Europa en la segunda mitad de 1807, las naves y las mercaderías inglesas penetraron a través del único paso que había pemanecido abierto, el puerto sueco de Gotemburgo. En 1808, comerciantes e industriales ingleses aprovecharon la insurrección española y, además, ocuparon una posición estratégica en el Mediterráneo, en la isla de Malta, desde la que controlaban Sicilia, un importante centro de irradiación comercial hacia el Imperio turco y los puertos austriacos del Adriático.

El fracaso del bloqueo se debe en la misma medida a la capacidad de resistencia de la economía británica, a la elasticidad y la intrepidez de los operadores económicos ingleses y a los errores de cálculo de la ambiciosa y autoritaria política de Napoleón.

Más allá de los propósitos de Napoleón, las vicisitudes del bloqueo se relacionan con el desarrollo económico de Inglaterra y de Europa continental en el momento en que ganaba importancia el proceso de industrialización. Por ello hay que ubicar al bloqueo en una perspectiva más amplia que tenga presente el extenso período en el que se produce la industrialización de los principales países de Europa occidental: se trata de un siglo, o mejor, de un siglo y medio: desde la mitad del siglo XVIII hasta el final del XIX. Este período incluye, con caracteres particularmente agitados, los veinticinco años que van desde 1789 a 1814-1815, en los que Inglaterra había casi completado la primera fase de la Revolución industrial, mientras Francia y, al menos, una parte de Europa padecían las perturbaciones de la revolución y de la guerra. Sin embargo, aun en estas condiciones, en algunas áreas regionales en las que vivían la protoindustrialización o un comienzo de industrialización (como, por ejemplo, Bélgica, algunas áreas de Suiza y algunos sectores manufactureros de la propia Francia) no sufrieron daños irreparables e incluso aceleraron su desarrollo en algunas ocasiones.

Hay que observar, además, que el período rígido del bloqueo continental fue muy breve. En efecto, si bien el bloqueo fue decretado a finales del año 1806, y se endureció a finales de 1807, sólo pudo ser aplicado rigurosamente a partir de 1809, y sobre todo de 1810 a 1811. Pero ya en 1812, con el comienzo de la campaña de Rusia, no se pudo prohibir radicalmente el comercio y las mercaderías inglesas: se abrían numerosas brechas que preanunciaban el final próximo del sistema.

Por otra parte, en su forma más rígida (Aranceles del Trianon, 5 de agosto de 1810) el bloqueo sólo era concebible y posible con una absoluta, prepotente y privilegiada supremacía de Francia que, a través de una extensa red de concesiones de licencias, habría importado los productos coloniales indispensables para la industria (sobre todo el algodón) e intentado mantener una salida a los excedentes agrícolas propios y a algunos productos de lujo. El peso mayor del bloqueo recaía sobre los aliados y satélites, que tenían un acceso muy limitado a las licencias.

Breve fue por lo tanto la duración del bloqueo efectivo, y no hay duda que en ese lapso la economía de los países europeos más directamente ligados o sujetos a Francia se vio gravemente afectada. Padeció la misma Francia, no obstante la situación privilegiada que tenía en el sistema napoleónico. Un principio de crisis agrícola entorpeció particularmente el bloqueo en el año 1811; pero Francia pudo, al menos en parte, desviar hacia otros los peores males y daños. También en Inglaterra, que progresaba por el camino de la transformación industrial, la rigurosa clausura de los puertos europeos y la crisis agrícola causaron algunos momentos de aguda dificultad.

Pero en conjunto, si bien el bloqueo tuvo consecuencias políticas bastante notables, contribuyendo a la caída del dominio napoleónico, no hay que exagerar su incidencia económica, que fue muy breve para tener efectos duraderos. Sobre todo mostró su eficacia en los lugares donde continuaba una política económica iniciada hacía ya tiempo que, al impedir la competencia de las manufacturas británicas más avanzadas, permitía la supervivencia de los sistemas productivos tradicionales y, a la vez, protegía el nacimiento y crecimiento de las industrias modernas cuando había iniciativa empresarial y apoyo de los Gobiernos. Al mismo tiempo, con los obstáculos que ponía al abastecimiento de materias primas esenciales, combinados con la política económica de Napoleón, dirigida a asegurar para Francia los mercados privilegiados, el bloqueo creaba dificultades a algunas regiones industriales que en años anteriores habían podido sacar alguna ventaja de la prohibición de los productos ingleses. Por ello, la situación se presenta sumamente compleja y el juicio no es fácil.

Recapitulemos y precisemos.

El bloqueo continental, el episodio más notable y visible de la política económica napoleónica, es la fase extrema, y en algunos aspectos, exacerbada, de la lucha política y económica librada casi ininterrumpidamente entre Francia e Inglaterra desde los años noventa del siglo XVIII hasta 1815.

Cuando comenzaron la revolución y la guerra, Francia competía activamente con Inglaterra en el comercio internacional, sobre todo

en la importación y exportación de azúcar y café. En el sector manufacturero, y especialmente en la industria algodonera, no obstante algún comienzo prometedor, Francia era claramente inferior. Al final del período, Francia había perdido totalmente el comercio trasatlántico, pero había creado, en los amplios confines imperiales que también comprendían Bélgica, una industria algodonera que, aunque no podía competir con la inglesa, le aseguraba cierta autonomía y un buen punto de partida para futuros desarrollos. Además, había mantenido y consolidado sus posiciones en la manufactura de la lana y de la seda, desarrollado algunas producciones (industria del libro, el vidrio, artículos de lujo) que serían típicas exportaciones francesas (en el balance comercial se definían como *industrie française*, y representaban una parte importante del comercio exterior).

Empieza a ser posible para Francia una comparación, aunque sea sumaria, entre el comienzo y el fin del período; mucho más controvertidas y difíciles son las evaluaciones en otros países de Europa, por ejemplo, Italia.

Uno de los puntos más interesantes es el mercado interno como parte de los factores que permitieron a la Francia imperial y a algunas regiones de Europa continental, excluidas, al menos temporalmente, del gran comercio atlántico, no ser totalmente marginadas del proceso de desarrollo industrial. Hubo incluso nuevos desplazamientos de los centros de actividad económica; entre los más importantes, el de los puertos atlánticos hacia la región del Rin y los territorios suizos.

Vinculados con los problemas de la industrialización y con el adelanto de Gran Bretaña en este campo, se sitúan las grandes cuestiones cambiarias y del proteccionismo que se presentan en términos nuevos. Mercado interno, comercio internacional, proteccionismo industrial son los grandes temas del debate económico y de las políticas nacionales que acompañan las vicisitudes de la industrialización en Francia y en Europa. Basta aludir a las experiencias de las que nace el *Zollverein* (la unión aduanera alemana de los años treinta) y las reflexiones del economista Federico List. También la idea de *nación*, que había adquirido nuevos contenidos y vigor con la Revolución francesa, se mezcla con los conceptos de desarrollo económico e industrial y las aspiraciones que despiertan.

8. Apogeo del Imperio napoleónico

Se puede discutir si el poder de Napoleón alcanzó su apogeo después del acuerdo de Tilsit (1807) con el emperador Alejandro o después de la victoria de Wagram y el matrimonio austriaco (abril de

1810). En 1811, tras el nacimiento del heredero, el rey de Roma, y la anexión de esta ciudad a Francia, la incorporación de Holanda y de muchas provincias alemanas, de las costas y de los puertos del centro y norte de Europa, del acceso del mariscal de Francia Bernardotte al trono de Suecia, de la sumisión y la alianza de Austria, del control directo e indirecto de toda Italia —a excepción de las islas—, de la presencia, aunque muy contestada, en España, todo haría creer que el dominio napoleónico se había consolidado, que la legitimidad y la sucesión de la nueva dinastía estaba asegurada, y que ahora podía aplicar con mayor eficacia el «bloqueo continental» contra los ingleses.

En esencia, la situación era mucho menos brillante. La intervención personal de Napoleón en España, entre noviembre de 1808 y enero de 1809, aunque representó la reconquista de Madrid, no había logrado doblegar la insurrección, que abría a los ingleses la ocasión de estar presentes y activos en el continente. De regreso en París, el emperador había cesado a Talleyrand, uno de sus más hábiles colaboradores y del que ya no se fiaba. Era la prueba de una crisis de confianza y de una creciente intolerancia ante cualquier advertencia o consejo que lo invitara al realismo o a la prudencia. Los acontecimientos de España y el desarrollo de la guerra contra Austria (1809) también habían empañado su imagen de caudillo brillantemente victorioso. El ejército austriaco, aun después de la batalla de Wagram, no había sido destruido y había demostrado ser capaz de resistir al poderoso embate de la Gran Armada. Sobre todo era grave el deterioro de las relaciones con Rusia. A las divergencias sobre el destino de Polonia, sobre los acuerdos y la política de bastidores hacia el Imperio turco, a las controversias y sospechas sobre la aplicación del bloqueo, se agregaba la reticente acogida de la pretensión napoleónica de desposar a la hermana de Alejandro I. El matrimonio austriaco, hábilmente propuesto por Metternich, si bien no era un retroceso creaba algunos problemas a Napoleón en su propia familia y en la opinión pública francesa. No hay que olvidar que María Luisa era sobrina de María Antonieta, la reina que, en 1793, había muerto en la guillotina. Napoleón se alejaba cada vez más de la revolución y trataba de procurarse una legitimidad dinástica que no podía sino alejarlo de quienes entonces veían en él al heredero de aquella gran sublevación. También molestaba a los aristócratas irreductibles, que consideraban un ultraje a la tradición y un sacrificio impuesto por la insaciable codicia del ambicioso déspota el matrimonio de una princesa habsburga con el usurpador. Por otra parte, el divorcio de Josefina y la celebración de nuevas nupcias habían complicado todavía más las relaciones con el Papa y con los católicos intransigentes.

El creciente despotismo también causaba daños difícilmente reparables en las relaciones con la iglesia católica, a las que, como demuestra el concordato de 1801, Napoleón había prestado mucha atención desde el comienzo, obteniendo un notable éxito en la reconciliación y el apoyo de los obispos y del clero para su régimen. Si Pío VI había muerto en el exilio víctima de los últimos espasmos del espíritu jacobino y revolucionario, el acuerdo con Pío VII había parecido posible y duradero, fuera por la buena disposición del Papa, que ya como obispo había manifestado sentimientos democráticos, o por las exigencias políticas napoleónicas. Pero muy pronto mostró el uso instrumental que Napoleón pensaba dar al acuerdo. La publicación del concordato fue seguida por los Artículos Orgánicos que, apoyándose en la tradición gala, tendían prácticamente a separar la iglesia francesa de la Santa Sede. Para no provocar un nuevo cisma, Pío VII aceptó esta situación, pero luego trató de oponerse a la pretensión de Napoleón de resucitar el imperio de Carlomagno y ejercer el poder temporal en lo que quedaba de los Estados de la Iglesia. En mayo de 1809, Napoleón anexaba Roma al Imperio. Ante la protesta y el intento de excomunión por parte de Pío VII, ordenaba el arresto del Papa y su deportación a Savona (julio de 1809). En febrero de 1810, un senadoconsulto —el instrumento institucional del que se servía Napoleón para dar una apariencia de legitimidad a sus decisiones— sancionó la anexión de Roma y transformó en leyes del Imperio los artículos de la iglesia gala de 1682. En esa ocasión, Napoleón declaró que pretendía «restaurar el derecho que siempre habían tenido los emperadores de ratificar el nombramiento de los Papas». Esta pretensión, originada en el convencimiento de ser el heredero y el restaurador del Imperio de Carlomagno, no sólo hacía inconciliables las diferencias entre el Estado y la Iglesia, sino también testimoniaba la exaltación a la que había llegado la mente de Napoleón. En febrero de 1812, después del rotundo fracaso de un concilio nacional y de la irreductible resistencia de Pío VII, Napoleón declaró nulo el concordato de 1801, lo que confirmaba la oposición, acaso tácita pero no irrelevante, del clero y de una parte de los católicos.

No hay que olvidar que, en las divergencias entre Napoleón y Alejandro, que justamente se hacen públicas a comienzos de 1812, en su confuso misticismo, el zar había terminado por creer que su adversario representaba al Anticristo.

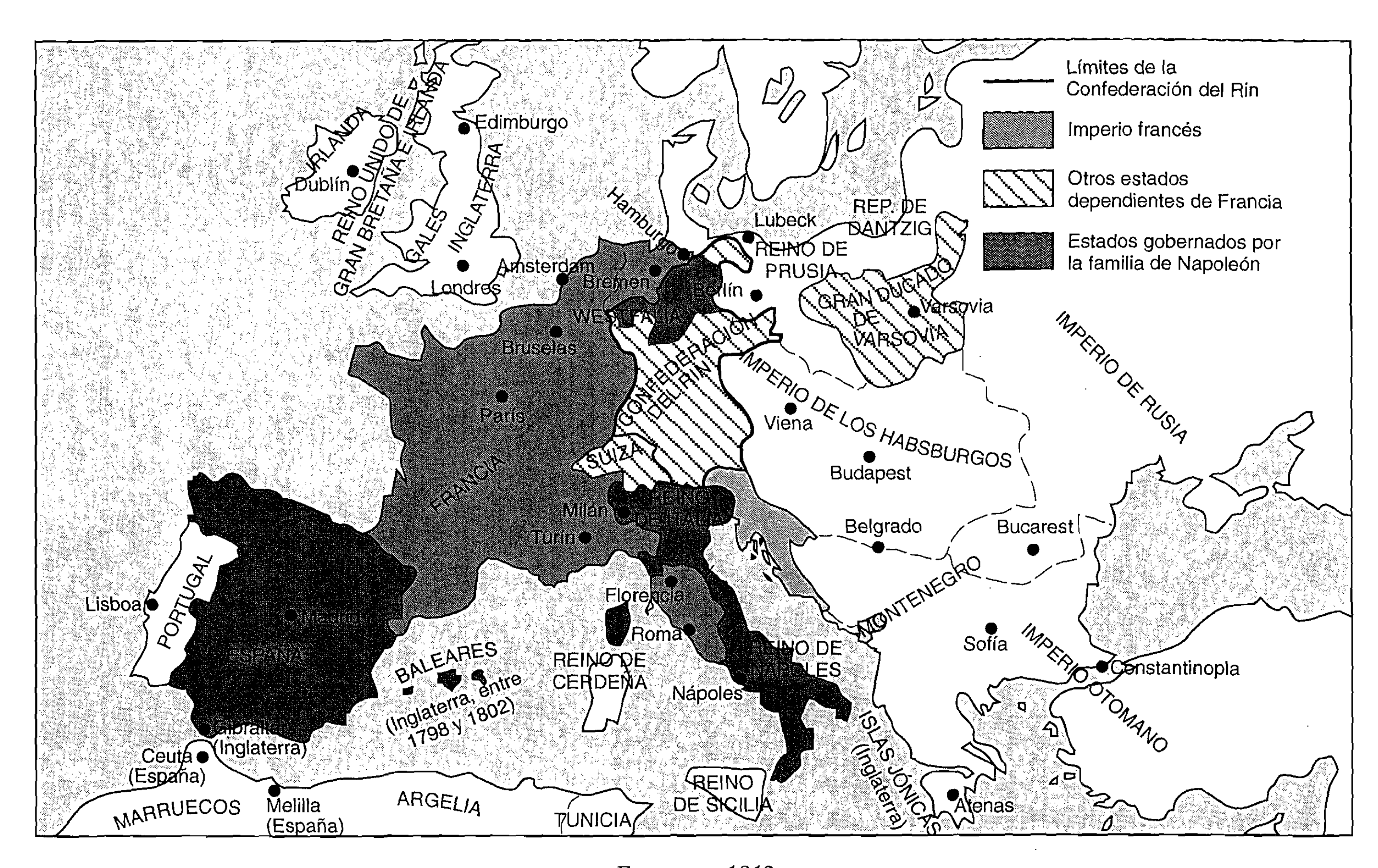
La tiranía de Napoleón se hacía intolerable aun para algunos de sus familiares y sus fieles. Se puede recordar el caso de su hermano Luis, privado del trono; de Bernardotte, convertido en rey de Suecia y proclive a la alianza con Rusia; de Joaquín, rey de Nápoles, que ya a partir de 1810 tiene notables diferencias con su imperial cuñado y que

luego será animado por su propia mujer a romper con Francia y acercarse a Austria. La política de Napoleón hacia los estados periféricos, incluso aquellos ligados a él por vínculos dinásticos y militares, tenía razones profundamente contradictorias que contribuían a explicar el mal resultado del proyecto de organización del sistema continental. Por una parte, deseaba que se introdujeran en esos Estados las instituciones y la legislación francesas, un retazo al menos de la gran revolución, que concedían y garantizaban las constituciones, establecían el principio de autogobierno y de la nacionalización de los cargos y de los empleos, lisonjeando y estimulando de alguna manera el espíritu nacional y las aspiraciones constitucionales y nacionales de la naciente burguesía. Por otra parte exigía la más rígida obediencia a una política de poder y de guerra orientada a llevar adelante ilimitados proyectos imperialistas y a la preeminencia de Francia, a una política que a menudo contrastaba con los intereses de los estados a los que él mismo había contribuido a dar las leyes más modernas y a que vislumbraran ilusorias perspectivas de desarrollo, de unificación nacional y de independencia. Cuando las ilusiones y la confianza se disolvían, terminaba el consenso y sólo por la fuerza y el miedo se podía obtener obediencia o aprobación.

En estas condiciones Napoleón iniciaba la guerra contra Rusia, movilizando con un esfuerzo inaudito todos los recursos de Francia y de sus aliados y satélites. Sólo sumando a los franceses, los súbditos del entonces vastísisimo imperio napoleónico desde el Vístula hasta Cataluña, del mar del Norte a las provincias ilíricas, el Piamonte, Liguria y Roma, Napoleón tenía a sus órdenes, en mayo de 1812, un ejército de setecientos mil hombres, de los que era francesa una minoría, que aumentaba a la mitad en las tropas que entraron en Rusia. Había, además, casi doscientos mil alemanes (de los que treinta mil eran austriacos y veinte mil prusianos); noventa mil polacos y lituanos (cuyo objetivo declarado era la liberación de Polonia y Lituania); treinta mil italianos y también secciones españolas y portuguesas. Antes de cruzar las fronteras rusas Napoleón recibió en Dresde el homenaje del emperador de Austria, del rey de Prusia y de muchos otros soberanos que le debían el título regio y sus reinos.

9. De la campaña de Rusia al exilio

Como es notorio, la campaña de Rusia fue un desastre. En ella murieron más de un millón de hombres. No se libraron batallas campales, salvo Borodino, cerca de Moscú (el 15 de septiembre). El ejército ruso, comandado por Kutosov, evitó siempre los enfrentamientos hos-



Europa en 1812.

tigando con continuas escaramuzas la marcha del enemigo. Cuando fue ocupada, el 14 de septiembre, Moscú era una ciudad semidesierta, y muy pronto devastada por los incendios. Alejandro y Rusia no daban señales de desear la paz. En octubre, Napoleón se vio obligado a ordenar la retirada. Como debía aprovisionarse con los recursos del país, la tierra quemada que lo rodeaba era un gravísimo problema. A las dificultades de abastecimiento se sumó, en noviembre, el terrible invierno ruso. Cuando cruzaban el río Beresina atacaron los rusos y los franceses sufrieron duras pérdidas (25-27 de noviembre). A Vilna, y luego a Prusia, sólo llegó una columna todavía organizada de poco más de diez mil hombres y en los días siguientes cuarenta mil desbandados.

La Gran Armada había sido destruida y ahora Europa se levantaba contra el conquistador, contra el déspota, contra el usurpador, contra el Anticristo. La misma Francia le era infiel. Los prusianos y los austriacos habían participado de mala gana en la campaña de Rusia. En febrero, Prusia, gracias a la iniciativa del movimiento patriótico firmó una alianza con el zar. Sin embargo, Napoleón logró reclutar un nuevo ejército y en mayo se reencontraba con la victoria desbaratando a rusos y prusianos en Sajonia (Lutzen y Bautzen, el 2 y el 20 de mayo de 1813). Entonces, Metternich ofreció la mediación de Austria: Francia debía regresar a los límites de 1795, o sea a la línea del Rin. Si no aceptaba, el Imperio de los Habsburgos se alinearía contra él; como así sucedió. Se constituye entonces una nueva y potentísima coalición antifrancesa. Algunos historiadores consideran que fue la sexta, otros, en cambio, sostienen que sólo fue la cuarta. No vale la pena detenerse en tales cuestiones; más bien hay que notar cómo, después de veinte años de experiencia, los aliados de 1813 habían aprendido a no dividirse y a poner como objetivo esencial la caída de Napoleón, primando los tratados de paz a la discusión de sus complejos problemas políticos y diplomáticos. La batalla decisiva se entabló en Leipzig del 16 al 18 de octubre. El Imperio napoleónico se tambaleaba. Wellington entraba a Francia cruzando los Pirineos desde España; los austriacos avanzaban atravesando Suiza; las fuerzas conjuntas aliadas vadeaban el Rin a fines de diciembre. La situación de Napoleón parecía desesperada. Sin embargo, con una serie de rápidos movimientos y encuentros victoriosos logró aminorar la marcha de los aliados, que entraron en un París indiferente el 31 de marzo. El 4 de abril, Napoleón abdicaba en favor de su hijo; el 6 de abril, el senado napoleónico, por iniciativa de Talleyrand, proclamaba rey de Francia al Borbón Luis XVIII, hermano de Luis XVI. El 14 de junio, el nuevo rey concedía la carta constitucional que preveía una cámara de pares nombrada por el rey y una cámara de diputados nombrada por sufragio res-

tringido. Se proclamaba religión del Estado al catolicismo, pero se reconocían las libertades de culto, de prensa y de asociación. También se confirmaban casi enteramente los ordenamientos administrativo y judicial napoleónicos. Se convalidaron las ventas de bienes del Estado provenientes de la confiscación de propiedades de entidades eclesiásticas o de los emigrados, pero gran parte de los oficiales napoleónicos fueron licenciados con pensiones reducidas. También se adoptó una rígida política fiscal y financiera para obtener el saneamiento del balance y la reducción de la deuda pública. En general, las medidas fueron moderadas, pero no dejaron de provocar cierto descontento; sobre todo por las pretensiones de los más encendidos realistas, guiados por el hermano del rey, el conde de Artois.

Por voluntad del zar, al emperador destronado se le concedió el reino en miniatura de la isla de Elba.

En noviembre de 1814 se inauguró en Viena el congreso que debía establecer las condiciones de paz y el nuevo orden de Europa después de veinte años de guerras y conmociones. Ya en mayo, con el tratado de París, se había regulado la posición de Francia, cuyas fronteras volvieron a ser las de 1792, le restituyeron casi todas las colonias, no le fue exigida ninguna indemnización de guerra y se le permitió estar presente en Viena donde, gracias a la habilidad de Talleyrand, continuó haciendo política entre las grandes potencias. Entre diciembre de 1814 y enero de 1815 surgió una grave crisis entre los aliados que condujo a una nítida división entre Austria, Inglaterra y Francia por una parte, y Prusia y Rusia por la otra. Se discutía el destino de Sajonia, cuyo soberano, Federico Augusto había mantenido hasta el final su alianza con Napoleón. Prusia pensaba aprovechar la ocasión para apoderarse de esa región. Talleyrand llevó el caso al plano de los principios y propuso y defendió el de la *legitimidad*, es decir, la restauración de los soberanos y los límites del *statu quo ante*. El principio fue aceptado siempre que no chocase demasiado frontalmente con los intereses de las grandes potencias ni tampoco con el principio del equilibrio, que era norma de la diplomacia del siglo XVIII e inspiró muchas de las decisiones del congreso de Viena y de la organización europea.

Napoleón, informado de las disidencias de los aliados y confiando desmedidamente en la opinión pública francesa, intentó la última aventura. Con casi mil hombres de su escolta desembarcó cerca de Frejus el 1 de marzo de 1815 y, acogido favorablemente en Grenoble y Lyon, logró atraer a su lado al mariscal Ney y a sus tropas, enviado por Luis XVIII para arrestarlo. Por esta debilidad, Ney será fusilado más tarde. El restaurado régimen borbónico cayó sin resistencia. El 20 de marzo, Napoleón entraba en París y trataba de ganar para su causa a los círculos liberales. Con el Acta Adicional, en la que colabo-

ró Benjamín Constant, promulgó una nueva constitución. Pero las elecciones y el plebiscito no demostraron mucha adhesión y popularidad. La base de la fuerza de Napoleón era, entonces, el ejército: el que fue victorioso general condujo todavía una gran campaña militar, pero finalmente en Waterloo, el 18 de junio, cayó ante la superioridad y la determinación de las fuerzas aliadas.

El golpe de mano napoleónico apresuró las tareas del congreso de Viena que finalizaron el 9 de junio; el emperador, destituido y execrado, fue esta vez desterrado muy lejos de Europa, en el islote atlántico de Santa Elena, donde murió el 5 de mayo de 1821.

CAPÍTULO 2

LA RESTAURACIÓN

1. El congreso de Viena

En marzo de 1814, las cuatro grandes potencias de la coalición antinapoleónica se habían comprometido (tratado de Chaumont) a mantener durante un período de veinte años los acuerdos y el orden político-territorial que se fijarían en los tratados de paz. La determinación de las potencias vencedoras se reforzó con conato de revancha napoleónica, cuyo resultado fue privar a Francia de las concesiones que inicialmente se habían previsto (los límites conseguidos en 1792) y reducirlas a las fronteras de 1790, imponiéndole, además, una pesada indemnización de guerra y una fuerza de ocupación de 150.000 hombres (segundo tratado de París, 20 de noviembre de 1815).

Para la historia de las instituciones diplomáticas y del derecho internacional, es útil recordar que para mantener la paz se establecía un procedimiento de consultas periódicas entre las grandes potencias, origen del sistema de conferencias y concertación en Europa, innovación y precedente importante en el desarrollo de las relaciones internacionales, casi el primer intento de un acuerdo para la seguridad colectiva. Tal sistema, sin embargo, no ha sido capaz de evitar la guerra, aun con todos los perfeccionamientos y las ampliaciones realizadas desde entonces hasta la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas, o a la intensificación y la rapidez de las relaciones diplomáticas, y personales, sobre todo tras la segunda guerra mundial.

Todos los estados europeos estuvieron representados en el congreso de Viena (octubre de 1814-septiembre de 1815), pero las líneas esenciales del nuevo orden fueron acordadas entre las cuatro grandes potencias (la Cuádruple Alianza: Gran Bretaña, Rusia, Austria y Pru-

sia). A ellas se sumó Francia, gracias a la habilidad diplomática de Talleyrand, pero también por una consideración realista de las relaciones de fuerza. Habiendo aceptado la Francia de Luis XVIII las obligaciones del tratado de paz, no se le podía negar un lugar adecuado a su tradición y a su potencial humano y militar.

Por lo demás, ya en los trabajos del congreso se habían manifestado diferencias de no poca importancia en la Cuádruple Alianza a propósito de la suerte de Polonia —a la que no quería renunciar el zar Alejandro, cuyas tropas ocupaban el territorio— y de Sajonia, codiciada por Prusia y culpable de haberse mantenido fiel a Napoleón. Los reclamos de Rusia y, sobre todo, de Prusia sólo fueron atendidos parcialmente. Para oponerse a estas demandas, consideradas excesivas, Austria y Gran Bretaña recurrieron a Francia, y Talleyrand sostuvo con empeño el principio de legitimidad, en el que luego se inspiró sustancialmente el congreso. Pero el principio se aplicó allí donde no se oponía a los intereses de los más fuertes y, sobre todo, fue moderado con, o mejor, subordinado al principio de equilibrio, en nombre del cual se redibujó el mapa político-territorial de Europa, cambiando, uniendo y asignando pueblos y territorios. Se tuvieron poco o nada en cuenta las instancias populares y nacionales y la importancia de la opinión pública que, en las últimas décadas, habían adquirido unas dimensiones y un peso nunca alcanzados antes, contribuyendo a modificar el equilibrio de la sociedad y las bases de la política. Se olvidaba, sobre todo, que la insurrección popular, la resistencia contra ejércitos y gobiernos extranjeros y la difusión de ideas liberales y constitucionales habían hecho una contribución —a veces subestimada por la historiografía del resurgimiento y nacionalista, pero seguramente nada desdeñable— a la derrota de Napoleón.

2. El nuevo orden europeo

Para comprender bien los caracteres de la Restauración, no hay que descuidar el hecho de que, salvo algunas excepciones, las reformas institucionales y sociales consolidadas durante el gobierno y la ocupación de Napoleón no podían ser anuladas y revocadas sin provocar nuevas alteraciones, totalmente indeseadas por las potencias vencedoras. Por ello, especialmente Inglaterra y Austria aconsejaron moderación a los soberanos restaurados. Más bien, como lo demuestra el caso de Francia, en el cual nos detendremos, y de algunos estados de la Alemania meridional, se introdujeron reformas moderadas en sentido representativo y constitucional, que muchas veces se adelantaban a los espacios muy limitados que dejaba el autoritario ré-

gimen napoleónico. El congreso de Viena quería, sobre todo, la restauración de la legitimidad dinástica —y ni siquiera en este campo faltó alguna excepción—, es decir, procuró especialmente el retorno de los soberanos legítimos, los monarcas por «derecho divino». Lo demuestra, entre otras cosas, que soberanías sin duda plenamente «legítimas», como por ejemplo las de las repúblicas de Venecia y Génova, no fueron restauradas y sus territorios continuaron en manos de Austria (Venecia) o fueron concedidos al reino de Cerdeña (Génova). Las monarquías hereditarias, fundadas en antiguas tradiciones, eran consideradas no sin razón uno de los mayores elementos de estabilidad en Europa y, en efecto, eran los verdaderos vencedores de Napoleón; quien, por lo demás, adoptando el principio dinástico y hereditario, había, él mismo, legitimado el sistema e intentado introducirse en él.

Expandiéndose en Italia, Austria, en virtud del principio de equilibrio, renunciaba a los Países Bajos españoles (Bélgica y Luxemburgo), los cuales, unidos en un solo reino por Guillermo I de Orange, le fueron entregados como recompensa por su alianza con Inglaterra. El esfuerzo antinapoleónico de Rusia fue retribuido con gran parte de Polonia, que Alejandro I declaró reino autónomo, Besarabia, perteneciente al Imperio otomano, con Finlandia, cedida por Suecia, que a su vez obtiene Noruega, arrebatada a Dinamarca, culpable, como Sajonia, de fidelidad a Napoleón.

Gran Bretaña recuperaba en Europa a Hannover, antiguo dominio hereditario de la dinastía, y ganaba algunas posiciones estratégicas para su dominio naval: Malta y las islas jonias del Mediterráneo, la isla de Helgoland, en el mar del Norte, algunas islas de las Antillas (Tobago y Santa Lucía) y en el océano Índico (Mauricio y Seychelles). Además, compraba a Holanda la colonia del Cabo, en Sudáfrica y Ceilán, en el océano Índico.

Los cambios más importantes se produjeron en Italia y Alemania, donde, también en el plano político e institucional, los principios de la Revolución francesa y la experiencia de la ocupación napoleónica habían tenido gran influencia y terminaron por oponerse al proyecto restaurador de Metternich.

Los controvertidos juicios sobre el congreso de Viena tocan particularmente a la obra del estadista austriaco que dominó la escena política y diplomática europea, al menos hasta 1830 y fue canciller del Imperio austriaco hasta 1848. Aun cuando parezca que en Viena uno de los primeros planos fue ocupado por el zar Alejandro, y que sus ideas triunfaron con la constitución de la Santa Alianza —la mística hermandad de los soberanos que por gracia divina tendrían el deber de salvaguardar la paz y el bienestar de las «naciones cristianas»—,

fue el realismo de Castlereagh, representante de Gran Bretaña, y de Metternich, el que obtuvo los éxitos mayores.

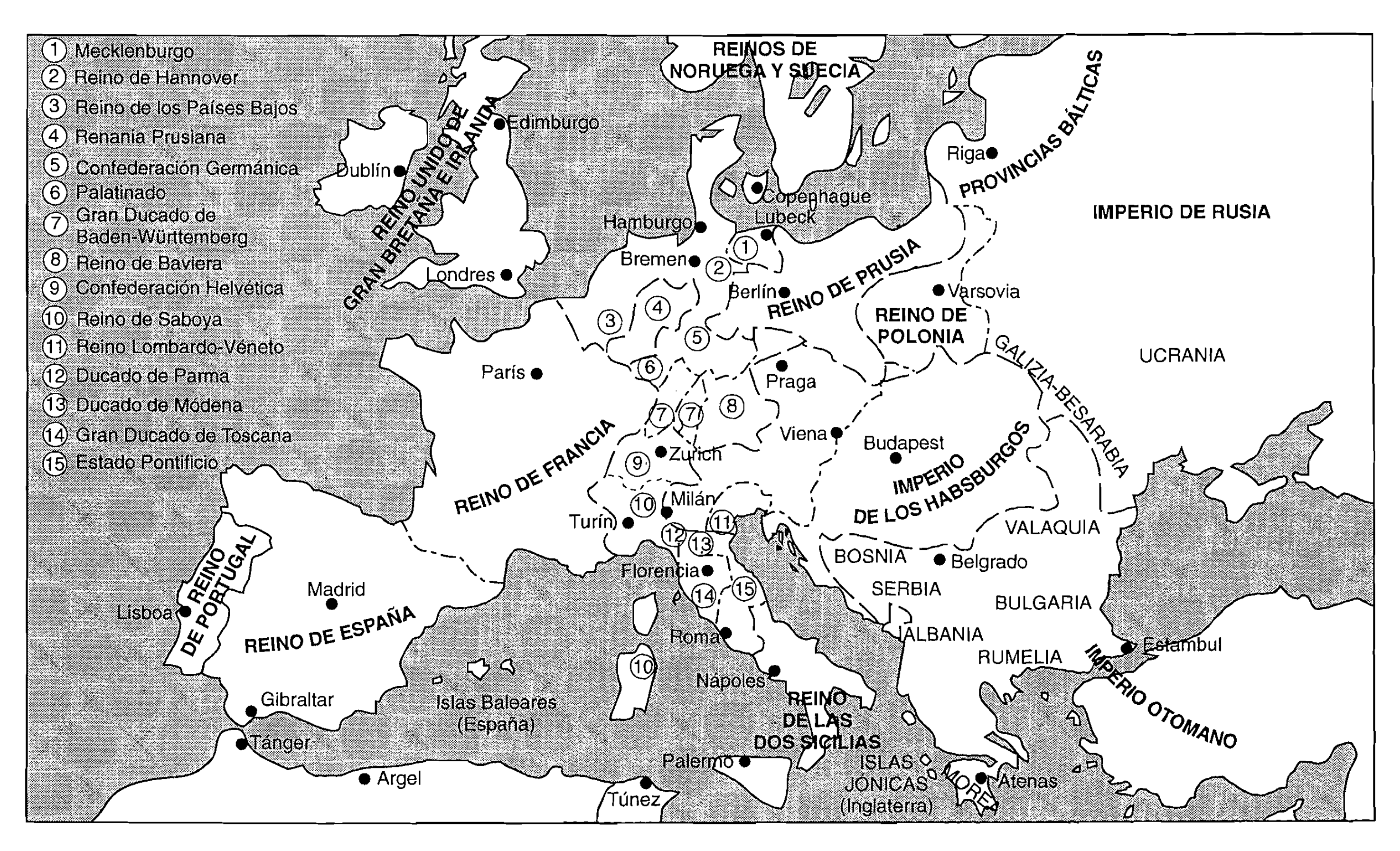
Austria, renacida tras las humillaciones napoleónicas, y territorialmente compensada con la cesión de los Países Bajos y la adquisición de los territorios vénetos, se convierte en el soporte del sistema europeo, no sólo por la extensión y la centralidad geográficas de su Imperio, sino especialmente por el predominio absoluto que se le reconoce en Italia y la presidencia de la Confederación germánica (el nuevo organismo ideado para llenar el vacío dejado por el Sacro Imperio romano, cuyo final pareció irreversible hasta a los más tenaces y hábiles restauradores).

3. **Fundamentos ideológicos y regímenes políticos**

Como hemos visto, el congreso de Viena adoptó el principio de equilibrio en las relaciones entre las potencias. En cuanto a los regímenes políticos y la política interna de los distintos estados europeos, la situación se presentaba compleja y, por varios motivos, más delicada. No es fácil determinar cuánto del nuevo orden derivó de las discusiones que se desarrollaron en la gran tribuna internacional, en los actos oficiales del congreso, en las inspiraciones y los consejos de la Santa Alianza. La verdad es que, para garantizar la paz y la seguridad contra cualquier intento de subversión, se precisó también un principio de intervención, que, obviamente, interfería en la soberanía de los estados. Pero las situaciones y las circunstancias eran muy variadas y muy pronto se desvaneció el acuerdo unánime de las cinco grandes potencias sobre la aplicación de las medidas concretas en las que se fundaba el nuevo orden.

El significado de la mayormente restaurada legitimidad dinástica, la fuerza de las tradiciones, la búsqueda de derechos históricos opuestos a la revolución, el nuevo prestigio y respeto por los sentimientos y las instituciones religiosas (en primer lugar, por la Iglesia católica) no eran interpretadas en todas partes de la misma manera ni tuvieron las mismas consecuencias.

El renacimiento católico, pero sobre todo, la alianza renovada entre el trono y el altar fueron componentes importantes de la Restauración. La concepción de una sociedad respetuosa de las jerarquías sociales y de las autoridades políticas consagradas y protegidas por el aval de la Iglesia debía favorecer el retorno al orden y su mantenimiento. En cualquir caso, el clero secular desempeñaba funciones complementarias propias de la policía, y debía certificar la buena conducta de los súbditos. Los párrocos de campaña, especialmente, po-



Europa en 1815.

dían ejercer una influencia que resultaba muy útil al poder central. Sin embargo, no hay que olvidar la aculturización del clero, la pertenencia de muchos sacerdotes a las capas populares y a la mediana y pequeña burguesía y la práctica evangélica, que explican la frecuente presencia de eclesiásticos en las sociedades secretas y en las filas liberales.

Pero, en general, en el universo político, la Iglesia auspiciaba y trataba de volver pura y simplemente al pasado, aunque aun en este caso la referencia podía ser un pasado relativamente próximo o más o menos lejano (antes de 1789). En cambio, incluso rechazando la revolución y sus excesos, consideraba irreversibles, y conciliables con una monarquía absoluta o administrativa, algunas de las reformas realizadas en las últimas décadas. Era quien iba más lejos y, aunque aceptaba el nuevo orden internacional, y se complacía por el final del despotismo napoleónico, consideraba indispensable dar vida, o revivir regímenes representativos y constitucionales, remitiéndose a veces al ejemplo inglés o a precedentes que habían madurado incluso antes de la Revolución francesa.

Las diferentes posiciones, enunciadas someramente aquí, pueden colocarse en un abanico que, desde los legitimistas reaccionarios, llega hasta los liberales constitucionalistas. Más allá de este abanico, en una posición que puede definirse genéricamente de extrema izquierda, estaban los republicanos, que rechazaban la restauración en todas sus formas, remitiéndose, con muchos matices, a la Francia revolucionaria entre 1792 y 1799, pero, sobre todo, al período «heroico», entre 1792 y 1794, a la «democracia» y a la «dictadura» jacobina, a la identificación entre «nación» y pueblo soberano. Entre estos grupos no faltaban puntos de contacto y coincidencia, ya sea en el plano teórico o en el práctico.

Respecto a la doctrina, un punto importante es la respuesta a la pregunta: ¿dónde reside y de dónde emana la soberanía? ¿Quién es soberano: el «pueblo», la «voluntad general», la representación expresa de los ciudadanos, o el rey, símbolo y representante del divino poder absoluto?

Sin recorrer una vez más el camino de una secular polémica, bastará decir aquí que, si bien los autores partidarios del regreso al absolutismo monárquico sostenían en general el derecho divino, algunos grupos de legitimistas reaccionarios no vacilaban en invocar a veces los derechos de la soberanía popular para imponer los poderes de la antigua aristocracia, «usurpados» por el rey y los burgueses. Las repercusiones de tales posiciones en la organización del sistema político, y en particular, de la representación y de las elecciones, no eran de

escaso relieve. Un ejemplo significativo, aunque episódico, es el reclamo de algunos exponentes de la extrema derecha francesa (los Ultra) de extender el sufragio a las clases populares reduciendo la barrera censitaria y reforzar el poder del Parlamento contra la autoridad real. Pero, en el fondo, asomaba el problema de las relaciones sociales y el convencimiento de los aristócratas de que el enemigo a batir era la clase media y que la victoria podía obtenerse con el apoyo de los campesinos franceses. Asimismo, muy pronto el recurso al sufragio universal, o las consultas plebiscitarias se consideraron, y se utilizaron a menudo, como medios para enfrentar o superar la oposición de la clase media más politizada.

Del discurso político sobre la soberanía o la identidad nacional, se pasa así al terreno de la lucha política y social que concretamente en Francia tenía un desarrollo interesante, en particular con la aplicación de la *carta constitucional*, otorgada *(octroyé)* por el restaurado Luis XVIII.

El caso de Francia, donde se desarrolló en aquellos años un vivacísimo debate político, muestra que no se puede identificar la época de la Restauración con el retorno al absolutismo monárquico. Las situaciones preexistentes, la experiencia y el sentido político de los monarcas restaurados, el ejemplo y las presiones de las grandes potencias, el grado de consolidación de las reformas ejecutadas en los años de la revolución y del dominio napoleónico determinaron las formas de la Restauración y su siguiente evolución.

En este sentido, hay una primera y relevante distinción entre los países que conocieron y los que no conocieron la prolongada ocupación y el gobierno directo o indirecto de los franceses. En efecto, los gobernantes franceses, sobre todo los de la época napoleónica, introdujeron algunas reformas institucionales y sociales y modificaron, por no decir modernizaron, la administración del Estado; abolieron lo que quedaba de las instituciones feudales y los privilegios de la nobleza y del clero; encaminaron o alentaron, confiscaron o vendieron muchos bienes eclesiásticos, y uniformaron la legislación civil según las normas del Código napoleónico. Incluso en estados como España o Prusia, que se rebelaron contra la ocupación o la sufrieron durante poco tiempo, la intervención francesa, ya sea por reacción o por contraste, produjo cambios significativos y ayudó, como quiera que fuese, a reforzar la conciencia y la identidad nacionales en una amplia base popular. Algo análogo sucedió en Polonia. Los territorios hereditarios del Imperio de los Habsburgos, en Alemania y Hungría, fueron menos afectados directamente en sus estructuras institucionales y sociales, pero la caída del Sacro Imperio romano fue una de las consecuencias irreversibles de las guerras

napoleónicas. En la reorganización de los estados alemanes, fuera de las reformas internas directamente introducidas en algunos de ellos, la simplificación y racionalización obradas por la Confederación del Rin creada por Napoleón, fueron un modelo que no pudo ser ignorado cuando el congreso de Viena creó la Confederación germánica. De los otros trescientos grandes o pequeños estados sólo sobrevivieron treinta con representantes en una dieta (Bundestag) que se reunía en Frankfurt con la presidencia de Austria. Los principales miembros de la confederación, además de Austria, eran Prusia y Baviera.

4. **Diferencias político-territoriales**

Esta organización político-territorial muestra, aunque sólo sea sumariamente, cómo las diferentes experiencias históricas determinan situaciones y evoluciones diversas en algunos grandes grupos geográficos: ante todo se delinean diferencias importantes entre Europa occidental y Europa centro-oriental. Es una distinción esquemática y, en cierto modo, arbitraria, vale repetirlo, a la que pueden superponerse otras hasta anularla o sustituirla, por ejemplo: Europa meridional o mediterránea, Europa septentrional, Europa atlántica o Europa danubiana.

Como quiera que sea, el reparto y las diferencias no eximen de plantear el problema de si hay también elementos comunes o unificadores más allá de las evidentes diferencias. Es innegable que, aun persistiendo sustanciales y profundas diferencias en la base y en la organización social de las distintas regiones, el siglo XVIII había representado un momento de relativa unificación cultural, de multiplicación de los contactos, de intensa circulación y de amplia difusión de las ideas. El grupo que participaba en esta renovación cultural todavía era muy restringido y daba forma a la opinión pública cosmopolita. Pero también en el plano político, el absolutismo más o menos iluminado de la segunda mitad del siglo XVIII había representado en parte una experiencia común. En cambio, la Revolución francesa había marcado una violenta fractura; pero a través del compromiso napoleónico, muchas importantes reformas, sobre todo de la administración civil y judicial, habían penetrado en algunos países de Europa occidental y central, aunque sin superar totalmente las antiguas divisiones y diferencias, a veces más bien profundizadas y exasperadas por el permanente estado de guerra y por la más difundida conciencia de identidad y diversidad nacionales.

Después de 1815, las diferencias de los regímenes políticos parecen

acentuarse, aun cuando el principio de la continuidad dinástica se presenta ficticiamente como el común denominador.

Las diferencias más profundas se encontraban en las estructuras sociales. En la Rusia del zar Alejandro, caprichosamente abierto a las ideas liberales, estaba vigente entonces la servitud de la gleba. En Prusia la nobleza terrateniente conservaba la exención del impuesto inmobiliario, el poder de policía, y la reserva y el derecho exclusivo de caza en las tierras de su propiedad. La variedad de situaciones era grande en el Imperio de los Habsburgos, que había conocido y aplicado la legislación francesa en los territorios lombardo-vénetos, que, por lo demás, hacía tiempo que estaban libres del feudalismo y, en cambio, veía dominar en Hungría el poder de los potentados.

El absolutismo monárquico imperante en el siglo XVIII, después del congreso de Viena, tenía otras excepciones, además de la tradicional de Inglaterra. Es verdad, también, que la elección de los soberanos restaurados influía en la diversidad. En España, Fernando VII derogaba la constitución de Cádiz de 1812 y Fernando de Borbón, restaurado en Nápoles, tras las vanas tentativas de Joaquín Murat para conservar el reino, abolía la constitución siciliana que había entrado en vigor el mismo año 1812. Francia contribuía por su lado a configurar una Europa occidental donde se afirmaban los regímenes constitucionales. En Europa central y oriental, en cambio, no obstante alguna excepción (el sur de Alemania) y promesas incumplidas, la decisión de Austria, Prusia y Rusia de no hacer concesiones liberal-constitucionales confirmaba una división en el terreno político-institucional que correspondía indudablemente, también en una realidad social diferente, al mayor peso de las fuerzas y las instituciones del Antiguo Régimen.

Sin pretender establecer correlaciones rígidas, no hay duda de que las ideas liberales y constitucionales estaban sostenidas por algunos círculos intelectuales y por miembros de las clases medias (en este sentido eran explícitas las acusaciones de Metternich), es decir, por las nuevas capas de propietarios y por los comerciantes y artesanos, cuyo número había crecido en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, y habían madurado políticamente a través de experiencias directas o indirectas de la Revolución francesa, la ocupación y las guerras napoleónicas.

En los países en los que no había libertad de prensa y garantías constitucionales, las aspiraciones liberales se mantuvieron vivas a través de las sociedades secretas, entre las que los carbonarios ocupaban un lugar importante. El encuentro, a veces incluso la confusión entre varias corrientes y posiciones doctrinarias y políticas podía ser fruto

de la clandestinidad de estas asociaciones en las que confluían antiguas experiencias masónicas, reminiscencias jacobinas y tendencias igualitarias. Ello explica la influencia que tuvo en ellas un viejo revolucionario, secuaz de Babeuf, como Felipe Buonarroti.

Las posiciones más avanzadas de las filas liberales las ocupaban, en primer lugar, los jóvenes intelectuales, sobre todo los estudiantes universitarios y los oficiales y suboficiales del ejército, los más antiguos de los cuales se habían formado en el clima de la Revolución francesa y del Imperio napoleónico, y los más jóvenes entre los fermentos del romanticismo.

5. **Las primeras grietas del sistema: la revolución de 1820-1821**

Una manifestación del «espíritu revolucionario» o, como quiera que sea, de la agitación que existía en los ambientes universitarios y estudiantiles de Alemania se puede advertir, más allá de su espíritu goliardo evidente, en la manifestación que organizaron los estudiantes, profesores y periodistas el 18 de octubre de 1817 en Warburg, en Turingia. Se conmemoraba el tercer centenario de las tesis luteranas que habían señalado el comienzo de la reforma protestante, y el cuarto aniversario de la victoria de Leipzig contra Napoleón. En una gran hoguera los manifestantes quemaron obras de escritores que habían sostenido el conservadurismo legitimista, una copia del Código napoleónico y el reglamento de la policía prusiana, un bastón de mando austriaco y otros símbolos de la represión y el militarismo. En la manifestación goliarda, además de los sentimientos antimilitaristas y antipoliciales, era evidente el espíritu nacionalista. Metternich, tutor del conservadurismo europeo y garante del orden en la Confederación germánica, no podía dejar de preocuparse, tanto más cuanto que llegaban noticias de inquietud y agitación en otras regiones de Europa, particularmente de Italia, donde se ejercía directa o indirectamente la hegemonía habsburga.

Pero el episodio más grave sucede en 1819, cuando un estudiante asesina al dramaturgo antirromántico Kotzebue, informante del zar Alejandro I. Metternich reaccionó haciendo aprobar por la Dieta confederal de Frankfurt los decretos de Carlsbad, que instauraban en Alemania una censura de prensa más rigurosa y un control policial más rígido.

Fueron más graves, y tuvieron mayor repercusión los acontecimientos españoles de 1820. Fernando VII, una vez recuperado el trono en 1814, había revocado inmediatamente la constitución procla-

mada en Cádiz en 1812 e inspirada en la francesa de 1791. El modelo era inaceptable para el legitimismo monárquico y suscitaba reservas y desconfianza incluso entre los liberales moderados poque se fundaba en el pleno reconocimiento de la soberanía popular y, en consecuencia, en la abolición del Senado, reservado a la nobleza hereditaria y a los que nombrara el monarca. Fernando VII había practicado una incauta política de restauración católica y aristocrática en una situación particularmente confusa e inestable, como era la española, marcada por profundos contrastes después del choque entre los partidarios de los franceses y los rebeldes del pueblo, apoyados por los ingleses. Hay que subrayar la participación que tuvo el ejército en la revolución española inaugurando la época de los *pronunciamientos* que constituyen un precedente que fue imitado en el mismo año en Nápoles y luego en Turín. En realidad, las protestas de Italia eran distintas, pero no por azar estaba también presente el entramado entre sociedades secretas y representantes del ejército, y la demanda de la constitución se refería a la radical del Código, creando no pocos problemas en las mismas fuerzas liberales y acentuando las diferencias entre moderados y extremistas. No siempre es claro si la demanda de una constitución era una pura y simpe imitación o una expresión consciente de los individuos más democráticos, militantes de las sociedades secretas, y en particular de los carbonarios imbuidos del «espíritu revolucionario» y de nostalgias jacobinas.

Es difícil incluir en un único movimiento los episodios que van de la revolución de las tropas concentradas en Cádiz (enero de 1820) a la sublevación de los oficiales rusos que, en diciembre de 1825, en el delicado momento de la transferencia del trono de Alejandro I a Nicolás I, intentaron confusamente imponer una constitución. Sin embargo, hay algunos rasgos comunes evidentes: la participación de elementos del ejército, la presencia y la acción de las sociedades secretas, las demandas constitucionales y democráticas, las aspiraciones a veces abiertamente nacionales, contrarias al centralismo y favorables a una autonomía mayor para las representaciones provinciales y locales.

Quizás se podría hablar de un ciclo revolucionario europeo que se manifiesta especialmente en las áreas periféricas, mediterráneas y sudorientales del continente. En efecto, además de España y Portugal, y marginalmente Rusia y Polonia, se vieron implicados el Reino de Nápoles y de Cerdeña y Grecia. Las grandes potencias, garantes del orden establecido en Viena, lograron controlar la situación, pero el sistema de Metternich sufrió su primer golpe, más evidente por el explícito distanciamiento de Inglaterra.

En España, para reprimir la rebelión de las colonias de América central y meridional (cfr. § 8) se había concentrado en Cádiz un cuerpo expedicionario, mal dispuesto a la partida. El coronel Rafael Diego aprovechó el descontento de las tropas para, con el apoyo de grupos de conspiradores liberales y democráticos, proclamar la revolución, que encontró inmediata adhesión en Madrid y en otras guarniciones. Fernando VII se vio obligado a restaurar la constitución de Cádiz de 1812. En julio de 1820, la revolución estallaba también cerca de Nápoles, promovida por dos tenientes de la guarnición de Nola y por los carbonarios. La adhesión del general Guillermo Pepe y de otros oficiales que habían hecho su carrera durante el reinado de Murat, y la difusión y fuerza que mostraban tener los carbonarios en la clase media de las provincias obligaron a Fernando, de regreso en Nápoles desde Sicilia en 1815, a conceder la misma constitución deseada por los revolucionarios españoles. En agosto, la revolución se extendió a Portugal, adonde había vuelto Guillermo VI de Braganza que se había radicado en Brasil durante las guerras napoleónicas. La agitación estaba viva en el Piamonte, donde el presunto heredero al trono, Carlos Alberto, parecía no compartir la tendencia anacrónicamente reaccionaria de la monarquía restaurada y, en cambio, simpatizaba con los liberales. A las demandas liberales se sumaba un confuso sentimiento antiaustriaco que, sin embargo, no fue suficiente para superar las divisiones en la sociedad aristocrática y las dificultades de la delicada situación dinástica. En marzo de 1821 se sublevó la guarnición de Alejandría. La respuesta fue, también en este caso, la aplicación de la constitución española, y la consecuencia, una fractura con el grupo de liberales moderados y la incertidumbre y las dudas de Carlos Alberto quien, por la abdicación de Víctor Manuel y la ausencia temporal del nuevo rey Carlos Félix, tenía la responsabilidad de la decisión. La mayor parte del ejército permaneció leal a la monarquía y el movimiento revolucionario, iniciado mientras el cuerpo expedicionario austriaco estaba a punto de reprimir la revolución de Nápoles, duró poco más de un mes. Ni siquiera al Piamonte, donde la minoría revolucionaria ya había sido vencida por la mayoría leal del ejército, le fue ahorrada la intervención austriaca.

6. La represión y el marco internacional

La intervención de Austria fue determinante, sobre todo en Nápoles, donde el movimiento constitucionalista tenía amplio consenso. Sin embargo, no faltaban graves causas de debilidad. Ante todo, la

oposición entre la inclinación democrática de los carbonarios provinciales —que representaba los sentimientos y las opiniones de la pequeña y mediana burguesía de propietarios de tierras y capas intermedias, hostiles a la antigua preeminencia de la capital— y el grupo dirigente, ex muratiano, al que, por experiencia y prestigio, había sido confiado el Gobierno. Éstos, expertos partidarios de la monarquía «administrativa» y, a lo sumo, más propensos a un régimen representativo limitado, eran claramente contrarios a la constitución española. Además debilitaba al régimen constitucional el separatismo siciliano, que constituirá una constante fragilidad de la monarquía meridional y una de las razones de su rápida caída en 1860.

Calificar la posición del rey Fernando de equívoca es poco. Mientras proclamaba la fidelidad a la constitución, invocaba la intervención extranjera; pero, sobre todo, fue decisiva la incapacidad de su nuevo régimen —que había nacido de una insurrección militar y había recibido el apoyo de una parte considerable de los altos oficiales del ejército y de los cuadros intermedios—, para organizar un ejército que enfrentara sin desbandarse al cuerpo expedicionario austriaco.

Como quiera que sea, la intervención de Austria nos devuelve al marco internacional, que fue importante para los distintos resultados que tuvieron las revoluciones de aquellos años: en efecto, mientras en Italia y España, las revoluciones fracasaban, en América latina y en Grecia tenían éxito.

El sistema de congresos —o sea, de reuniones periódicas de las grandes potencias, garantes de la paz y el orden establecidos en Viena— comenzó a funcionar con la conferencia de Aquisgrán (otoño de 1818). Se tomó nota del pleno cumplimiento por parte de Francia de las cláusulas del tratado, se puso fin a la ocupación militar y se readmitió oficialmente entre las grandes potencias al reino de Luis XVIII. También se examinó la situación internacional, y Alejandro I insistió en algunos proyectos inspirados en la ideología de la Santa Alianza, que iban desde el desarme a la creación de una fuerza de policía internacional para proteger de las revoluciones a los gobiernos legítimos. La referencia concreta era, en esos momentos, la sublevación de las colonias españolas de América. La propuesta no tuvo fortuna porque Metternich se sumó a las reservas de lord Castlereagh.

En efecto, el estadista austriaco pretendía la mayor cautela posible y consideraba importante el apoyo inglés para mantener el orden y el equilibrio en Europa. El problema de una eventual intervención colectiva se presentó en los primeros meses de 1820 con la revolu-

ción española. Pero esta vez, Inglaterra se apartó claramente del problema declarando que los sucesos de España no representaban ninguna amenaza para el sistema europeo. Las cosas se complicaron cuando el movimiento se extendió a Portugal y, sobre todo, al Reino de Nápoles. Austria estaba un tanto alarmada dada su posición preeminente en Italia; el Gobierno conservador inglés se inclinaba, si no a alentar, sí a consentir una intervención austriaca, pese a no hacer de ello una cuestión de principio y de obligación colectiva. Pero, en el congreso de Troppau (octubre de 1820) no se pudieron salvar los intereses divergentes y las tendencias opuestas de las potencias continentales e Inglaterra. La política represiva de Metternich se hace más evidente y el bloque de las potencias centro-orientales, Austria, Prusia y Rusia, aun con diferencias internas, se dispone a la defensa de la reacción y el conservadurismo en Europa. Se abre entonces un período de intensa actividad diplomática y militar. Al congreso de Troppau, sigue, pocos meses después, el de Lubiana; las revoluciones de Nápoles y Turín fueron sofocadas, pero nuevos focos de revuelta se encendieron en Grecia contra el Imperio otomano; las colonias españolas y portuguesas se habían separado de la madre patria; aunque con muchas dificultades, sobrevivían los regímenes revolucionarios de España y Portugal. Francia, que en 1820, bajo el gobierno de los constitucionalistas moderados había compartido la posición de Inglaterra, giraba a la derecha, y el ministro del Exterior del Gobierno Ultra, el escritor católico Chateaubriand, se comprometía, en el congreso de Verona (octubre de 1822) a restaurar la monarquía absoluta en España. Una expedición militar francesa se internó en la península sin encontrar obstáculos ni resistencia. El régimen constitucional, pese a que al principio había despertado ilusiones y esperanzas, nunca había gozado de un apoyo importante de las masas populares, influidas fuertemente por el clero. En agosto de 1823, las tropas francesas entraron en Cádiz y dieron fácilmente cuenta de la resistencia del último foco revolucionario. Pero el congreso de Verona fue el último acto del sistema establecido en Viena. Con el suicidio de Castelreagh también se habían desvanecido los vínculos personales entablados por el ministro inglés con Metternich y los demás personajes de la escena vienesa. El nuevo ministro británico del Exterior, Canning, perseguía con mayor decisión y empeño una política mediterránea y atlántica totalmente autónoma, que se expresa muy claramente en su afirmación: «Todas las naciones para sí y Dios para todas»; inspiración opuesta al «concierto europeo» delineado en Viena en el clima de las coaliciones antinapoleónicas.

Sin embargo, durante mucho tiempo Gran Bretaña siguió considerando al Imperio de los Habsburgos como el punto de apoyo del

equilibrio europeo, que era una base principal de su política exterior. Sólo después de la guerra de Crimea de 1854 (véase capítulo 3, § 6) se presentará una situación totalmente nueva en el campo diplomático.

7. La independencia griega y la cuestión de Oriente

Entre las sociedades secretas cuyo florecimiento caracterizó el último período napoleónico, existía una, la Eteria, fundada en Odesa, que se propagó por muchos centros del Imperio otomano, sobre todo aquellos en que desarrollaban sus actividades los comerciantes y marinos griegos. Los asociados aspiraban a liberar a su patria del dominio turco. El deseo de independencia, animado también por el zar Alejandro en sus momentos de exaltación religiosa y de caprichoso y episódico liberalismo, estaba particularmente extendido en la colonia griega de Constantinopla del barrio de Fanar (de donde deriva el nombre de fanariotes). Comerciantes y funcionarios de la administración, los fanariotes constituían una elite social e intelectual sensible a la más avanzada cultura política y civil de los países europeos. El apoyo de Rusia estuvo asegurado por algunos años por la posición eminente que el conde de Capodistria, nativo de Corfú, ocupaba en la corte y en los proyectos del zar, según la línea tradicional del Imperio ruso de penetración en los Balcanes en nombre de la protección religiosa greco-ortodoxa. En este sentido se había obtenido un éxito considerable en 1815, obligando a Turquía a reconocer la autonomía de Serbia.

Justamente en los momentos de marzo de 1821 en que estaban por ser sofocados los movimientos constitucionales de Nápoles y Turín, la insurrección ardió en Grecia, sostenida por el clero ortodoxo y por el bajá de Janina (Albania).

Los turcos aplastaron la revuelta en las principales ciudades, pero no consiguieron extinguirla totalmente en las ásperas localidades montañosas del Peloponeso y en las islas, donde se desarrolló la guerrilla.

En el congreso de Epidauro, en enero de 1822, los rebeldes proclamaron la independencia ganándose el apoyo de un fuerte movimiento de opinión pública en Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra. El mito de la cultura, de la libertad y de la democracia de la Grecia clásica estaba vivo en los ambientes intelectuales, y la lucha de los rebeldes cristianos griegos contra el tirano turco musulmán despertaba simpatías, no solamente entre los liberales progresistas, sino también entre los católicos y hasta en las filas legitimistas. La dureza de

la represión provocó denuncias que llegaron hasta el arte, como el cuadro del pintor francés Delacroix, *La masacre de Quio*, expuesto en París en 1824. De todas partes llegaba la ayuda para los defensores de la libertad helénica, y muchos voluntarios marcharon a combatir a su lado. Entre los mártires ilustres de esta guerra se contaron el poeta lord Byron, romántico representante de la aristocracia inglesa, caído en Missolonghi (1824) y el desterrado liberal piamontés Santorre di Santarosa, muerto en Esfacteria (1825).

La situación político-diplomática, de la que dependía en parte el éxito de la insurrección griega, era muy compleja. Se trataba, en efecto, de tener en cuenta los equilibrios de poder en la Europa danubiana y balcánica y en el Mediterráneo oriental, áreas en las que se enfrentaban los intereses ingleses, rusos y habsburgos. Estaba en juego el destino mismo del Imperio otomano, cuya decadencia ya se había manifestado en el curso del siglo anterior. También Francia podía entrar en el juego por sus vínculos con Constantinopla. Las guerras de la época napoleónica habían permitido a Rusia y a Inglaterra una participación más activa en los acontecimientos mediterráneos. La empresa napoleónica en Egipto había dejado recuerdos y herencias. Nacía, en suma, la así llamada «cuestión del oriente», cruz y deleite de la diplomacia ochocentista. El episodio griego marca justamente el comienzo de la nueva etapa, en muchos aspectos todavía fluida. En efecto, se ubica en el momento en que Gran Bretaña tomaba distancia del sistema del congreso y Alejandro I dudaba entre distintas y contradictorias aspiraciones y perspectivas. Por una parte deseaba aprovecharse de la crisis turca y continuar su política de apoyo a los cristianos ortodoxos y, por otra, ayudando a los rebeldes contra el sultán, temía alejarse de la política conservadora de la Santa Alianza.

La actitud inglesa se orientará más tarde a evitar la disgregación del Imperio turco para impedir que Austria y Rusia se expandieran en los Balcanes y que esta última pasara al Mediterráneo a través de los Dardanelos. Pero en 1825-1826, las circunstancias favorecen la feliz conclusión de la lucha por la independencia griega, gracias a un acuerdo entre Inglaterra y el nuevo zar Nicolás I (1825-1855), que muy pronto se mostró menos sensible que Alejandro a los consejos y a la influencia de Metternich.

La llamada de auxilio del sultán turco, incapaz de dominar la rebelión con sus solas fuerzas, al bajá de Egipto Mohamed Alí, provocó la intervención a favor de los patriotas griegos. El bajá, formalmente vasallo del sultán, era de hecho autónomo y había organizado su dominio egipcio con criterios modernos, apostando, sobre todo, por la creación de un poderoso ejército y de una flota eficiente. Los rebeldes

griegos estaban por caer ante las fuerzas egipcias cuando, en julio de 1827, Inglaterra, para impedir una acción unilateral del zar logró obtener una decisión diplomática común de Rusia, Inglaterra y Francia y el envío inmediato de una flota para imponer una mediación a Turquía. El 20 de octubre de 1827, en circunstancias que quizás ayudaron más que las órdenes de los gobiernos interesados, la flota anglofrancesa destruyó a la turco-egipcia en Navarino. Por su parte, Rusia penetró con su ejército en los Balcanes avanzando victoriosamente hasta amenazar Constantinopla.

Con la paz de Adrianópolis (14 de septiembre de 1929) Turquía cedió al zar importantes ventajas territoriales y comerciales (en primer lugar, el protectorado sobre los principados de Valaquia y Moldavia) y se comprometió a reconocer la autonomía de Grecia en el plano internacional. No faltaron controversias sobre el orden político y constitucional que dar a Grecia. El conde de Capodistria, que perdido el favor de Alejandro I en 1822 se había retirado a Suiza, fue llamado en 1827 para presidir una especie de gobierno provisional; pero fue asesinado en octubre de 1831. Finalmente, las potencias vencedoras (Francia, Rusia e Inglaterra) llegaron a un acuerdo para convertir a Grecia en reino independiente (Turquía se quedaba con Tesalia y Macedonia) asignado al príncipe alemán, Otón Wittelsbach de Baviera (1832-1862).

8. La independencia de las colonias de América meridional: debilidad estatal e inestabilidad política

La independencia de Grecia y el nuevo orden danubiano fueron ratificados cuando ya se había modificado el equilibrio político y territorial establecido en el congreso de Viena.

Hasta 1823, el sistema había conseguido mantener el orden sin mayores problemas, reprimiendo en Alemania, Italia y España a las fuerzas y los partidos de la revolución y del «movimiento» liberal. Entre 1823 y 1830, la represión ganó la partida en gran parte de Europa, y el caso de Grecia es más bien marginal; pero, si se mira más allá de Europa, se puede constatar que la ya irreversible conquista de la independencia por parte de las colonias de América Latina había contribuido igualmente a debilitar el sistema de la restauración europea. Luego, la revolución francesa de 1830 renovó la agitación con consecuencias inmediatamente evidentes.

Los acontecimientos latinoamericanos, si bien con una cronología distinta de la que hemos considerado, mostraron también qué difícil, y a veces imposible, era aplicar los principios y la práctica del libera-

lismo y la democracia en sociedades divididas por diferencias étnicas, con profundas grietas sociales, que habían vivido en el culto a las autoridades religiosas, políticas y militares y en la respetuosa deferencia y el terror por los poderosos y los amos, titulares legítimos o arbitrarios de la tierra, la riqueza y la fuerza.–

Durante el predominio napoleónico, y sobre todo, tras la ocupación de España y la amenaza a Portugal, la administración de las colonias, en las que durante la época del absolutismo se intentó introducir algunas reformas, había entrado casi en crisis. La primera etapa de la lucha por la independencia hispanoamericana se cumplió con su secuela de declaraciones y proclamas, entre 1811 y 1813. Después de 1814, con la restauración, Fernando VII intentó restablecer el poder real y absoluto, contando con el apoyo de una parte de los funcionarios y de la población local. Los alineamientos, que por algún tiempo fueron muy fluidos se volvieron rígidos, y de la palabra se pasó decididamente a las armas. La revolución española de Cádiz y la actitud de Inglaterra fueron decisivas para la consolidación de la independencia. La apertura librecambista —que había impuesto Inglaterra en su exclusivo provecho durante el bloqueo napoleónico, encontrando en América Latina la compensación por la pérdida de algunos mercados europeos— era un dato fundamental y se asociaba al liberalismo político y a las tendencias democráticas más radicales. Se manifestaron luego varias tendencias sobre la organización del Estado. Se llegó a verdaderos conflictos entre los partidarios de un centralismo más o menos autoritario y los autonomistas o regionalistas que, sobre la base de antiguas divisiones administrativas e institucionales de origen colonial, entonces bastante arraigadas, se opusieron a cualquier solución unitaria. Los intereses de los grandes propietarios terratenientes y la hegemonía de los criollos reforzaba las tendencias antiunitarias y particularistas con la organización de ejércitos y, sobre todo, de milicias regionales o personales de los caudillos locales. En cambio, Brasil conservó su unidad.

La rebelión también había encontrado motivos válidos en el descontento de la población criolla y mestiza, a la que no le estaba permitido acceder a los más altos cargos del gobierno y de la administración, reservados a los funcionarios enviados por la metrópoli. El ejemplo de la victoriosa reacción contra Inglaterra de América del Norte, la anterior difusión de la cultura de la Ilustración y luego de la ideología de la Revolución francesa, habían nutrido y envalentonado al movimiento independentista. La población indígena, mantenida en un estado de extrema miseria e ignorancia no podía tener autonomía en este movimiento y sólo eran masas de maniobra para los partidos

en lucha, de los que dependían por el trabajo y por vínculos de clientela. Sólo en México, por iniciativa de los jefes revolucionarios Hidalgo y Morales, la sublevación de los indígenas defendió su propia causa. Las divergencias y los conflictos entre los mismos jefes de la insurrección caracterizaron los acontecimientos de toda la América española. La distancia que separaba los principios profesados e inscritos en las constituciones —la elaboración de textos constitucionales fue una especie de obsesión de los revolucionarios sudamericanos— de la praxis política fue casi siempre infranqueable.

Con la restauración de Fernando VII en España pareció que el monarca era capaz de reconquistar el control de las colonias; pero después de 1817, Simón Bolívar, iniciador del movimiento y convencido defensor de la necesidad de la unidad política y militar pasó, de Venezuela, a sublevar Colombia y Ecuador, mientras José de San Martín, de la Argentina, atravesando los Andes, arrebató Chile a los españoles, que ya sólo conservaban el Perú. La sublevación de las tropas de Cádiz y la política inglesa, dirigida a impedir la restauración en las colonias, hacían imposible la represión militar del movimiento. Inglaterra favoreció también la separación de Portugal de Brasil, en donde Don Pedro, hijo de Juan VI, que había regresado a Lisboa fue proclamado emperador de un Estado autónomo.

El acto diplomático que sancionó la nueva situación fue la declaración del presidente norteamericano Monroe (2 de diciembre de 1923), elevada luego al rango de «doctrina», por la que cualquier intento de extender a cualquier región del hemisferio el sistema político de las potencias europeas era considerado un atentado a la paz y a la seguridad de Estados Unidos. La posición norteamericana coincidía plenamente con la de Gran Bretaña, de manera que se podía considerar cerrado definitivamente el período del colonialismo español y portugués en los más importantes territorios del centro y sur de América. Continuaba el dominio colonial de éstas y otras potencias, pero en el hemisferio norteamericano, desde Canadá hasta Cuba.

Los términos políticos de la cuestión, que luego se hicieron evidentes en la época de la gran descolonización tras la segunda guerra mundial, estaban implícitos en la declaración de Monroe, y se referían, en efecto, a los países y los gobiernos que habían logrado declarar y mantener su independencia. Se necesitaba agrupar las fuerzas políticas y sociales para que tomaran y mantuvieran la iniciativa. Y eso había sucedido en algunos centros de América Latina, aunque pronto se manifestaron la debilidad y las fuerzas divergentes dentro del movimiento. En 1826 se frustró el proyecto de Simón Bolívar de crear una gran confederación, que como Estados Unidos, integrara

toda o la mayor parte de las colonias liberadas. La base social restringida del movimiento independentista, la rivalidad entre los jefes y grupos, el interés de Gran Bretaña y de Estados Unidos de tratar y comerciar con estados débiles y divididos, el hábito de los pronunciamientos militares —muy pronto manifiesto—, las grandes distancias, la amplitud y la diversidad de los territorios (mucho más extensos y desarticulados de lo que fue el núcleo territorial que originó la confederación estadounidense) fueron obstáculos insuperables para cualquier proyecto de unión o de federación latinoamericana. Veinte años de guerras y agitación, condujeron por un lado a la abolición de la esclavitud y al relativo ascenso de los mulatos y los mestizos debilitando a las elites criollas, pero por otro lado también llevaron a la militarización de la sociedad y al nacimiento del *caudillo*, más que a la formación de estados fundados en seguras garantías liberales y constitucionales.

Terminado el período más agudo de las luchas, se habían formado las repúblicas, algunas dotadas formalmente de constituciones democráticas, pero muy lejos de las estructuras políticas ideales hacia las cuales, influidos por experiencias y sugestiones europeas y norteamericanas, habían mirado los fundadores o padres de la patria: se trataba, más bien, de inestables regímenes políticos, a menudo gobernados durante períodos más o menos largos, por militares en general vinculados a los grandes propietarios.

9. Luchas político-sociales y reforma en Inglaterra (1815-1832)

Durante casi cincuenta años, el partido conservador *(tory)* dominó la política y el gobierno ingleses. Su larga permanencia en el poder fue posible porque la Revolución francesa y las guerras napoleónicas habían despertado aspiraciones y causado agitación en las islas británicas; la perspectiva de que se difundieran el espíritu y las ideas revolucionarias atemorizó a la oligarquía dominante convenciéndola de que los conservadores podrían, mejor que los liberales *(whigs)*, oponerse con firmeza a las influencias francesas y a conducir con decisión la guerra. Desde 1811, la enfermedad de Jorge III lo había obligado a establecer una regencia que reforzaba el predominio de los tories, representantes, aún más que los whigs, de los intereses de la restringida oligarquía de grandes propietarios. Ambos partidos, o mejor, ambos grupos, no diferían mucho en su base social, esencialmente constituida por algunas grandes familias aristocráticas, ni en la organización, que carecía de estructuras rígidas y permanentes, como se-

ría luego la de los verdaderos partidos de masas. Sólo se trataba de distintas tradiciones y posiciones políticas con matices que, en los momentos de crisis, podían originar fuertes divergencias y enfrentamientos, pero que generalmente se mantenían en los límites de un moderado debate parlamentario.

Los whigs, que habían acogido en un principio con cierta simpatía las ideas de 1789, muy pronto tomaron distancia del curso de la revolución y no se mostraban particularmente sensibles a los problemas sociales que las transformaciones económicas causaban a la sociedad inglesa. En cambio, insistían en el tema de la emancipación política de los católicos, todavía excluidos del Parlamento y de los empleos públicos —problema estrechamente ligado a la cuestión irlandesa—, y en la necesidad de una reforma electoral.

Esta situación abría algún espacio político a las corrientes radicales —representadas especialmente por periodistas (como William Cobbett) e intelectuales— que, comúnmente inspirados en el utilitarismo de Bentham, denunciaban con mayor agresividad que los whigs la política del gobierno tory y sostenían el principio del libre cambio, sobre todo contra los intereses agrarios, protegidos por altas tarifas sobre la importación de granos *(Corn Laws)*.

A partir de 1815, tras un breve período de expansión de las exportaciones británicas, el país entró en una crisis financiera, comercial e industrial, que justamente por la nueva situación económica madurada en el país, tuvo características específicas y diferentes a las dificultades que, al mismo tiempo, se presentaban en Europa continental. Como era tradicional, la crisis del continente afectó especialmente al sector agrícola y a los productos de subsistencia; en Inglaterra, en cambio, al castigar al sector manufacturero provocó desocupación industrial y protestas obreras. El país estaba agitado. Se destruyeron máquinas (luddismo); por medio de asambleas y panfletos, algunos propagandistas radicales multiplicaron sus críticas al gobierno y a la sociedad, y su exigencia de reformas. En 1817, el gobierno conservador obtuvo la aprobación del Parlamento para suspender la vigencia del *habeas corpus*, la mayor garantía de que gozaba la libertad individual. Sin embargo, la represión más severa se llevó a cabo en 1819, en los arrabales de Manchester, la nueva ciudad industrial algodonera surgida casi de la nada. Una multitud asistía a la asamblea del líder radical Henry Hunt. La reunión fue disuelta por la fuerza. Hubo once muertos y 400 heridos que cayeron víctimas de la carga de los mismos húsares que se habían distinguido en la batalla de Waterloo. Del lugar del atropello, la Plaza de Saint Peter, la «victoria» de los húsares tomó el nombre de Peterloo. El gobierno del conservador lord Liverpool, acentuó la represión haciendo aprobar, también en 1819, los *Six Arts*,

las seis leyes que restringían la libertad de reunión y de prensa y preveían procedimientos acelerados para los delitos contra el orden público.

Alrededor de 1810 comenzó a percibirse un cambio de tendencia en el gobierno tory con el ingreso al equipo ministerial de hombres como Robert Peel, George Canning y William Huskisson, más sensibles a las demandas de reformas que ya se consideraban impostergables. En 1824, ante la presión de la opinión pública liberal y radical, se abolieron las *Combinations Laws*, las leyes que, limitando el derecho de asociación, castigaban duramente las primeras tentativas de organización sindical de los trabajadores. Pese a alguna reconsideración posterior y a la represión más rigurosa de los actos de violencia, y pese, sobre todo, a la prohibición de las huelgas y de la recolección de fondos de solidaridad (1825), los sindicatos obreros dieron sus primeros pasos.

También se flexibilizó el sistema de las *Corn Laws*, aplicando una escala variable que permitía importar granos del exterior cuando los precios del producto inglés eran muy altos.

Otra herencia histórica que ensombrecía el carácter liberal y tolerante del régimen constitucional británico era la discriminación política de los disidentes protestantes y de los católicos. No se trataba de intolerancia ideológica y estaba garantizada la libre expresión de los diversos cultos, pero la clase dirigente y parlamentaria, fundada en el bloque de poder formado por los propietarios y el clero anglicano, impedía el acceso de elementos extraños. En 1828, las *Test and Corporation Acts*, permitieron a los disidentes protestantes (metodistas, inconformistas, etc.), procedentes de la rama originaria de la Iglesia anglicana, cubrir los más altos cargos civiles y militares, que anteriormente les estaban vedados.

Pero la emancipación de los católicos era el problema más grave, no tanto en Inglaterra, en donde su número no era importante, sino en Irlanda, cuya población era mayoritariamente católica. Cien diputados representaban a los irlandeses en el Parlamento gracias a las leyes de unión, pero sólo podían ser electos entre los protestantes.

Daniel O'Connell, que ya se había opuesto a la unión con Inglaterra, y era partidario de la lucha no violenta, organizó a los católicos irlandeses en un gran movimiento de masas, la *Catholic Association*. En 1828 se presentó a las elecciones y salió victorioso sobre el candidato protestante, sostenido por el gobierno. Le tocó al duque de Wellington, vencedor de Napoleón y uno de los más prestigiosos dirigentes conservadores, que había tomado las riendas del gobierno tras la muerte de Canning, resolver la espinosa cuestión. La ley prohibía a

O'Connell entrar en Westminster, antigua sede de la Cámara de los Comunes. Pero, temiendo que la anacrónica aplicación de las antiguas disposiciones encendiera focos de guerra civil en Irlanda, Wellington, apoyado por Peel, hizo aprobar la ley de emancipación, que reconocía la plena igualdad política de los católicos, abriéndoles el Parlamento y el resto de los empleos públicos con excepción de los cargos de lord canciller y virrey de Irlanda.

Algunas de las provisiones dictadas por el gobierno tory entre 1820 y 1830 demuestran la capacidad del sistema político inglés para absorber sin fracturas revolucionarias las fuerzas y presiones de la opinión pública radical y de las capas populares. Sin embargo, no hay que olvidar que los conservadores anglicanos, que aceptaron la emancipación de los católicos, intentaron restablecer los equilibrios sociales, trastornados por la participación masiva de los católicos irlandeses, imponiendo la disolución de la *Catholic Association* y excluyendo del voto a muchos pequeños propietarios de Irlanda: los electores de la isla rebelde se redujeron de doscientos mil a cerca de veintiséis mil, cifras que son un indicio de las opiniones sobre la reforma del sistema electoral que todavía prevalecían en la clase dirigente conservadora. Los reformadores radicales y los whigs buscaban no solamente abolir los escandalosos abusos denunciados muchas veces, sino también, tener en cuenta los cambios que las concentraciones industriales habían provocado en la radicación de la población. Una ciudad como Manchester, surgida casi de la nada, no tenía ningún representante en los comunes, mientras la aldea de Newton, sobre la línea ferroviaria Manchester-Liverpool —una línea también originada en las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de las últimas décadas— elegía dos diputados. Las elecciones, en efecto, estaban organizadas de manera que representaran casi exclusivamente los intereses de la aristocracia propietaria y, a lo sumo, de los medianos y grandes propietarios inmobiliarios de la alta burguesía. La corte, y la mayor parte de la clase dirigente tory consideraban que una modificación del sistema sería un precedente peligroso y un atentado contra el sistema constitucional. Por ello fue muy fuerte la resistencia a cualquier innovación en este terreno, y la aprobación de la nueva ley sólo fue posible tras la muerte de Jorge IV, en el nuevo clima político que siguió a la revolución de julio en Francia.

10. De la reforma electoral al librecambismo

En los últimos años, se había desgastado la unidad del grupo tory y, en las elecciones de 1830, los partidarios de las reformas salieron reforzados, aun sin alcanzar una victoria absoluta. En noviembre fue derrotado el duque de Wellington, que había sido confirmado como jefe del gobierno y se declaraba enemigo de los cambios provocados por la revolución en Bélgica (véase más adelante § 13 de este capítulo) y de la perspectiva de una nueva ley electoral. El nuevo soberano, Guillermo IV, encargó al líder de los whigs formar el nuevo gobierno, que contó con el apoyo de una parte de los tories. El bastión de la resistencia quedaba reducido a la Cámara de los Lores. Tras nuevas elecciones, que confirmaron la mayoría para lord Grey, acentuada luego por la escisión de los tories que, con Peel a la cabeza se habían pronunciado a favor de la reforma, y mientras crecía la agitación en el país, la Cámara de los Lores fue obligada a ceder ante la amenaza de una ruptura de los pares liberales y progresistas y el temor de provocar una revuelta radical y popular. En junio de 1832, la reforma electoral fue definitivamente aprobada.

La nueva ley no tenía nada de revolucionaria. Reafirmaba plenamente el criterio censitario, pero aparecían algunas circunscripciones electorales —los llamados «arrabales podridos»— casi deshabitadas, propiedad de grandes electores que comerciaban en ellas y podían designar el diputado a su placer. Nuevos centros, nacidos y desarrollados al calor de la revolución manufacturera y el comercio internacional, pudieron enviar sus propios representantes a la Cámara de los Comunes; pero la Inglaterra rural del Sur y del Sureste conservaba su posición privilegiada sobre las zonas septentrionales y occidentales, donde se habían producido las mayores transformaciones demográficas y sociales. Sin embargo, a pesar de la barrera censitaria, el número de los inscritos en las listas electorales aumentaba por la extensión del derecho a voto también a los locatarios que superaran un arriendo de diez libras, y pasaba de cerca de quinientos mil a ochocientos mil, número importante para aquellos tiempos, si se recuerda que el cuerpo electoral francés, después de la revolución de julio, había permanecido en torno a los doscientos mil votantes. Conviene recordar que sólo se habla de quienes tenían el derecho al voto, de los inscritos, o inscribibles, en las listas electorales, y no de los votantes efectivos que siempre eran menos numerosos por el porcentaje variable de abstenciones.

La consecuencia más importante de la reforma no reside tanto en el mejoramiento, por lo demás considerable, aportado al sistema electoral, sino en el éxito de la batalla política. En cuanto a los princi-

pios, no se reconocía ningún derecho a la «soberanía popular», pero la derrota de los grupos más conservadores, abroquelados especialmente en la Cámara de los Lores, y las conquistas de la opinión pública y las asociaciones progresistas, abrían una nueva etapa en la política inglesa y despertaban muchas esperanzas e ilusiones. Se conseguiría concretar algunas aspiraciones, como el libre cambio, confirmando la fuerza que adquirían el movimiento asociacionista y la opinión pública cuando las campañas políticas eran sostenidas por los intereses concretos de una parte, al menos, de la clase dirigente. Otras aspiraciones y demandas, como las del movimiento cartista, después de una fuerte oleada de entusiasmo y participación, sólo obtuvieron éxitos parciales y se agotaron, aunque, a largo plazo, dejaron su huella.

El entramado de problemas económicos, sociales y políticos, convirtieron a la Inglaterra de la primera mitad del siglo en un observatorio a un tiempo singular y ejemplar. En primer lugar, el desarrollo de la industria textil y las inéditas concentraciones urbanas y obreras, plantearon las cuestiones social y de la formación de la «clase» obrera y la conciencia de «clase» de los asalariados y los proletarios. La investigación histórica, a menudo viciada inevitablemente por prejuicios ideológicos y por la parcialidad documental, ha demostrado ser más compleja de lo que podrían hacer creer los esquemas. Ha establecido una relación muy inmediata y mecánica entre los aspectos técnicos y económicos y la formación de la nueva conciencia obrera, olvidando antiguas tradiciones y continuidades políticas y culturales. Todavía en el comienzo de los años treinta, los obreros de las fábricas eran una minoría en el variado mundo de las fuerzas del trabajo. «La extensa área de la "Londres radical", entre 1815 y 1830 no reclutaba sus fuerzas en la gran industria... sino entre los pequeños oficios y ocupaciones. En muchas ciudades, el verdadero eje del movimiento obrero —en sus ideas, sus métodos organizativos, su estado mayor— eran los pequeños tejedores, zapateros, talabarteros, libreros, tipógrafos, albañiles, pequeños maestros artesanos o tenderos y profesiones parecidas» (E. P. Thompson). Sin embargo, es dudoso que entre 1790 y 1830 se vaya formando una nueva conciencia de clase «entendida como conciencia de una sustancial identidad de intereses entre todos los grupos de trabajadores opuesta a los intereses de otras clases». El nacimiento de las *Trade Unions* que superaban los límites de las organizaciones locales constituye la prueba histórica de esta nueva circunstancia, que se mezcla con el fenómeno más general de la amplia propagación de las asociaciones y de los proyectos utópicos.

La complejidad del entretejido de diferentes motivaciones, del em-

puje autonómico del movimiento de los trabajadores al impulso filantrópico de reformadores burgueses, puede estar representado muy bien por las opiniones y la acción de Robert Owen, que fue primero director y luego propietario de un gran establecimiento textil en New Lanark, en Escocia. Ante una comisión sobre el trabajo de menores expuso su convencimiento, ya en 1816, de que un horario prolongado de trabajo dañaba irreparablemente el desarrollo físico y mental de los niños, y que convenía al propio interés de la productividad asistir e instruir a los niños antes de enviarlos al trabajo. Consideraba, solitario entre la insensibilidad de los demás empresarios, que los menores no debían trabajar antes de los doce años y no más de diez horas y media al día. El testimonio de Owen es una denuncia indirecta de la durísima explotación del trabajo infantil en las fábricas textiles, como sucedía, por lo demás, en todas las ramas de la actividad manufacturera en los primeros años de la Revolución industrial. Sólo después de 1830, con el cambio político y el nacimiento de las primeras organizaciones sindicales, comenzaron a aparecer disposiciones tutelares del trabajo de menores, ampliadas y fundidas en el *Factory Act* de 1833. Pero durante algunos años más el trabajo de las mujeres y de los adultos no tuvo ninguna limitación. Owen, entre tanto, después de haber intentado establecer en América del Norte, en Indiana, una comunidad regulada por sus principios humanitarios y solidarios, en contraposición con las concepciones librecambistas que se afirmaban por entonces, regresó a Inglaterra y contribuyó a la organización de las *Trade Unions* y del movimiento cooperativo.

Ya asomaba la idea de reducir a ocho horas la jornada de trabajo, pero se interponían muchas dificultades para la formación de fuertes sindicatos nacionales y unitarios, como se intentó con la fundación de la *Grand National Consolidated Trade Union*. Si bien todavía era imposible para la gran masa del proletariado inglés hacer pesar la fuerza de su número creciente, los trabajadores conscientes y combativos participaron en el movimiento radical y en las grandes reivindicaciones que se expresaron en la agitación «cartista». La Carta del Pueblo *(People's Charter)*, redactada por los artesanos londinenses William Lowett y Francis Place, transfería la lucha al plano político, justo en el momento en que fracasaban las tentativas de unión nacional de las *Trade Unions*, y una nueva crisis económica (1836-1839) favorecía la movilización popular. La Carta consideraba que la base de toda futura reforma debía ser la democratización del sistema político: por ello pedía el sufragio universal masculino, elecciones todos los años y un salario para los diputados que permitiera la presencia y actividad en el Parlamento de los que carecían de medios económicos.

En la petición firmada por más de 1.250.000 personas se decía, entre otras cosas: «Cuando el Estado solicita que lo defiendan, cuando pide dinero, no acepta la pobreza o ignorancia como motivos para no pagar o responder a sus demandas. La naturaleza y la razón nos dan derecho a exigir que al hacer las leyes sea explícitamente escuchada la voz de todos porque a todos se nos exige apoyarlas y obedecerlas.» En 1839 la Carta fue presentada a la Cámara de los Comunes, pero ni siquiera se la discutió. Entretanto se habían delineado dos tendencias en el movimiento: una legalista, representada por Lowett, Place y los radicales moderados, y otra, revolucionaria, sostenida por el grupo encabezado por Feargus O'Connor. En 1842 se presentó una segunda petición con un número todavía mayor de firmas, más de 3.330.000 y con un tono más radical. Fue igualmente rechazada por el Parlamento con una gran mayoría.

En los años siguientes, el interés de la opinión pública fue atraído sobre todo por el debate sobre las leyes de los granos *(Corn Laws)* y por algunos problemas de política internacional. La protección aduanera, aunque no una regulación de tarifas escalonada, aseguraba a los propietarios inmobiliarios y a los empresarios agrícolas un seguro margen de ganancias y, sosteniendo la producción cerealera, alejaba el peligro de que, en caso de emergencia el país sufriera penurias alimentarias. Pero impedía la rebaja del precio del pan, que era posible entonces por la abundancia en el mercado internacional de grano proveniente del Báltico y del mar Negro y, en perspectiva, también de Estados Unidos. Justamente con la promesa de reducir el precio del pan los librecambistas lograron volcar a su favor la batalla, conducida con abundancia de medios, en primer lugar comerciantes e industriales, pero también grandes masas populares, preocupadas por la carestía de la vida. El industrial algodonero Riccardo Cobden y el cuáquero John Bright constituyeron la Liga contra el impuesto al grano *(Anti-Corn Law League)* que, no por casualidad, tuvo su sede en la ciudad manufacturera de Manchester.

También en este caso, como ocurrió con la reforma electoral de 1832, fueron los conservadores (los ex tories) quienes asumieron la defensa de los intereses unidos de la aristocracia propietaria y de las clases agrarias, de las que podían considerarse los legítimos representantes. Pero la carestía de 1845-1847 —catastrófica especialmente en Irlanda, donde fracasó incluso la cosecha de patatas— aisló aún más a los conservadores haciendo insostenibles sus posiciones. Una vez más Robert Peel, con un centenar de diputados conservadores apoyó a los liberales y, en 1846, la ley que abolía el impuesto al grano fue aprobada consagrando el triunfo del liberalismo. La confianza de las fuerzas progresistas e innovadoras en el libre juego

de las fuerzas económicas y en la libertad del intercambio internacional como medio para la construcción de un mundo próspero y pacífico, no por casualidad triunfaba en Inglaterra que, con su industria y su comercio dominaba sin competencia el mercado mundial. En la vigilia de 1848, los círculos liberales de todo el mundo miraban a la constitucional y librecambista Inglaterra como un brillante ejemplo, y el viaje de Cobden por Europa fue un verdadero triunfo.

11. **Francia: la restauración borbónica**

Los acontecimientos políticos, culturales y sociales de Francia durante la Restauración continuaron siendo un punto de referencia importante para Europa. El prestigio de su sociedad y de su cultura, la difusión de su lengua, los recientes sucesos revolucionarios y napoleónicos, aun cuando fueran controvertidos y generalmente condenados en los primeros años de la Restauración, contribuían a mantener un acentuado interés por el desarrollo de su historia. Después de 1814 y, sobre todo, tras la aventura de los Cien Días, hubo un reflujo de esta atracción. También en el campo cultural, el primado francés se vio amenazado por el creciente prestigio de la cultura alemana y su consolidado clasicismo fue acechado y vencido por los ideales románticos, compartidos y desarrollados por la nueva generación de escritores y artistas franceses. No pocos intelectuales, literatos y políticos que en el clima de los primeros años de la Restauración, después de la tiranía napoleónica, habían llegado a posiciones conservadoras y reaccionarias legitimistas, ennoblecidas y difundidas por la nostalgia de la armonía del buen mundo antiguo y de tradiciones recuperadas, supieron después conciliar estas posiciones con la defensa de las nuevas libertades, pasándose al campo de los opositores del extremismo Ultra y favoreciendo la apertura democrática.

La concesión de una carta constitucional, y la posibilidad, por lo tanto, de debates abiertos y de una expresión más o menos amplia y libre de la opinión pública, representativa de distintas opiniones y tendencias, hacían de Francia, junto con Inglaterra —acostumbrada desde mucho tiempo atrás a las discusiones parlamentarias y a la libre expresión del pensamiento— un laboratorio de ideas y de experiencias políticas.

El Parlamento —constituido por una cámara electiva de diputados y por una Cámara de pares nombrados por el rey— no tenía la facultad de proponer leyes; discutía, enmendaba, aprobaba o rechazaba las

normas propuestas por el gobierno nombrado por el rey y solamente responsable ante él. El voto contrario del Parlamento, por lo tanto, no obligaba a dimitir al gobierno.

Los diputados recibían un mandato de cinco años, a menos que la Cámara fuera disuelta por decisión del rey, como sucedió en 1815, con la Cámara electa durante los Cien Días. Solamente los mayores propietarios pertenecientes a la antigua nobleza o a la nueva clase burguesa tenían derecho de voto sobre la base de los impuestos directos que pagaban. En las elecciones de agosto de 1815, los inscritos en las listas fueron cerca de setenta y dos mil, y los votantes, menos de cuarenta y nueve mil. En el clima del «terror blanco» que siguió a la derrota definitiva y el exilio de Napoleón en Santa Elena, las elecciones consagraron una representación ultra-legitimista del 90 por ciento. Se verificó entonces un singular contraste entre el gobierno, principalmente compuesto por antiguos y experimentados personajes de la era napoleónica (entre los cuales sobresalían Talleyrand y Fouché), y los nuevos diputados. Aunque deseaba seguir una política moderada, Luis XVIII aprovechó esta circunstancia para confiar el gobierno al duque de Richelieu, cuyos orígenes aristocráticos coincidían con la opinión mayoritaria de la Cámara. Pero muchas veces los diputados se mostraron intratables, negándose a aprobar el balance y algunas leyes importantes, tanto que la Cámara, calificada de *inhallable*, fue disuelta en el otoño de 1816. Las nuevas elecciones favorecieron más al ministro, pero las reivindicaciones de poder parlamentario de la Cámara *inhallable* fueron un precedente relevante del debate y de la praxis política y constitucional.

Entre 1816 y 1820 se formó un poderoso grupo constitucional, o sea favorable a la aplicación de la Carta en los límites formales garantizados por la autoridad del monarca, por el ejecutivo y por las prerrogativas de la Cámara. Las importantes leyes aprobadas aseguraron un moderado régimen de libertad, el desarrollo de la prensa y del debate político, y la recuperación de la actividad económica después de superar la carestía y la crisis de subsistencia de 1816-1817. Se reformó la ley electoral elevando a 30 años la edad para ser elector y a 40 años para ser elegibles; estos derechos estaban reservados a quienes pagaran un impuesto de 300 francos (electores) y 1.000 francos (elegibles) por impuestos a la propiedad inmobiliaria o por la «patente» que gravaba a los profesionales, comerciantes e industriales. Por ello formaba el cuerpo electoral una mayoría de medianos propietarios inmobiliarios, profesionales, comerciantes, pequeños industriales, las capas medias del campo y los caudillos provinciales.

Mientras disminuía la influencia de los Ultra, un ala izquierda se

desprendía del grupo constitucional, menos ligada a la monarquía de los borbones, más sensible a la memoria y la experiencia de la primera fase de la Revolución francesa, más abierta a los intereses de la burguesía de los negocios y orientada hacia una extensión en sentido parlamentario del régimen constitucional. En esta tendencia actuaron los banqueros Laffite y Périer, un veterano de la revolución del 89, como el general La Fayette y un intelectual como Benjamin Constant (1767-1830), que justamente en aquellos años publicaba su *Curso de política constitucional* (1818-1819), convertido en un clásico del liberalismo europeo. Aunque apelando de alguna manera al principio de la soberanía popular, Constant contraponía a la afirmación revolucionaria de la libertad, el sistema de las garantías constitucionales y la tutela de la esfera de los intereses públicos y privados del ciudadano contra cualquier prevaricación o intolerancia. Al principio de *legitimidad*, contraponía el de la *legalidad* constitucional, o sea, el respeto por parte del gobierno de la autoridad de las leyes fundamentales del Estado y de los derechos del ciudadano. También consideraba fundamental el derecho electoral reservado a los propietarios que, por su autonomía económica, podían garantizar la independencia del voto.

En el reagrupamiento constitucional, también los doctrinarios se mantenían fieles a los principios de la libertad política y civil y a los derechos garantizados por la Carta. La soberanía no era una prerrogativa de la voluntad popular, sino de la razón: pero con argumentos semejantes al doctrinarismo de los filósofos ponían en un plano un tanto abstracto la inmediatez de la lucha política.

12. Desde 1820 a la revolución de julio

El asesinato del duque de Berry (febrero 1820), único miembro de la familia real que podía asegurar la continuidad de la dinastía borbónica, puso fin al período de relativa tranquilidad que había gozado Francia durante los gobiernos del duque de Richelieu y de Décazes. En 1818 se había conseguido un éxito importante con el final de la ocupación militar por parte de las potencias vencedoras de Napoleón y el regreso oficial de Francia al concierto de las grandes potencias europeas (congreso de Aquisgrán). Las jornadas electorales del otoño de 1820 y 1821, en el clima europeo agitado por movimientos en España y en Italia e influido en la misma Francia por el temor a la agitación y las insurrecciones carbonarias, dieron todavía mayor fuerza a la derecha, que completó su triunfo en 1824, a la muerte de Luis XVIII. Le sucedía su hermano, conde de Artois, con el nombre de Carlos X.

Como jefe del partido Ultra, ya antes de ascender al trono, el conde de Artois había obtenido la aprobación por la Cámara de algunas medidas que limitaban la libertad individual, restablecían la censura de prensa y restringían los derechos electorales. Confirmando sus ideas, el nuevo rey no sólo pretende hacerse coronar solemnemente en Reims, según el ceremonial antiguo, sino que apoya luego la aprobación de algunas leyes que insinuaban su intención de restaurar plenamente el Antiguo Régimen. Se estimuló la recuperación de la comunidad religiosa buscando restablecer sus bienes, conventos y monasterios; se decretó la pena de muerte por el delito de sacrilegio, y se destinaron mil millones de francos para indemnizar a los emigrados cuyos bienes habían sido confiscados durante la revolución *(los mil millones de los emigrados).*

La sociedad burguesa, que había crecido entre tanto y se consolidaba, temía el posible retroceso hacia formas políticas absolutistas y hacia el restablecimiento de los privilegios del clero y de la nobleza.

La gestión del gobierno era llevada hábilmente por el ministro Villèle que, contemporizando entre varios grupos y resistiendo a las pretensiones extremas de los Ultra, logró permanecer en el poder desde 1822 hasta 1828. Pero ya en 1827 las elecciones de noviembre demostraron que la oposición liberal comenzaba a abrir brecha en la opinión pública. Con el correr de los años, los sentimientos de legitimismo monárquico y de misticismo católico que habían dominado en los primeros años de la Restauración dejaban su lugar a recuerdos y sentimientos muy diferentes: las «inmortales» conquistas de la revolución y las gloriosas batallas de la epopeya napoleónica. No menos importante era el desarrollo económico favorable, sobre todo en los años 1820-1825, para el crecimiento de las inversiones comerciales e industriales. Siguieron luego algunos años de recesión y una nueva crisis agrícola, que aumentaron los motivos de descontento y de malestar que se difundían en el país. Los liberales, guiados por el histórico Guizot, y reunidos en torno al diario *Le Globe*, llevaron a la Cámara ciento ochenta diputados, contra doscientos del gobierno y setenta y cinco los Ultra. Villèle dimitió, pero Carlos X pensaba que podía continuar su política sin tener en cuenta las advertencias del resultado de las elecciones y de algunos folletos que mencionaban la posibilidad de recurrir a los Orleáns. El rey intentó dominar la situación primero con el ministerio de Martignac, y luego confiando en su viejo amigo Polignac, notorio por su adhesión al Antiguo Régimen. La oposición continuó su batalla con tenacidad y éxito crecientes. Era presidente de la Cámara un hombre de prestigio, Royer-Collard, que de posiciones rigurosamente constitucionales había derivado hacia po-

siciones parlamentarias sosteniendo esencialmente que para la buena marcha de los asuntos del Estado convenía que las opiniones del gobierno coincidieran con las de la mayoría de los representantes del pueblo: o sea, el gobierno no sólo debía gozar de la confianza del rey, sino también tener el apoyo de la Cámara. El rey no aceptó deponer a su ministro. Ateniéndose al texto de la constitución, disolvió la Cámara y convocó nuevas elecciones, pero los diputados dispuestos a apoyar al gobierno del rey fueron sólo ciento cuarenta y tres contra doscientos setenta y cuatro.

Entre tanto, el 9 de julio de 1830, el ejército francés entraba en Argelia comenzando la construcción de un nuevo imperio colonial. Pero el éxito militar no fue suficiente para resolver en favor del rey la grave crisis política e institucional. Carlos X todavía creía actuar en el ámbito de la Carta y de sus poderes soberanos cuando firmó, el 25 de julio, las ordenanzas que suspendían la libertad de prensa, disolvían nuevamente las Cámaras y reformaban la ley electoral, reducían a doscientos treinta y ocho el número de diputados, y cambiaban la modalidad de las elecciones, convocadas para el siguiente mes de septiembre.

Quienes promovieron la insurrección de París el 27 de julio, la primera de las tres jornadas revolucionarias, *les trois glorieuses*, que provocaron el final del reinado de Carlos X fueron en primer lugar los periodistas y los estudiantes.

Casimir Périer, y sobre todo el banquero Laffitte cumplieron un papel importante en la revolución y en la organización de un gobierno provisional. En los días siguientes, cuando se trató de exorcizar el peligro republicano y cambiar la corona de Carlos X a Luis Felipe de Orleáns, el general La Fayette y Thiers actuaron con lucidez y decisión. El número de muertos y heridos, respectivamente ochocientos y cuantro mil entre los civiles y doscientos y ochocientos entre los soldados, testimonian la participación popular y la dureza de los encuentros en las barricadas.

13. Desde la revolución de julio hasta 1848

La victoria de la revolución de julio daba nuevo aliento a los liberales, a los radicales y a los republicanos en toda Europa y provocaba también algunos cambios irreversibles en el orden internacional establecido en Viena en un área estratégica importante. En efecto, la revuelta de los belgas ponía fin al reino unido de los Países Bajos y daba a luz una nueva monarquía dotada de una constitución que fue considerada la más avanzada de las vigentes (cfr. § 14). En Francia, tras

algunos momentos de incertidumbre por el temor de que pudieran prevalecer las corrientes extremistas y republicanas, activas en los combates callejeros, las fuerzas del centro o del centro izquierda constitucionales lograron estabilizar la situación. En el plano institucional, la antigua Carta de 1814 fue sustancialmente mantenida, sometiéndola a algunas enmiendas: se eliminó el preámbulo sobre los derechos soberanos del monarca y se abolió la censura de prensa. Luis Felipe se convertía en *rey de los franceses*, pero conservaba muchas de las prerrogativas que Luis XVIII se había atribuido. Sucesivas leyes, de marzo y abril de 1831, bajo el gobierno de Laffitte introducían el criterio de la elección por consejos comunales, llamando a las urnas a más de dos millones de electores y ampliaban también el sufragio político, bajando el límite de trescientos a doscientos francos, y la edad para elegir de treinta a veinticinco años y, para ser electo, de cuarenta a treinta años. Aun con esta ampliación el cuerpo electoral seguía siendo extremadamente reducido (doscientos mil inscritos sobre una población de cerca de treinta millones de habitantes). En el sistema constitucional censitario, el voto y la participación política no eran considerados un derecho del ciudadano, sino una función relacionada con su «capacidad», determinada generalmente por la propiedad u otros requisitos.

El banquero Laffitte, que representaba a la izquierda de la alineación parlamentaria, después de algunos incidentes provocados en París por una explosión de sentimientos anticlericales, cedió la dirección del gobierno a otro banquero, Casimir Périer, que tenía una posición más centrista. Pero también en esta fase, que puede considerarse de transición hacia el régimen del *juste milieu*, se dictó una ley que perjudicaba considerablemente el equilibrio establecido por la antigua Carta en cuanto abolía la heredabilidad de los pares, reforzando de tal modo a la Cámara de los diputados. El sentido de la disposición puede entenderse mejor recordando que una personalidad como Guizot, que luego encarnará durante mucho tiempo al nuevo régimen, se declaró contrario a ella.

Los años 1831 y 1832, como quiera que sea, fueron difíciles para Francia, también desde el punto de vista económico y social. El episodio más grave fue la revuelta y la represión de los *canuts*, los obreros del antiguo centro manufacturero y comercial de Lyon. Pero no menos importante fueron los estragos del cólera en la primavera y el verano de 1832, que causó dieciocho mil muertes en París, entre ellas la del propio presidente del consejo, Périer. La derrota de la insurrección republicana de París, en julio, con su secuela de condenas y deportaciones, terminaba con la posibilidad de un renacimiento del movimiento revolucionario. El reinado constitucional de Luis Felipe,

ya sostenido por el consenso de los círculos financieros, intelectuales y algunas capas de la burguesía del campo y la ciudad salió reforzado de estos acontecimientos, aun cuando su ala izquierda seguía descubierta justamente en los años en que la «cuestión social» asumía cada vez mayor importancia. Un paso importante hacia la alfabetización y educación se dio con la ley de Guizot (junio de 1833) que obligaba a todos los ayuntamientos a colaborar en la instrucción elemental impartiéndola gratuitamente a los alumnos más pobres. Era también una medida política que, con el reclutamiento de cerca de cuarenta mil maestros tendía a marginar al clero por una parte y a dar importancia, por otra, a una visión del mundo inspirada en una concepción fundamentalmente liberal, pero acorde con las ideas moderadas de la clase dirigente. Un posterior, aunque temporal, cambio conservador se produjo tras el atentado contra Luis Felipe. Perseguidos por la ley, los republicanos se organizaron desde entonces en sociedades secretas cada vez más extremistas que fomentaron la agitación social.

–Los grandes debates políticos que habían animado el período transcurrido entre 1815 y 1830 se extinguieron paulatinamente, mientras se creaba un vínculo cada vez más estrecho entre el mundo de los negocios, los círculos parlamentarios y la alta administración. Si al comienzo se habían contado dos banqueros entre los exponentes más representativos del régimen, luego fueron dos intelectuales, ambos conocidos historiadores, Thiers y Guizot, quienes dominaron la vida política en el gobierno y en el Parlamento. En la Cámara existía un acuerdo de fondo de la mayoría —expresión del cerrado y poderoso sector de los notables que sostenía al nuevo régimen— para la tutela de las libertades individuales que incluían en primer lugar la defensa de la propiedad y, luego, la libertad de iniciativa económica y laboral. Las agrupaciones de obreros y las huelgas se consideraban un impedimento al libre ejercicio de la iniciativa económica. El librecambismo de las clases dirigentes no llegaba hasta renunciar a las medidas proteccionistas que demandaban los agricultores y fabricantes. La fuerza de los notables residía especialmente en la renta y las tradiciones familiares. Como el límite para ser elegible había bajado de mil a quinientos francos, casi los dos tercios de los diputados de 1840 pagaban más de mil francos de impuestos, y entre los contribuyentes más ricos, menos del 20 por ciento eran comerciantes e industriales. Esta preeminencia de la propiedad inmobiliaria respecto de las nuevas formas de acumulación de capital, ha permitido hablar de un Antiguo Régimen prolongado más allá de 1848, directamente hasta la primera guerra mundial. Es un problema a considerar atentamente, ya sea en el plano político o en el económico y social. Parece, sin em-

bargo, absolutamente impropio continuar hablando de Antiguo Régimen, sobre todo en Francia. Pero ya tendremos ocasión de volver sobre este tema.

Por otra parte, también en lo que se refiere a la monarquía de julio, no obstante la sustancial solidaridad de la clase dirigente, se pueden distinguir varios momentos. A la primera etapa de incertidumbre por el equilibrio inestable entre el *partido del movimiento* y el *de la resistencia*, debido a la influencia, todavía importante, de un grupo republicano, sigue una etapa menos agitada y sin embargo caracterizada por una gran inestabilidad ministerial. Es el período que domina Thiers, cuyo ascenso muestra cómo, no obstante el aparente exclusivismo de los notables, quedaba abierto el camino al talento. El periodista marsellés asciende a los altos cargos ministeriales, a la presidencia del consejo y, sensible a la opinión pública de la mediana y pequeña burguesía, recupera la memoria y la historia de Napoleón, indulta los sentimientos nacionales y la ambición de *grandeur* que despertaban en la nación francesa. La falta de éxito en el campo internacional, en la cuestión del Oriente (cf. *supra* § 7), lo obliga a ceder el papel protagónico al más moderado y equilibrado Guizot. Durante la prolongada presidencia ministerial de Guizot transcurre el período más afortunado de la monarquía burguesa de Luis Felipe.

En los años cuarenta colaboran con la estabilidad, además del cansancio y el desinterés por la política, la favorable coyuntura económica, que apoya las exhortaciones de Guizot a los franceses para que piensen sobre todo en enriquecerse. La paz, la prosperidad, la seguridad, la lenta pero continua difusión de las iniciativas industriales, las obras públicas, sobre todo la asociación entre el Estado, los entes locales y las compañías concesionarias para la realización de grandes proyectos de tendidos ferroviarios caracterizan los años que van de 1840 a 1847. Pero la caída de la tensión idealista y política, la falta de alternativas en el marco de las instituciones, la acentuación de los particularismos y de los intereses locales no eran señales positivas. El mismo desarrollo económico hacía madurar otros problemas y nuevas diferencias sociales que se manifestarían en la explosión de 1848.

14. **Crisis en las relaciones internacionales**

La revolución de julio en Francia tuvo inmediatas repercusiones en Europa suscitando, en los grupos radicales, la esperanza de un renacer del movimiento revolucionario que pudiera debilitar las cadenas de la restauración, abrir el camino a regímenes liberales y constitucionales y favorecer las aspiraciones nacionales. El curso de los

acontecimientos demostró una vez más que los intereses de las grandes potencias y el sustancial respeto al principio del equilibrio triunfaba sobre más o menos sinceras razones ideológicas. Ni siquiera los extraordinarios acontecimientos de 1848 y 1849 trastornaron el equilibrio territorial que se había establecido en 1815, y sólo tras la guerra de Crimea (1854) se inició una nueva fase, marcada por los conflictos armados entre los Estados europeos, que puso fin al sistema vienés.

Con una revolución popular, los liberales y católicos (agosto y septiembre) afirmaron el derecho de Bélgica a separarse de Holanda, a la que estaba incorporada por decisión del congreso de Viena (véase § 2 de este capítulo). El 24 de octubre de 1830, Bélgica proclamó su independencia e instauró una monarquía constitucional confiada a Leopoldo de Sajonia Coburgo. Ante el intento de Guillermo I de Holanda de restaurar por la fuerza la unidad de los Países Bajos, el ejército francés intervino en defensa de los belgas. La Francia de Luis Felipe declaró que no consentiría la intervención de potencias extranjeras contra la voluntad expresa del pueblo belga. Parecía configurarse un principio al que radicales y demócratas, más allá del caso específico, deseaban atribuir un valor general, opuesto a la garantía que los acuerdos de Viena habían dado a los gobiernos restaurados. Sólo era una ilusión, porque el nuevo soberano y el nuevo régimen franceses no podían y no querían oponerse abiertamente al orden europeo. La cuestión de los Países Bajos implicaba, en primer lugar, a los ingleses, preocupados por que Francia sacara ventajas de la nueva situación. París envió a Londres al viejo Talleyrand y se llegó a un acuerdo sobre la base de la neutralidad perpetua del nuevo reino. Francia y Gran Bretaña, países con regímenes constitucionales y casi parlamentarios, aparecían unidos frente a las potencias centro-orientales (Austria, Prusia y Rusia), países absolutistas y autocráticos. Estas potencias, con la adhesión de la misma Francia, como se recordará, habían truncado, entre 1821 y 1823, con intervenciones directas, *manu militari*, las revoluciones de España e Italia. Ahora la situación era muy diferente, y ciertamente el alejamiento de Francia hacia posiciones más liberales abría una brecha en el frente conservador, dando por algún tiempo la ilusión de que pudiera tomar fuerza también en Europa el principio de no intervención explícitamente proclamado para toda América por la doctrina Monroe.

No se hizo ninguna declaración semejante y con realismo Austria, Prusia y Rusia aceptaron el nacimiento de la nueva monarquía belga y tuvieron, en cambio, las manos libres para actuar en las primeras revueltas de su área más directa de influencia, en Polonia y en Italia.

En el plano formal, hay que distinguir entre territorios oficialmente reconocidos como parte de un Estado (por ejemplo: el Reino Lombardo-véneto para la monarquía de los Habsburgos) y estados, incluso algunos pequeños pero independientes, como el ducado de Módena. También en el plano puramente formal, la cuestión polaca es más complicada a causa de los anteriores repartos, de las restauraciones parciales de este Estado y de vínculos personales y dinásticos, como los que ligaban a Alejandro I de Rusia con el reino de Polonia.

Hacia finales de 1819 se ponía en marcha en la Lombardía la política represiva de Austria con la supresión del periódico *Il Conciliatore.*

En torno a esta publicación (1818-1819) se habían reunido los liberales moderados quienes, aun sin hacer una manifiesta profesión de fe política, se habían hecho sospechosos por su apertura cultural al comenzar un debate sobre el romanticismo y sobre las tradiciones independentistas del medievo comunal. El descubrimiento, en 1820, de un grupo carbonario en Milán había terminado en varios procesos en los que fueron implicados también algunos colaboradores del *Conciliatore*, entre ellos Silvio Pellico, convertido más tarde en célebre autor del Resurgimiento con *Le mie prigioni*. También fue arrestado (1821) un exponente ilustre de la aristocracia, el conde Federico Confalonieri, acusado de pertenecer a una organización secreta que trabajaba por la incorporación del Lombardo-véneto al Piamonte en una sola monarquía constitucional.

En 1831 la intervención austriaca terminó rápidamente con los movimientos que, de Módena y Parma, se habían extendido también a las Marcas y Umbría. A su vez, los franceses reaccionaron ocupando Ancona, pero ya los soberanos y los gobiernos depuestos por breve tiempo habían vuelto al poder, con la tradicional secuela de procesos y ejecuciones. El fracaso de los movimientos de 1830-1831 provocó una reflexión y una revisión en Italia. En la variante revolucionaria, se extinguieron el movimiento carbonario y las antiguas sectas y comenzaron la propaganda y el reclutamiento de la Joven Italia mazziniana; mientras que en la variante aristocrático-burguesa de las clases propietarias, maduraron y se articularon las tesis del liberalismo moderado.

El contragolpe más amplio e importante de la revolución parisiense de julio se dio, además de en Bélgica, en Polonia, pero con un resultado totalmente distinto. En Polonia, la articulación social era extremadamente limitada: la clase culta y políticamente activa estaba casi exclusivamente representada por la nobleza inmobiliaria; la bur-

guesía urbana era escasa; esclavizadas e instintivamente antinobiliarias las masas campesinas. La insurrección fue promovida por nobles e intelectuales que, no obstante la concesión de cierta autonomía, toleraban mal la preponderancia rusa, aspiraban a una verdadera independencia y, recordando la grandeza de la Polonia histórica, pretendían reconstruir un gran Estado nacional. El éxito inicial del movimiento de noviembre de 1830 fue completo. El gran duque Constantino, que gobernaba en nombre de su hermano, el zar Nicolás I, fue obligado a abandonar el país, la dinastía de los Romanof fue invalidada y la vecina Lituania se unió a la rebelde Polonia. Pero no podían esperar ninguna ayuda del exterior para oponerse a las imponentes fuerzas que el zar concentró contra el pueblo sublevado. Austria, obviamente hostil, y Prusia, que ocupaba entonces territorios polacos, eran contrarias a cualquier alteración de los acuerdos de Viena; muy lejana e impotente, la Francia de Luis Felipe, y el ministerio inglés, igualmente lejano, estaba tácitamente de acuerdo con la represión rusa. También era escaso el apoyo que podían obtener de la mayoría de la población campesina polaca que los nobles no podían volcar fácilmente a su favor. El centro de la resistencia fue Varsovia, que debió capitular en septiembre de 1831, provocando una oleada de emigración política imponente en aquellos tiempos. Una verdadera colonia de emigrados polacos, cerca de cinco mil familias, se trasladó a Europa occidental, sobre todo a Francia.

También en Alemania los acontecimientos franceses de julio tuvieron cierta repercusión. Una manifestación, en la que participaron también exiliados polacos se desarrolló en el Palatinado bávaro en mayo de 1832. Pero Metternich no tuvo gran dificultad para hacer aprobar por la Confederación de los Estados alemanes, en junio de 1932, una declaración (llamada de los seis artículos) que condenaba una vez más las doctrinas liberales y limitaba las libertades constitucionales, golpeando en particular los derechos de reunión y la libertad de prensa. En el año siguiente el alineamiento conservador era sancionado por los acuerdos diplomáticos de Münchengräntz entre Austria, Prusia y Rusia, que confirmaban la voluntad de respetar y hacer respetar el equilibrio territorial y político establecido en Viena en 1815.

Una vez más pareció que Francia e Inglaterra se oponían al acuerdo de las potencias conservadoras. Ambos apoyaban en España y Portugal a regímenes constitucionales, gobernados, en una situación política confusa e inestable, por la reina española Cristina y la portuguesa María. De esta manera se formaba una cuádruple alianza occidental que se contraponía al bloque de las potencias conservadoras de Europa centro-oriental.

Sin embargo, sería un error pensar que existieron rígidos vínculos de alianza y de contraposición y, sobre todo, que prevalecieron las consideraciones ideológicas: por una parte liberales-constitucionales y, por la otra, reaccionarios conservadores. No obstante las distintas formaciones y los diferentes motivos ideológicos, predominaban en la escena política internacional dos personalidades suficientemente dúctiles: por una parte, el experto aunque algo decaído Metternich, por la otra, el nuevo representante de la primera gran potencia mundial, el inglés Palmerston. El entendimiento entre Inglaterra y Francia se resentía por la tradicional rivalidad, que en aquellos años se expresaba especialmente en la dificultad inglesa para conseguir que sus aliados continentales aceptaran el régimen de libre cambio. Una arraigada mentalidad y sólidos intereses agrarios y manufactureros se oponían, con razones no del todo infundadas, a la apertura del mercado, atemorizados por el poderío comercial, financiero e industrial inglés.

Una verdadera crisis diplomática se declaró luego en la llamada cuestión de Oriente, nacida de la decadencia imparable del Imperio otomano. (Para los antecedentes, véase § 7 de este capítulo.)

El bajá de Egipto, Mohamed Alí, aun después del episodio de Navarino, e incluso con mayor empeño, continuaba con su política de expansión. El ejército turco, en el vano intento de detener los ambiciosos proyectos egipcios, fue derrotado en diciembre de 1832 por el hijo adoptivo de Mohamed Alí. En adelante se podían considerar como hechos probables una disolución del Imperio turco o el ascenso del bajá de Egipto al trono otomano. El zar Nicolás no vaciló en intervenir nuevamente imponiendo el tratado de Unkiar Skelesi (julio de 1833) que, en su esencia, establecía una especie de protectorado ruso sobre el Imperio otomano. La alianza ruso-turca constituía un obstáculo insuperable para el bajá de Egipto, hacia el cual se volcaban las simpatías de Francia. Él, en efecto, había modernizado la administración civil y militar de su Estado, valiéndose, sobre todo, de funcionarios y generales franceses. En la reunión de Münchengrätz, Austria y Prusia, preocupadas ante todo por estabilizar la situación en Europa y confirmar su acuerdo con el zar, habían reconocido el tratado de Unkiar Skelesi. En 1839, el sultán turco, animado por esta situación y probablemente impulsado también por Inglaterra, tomó la iniciativa contra el poderoso bajá, formalmente vasallo suyo. También esta vez, sin embargo, venció el ejército egipcio y la supervivencia del Imperio se vio nuevamente en peligro. Los intereses ingleses, según la opinión de Palmerston, ampliamente compartida en Gran Bretaña, aconsejaban sostener la unidad y la existencia del Imperio turco y, para evitar una in-

tervención exclusiva del zar en la complicada cuestión, impedir que el bajá de Egipto, demasiado vinculado a Francia, se entendiera con Rusia. Palmerston obró entonces con gran indiferencia acercándose a Rusia sin ningún miramiento por las simpatías y los intereses de Francia, que quedó aislada. Del entendimiento franco-inglés se pasó, en julio de 1840, a un abierto enfrentamiento entre ambas potencias y casi a la vigilia de una guerra europea amenazada veleidosamente por Thiers. El conflicto fue luego solucionado por la intervención de Metternich, la caída de Thiers y el firme propósito de Luis Felipe de mantener la paz.

El resultado de la crisis de 1839-1840 fue, de todos modos, un gran éxito para Gran Bretaña, no tanto por el acuerdo sobre los estrechos, que preveía la clausura de los Dardanelos a las naves de guerra, como por el reconocido protagonismo de Londres. Palmerston dio a entender que no se podía regular unilateralmente la cuestión, como había intentado hacerlo Rusia con el tratado de Unkiar Skelesi. Si bien no era una lección, sí era una advertencia, también a Francia, para que no se abrigaran proyectos demasiado ambiciosos. Aparecía claro además que si alguna vez, en la política de las grandes potencias, había tenido algún peso la oposición ideológica entre dos alineaciones, liberales por una parte y conservadores por la otra, ya no tenía ninguno. En lo que respecta a Inglaterra sobre todo, sus intereses por los asuntos europeos estaban cada vez más aparejados con los problemas de su desarrollo comercial y manufacturero y con el horizonte mundial de sus responsabilidades y sus empresas. En este sentido se debe recordar que, justamente mientras se cerraba la crisis turca, Gran Bretaña estaba en guerra con China. El gobierno chino había prohibido la importación y el consumo de opio, cuyo tráfico era casi el único y el más lucrativo que los comerciantes ingleses practicaban a través de un solo puerto franco, el de Cantón. Hasta 1834, las relaciones comerciales habían sido administradas por la Compañía de las Indias Orientales en un régimen de monopolio. Con el desarrollo de la concepción librecambista, el monopolio había sido abolido por el Parlamento inglés (1834): la libertad de comercio y la libre competencia se aplicaron también al tráfico del opio, y la defensa del principio y la protección de los comerciantes quedaron en manos del gobierno inglés. Éste, frente al intento chino de aplicar con energía la veda de las importaciones, no vaciló en declarar la guerra. El conflicto reveló muy pronto la inferioridad del ejército y de la flota de juncos del Imperio manchú, forzado a suscribir el tratado de Nankín «el primero de una serie de tratados desiguales, con los cuales, en el siglo XIX, las potencias europeas transformaron la China en una semicolonia». Además

de Canton, China fue obligada a abrir cuatro puertos (entre ellos Shangai), ceder a Gran Bretaña la plena soberanía de la isla de Hong Kong y conceder a los ciudadanos extranjeros el derecho de extraterritorialidad. Éste fue el resultado de la aparentemente paradójica coincidencia de las pretensiones imperialistas con los principios librecambistas.

Capítulo 3

DESDE 1848 A 1871

1. Hacia la formación de nuevos Estados nacionales

El período que se abre con las conmociones de 1848 parece inaugurar una nueva era de revoluciones políticas de duración y resultados imprevisibles.

Las crisis económicas y la miseria de las capas populares contribuyeron también a provocar y alimentar los motines. Después de 1848 también hay un cambio en este aspecto. A la depresión, la incertidumbre y la carestía de los años cuarenta, sucede un período de desarrollo más intenso, de grandes operaciones financieras, de recuperación de las inversiones y la ocupación, de crecimiento del comercio internacional. Esta nueva etapa es simbólicamente inaugurada por el descubrimiento y la explotación de las minas de oro de California y de Australia; pero, y sobre todo, representada por las grandes obras ferroviarias que, en veinte años, transforman el sistema de comunicaciones y, acaso más que ninguna otra novedad, asombran la imaginación colectiva, dan sentido al cambio de los tiempos, y hacen perceptible y real a los ojos de muchos la «Revolución industrial».

Pero otras manifestaciones también adquirían valor simbólico y contribuían a difundir la opinión de que se había ingresado, o se ingresaba, en una nueva era. La primera exposición universal de productos industriales, que se desarrolló en Londres durante mayo y octubre de 1851, fue uno de esos acontecimientos que se prestaban a ser celebrados como una demostración de las prodigiosas conquistas de la tecnología industrial y de las perspectivas de paz y bienestar. La imagen y los detalles de la construcción del palacio de Cristal, que alojaba a la muestra eran en sí mismos de tal magnitud como para suscitar la maravilla y la admiración.

Todo esto sucedía en Inglaterra, el país que había entrado en la sociedad industrial algunas décadas antes que los demás y que no había padecido la crisis política y revolucionaria de 1848. Pero también en Francia, donde la conflictividad social se había mostrado todavía más activa en 1848-1849, y en 1851 el golpe de Estado de Luis Napoleón (véase § 4 de este capítulo) había provocado cierta reacción republicana, la recuperación económica y el desarrollo del capitalismo favorecieron al nuevo régimen. Y la Francia de Napoleón III, contrariando a una tradición raramente abandonada, se convirtió al libre cambio siguiendo el ejemplo inglés y con la bendición del triunfante Cobden (tratado aduanero con Gran Bretaña de 1860).

Los progresos industriales y económicos, aunque no influyeron inmediatamente en todos los países sobre las condiciones de vida de los obreros y campesinos, comenzaron a producir alguna mejora y, de cualquier manera, alimentaron esperanzas y expectativas que, en general, favorecieron la vuelta al orden y cierta tranquilidad social en Europa. El nuevo problema, o el problema que los gobiernos debían plantearse de una manera nueva, era el de la opinión pública. Las aspiraciones más radicales: revolucionarias, antimonárquicas, socializantes e igualitarias, nunca habían encontrado un consenso generalizado, y los gobiernos debían tener en cuenta el hecho de que algunos de los principios de la Revolución francesa, aunque fuera casi insensiblemente, habían conquistado la opinión pública y tenían una difusión masiva. Nadie podía creer ya que el pueblo «aceptara, incluso saludara con entusiasmo, el poder de dinastías investidas por la gracia divina y ratificadas por la religión de los curas, que controlaban sociedades jerárquicamente estratificadas».

También los conservadores y los moderados debían encontrar nuevos medios para defender el orden social existente, o evitar fracturas revolucionarias, reconociendo que algunos elementos del sistema político debían ser modificados y que eran necesarias algunas reformas. La clase dirigente británica, sustancialmente aristocrática tanto en sus miembros conservadores como liberales y que pudo también valerse del indiscutible primado industrial y comercial, conquistado por Gran Bretaña en la mitad de la era victoriana, demostró mayor elasticidad, y obtuvo los mejores resultados

La concesión de la reforma electoral de 1867, que extendía el derecho de voto a los obreros y a los artesanos de las ciudades, es un ejemplo de prudencia política. La acción de Disraeli (tory) y el nacimiento del conservadurismo social muestran el espacio que se abría a la conquista de las masas populares (véase capítulo 7, § 11). La organización de servicios comunales y estatales más amplios, la introducción de las oposiciones públicas, la limitación de los privilegios

de la Iglesia anglicana, la atención a los problemas de la instrucción elemental, son signos de los nuevos tiempos que corrían en Inglaterra.

En cuanto al sistema electoral y de consenso popular hay que recordar que el régimen autoritario de Napoleón III fue aclamado plebiscitariamente y convivió con el sufragio universal. Incluso en vísperas de la desastrosa derrota de Sedan, el pueblo francés había ratificado con un plebiscito su confianza en el emperador. En otro terreno, fueron señales quizás más elocuentes de los tiempos que cambiaban la abolición de la servitud de la gleba y el comienzo de la reforma agraria que en 1861 emprendió Alejandro II en la Rusia zarista (véase capítulo 7, § 12). La intención de los estados del Norte en la guerra civil norteamericana (1861-1865) —terminar con el sistema de trabajo esclavista, todavía floreciente en el sur de Estados Unidos—, aunque ocultaba un conflicto de intereses económicos, se cuenta también entre los pilares de la ideología liberal y librecambista (véase § 10 de este capítulo). John Stuart Mill aparecía como uno de los más escuchados y actualizados promotores de la nueva fe, que comenzaba a predicar incluso el derecho a la emancipación de las mujeres.

Sin embargo, las promesas de paz universal, que sostenían los más entusiastas partidarios del nuevo orden económico —entre los cuales los saint-simonianos habían alcanzado posiciones importantes, incluso financieramente— no se realizaron plenamente. Al contrario, en comparación con las décadas anteriores, fueron más numerosos e importantes los conflictos armados que afectaron también a Europa. En efecto, el viejo sistema del equilibrio y el orden europeo que, en el plano territorial y diplomático había sobrevivido a la oleada revolucionaria de 1848, queda definitivamente resquebrajado tras la guerra de Crimea. Hay que recordar, que no obstante los diferentes regímenes políticos, Gran Bretaña y Rusia habían colaborado diplomáticamente en aquellos años para impedir que los conatos revolucionarios sacudieran a Europa. La razón de Estado tenía más consideración que las simpatías ideológicas.

La guerra de Crimea, vinculada a la «cuestión de Oriente», marca un nuevo acercamiento franco-inglés, deseado especialmente por Napoleón III para reforzar su propia presencia en la política europea. En 1853, Rusia había despojado de los principados danubianos al Imperio otomano. Al comienzo de la guerra ruso-turca, Francia e Inglaterra se alinearon junto a Turquía enviando un cuerpo expedicionario y una flota. Luego de una serie de encuentros muy cruentos, Rusia fue derrotada en marzo de 1858. Las reconstrucciones literarias y cinematográficas que la siguieron hicieron famosa la carga de los Seiscientos en Balaklava, ya sea por el heroísmo de los combatientes o por

las primeras experiencias de la Cruz Roja, que nació en ese episodio gracias al empeño de Florence Nightingale. La defensa del Imperio turco y la clausura del Mediterráneo a la flota rusa servían, sobre todo, a los intereses de Gran Bretaña; pero el aislamiento de Austria, la derrota de Rusia, la alianza con el Piamonte, elevaban el prestigio de la Francia imperial y podían abrir nuevos horizontes a la iniciativa de Napoleón III. La Conferencia de Paz de París (1856) tomó nota de la debilidad de las bases del antiguo equilibrio europeo. Las consecuencias, como se ha visto, fueron que antes de la guerra «habían transcurrido cuarenta años de paz y después de ella pasaron quince años durante los cuales se sucedieron cuatro guerras entre las grandes potencias europeas (Piamonte y Francia contra Austria, 1859; guerra de los ducados daneses, 1865-1866; Prusia e Italia contra Austria, 1866; Prusia contra Francia, 1870) que transformaron completamente el equilibrio territorial del continente». También se modificaron antiguos órdenes institucionales, y no sólo por los procesos de unificación en Italia y Alemania, sino también por la reforma del Imperio austriaco que, con el compromiso de 1867, después de la desafortunada guerra con Prusia, originó la «doble monarquía» (véase capítulo 7, § 10). En estos conflictos estuvieron ausentes Gran Bretaña y Rusia, la primera cada vez más empeñada en su política mundial y colonial; la segunda, ocupada en restañar las heridas recibidas en la derrota de Crimea, que puso al descubierto la necesidad de profundas reformas internas.

Las aspiraciones y ambiciones de Napoleón III, y su actitud de heredero del gran Napoleón y protector del principio de nacionalidad, fueron un motor importante de las guerras europeas, de las cuales sacaron algún provecho, en primer lugar Cavour —implicando a Francia en la lucha contra Austria por la ampliación y la supremacía de la monarquía saboyana en Italia— y luego, más aún, Bismarck, infligiendo directamente al imprudente emperador, sostenido por un veleidoso renacimiento del espíritu nacionalista francés, gravísimas derrotas diplomáticas y la militar que provocó su caída (Sedan, 1870).

2. **Los extraordinarios acontecimientos de 1848**

La situación política europea, que había ingresado en una fase de relativo inmovilismo, comenzó a agitarse en Suiza a partir de 1844 con un conflicto que enfrentó a los grupos y los cantones protestantes y radicales, inclinados a una unión nacional más estrecha, de tipo federal, con los cantones católicos y rurales, que sostenían el menos vin-

culante estatuto confederal. La situación se exacerbó cuando el cantón católico de Lucerna llamó a los jesuitas, provocando una grave tensión y airadas protestas de la mayoría protestante. Siete cantones católicos respondieron creando una liga, el *Sonderbund* que fue considerada inconstitucional. En 1847 se llegó a la guerra civil, que duró menos de un mes y concluyó con la derrota de la liga antes de que Austria pudiera intervenir en su favor. La victoria de los liberales radicales suizos, que llevó a la constitución del Estado federal, reanimó las esperanzas de los movimientos revolucionarios y nacionales europeos y constituyó el síntoma de los extraordinarios acontecimientos de 1848. No es fácil hacer un juicio histórico sobre estos sucesos porque la oleada revolucionaria que abarcó casi toda Europa pareció desvanecerse tan rápidamente como había aparecido y crecido, dejando pocas secuelas. Desde Sicilia y el Reino de Nápoles, hasta Francia, Austria, y Alemania, pareció que nada podría resistir al entusiasmo y la fuerza de los movimientos que reclamaban libertad, constitución, independencia, emancipación para los pueblos y las clases oprimidas. La espontaneidad y simultaneidad de las revueltas cogió a todos por sorpresa. Sólo las instituciones y los regímenes de Gran Bretaña y de Rusia, significativamente ubicados en el extremo opuesto, no fueron trastornados, ni siquiera implicados, por la fuerza impetuosa de la oleada.

Una reseña cronológica del comienzo hasta el final de los episodios, antes de hacer un análisis más detallado y selectivo, puede dar una idea de su rápida propagación y, también, de su relativamente breve duración.

El 12 de enero de 1848 se levanta Palermo. El 11 de febrero, Fernando II promulga la constitución en Nápoles. La represión del movimiento napolitano del 15 de mayo marca el comienzo del final del experimento constitucional.

El 23 y el 24 de febrero, la revolución gana París. El 21 de junio es duramente reprimida la insurrección de los obreros parisienses. En diciembre es elegido presidente de la república Luis Bonaparte, que prepara el golpe de Estado autoritario de diciembre de 1851.

El 13 de marzo, se organiza una gran manifestación popular en Viena. Metternich abandona el poder. En mayo, después de una nueva manifestación, la corte imperial se retira a Innsbruck. En junio se trunca la insurrección de Praga. En octubre, la represión de la revuelta obrera y popular de Viena prepara el retorno a la monarquía autoritaria.

El régimen constitucional húngaro, proclamado el 22 de marzo de 1848 y transformado en república en abril de 1849, dura más tiempo, pero al final cae bajo los golpes del ejército austriaco apoyado por los rusos en Timisoara (agosto de 1849).

En marzo de 1848 también Berlín y Prusia se ven envueltos en la revolución. En diciembre, el rey elige la asamblea constituyente y, por gracia soberana, concede una constitución muy limitada.

Más complejos fueron los acontecimientos de la Confederación germánica que en marzo había convocado en Frankfurt sobre el Main un *Vorparlament* para examinar la cuestión nacional alemana. Pero ya en la primavera-verano de 1849, el rechazo de la corona por parte de Federico Guillermo IV y el retiro de los delegados austriacos abortaron el nacimiento de un Estado alemán sobre la base de la libre expresión de la voluntad popular.

En Italia, donde los acontecimientos de 1848 habían sido precedidos por el reformismo de Pío IX y por el desarrollo del movimiento neogüelfo después de la fácil conquista de las constituciones de marzo, la guerra del Piamonte contra Austria para la liberación o la anexión de las provincias lombardas se convierte en el acontecimiento central. Entre el 18 y el 22 de marzo estalla la insurrección de los Cinco Días en Milán, y en abril, los piamonteses declaran la guerra a Austria, derrotando al ejército austriaco en Goito y Peschiera (I guerra de la Independencia). La alocución papal del 29 de abril pone fin al mito neogüelfo; la derrota piamontesa en Custoza en la primera etapa de la guerra se completa luego, en marzo de 1849 con la decisiva derrota de Novara. La resistencia de los grupos democráticos en Venecia, que el 17 de marzo habían proclamado la república guiados por Daniele Manin y en la proclamada república de Roma el 9 de febrero de 1849, terminaron en el verano de 1849. Entre el 20 y el 21 de marzo Módena, expulsado el duque Francesco V, designa un gobierno provisional, mientras el ducado de Parma y Piacenza, liberándose de Carlos II Ludovico, se incorpora, por un plebiscito, al reino de Cerdeña. En febrero de 1848, fugado el gran duque Leopoldo II, nace la república Toscana (Guerrazzi, Montanelli, Mazzini) de muy breve duración: hasta abril del mismo año.

En la mayor parte de los casos, los acontecimientos directamente ligados a la explosión de la primavera de 1848 duraron poco más de un año. Las acciones más radicales, salvo excepciones marginales, ya habían sido sofocadas al llegar el verano. A comienzos de 1849 todo parecía acabado. Pero, como se ha observado, «cualesquiera que fuesen las insuficiencias, debilidades y errores que se cometieron, la humanidad vivió entonces uno de esos pocos momentos en que la alegre confianza en sí misma y en su porvenir la llena totalmente, y, dilatándose en esta alegría, se vuelve buena y generosa, sólo ve hermanos alrededor, y ama. Así fue el comienzo de la revolución de 1789, que sacudió y embriagó los corazones en todos los rincones del mundo; y así

fue, y más todavía, en 1948, cuando duros obstáculos, contra los cuales se había chocado en vano durante más de medio siglo, parecieron deshacerse por ensalmo como las murallas de Jericó al sonar las trompetas» (Benedetto Croce).

Muy pronto se presentó la dura realidad, pero los efectos del estremecimiento que causó el año 1848 en el sistema político europeo no pueden ser juzgados en un breve período ni por la efímera apariencia de sus resultados. El orden político y social establecido por el congreso de Viena había absorbido sin mayores dificultades las perturbaciones de 1830-1831. En 1849, si bien algunos enfoques superficiales pudieran considerar que, sofocada la revolución todo volvió a ser como antes, había originado novedades, aparentemente microscópicas, que se mostraban a los ojos de todos.

Francia se había convertido en una república en la que, al manifestarse ideales y contrastes sociales insospechados, resurgía el bonapartismo. Era difícil prever los resultados del ascenso al poder de Luis Bonaparte, pero la historia, con el privilegio de la mirada retrospectiva, puede indicar cómo se preparaba una convergencia, aunque fuera instrumental, entre la política del futuro Napoleón III y la cuestión de la nacionalidad, que en 1848 había ocupado el centro de la acción y el debate políticos en Alemania y en Italia. El Piamonte había osado hacer la guerra a Austria, y aun derrotado, había conservado su estatuto constitucional en medio de un casi generalizado retorno al absolutismo. El neogüelfismo antes, y más temprano aún el catolicismo liberal en Bélgica y Francia, y luego el endurecimiento de las posiciones tradicionalistas y reaccionarias de Pío IX, rompían el frente de los católicos y replanteaban en términos nuevos el problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sobre todo en Italia, donde el ejercicio del poder temporal del papado y la existencia del Estado pontificio obstaculizaban una solución unitaria. Las novedades no eran menos relevantes en Alemania; aun cuando las discusiones del Parlamento de Frankfurt habían resultado inútiles. Una vez planteada la unificación alemana, con la exclusión de Austria y del imperio de los Habsburgos, la cuestión ya no podía ser eludida. La misma supervivencia del imperio de los Habsburgos estaba amenazada y era necesario encontrar algún remedio, aunque fuera provisional, para hacer frente a las reivindicaciones húngaras, bohemias, eslavas, por no decir también las italianas.

3. Francia: la Segunda república

El inmovilismo y el conservadurismo de Guizot, sumado a la crisis económica, contribuyeron a radicalizar la situación en Francia, y sobre todo en París donde la llamada «campaña de los banquetes» contra el gobierno tuvo gran éxito. Justamente, de la tentativa de Guizot y de Luis Felipe de limitar o impedir estas reuniones, que se habían convertido en verdaderas manifestaciones populares, saltó la chispa de la revolución de febrero de 1848.

Más allá de los episodios aislados, interesa atender a los motivos y el desarrollo de los acontecimientos que, en el curso de pocos meses y, luego, de algunos años, modificaron el equilibrio político y constitucional de Francia, influyendo enormemente sobre el resto de Europa. Los modelos y la memoria históricos parecen tener singular importancia en los cambios ocurridos en Francia: el recuerdo de la Gran Revolución, el Imperio napoleónico, la oposición entre París y las provincias. Casi se puede tener la impresión y la ilusión de que la historia repetía el itinerario que había llevado, a partir de 1792, de la monarquía constitucional a la república, de la república al golpe de Estado del general Bonaparte y al Imperio de Napoleón I. Pero el contexto era muy diferente.

Respecto a los modelos del pasado, que por cierto, en la tradición francesa tenían peso, influencia, dimensiones embarazosas, por calificarlas suavemente, se trataba no sólo de imitar, sino de distinguir. En la invocación y en la rehabilitación de la Gran Revolución y de la era napoleónica, en la exaltación sumaria de esta última, y de las glorias de la *Gran Nación*, había tenido notable importancia, superada la fase legitimista y reaccionaria de la restauración borbónica, la historiografía de la etapa orleanista. Por último, Michelet había exaltado la virtud y la acción del «pueblo». Y en el París de febrero de 1848, el «pueblo» parecía retomar en sus manos la suerte de Francia.

La Comuna, el Hôtel de Ville, se convierten en el centro de la insurrección. Desvanecida la experiencia y la misma vitalidad de las dinastías borbónica y orleánica, la solución republicana se alentaba en el entusiasmo revolucionario, era la única efectivamente practicable. Pero Francia ya había conocido la *Primera república*, degenerada, según la opinión mayoritaria; desarrollada, según la minoría jacobina, en la dictadura de Robespierre. Los protagonistas de la revolución de 1848 tenían bien presentes estos antecedentes cuando, el 24 de febrero, proclamaron la república. Justamente para disipar toda sospecha de propósitos dictatoriales, establecieron que el pueblo, todo el pue-

blo masculino, mayor de 21 años, sería llamado a elegir los representantes de la Nación. Los comicios electorales se convocaron para la segunda mitad de abril. La conquista, o la reconquista, del sufragio universal era un elemento constitutivo, inseparable de los acontecimientos y de la evolución política de Francia. En la euforia de los primeros días de la victoria revolucionaria, el sufragio universal, el voto de los trabajadores de la ciudad y del campo, asociado a la proclamación de la república, se convertía en la garantía de la armonía nacional, de la libertad, de la democracia y de las esperanzas de progreso social.

El problema de las relaciones sociales se presentaba mucho más complejo de lo que podían imaginar los más optimistas. Las evidentes transformaciones de la economía habían desarrollado, ya desde hacía algunos lustros, el debate sobre las condiciones de los trabajadores, la pobreza y la miseria del proletariado urbano. La definición de «pueblo» podía parecer genérica, si no retórica. Sería anacrónico hablar de contraposición entre proletariado industrial y burguesía en París, y en el enfrentamiento social que, de mayo a junio, provocó un giro de los acontecimientos. Se trató, ciertamente, de un episodio de la lucha de clases, pero una contraposición bipolar es también una yuxtaposición gratuita del esquema marxista. El significado social, que tuvo la revolución de febrero está, sin embargo, lúcidamente señalado por un observador contemporáneo de la estatura de Tocqueville. Narra que quedó impresionado por la omnipotencia que, en París, en febrero, había dado la revolución al «pueblo propiamente dicho, o sea a las clases que trabajaban con sus propias manos... Era algo extraordinario y terrible ver en las solas manos de aquellos que no poseían nada, toda esa inmensa ciudad, llena de tantas riquezas, o, más bien, de aquella gran nación, porque gracias a la centralización, quien reina en París, dirige Francia».

El miedo a la anarquía y al socialismo, la defensa de la propiedad, la inquietud por que el «pueblo» de París quisiera imponer su dominio a Francia, se apoderó muy pronto de la clase política y dirigente de la capital y de las provincias, y en gran parte de Francia, todavía predominantemente rural. Después de las primeras concesiones parciales al subproletariado parisiense a través de los *ateliers nationaux* (centros de trabajo destinados a reducir la desocupación) el gobierno provisional, aunque formado por sinceros republicanos, asumió una posición de decidida resistencia. Fue rechazada la solicitud de un Ministerio del Trabajo, que habría significado poner entre las obligaciones del gobierno y del Estado la atención e intervención en las cuestiones sociales, y se creó, en cambio, una comisión, con sede en Luxemburgo, para estudiar el problema. Una disposición favorable a los

trabajadores fue la decisión de fijar un límite a la jornada de trabajo: un máximo de 10 horas en París, y 12 en las provincias.

Pero la mayor preocupación de los representantes liberales en el gobierno republicano era asegurar la legitimidad de la república con unas elecciones generales que le aportaran el consenso de toda Francia, y no sólo el del París revolucionario, a veces desestabilizador. Las elecciones, fijadas en un primer momento para el 9 de abril, fueron luego postergadas al 23 por presiones de los radicales y los socialistas parisienses guiados por Blanqui, conscientes de que las provincias francesas apoyarían a los moderados y no a los revolucionarios. En abril, por lo demás, también en París el gobierno, apoyándose en la guardia nacional, había retomado parcialmente el control de la situación de los barrios burgueses y no prosperaron nuevas tentativas de postergar las elecciones.

Los resultados electorales para la Asamblea Constituyente pusieron fin a la etapa revolucionaria que había durado menos de dos meses y medio. Sobre cerca de novecientos escaños, la izquierda, abierta a las propuestas socialistas, obtuvo menos de un centenar de representantes. La gran mayoría, que el 4 de mayo se apresuró a confirmar y sancionar solemnemente la república, esperaba sobre todo restablecer el orden público, defender los derechos de la propiedad e impedir los desvaríos del proletariado parisiense.

El conflicto se agudizó porque una parte del pueblo de París sentía amenazadas las libertades políticas y las conquistas sociales obtenidas en las primeras semanas de la revolución; veía frustradas sus esperanzas y eludidas las promesas de mejores condiciones de vida, desvanecida la expectativa, acaso inconsciente e ingenua, de renovar las míticas «jornadas» de la revolución de 1789. En este contexto sobreviene el episodio del 15 de mayo. Aprovechando una manifestación en favor de la insurrección de los polacos contra el zar, la multitud invadió la sala de la Asamblea Constituyente en el Palacio Borbón. Los representantes del pueblo, libre y legítimamente elegidos se enfrentaban al peligro de una presión de la calle sobre sus trabajos y sus personas. Era inevitable el recuerdo de los *sans-culotte* movilizados contra los representantes girondinos en la Convención de 1793. Quizás se trató de una verdadera provocación. La reacción de las fuerzas del orden fue, sin embargo, rápida y drástica, y se aprovechó la ocasión para decapitar el movimiento revolucionario y las asociaciones de izquierda. Ahora el gobierno podía pasar, a petición de la asamblea, a la disolución de los *ateliers nationaux*. Con el decreto del 21 de junio, los desocupados, que habían encontrado trabajo y salario en los *ateliers*, debían enrolarse en el ejército si tenían menos de 25 años, los demás, trasladarse de París a las provincias. La insurrección de los trabaja-

dores parisienses fue espontánea y violenta y puso en evidencia una contradicción de clase que tuvo no poca importancia en el pensamiento de Marx y de Engels. A los ojos de los legítimos representantes de la nación, los obreros parisienses que levantaban barricadas y rechazaban las leyes, no eran más que rebeldes. La ciudad estaba aislada, las provincias y las zonas rurales eran hostiles o indiferentes; lo cierto es que no se solidarizaban con la capital. Unánimemente la Asamblea Constituyente decidió aplastar la revuelta y confió la misión a un general de sinceras convicciones democráticas, Cavaignac. Después de tres días de sangrientos combates, las tropas dieron cuenta de la resistencia popular; la represión fue muy dura, hubo ejecuciones y deportaciones.

El entusiasmo de las jornadas de febrero, los intentos de compromiso político entre aspiraciones humanitario-socialistas, y el orden social constituido dejaron su lugar a la división, la desconfianza, y el miedo. La burguesía triunfante condenaba cualquier protesta social como premisa de la anarquía, el subproletariado parisiense y los primeros núcleos de la clase obrera caían presas de la desilusión, de la depresión, de la desconfianza y el odio de clase. Eliminados los partidarios de la república democrática abierta a las demandas sociales, se preparaba el terreno para una salida autoritaria que supiera conciliar la defensa del orden y de la propiedad con el asistencialismo y la adulación del sentimiento nacional-popular.

Una vez domado París, la Asamblea Constituyente terminó su tarea en pocos meses. No eran numerosos los modelos a los cuales referirse para construir una república democrática. Sustancialmente habían dos: la tradición de la Revolución francesa y el ejemplo de la gran democracia norteamericana. De la primera, la constitución republicana tomó el sistema legislativo monocameral; de la segunda, la institución del presidente, elegido directamente por el pueblo, como jefe del Estado y del poder ejecutivo. Se confirmaba el sufragio universal. La inclusión del derecho al trabajo en la Constitución, propuesto por la izquierda, fue rechazado por una amplia mayoría, pero fue reconocido el derecho a la asistencia para los ciudadanos que la necesitaran.

El 10 de diciembre de 1848, se votó para elegir presidente de la república. Carlos Luis Napoleón (1808-1873), hijo de Luis y de Hortensia Beauharnais, resultó electo por una mayoría aplastante; cinco millones cuatrocientos mil votos contra un millón cuatrocientos mil para el general Cavaignac, que había reprimido la revuelta de París; menos de cuatrocientos mil para Ledru Rollin, uno de los fundadores de la república y aún menos para otros candidatos de la extrema izquierda y de la derecha legitimista. La elección sorprendió, y fue considerada

por los «liberales y los republicanos de todo color como la prueba y la medida del analfabetismo político. La clase política había sido batida por un movimiento de opinión irracional; ni siquiera un programa definido, tampoco un hombre verdaderamente conocido, sino una leyenda prendida a un nombre» (M. Agulhon).

4. **Francia: el Segundo Imperio**

De la reacción antisocialista se pasaba a la reacción antirrepublicana. En las elecciones del 13 de mayo de 1849, la mayoría fue reconquistada por los conservadores (quinientos diputados), los republicanos de centro quedaron reducidos a un centenar; la izquierda, los *rojos*, que volvían a tomar el antiguo apelativo de *montagnards*, con doscientos diputados, obtuvieron un resultado relativamente bueno. La elección de Luis Bonaparte había producido una polarización a costa del centro liberal del que había sido y era expresión el diario *National*.

Muchos de los triunfos estaban en las manos del presidente, cuya posición, seguramente ambigua y en algunos casos enigmática, se orientaba hábilmente a consolidar su poder personal conservando el consenso popular.

Las tropas francesas enviadas al Lacio, como contrapeso a la presencia austriaca en Ancona, fueron utilizadas para abatir a la república romana y reponer a Pío IX en Roma con el fin de atraerse a la derecha católica. Una manifestación de la izquierda en París (13 de junio) contra la intervención, fracasó, demostrando que no había más espacio para la agitación callejera.

Sin embargo, contra la mayoría de derechas que, preocupada por la resistencia del electorado de izquierdas, deseaba limitar el sufragio universal (31 de mayo de 1850), Luis Napoleón lo restableció, ganándose y conservando las simpatías populares. La constitución no contemplaba la reelección del presidente; durante los primeros tiempos Luis Napoleón y sus partidarios dedicaron todos sus esfuerzos a cambiar esta disposición, pero no fue posible conseguir que la Cámara alcanzara el *quorum* de tres cuartos de los votos necesarios para la revisión constitucional. El presidente intensificó los preparativos para el golpe de Estado. La fecha prefijada —el 2 de diciembre de 1851— tenía un significado simbólico para la tradición napoleónica: era el aniversario de la coronación de Napoleón I y de la victoria de Austerlitz. Una proclama disolvió la Asamblea legislativa y prometió una nueva constitución que sería ratificada por un plebiscito. El mando del ejército y de la policía estaban en manos de los hombres del presidente y

cualquier intento de resistencia en París fue rápidamente sofocado; pero el golpe chocó en algunas provincias, especialmente en el Mediodía con una oposición, en parte imprevista. Este hecho presentaba, a juicio de algún historiador (Agulhon), un aspecto nuevo y demostraba que los tres años de combatida democracia republicana habían despertado la vida política de las provincias hasta convertirse en una especie de «aprendizaje» para la Tercera república.

La nueva constitución, elaborada con grandes prisas, preveía un jefe del Estado, el príncipe-presidente, nombrado por diez años, del que dependían los ministros; un Consejo de Estado, encargado de elaborar las leyes; una Asamblea legislativa, que debía votarlas, y una segunda Cámara que garantizaba las nuevas instituciones. El 31 de diciembre se proclamó el resultado del plebiscito que aprobaba el golpe de Estado con siete millones y medio para el «sí». Un nuevo plebiscito, realizado al año siguiente en la misma fecha (2 de diciembre de 1852) con un respeto casi supersticioso por la simbología, transformaba al nuevo régimen en el Segundo Imperio y Luis Bonaparte asumía el título de Napoleón III.

La ambigüedad, las vacilaciones y los disimulos de Napoleón III se hicieron evidentes en el tortuoso camino de sus casi veinte años de reinado. Es probable que tuviera alguna inclinación o alguna aspiración que trascendiera la pura ambición de poder, pero su programa era confuso, ya sea porque el personaje no se cuidaba «de poner en orden y armonizar sus distintas aspiraciones», o sea porque temía que, manifestando su pensamiento con claridad, pudiera alejar a gran parte de la opinión pública, sobre todo de los sectores católicos y de la derecha que habían constituido uno de los pilares principales de su poder personal. La atención y la simpatía por las aspiraciones nacionales estaban presentes en aquella genérica ideología que proclamaba la necesidad de satisfacer las legítimas necesidades de los pueblos para prevenir la revolución, pero también eran, más específicamente, al menos en lo que afecta a Italia, una herencia de la obra posterior de Napoleón, que su sobrino había asimilado profundamente. Muy poco de sustancialmente democrático, y mucho menos de liberal, se puede rastrear en su concepción política, no obstante la constante defensa del sufragio universal; pero un rasgo distintivo del régimen bonapartista, que hará escuela en los movimientos populistas y autoritarios de la derecha, es la apelación, no siempre sólo demagógica, a las «masas», al «pueblo», que fácilmente se entrega a posiciones nacionalistas.

En política exterior, Napoleón III imprimió, desde los primeros años, un notable dinamismo a la actuación de Francia, contribuyendo a debilitar la posición de Austria; ayudó al proceso de unificación ita-

liana y, en general, dio el golpe de gracia al sistema nacido en el congreso de Viena, resultando a la postre él mismo víctima de esta operación. Especialmente durante los primeros años, el apoyo de los católicos y de la Iglesia le fue muy útil a la autoridad del emperador. La guerra de Crimea, sangrienta e impopular, se cerró, sin embargo, con el congreso de París (1856) que elevó el prestigio internacional de Francia y de Napoleón III. Contribuyeron a hacer más favorables esos años y a debilitar a la oposición, el fuerte impulso de las obras ferroviarias y del mercado financiero y la bolsa donde surge, junto a los afirmados Rothschild, el banco de negocios de los hermanos Pereire. Una general, aunque lenta, mejora de la calidad de vida de las clases populares acompañó la multiplicación de la actividad económica, que favoreció particularmente a las clases burguesas. La Exposición universal de 1856 puede considerarse la consagración simbólica de esta nueva era. Las elecciones de 1857, con el triunfo de las candidaturas oficiales, confirmaron el consenso popular.

Una distinción ya clásica divide al Imperio de Napoleón III en dos períodos: el primero, autoritario, que siguió al golpe de Estado, con la instauración de un régimen dictatorial con base plebiscitaria, apoyado en la derecha clerical; el segundo, liberal, orientado a la izquierda e inclinado a sostener las aspiraciones nacionales de los pueblos oprimidos. El cambio se habría producido después del atentado de Felice Orsini con la publicación de las cartas del terrorista italiano y la consecuente decisión de sostener las reivindicaciones piamontesas contra Austria con una alianza militar que desembocó en la guerra. Aunque Napoleón trató de echarse atrás, los episodios siguientes implicaron la mutilación del Estado pontificio y la pérdida del apoyo de los clericales franceses. Simultáneamente, Napoleón se convertía al libre cambio, firmando un tratado con Inglaterra que renegaba de la tradicional política proteccionista de Francia, y ahuyentaba del régimen a los conservadores aunque ganaba la simpatía de los librecambistas. Sin embargo, ante esta novedad, hay que observar que hubo una sustancial continuidad en la política interna del gobierno autoritario de Napoleón, al menos hasta 1868; una continuidad que se identificó con los militares, policías y funcionarios burócratas y con un régimen aparentemente fundado en el sufragio universal, pero privado de la libre discusión política; como se ha dicho: una «democracia» sin libertad.

Por otra parte, si bien el emperador consiguió agitar la política europea, no logró las ventajas que se había propuesto y que habrían aumentado su popularidad entre sus conciudadanos. De la intervención en Italia, obtuvo Niza y Saboya, pero no pudo incorporar el nuevo Estado italiano a la órbita francesa. Sus posiciones en la cuestión roma-

na terminaron por alejar, en unos casos, a los clericales; en otros, a los liberales democráticos. La expedición a México para sostener un «Imperio latino» que contraponer a Estados Unidos, se reveló como una aventura fantasiosa y destinada a fracasar apenas este país, terminada la guerra de Secesión, impusiera el retiro de las tropas francesas, y Maximiliano de Habsburgo fuera abandonado a su triste suerte. Luego, la ambigüedad en el delicado período de contraposición entre Austria y Prusia, entre 1866 y 1868, es un signo manifiesto de la desorientación y de la pérdida de la iniciativa del Imperio francés, que no podrá impedir el acercamiento de Austria a Rusia para enfrentar el creciente peligro prusiano.

También en el interior crecían las señales de una pérdida de consenso, no obstante las concesiones al asociacionismo y al mutualismo obreros (1864). En general, los jóvenes y los intelectuales eran opositores. Muchos de ellos habían regresado después de la anmistía de 1859, pero Víctor Hugo y Edgard Quinet se habían negado a abandonar el exilio. En 1860 hizo mucho ruido la suspensión del curso sobre Jesús, que dictaba Renan en el College de France, y la firme negativa de éste a aceptar un nuevo empleo y otras compensaciones que el gobierno estaba dispuesto a ofrecerle.

Por primera vez, en las elecciones de 1863, habían crecido los votos contra el gobierno hasta casi dos millones. A favor habían votado cinco millones trescientos mil electores.

Sólo en 1867 y 1869 se adoptaron algunas medidas reales de liberalización que tendían a transformar el régimen en un sistema representativo bicameral. Por ello, algunos historiadores consideran que solamente en esos últimos años se produjo un cambio liberal, y no desde 1859. Las elecciones de 1869, después de una animada campaña de prensa, que había conseguido expresarse libremente, dieron, sobre más de diez millones de inscritos, cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil votos al gobierno, tres millones trescientos cincuenta mil a la oposición y hubo dos millones ciento noventa mil abstenciones. Napoleón se decidió entonces a iniciar el camino del régimen parlamentario, pero lo hizo con mucha ambigüedad, porque, sobre todo, continuaba vigente la responsabilidad directa del emperador ante «el pueblo francés, al cual, siempre tiene el derecho de apelar». La instancia suprema del régimen bonapartista seguía siendo, por lo tanto, el plebiscito, al cual el emperador recurrió, por última vez, en mayo de 1870. El golpe mortal al Segundo Imperio lo asestaron las tropas prusianas y la derrota militar de Sedan, pero la base del poder personal de Napoleón III ya estaba desgastada dentro del país.

5. **La unidad italiana**

Los orígenes del despertar político y la apertura de la cuestión nacional en Italia aparecen en la época de la Revolución francesa y de Napoleón. En los primeros tiempos de la Restauración, al menos hasta los años treinta, más que en un programa de unificación nacional, los nuevos ideales se expresaron en las demandas liberales y constitucionales de una minoría combativa de intelectuales y de miembros de la nobleza ilustrada o de las clases burguesas. Las reformas del período napoleónico habían adiestrado en el ejercicio de cargos de responsabilidad a una clase dirigente que se volvió particularmente atenta a los problemas de la organización del Estado, el reclutamiento de la burocracia, y la codificación y administración de justicia, conjugando las nuevas experiencias con la herencia del absolutismo ilustrado. Durante la Restauración, las monarquías administrativas y consultivas pudieron aprovechar esta experiencia allí donde quedó abierta alguna perspectiva de reformas moderadas y de salidas constitucionales, y mientras éstas duraron.

Las nuevas generaciones, educadas en el clima romántico y adherentes a las sociedades secretas, y en particular, a la carbonaria, exigieron la democracia de manera más radical y, a veces, confusa y caprichosa. Les faltaba el consenso de los propietarios, que acumulaban la mayor parte de la riqueza y a quienes les resultaba más fácil estar actualizados culturalmente. Sin embargo, existían en Italia numerosos centros urbanos, algunos ricos en tradiciones municipales, con artesanos, tenderos y profesionales; o sea, una pequeña y mediana buguesía urbana más fácilmente accesible a las propuestas más avanzadas. En el campo, en cambio, era difícil la penetración y la difusión de ideas que no fueran filtradas por el clero o los notables.

La polémica cultural, y cautamente política, tuvo gran importancia en la formación de la opinión pública, que luego debía madurar y expresarse en un programa moderado.

Ya en los años veinte, en el entorno cultural lombardo de los *Annali universali di statistica* se trataron los problemas de modernización del Estado y de las transformaciones económicas; temas que retomó en la década siguiente con mayor profundidad, el *Politecnico*, fundado por Carlo Cattaneo (1801-1869). En Toscana, entre 1821 y 1833, la *Antologia* de Giovan Pietro Vieusseux, se convirtió en el portavoz de los intelectuales y, luego de su prohibición, intentó ocupar su lugar el *Progresso delle scienze delle lettere e delle arti*, publicado en Nápoles en los primeros años del reinado de Fernando II de Borbón.

Un verdadero cambio se produjo a partir de los años treinta con la propaganda y la acción de Giuseppe Mazzini (1805-1872), que planteaba explícitamente el problema de la unidad, enlazando en un primer momento con la tradición revolucionaria y jacobina francesa y madurando luego posiciones más autónomas centradas en el problema nacional y la iniciativa popular. Con la «Joven Italia», la lucha política daba un salto cualitativo repudiando las antiguas organizaciones sectarias y prefigurando un verdadero partido democrático y republicano. Desde el exilio, primero en Francia, luego en Suiza y finalmente en Inglaterra, la prédica mazziniana, mantenida incluso en circunstancias muy difíciles y tras sufrir fracasos y dolorosas desilusiones, hizo prosélitos en la juventud más dinámica de muchas regiones de Italia. Se trataba siempre de grupos minoritarios y relativamente aislados, pero en algunas circunstancias, la acción mazziniana tuvo una fuerza propulsora muy superior al número de sus simpatizantes.

Todavía en los comienzos de los años cuarenta, la posibilidad de una solución unitaria parecía totalmente irreal, una «puerilidad, a lo más un sueño de estudiantes de retórica, de poetas adocenados, de políticos de taberna» como escribía el moderado Cesare Balbo en 1843. La fe de Mazzini en su misión tenía una inspiración religiosa que trascendía los objetivos racionalmente realistas, potenciaba las fuerzas y «hacía posible aquello que a los hombres de poca fe parecería imposible».

En cuanto a la búsqueda de soluciones compatibles con estados regionales y monarquías que parecían bien arraigadas se movía el abigarrado frente de los liberales moderados. Su visión del problema nacional tenía muy presentes las razones económicas, entre ellas la necesidad de crear un mercado más amplio, como estaban haciendo los alemanes con el *Zollverein*. En la *Proposta di un programma per l'opinione nazionale italiana*, Massimo D'Azeglio escribía, entre otras cosas, que se necesitaba encontrar los «medios oportunos para quitar del comercio interno los numerosos obstáculos aduaneros, barreras, inspecciones que le hacen tanto daño» y, hacia el final de 1847, se dieron los primeros pasos para formar una liga aduanera italiana. Los objetivos más realistas eran una confederación o una federación de estados. Es comprensible que el éxito haya sonreído al *Primato* (1843), obra de Vincenzo Gioberti (1801-1852) que incluía también al papado, reconociéndole una posición eminente, e indicaba la posibilidad del consenso de los católicos en la construcción de un Estado italiano. Mientras las insurrecciones mazzinianas fracasaban ahogadas en sangre, se extendía la discusión abierta de los moderados y sus propuestas obtenían una acogida creciente. La solución propues-

ta por Gioberti pareció próxima a concretarse cuando el cardenal Mastai Ferretti (1846) fue elegido papa con el nombre de Pío IX. El nuevo pontífice sucedía a Gregorio XVI, que, encerrado en una intransigencia retrógrada, había rechazado la apertura de la Iglesia y de los católicos al programa liberal y social de Lamennais. Pío IX, en cambio, inauguraba su pontificado adoptando una serie de medidas, entre las que eran particularmente relevantes la libertad de prensa y la institución de la guardia cívica y de órganos laicos de gobierno. Si en Italia el entusiasmo fue grande, la sorpresa no fue pequeña en el resto del mundo. Metternich decía que la posibilidad de un papa liberal era «lo único que jamás había entrado en sus previsiones ni sus cálculos». El neogüelfismo, en efecto, permitía la circulación de las ideas liberales y patrióticas entre el clero y en el campo. Sin embargo, la estratificación de la sociedad italiana quitaba al movimiento nacional la capacidad necesaria para una gran movilización popular, de suerte que permaneció esencialmente restringido a las clases cultas y a la burguesía urbana.

En los primeros meses de 1848, mientras la manera en que se afrontaría el núcleo político institucional de la formación de un Estado nacional era incierta, se lograba una acuerdo general sobre dos puntos: 1) el paso del absolutismo a regímenes constitucionales de varios estados; 2) la independencia del extranjero y la consecuente guerra contra Austria por la liberación de Lombardía y el Véneto. En esa dirección avanzó en marzo la insurrección popular de Milán (los Cinco Días, 18-22 de marzo) que provocó la intervención de Carlos Alberto contra Austria. Pero, frente a la guerra, el mito neogüelfo y los intereses contradictorios de los dos mayores estados italianos (los reinos de Cerdeña y de las dos Sicilias) pusieron en evidencia la debilidad del programa moderado. Con la alocución del 29 de abril, Pío IX, apelando a la misión universal del papado, se apartaba de la guerra; poco después también lo hacía Fernando II, rey de las dos Sicilias. La derrota del ejército piamontés en Custoza (julio de 1848) ponía a Carlos Alberto en graves dificultades. La iniciativa pasaba a los demócratas, sobre todo a los mazzinianos, que tenían buena acogida en las ciudades ligurinas y toscanas, sobre todo en Génova y Livorno. Montanelli propuso la elección de una asamblea constituyente italiana. Gioberti, aunque desilusionado por la defección del Papa, siguió confiando en Carlos Alberto y en el ejército piamontés. La situación era extremadamente confusa. En noviembre, el asesinato en Roma del ministro Pellegrino Rossi, indujo a Pío IX a refugiarse en Gaeta, como huésped de Fernando II. Desde Toscana, en donde habían tomado el poder los demócratas, llegó también a Gaeta el gran duque de Tosca-

na, Leopoldo II. La revolución en el reino de las dos Sicilias, debilitada desde el comienzo del separatismo siciliano, se desvanecía después de la represión del 15 de mayo y la reconquista de la rebelde Sicilia. Gioberti, designado presidente del consejo de ministros piamontés, renunció después de las elecciones de febrero que habían llevado a la Cámara a una mayoría democrática. Carlos Alberto trató de romper el aislamiento reiniciando la guerra contra Austria, pero sufrió en Novara una derrota desastrosa (23 de marzo de 1849) y abdicó en favor de Víctor Manuel II. Parecía abrirse el camino a la restauración de los gobiernos absolutos y la afirmación de la ocupación y la hegemonía austriacas.

Sin embargo, la proclamación de la república en Roma, guiada por los demócratas, en particular por Giuseppe Mazzini, de regreso del exilio, y la valiente resistencia de Venecia ante los austriacos, asumieron un valor no sólo ideal, sino también político. Que la república francesa de Luis Bonaparte asuma la misión de reponer a Pío IX en Roma, demuestra, entre otras cosas, que la revolución en Europa terminó verdaderamente en el verano de 1849.

Se trataba de reafirmar en el plano de la política de las potencias, que Francia no tenía intención de dejar las manos libres a Austria, presente en Toscana y las Legaciones (las localidades de Bolonia, Ferrara, Forlì y Ravenna, en Romaña), y que se cerraba definitivamente el ciclo de acontecimientos a los que había contribuido de manera muy importante la revolución parisiense de febrero de 1848.

6. Moderados, demócratas y la consumación de la unidad italiana

El hecho políticamente más relevante y rico en consecuencias de la situación italiana fue la decisión de Víctor Manuel II de confirmar el régimen constitucional. Los electores del reino de Cerdeña respondieron positivamente a la disolución de la Cámara, eligiendo una mayoría moderada que permitió al gobierno de Massimo D'Azeglio, conservador pero convencido partidario del régimen representativo, comenzar la obra de modernización del Piamonte, continuada luego, con mayor lucidez y energía, por Camillo Benso, conde de Cavour. Mientras la dinastía borbónica se apresuraba a retirar las concesiones constitucionales, y el papa y los demás soberanos italianos clausuraban la era de las reformas retomando la política represiva, los Saboya, pese a haber cedido a disgusto, tenían fe en el Estatuto y la clase política subalpina mostraba que sabía valerse de las nuevas disposiciones. La confirmación del Estatuto, que sancionaba la libertad de prensa y de

opinión (aunque limitada para la oposición republicana y mazziniana), convirtió a Turín en la meta adonde confluyeron de todas partes de la península muchos patriotas perseguidos después de las revoluciones de 1848. Estos hechos contribuyeron no poco a señalar al Piamonte como el único Estado italiano que podía asumir la iniciativa de liberar las provincias sujetas al dominio austriaco y unificar Italia bajo un régimen parlamentario y liberal.

Las leyes Siccardi, que tomaron su nombre del guardasellos del gobierno D'Azeglio, aprobadas tras una dura batalla parlamentaria contra los conservadores, demostraron la voluntad de la mayoría de adecuar la legislación piamontesa sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia a la ya existente desde tiempo atrás en otros estados italianos y extranjeros, derogando algunos privilegios eclesiásticos incompatibles con la soberanía y el laicismo del Estado moderno. En efecto, se eliminó el foro eclesiástico y el derecho de asilo en los lugares sagrados y se limitaron las sanciones penales por inobservancia de las festividades religiosas.

A medida que se afirmaban la personalidad y las ideas de Cavour, convencido librecambista y buen conocedor de la sociedad europea, el Piamonte se convertía en un baluarte de las libertades constitucionales italianas y un ejemplo de progreso civil y económico.

La imagen y la realidad del Piamonte cambiaban y la política cavouriana lograba, además del consenso de la burguesía y de la aristocracia más ilustrada, el de «las capas de la burguesía menor de pequeños propietarios y empresarios, de arrendatarios, aparceros y profesionales que hasta entonces habían desconfiado, o habían sido enemigos, del aristocrático progresismo de los moderados» (Romeo).

Las posiciones de Cavour y de Mazzini fueron irreconciliables, pero a la postre, convergentes.

En el simplista esquema del resurgimiento, Cavour representa la razón de Estado, la monarquía saboyana y de diplomacia; Mazzini, la iniciativa popular, la república y la democracia social. Sabemos que cada uno de ellos era mucho más de lo que puede indicar este esquema no del todo infundado.

En efecto, inicialmente el diseño cavouriano no iba más allá de la posibilidad real de convertir a Italia septentrional en un extenso reino para los Saboya, pero luego supo aprovechar a fondo las circunstancias, valiéndose incluso, de distintas maneras, de la presencia y las iniciativas de los demócratas, de Mazzini, de Garibaldi, sorteando obstáculos y demoras y llevando, en 1860, el ejército piamontés al reino de Nápoles. La contribución de Mazzini a la solución unitaria es, desde el principio, fundamental y decisiva; sin renunciar nunca al ideal

republicano supo, cuando fue necesario, subordinarse al objetivo inmediato de la unificación.

Gracias a la participación en la guerra de Crimea (véase § 1 de este capítulo), aun a riesgo de que la intervención piamontesa fuera inútil, Cavour pudo llevar el problema italiano al congreso de París en 1856, pero sólo en 1858, después del atentado de Felice Orsini, el estadista piamontés logró asegurarse el apoyo de Napoleón III para una eventual guerra provocada por Austria. Crear semejante situación era una tarea difícil en un contexto internacional en el que a Gran Bretaña, pese a sus simpatías por el movimiento nacional italiano, le interesaba mantener el equilibrio europeo del que Austria era un pilar indispensable, y la misma opinión pública francesa era reacia a una nueva guerra. La imprudencia y el orgullo herido de Austria favorecieron la maniobra diplomática cavouriana (ultimátum del 23 de abril de 1859). Aun antes de que los austriacos, después de haber perdido Milán, cayeran derrotados nuevamente por las tropas franco-piamontesas en Magenta, en junio de 1859, toda Italia central, desde Toscana hasta Umbría, se sublevó ofreciéndose a Víctor Manuel II. La creación de un reino de Italia central para un príncipe francés, según los acuerdos de Plombières entre Cavour y Napoleón III, se volvía imposible. El emperador decide entonces poner fin a la guerra, concluyendo rápidamente el armisticio de Villafranca, que preveía la cesión únicamente de Lombardía al Piamonte y la restauración de los antiguos regímenes en la Italia central. Desilusionado y entristecido, Cavour dimite; pero, por la acción de los demócratas, tampoco sería fácil la restauración en Italia central (Mazzini postergó la espinosa cuestión republicana).

Los acuerdos diplomáticos fueron superados por la iniciativa popular, y también en Gran Bretaña y en Prusia miraron con buenos ojos la perspectiva de un Estado italiano más amplio y más fuerte, capaz de sustraerse a la influencia de Francia. Napoleón III debió advertir la nueva situación, porque permitió los plebiscitos que incorporaron Toscana y Emilia al estado saboyano y se contentó con adueñarse de Niza y Saboya, también con sanción plebiscitaria.

Sin embargo, Italia se había puesto en movimiento y la iniciativa de los demócratas no se había desvanecido del todo. No sin la complicidad de los poderes constituidos, entre el 5 y el 6 de mayo de 1860, parte de Quarto la expedición de Garibaldi para extender el movimiento de la unificación italiana a Sicilia y a Italia meridional. Desembarca en Marsala y asume la dictadura de la isla en nombre de Víctor Manuel; atraviesa el estrecho de Messina, y de victoria en victoria, llega a las puertas de Nápoles en los primeros días de septiembre. Las estructuras del antiguo reino borbónico cedían de golpe al

tiempo que crecían las preocupaciones de Cavour y de los moderados por el éxito de la iniciativa demócrata. Los cavourianos, en efecto, no habían conseguido oponer ni sumar a la prodigiosa empresa de Garibaldi, un movimiento autónomo en el sur de la península. El éxito monárquico de la operación era seguro dado el prestigio de Víctor Manuel II y los acuerdos más o menos explícitos entre Garibaldi y el soberano. Pero existía la posibilidad, considerada un grave peligro por Cavour y por los liberales, de que la unidad de Italia fuera obra de las fuerzas democráticas y revolucionarias, hipotecando a su favor el desarrollo institucional. En el plano diplomático, el peligro inmediato era el asalto al papado para conquistar Roma, que los demócratas consideraban objetivo inmediato e irrenunciable para el nacimiento de la nueva Italia. Francia en primer lugar, Austria y las otras potencias europeas habrían podido oponerse a la conquista de Roma, poniendo en peligro el éxito de la construcción, todavía frágil, del nuevo reino de Italia e inaugurando una nueva etapa de inestabilidad revolucionaria. Tales fueron, al menos, las razones que adujo Cavour para justificar frente a la opinión internacional la intervención directa del ejército piamontés que, en septiembre, atravesó el Estado pontificio y penetró en el reino de Nápoles, contribuyendo a desbaratar en Volturno la última resistencia borbónica; pero ganando también la iniciativa a los demócratas, obligados a aceptar el inmediato plebiscito de anexión y a renunciar a la marcha sobre Roma.

La divergencia entre demócratas y moderados era fuerte y real. No se puede hablar, si no es en una visión muy generosa «de superior armonía entre las dos grandes fuerzas del resurgimiento, cooperando de distinta manera al mismo fin, según las viejas concepciones de que el planteo mazziniano se "superaba" en el de Cavour. En realidad, hasta el final, la alternativa republicana quedó como solución posible y el uso que de ella pudo hacer Cavour durante la crisis tuvo un margen altísimo de riesgo político; mientras queda claro que en la lucha hubo un vencedor y un vencido, si el primero se llamó Cavour, el otro fue Garibaldi, y con él Mazzini. También queda claro que la victoria tuvo consecuencias importantes en la vida moral y política de la nueva Italia, sobre la que pesó largo tiempo (y quizás todavía pesa) la oposición inicial de fuerzas que le dieron origen» (Romeo).

Con la anexión de Sicilia y de las provincias meridionales, nacía el reino de Italia, pero, significativamente, el rey de Italia conservaba el nombre de Víctor Manuel II para subrayar la continuidad política y dinástica. Se pudo luego recriminar la «conquista piamontesa» y el absolutismo centralizador para explicar el surgimiento del bandolerismo en el mediodía de Italia, y los problemas no resueltos de la unificación.

En efecto, habían fracasado todas las propuestas de organización federal y autonómicas regionales que especialmente los demócratas (entre ellos hay que destacar a Carlo Cattaneo), pero también los moderados (por ejemplo, Minghetti), habían sostenido. Pero también fue la fragilidad económica, política y social del Sur la que, para mantener la unidad recién conquistada, exigió medidas excepcionales y centralistas.

En ese entonces no formaban parte del reino el Véneto y Roma, con el Lacio, y esta ausencia era sentida como una mutilación. La cuestión romana era particularmente delicada por sus implicaciones internas e internacionales. Los demócratas insistían en la conquista de la ciudad, y el mismo Cavour no podía sustraerse a la expectativa general y a la obligación moral de que Roma fuera solemnemente proclamada capital de Italia. Antes de morir (junio de 1861) Cavour formuló su propuesta de «Una Iglesia libre en un Estado libre», que puede considerarse uno de los puntos más altos de la madurez de su pensamiento liberal y de la moderna concepción de la relación entre el Estado y la Iglesia católica. Renunciando al poder temporal, la Iglesia, con su independencia y su libertad garantizadas, habría podido ejercer y exaltar su función espiritual fundamental.

No era previsible que la propuesta fuera rápidamente aceptada. El rechazo de Pío IX permitía al contingente francés permanecer en Roma como garante de lo que quedaba del Estado pontificio. En este contexto se enmarca el intento garibaldino de marchar sobre Roma partiendo de Sicilia con un grupo de voluntarios, y la esperanza de repetir la afortunada empresa de 1860. Para evitar un enfrentamiento con Francia, el gobierno de Rattazzi, que durante algún tiempo había mantenido una actitud ambigua, intervino con el ejército, derrotando a los voluntarios garibaldinos en Aspromonte y arrestando al mismo Garibaldi, herido en un pie. El suceso causó gran conmoción y permitió a Minghetti firmar luego con Francia la *Convención de Septiembre* (1864). Napoleón III retiraba sus tropas de Roma, Italia transfería de Turín a Florencia la capital y se comprometía a no atacar al Estado pontificio. El acuerdo no era claro porque Italia no renunciaba formalmente a Roma.

La guerra entre Austria y Prusia de 1866 ofrecía, entre tanto, la ocasión de obtener el Véneto. Italia aliada a los prusianos, efectuó operaciones militares desafortunadas y poco brillantes (derrota de Custoza, hundimiento de dos naves de guerra en Lissa) y sufrió la humillación de recibir el Véneto de Napoleón III, que, a su vez, le había cedido Austria por el tratado de paz de Viena (3 de octubre de 1866). En el interior se sintieron las repercusiones de estos hechos, debilitando a la derecha y conduciendo al nuevo gobierno de Rattazzi, que

gozaba de las simpatías de la izquierda. Una vez más, de manera igualmente ambigua, Garibaldi tuvo cierta libertad de acción para intentar la conquista de Roma. Se violaba así la Convención de Septiembre, y Napoleón III envió nuevamente un cuerpo expedicionario que, armado con modernos fusiles de retrocarga, dio cuenta en Montana de los voluntarios garibaldinos que ya habían vencido a las milicias pontificias. Después de estos episodios, las relaciones entre Italia y Francia se volvieron pésimas y Napoleón III se encontró aislado contra el ataque de la Prusia de Bismarck en 1870. El gobierno italiano aprovechó entonces la situación para ocupar finalmente Roma (Puerta Pía, 20 de septiembre de 1870).

Frente a la confirmada intransigencia y hostilidad del papado, que negaba su reconocimiento al reino de Italia y denunciaba la toma de Roma como una usurpación violenta, el Estado italiano reguló las relaciones con la Santa Sede con un acto unilateral, la *Ley de las garantías* (mayo de 1871). Inspirada en los principios enunciados por Cavour, la ley renunciaba a los antiguos derechos jurisdiccionales, declaraba sagrada e inviolable la persona del pontífice, tutelaba su libertad e independencia, garantizaba las inmunidades diplomáticas, concedía una dotación anual y la posesión, con privilegio de extraterritorialidad, de los palacios del Vaticano, Letrán y la villa de Castelgandolfo.

Entre 1860 y 1876, Italia fue gobernada por hombres de la derecha moderada, herederos de Cavour, que afrontaron con decisión los primeros problemas planteados por la rápida, y en cierto modo imprevista, unificación. Se reprimió el bandolerismo meridional, que expresaba dramáticamente las dificultades de la integración nacional. Se dio un gran impulso a las obras ferroviarias, que eran el medio más seguro para poner en marcha un mercado nacional. Se adoptó una política económica librecambista, que justamente por esos años triunfaba también en el plano internacional y respondía a los intereses agrarios de la clase dirigente italiana. Se unificó el sistema fiscal, judicial y administrativo, extediendo sustancialmente a todo el país las instituciones piamontesas. Era la solución más simple y más rápida y, en cierto modo, obligada por la precariedad de la situación y porque sólo el Piamonte había gozado hasta entonces de garantías constitucionales. Especialmente dura fue la presión fiscal que, si no perdonaba a los propietarios inmobiliarios, gravaba fuertemente algunos consumos esenciales. Un símbolo de la nueva fiscalidad fue el odiado impuesto sobre la molienda de cereales. Los hombres del gobierno de la derecha cedían poco o nada en aras de la popularidad. Operaban con un sentido casi religioso de la misión a cumplir o, si se prefiere, con un espíritu jacobino por salvar la frágil unidad nacional que veían ace-

chada y amenazada a diestra y siniestra por el papado, por el clero, por los católicos intransigentes, por los bandoleros, por los legitimistas, por los republicanos y por los socialistas. No se puede negar la eficacia de su obra de gobierno, aun cuando las libertades políticas fueran a veces limitadas y el descontento y el malestar se difundieran en el país.

7. La unidad alemana

La Confederación nacida en el congreso de Viena es el marco político y territorial que abarca la historia de Alemania. Se había confiado la presidencia a Austria, pero de hecho se reconocía a Prusia una corresponsabilidad en la dirección de los asuntos, adecuada al poder que el Estado de los Hohenzollern había conquistado y que recientemente había sido confirmada por el renacimiento nacional y la lucha contra Napoleón. La adquisición de las provincias renanas y de Westfalia era no sólo el reconocimiento de la preeminencia alcanzada en el área alemana, sino también un reacomodamiento de la posición cultural y estratégica hasta entonces demasiado desequilibrada hacia oriente. Hay que recordar, sin embargo, que el Estado prusiano estaba dividido en dos partes, entre las cuales Hannover y Hesse eran independientes (cfr. mapa adjunto). Esta división no parecía extraordinaria dada la fragmentación que por entonces existía en Alemania y que, con alguna reducción respecto a las precedentes, ratificaba la organización confederal, pero es evidente que implicaba derechos de paso y que con tan poderoso vecino las perspectivas de supervivencia de los dos estados menores no debían ser tranquilizadoras. Sin embargo, Hannover y Hesse sólo perdieron su independencia y pasaron a formar parte de Prusia en 1866.

Entre tanto, los problemas eran otros; en primer lugar, el de la relación entre los estados alemanes y Prusia dentro del ordenamiento de la política de Viena o, si se prefiere, del sistema de Metternich.

Después de 1818, la presión austriaca se impone claramente pese a la opción moderadamente constitucional de algunos estados (Baden, Württemberg), debida a la tradición de representación clasista más que a las nuevas ideas liberales. Tras los decretos de Carlsbad (1819) de Federico Guillermo III de Prusia, que reforzaban la censura de prensa y el control sobre la universidad, se desvanece totalmente la promesa de una constitución insinuada a sus súbditos durante la guerra de liberación contra los franceses. En 1819 se perdieron las esperanzas de que la ola reformadora inaugurada después de 1807 y con-

ducida por hombres como Stein, Scharnhorst y Humboldt, pudiera conseguir instituciones liberales.

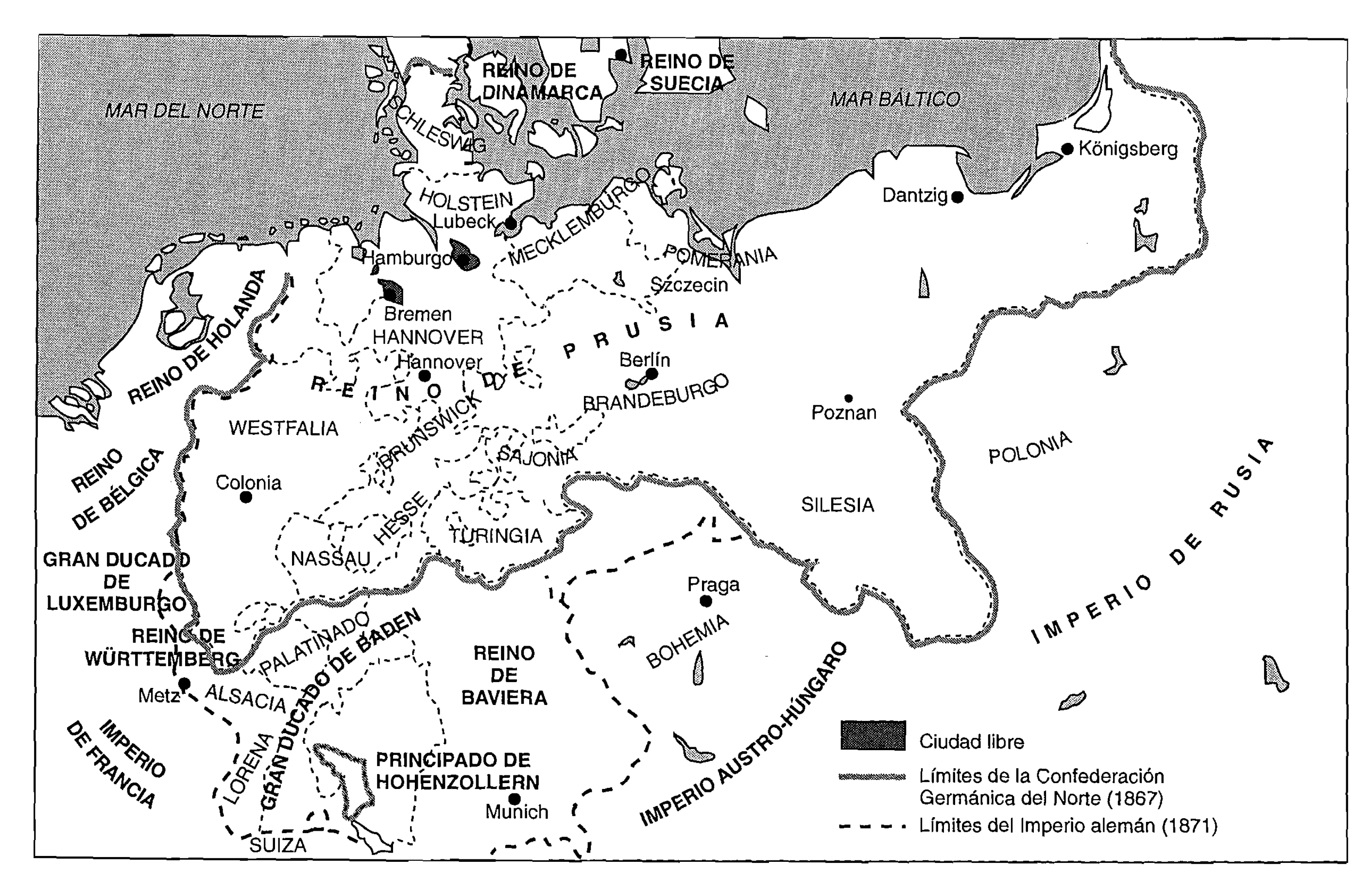
En los años siguientes, la evolución del Estado administrativo sólo incorporó, con funciones puramente consultivas, los consejos provinciales, renovados cada tres años, y, después de la revolución de julio en Francia y sus repercusiones en Polonia, dio un vuelco claramente reaccionario. La manifestación liberal de Hambach, en el Palatinado bávaro (1832) alarmó a los gobiernos, decididos a rechazar cualquier concesión, y provocó nuevas restricciones a la libertad en casi toda Alemania. En Prusia las autoridades prohibieron las obras de Heine, de tendencia liberal, y en Hannover destituyeron a siete profesores de la universidad de Gotinga.

Sólo en los comienzos de los años cuarenta, con el ascenso al trono de Federico Guillermo IV, alguien pudo engañarse y pensar, animado por las ambiguas y aparentemente inciertas ideas del monarca, que pudieran abrirse nuevamente perspectivas de renovación política e institucional. El gobierno mitigó la censura, llamó a Boyen al ministerio de Guerra, concedió mayor libertad a los profesores de la universidad de Berlín, y analizó algunos proyectos constitucionales. Pero actuaba muy lentamente, y muy pronto quedó claro que la monarquía por derecho divino seguía siendo el concepto político fundamental de Federico Guillermo IV, y que su absolutismo sólo le permitía hacer espontáneas concesiones paternalistas, incluso en sus lances románticos y en actos contradictorios que luego se revelaron de gravedad patológica. Tras mucho estudio y muchas esperanzas, la reforma se redujo a la convocatoria, en 1847, de una dieta unificada, apenas una reunión de representantes de los consejos consultivos.

La dieta se inauguró justamente cuando estallaba la rebelión de las patatas, sólo una coincidencia que denunciaba, sin embargo, el malestar social que reinaba en Alemania en aquel año, como también ocurría en muchos países de Europa y al que generalmente se considera uno de los componentes importantes de los motines de 1848.

Si en la conquista de las libertades políticas, Alemania y Prusia no habían avanzado demasiado, en el plano económico consiguieron algunos progresos decisivos que también terminaron por tener peso político.

Hablamos de la unión aduanera, el *Zollverein*, que Prusia promovió desde 1818, pero que sólo tuvo excelentes resultados a partir de 1834. Se creó un área económica unificada según los principios del libre cambio, a la cual se adhirieron casi todos los estados alemanes, pequeños y medianos, sumando una población de veintiséis millones de habitantes. Afuera quedaban Austria y su Imperio y, al principio no se adhirieron algunos estados de Alemania oriental (Hannover, Ol-



La formación del Imperio alemán (1864-1871).

demburg, Brunswick), que ingresaron más tarde, entre 1844 y 1851, para aprovechar las ventajas que ya eran manifiestas. El caso de Austria, en cambio, se vincula con los acontecimientos de 1848, cuando, ya caído definitivamente Metternich, los nuevos gobernantes austriacos, Schwarzenberg y, para la economía, Bruck, se percataron de la gran importancia que la unión podía tener para el despegue económico y político del Imperio habsburgués.

La revolución de 1848 en Alemania ponía en evidencia dos cuestiones que se entrecruzaban y superponían y eran particularmente delicadas para las relaciones entre Austria y Prusia, las dos mayores potencias del área germana.

Las revueltas populares y la distancia que separaba al ejército de Berlín habían impulsado al rey a formar un gobierno dirigido por Camphausen, jefe del partido liberal de Renania y convocar a una asamblea nacional, elegida por sufragio universal masculino, cuya primera tarea sería redactar la constitución del Estado prusiano.

Por otra parte, la asamblea panalemana reunida en Frankfurt se movía entre semejantes o mayores dificultades. Los nudos comenzaron a desatarse más o menos dramáticamente entre finales de octubre y mediados de noviembre. La autoridad de los Habsburgos fue restaurada por la fuerza en Viena después de un bombardeo; las tropas prusianas entraron en Berlín y se intimó a los diputados a abandonar la asamblea en quince minutos. Si embargo, no hay que olvidar que, pese al golpe de Estado, no se volvió formalmente al régimen absoluto o a la monarquía administrativa en Prusia ni en Austria. En efecto, el 5 de diciembre, Federico Guillermo IV, cediendo de mala gana a las sugerencias de sus consejeros, concedió una constitución, por gracia soberana. Razones de política interna y exterior aconsejaban esa decisión. Se trataba de no defraudar completamente las aspiraciones de la clase media profesional, comercial e intelectual, presente y activa en las provincias occidentales, en los centros urbanos y, particularmente, en Berlín. Frente a Alemania se trataba también de diferenciarse de Austria, con un color liberal y constitucional más marcado para poder asumir el liderazgo del movimiento por la unidad nacional.

Como se verá, no obstante las divergencias que surgieron, sobre todo en la cuestión del ordenamiento del ejército y de los presupuestos militares, la presencia de un parlamento, aunque con representación limitada y escaso poder, contribuyó a dar mayor fuerza y consenso a la desprejuiciada política de Bismarck.

8. La iniciativa prusiana y la política de Bismarck

En 1849, la situación no había madurado lo suficiente para que Prusia tomara la iniciativa de la unificación alemana. Se oponían las preocupaciones y las dudas de Federico Guillermo IV y las propuestas de un parlamento como el de Frankfurt, viciado ante los ojos de los conservadores por su origen democrático. El parlamento de Frankfurt, convocado para dar a Alemania un nuevo orden institucional que ocupase el lugar de la vieja confederación, prosiguió sus tareas aun después del fracaso y del agotamiento del impulso revolucionario en Viena y en Berlín. Aprobó un proyecto de constitución federal y, tras muchas discusiones entre los que fueron llamados «grandes alemanes», favorables a incluir a Austria en el nuevo Estado, y los «pequeños alemanes», que deseaban excluirla, decidió, ajustadamente, la exclusión de los Habsburgos. En abril de 1849, la asamblea ofreció la corona del Imperio al rey de Prusia, que la rechazó. Federico Guillermo IV se consideraba rey por derecho divino y no quería aceptar una designación que emanaba de una asamblea elegida por sufragio popular. Sí, en cambio, habría agradecido el reconocimiento de los príncipes alemanes y, en ese momento también la aprobación de Austria, con la cual deseaba una alianza perpetua y plena de cooperación. Después de la negativa del rey de Prusia, mientras se dispersaba la dieta de Frankfurt, despojada ya de toda autoridad y prestigio, el gobierno prusiano de Radowitz elaboraba un plan alternativo fundado en la unión confederal con Hannover y Sajonia y en el apoyo de los liberales moderados. Se haría un congreso en Erfurt para establecer la nueva unión alemana. El plan del católico Radowitz tropezaba con dificultades en la misma Prusia en los círculos protestantes y más conservadores; pero el golpe decisivo le llegó de la Austria de Schwartzenberg que, vencida la revolución en el Imperio y triunfante sobre los piamonteses en Italia, buscaba ahora recobrar su posición preeminente en Alemania. La ocasión se presentó cuando el elector de Hesse, cuyo territorio dividía en dos partes el Estado prusiano, pidió el apoyo de Austria y de la dieta de la antigua confederación metternichiana nunca abolida formalmente. Cruzaban Hesse grandes corredores militares controlados por Prusia.

En septiembre de 1850, tropas prusianas y austriacas se encontraron frente a frente en el electorado en una situación de grave tensión. Una vez más, el rey de Prusia no quiso llevar a fondo la lucha contra Austria por la hegemonía en Alemania. En noviembre, en Olmütz se llegó a un acuerdo que sellaba el fracaso, al menos momentáneo, de la política prusiana de unión alemana y el triunfo de Aus-

tria, que imponía el retorno a las normas de la antigua confederación cuya presidencia ocupaba. Por ello, en la historiografía nacional alemana ese acuerdo es conocido como el ultraje o la humillación de Olmütz. Austria triunfaba en el plano político; en el económico, se le negaba el ingreso al *Zollverein*, vedando al Imperio habsburgués un área de expansión comercial e industrial. A Prusia, en cambio, y a toda Alemania, la liga aduanera, les permitía, a partir de 1850, un gran desarrollo del que la extensión de la red ferroviaria es uno de los datos más significativos. Aun persistiendo la fragmentación política, se intensificaban los vínculos entre los distintos territorios de alemanes, acelerando el proceso de unificación nacional y haciendo que el éxito político de Austria fuera efímero, si no directamente contraproducente.

Sin embargo, como consecuencia de los éxitos de la revolución de 1848 y del golpe de Olmütz, la lucha política y nacional en Alemania se paralizó durante casi una década. El desencanto, la debilidad de los grupos radicales y liberales, amortiguaban el empuje de los ideales y reforzaban las tendencias favorables a una política realista y de poder.

La guerra de Crimea puso una vez más en evidencia las dificultades para coordinar eficazmente la política de la vieja confederación, pero la neutralidad, desde distintas perspectivas, de Prusia y Austria, evitó manifestaciones espectaculares del conflicto latente.

La situación comenzó a agitarse nuevamente en 1859, tras la iniciativa de Cavour y la implicación de Napoleón III en el conflicto austro-piamontés. La opinión pública alemana estaba dividida: algunos simpatizaban con el movimiento nacional italiano, considerado como un ejemplo y un precedente para la unificación alemana que se conseguiría dejando fuera a Austria; otros agitaban el peligro de Francia, tradicional enemiga sobre el Rin, y asupiciaban la solidaridad con Austria, retomando el diseño de la «gran Alemania». De hecho, Viena no consiguió, como hubiera deseado, envolver a Berlín en la guerra, y la derrota y pérdida de prestigio de Austria, dieron ventaja a Prusia, que aparecía cada vez más como la única potencia capaz de llevar adelante la unidad alemana. Un paso importante hacia la movilización de la opinión pública a favor de Prusia y de la solución «pequeño-alemana» fue la creación del Deutscher Nationalverein (el movimiento de la Unión nacional alemana), en septiembre de 1859, que se extendió a todos los estados de Alemania, pero sobre todo en los septentrionales y centrales.

Al Nationalverein se contrapone, en 1862 el Reformverein (Unión por la reforma), que implantado especialmente en los estados meridionales, en la católica Baviera y también en Sajonia, territorios más

directamente influidos por Austria, preocupados por la hegemonía prusiana y, sobre todo, animados por la esperanza de salvar la autonomía de los estados intermedios constituyendo una tercera Alemania capaz de mediar entre las dos grandes potencias: Austria y Prusia.

Estos contrastes podían originar complicaciones internacionales, pero fueron decisiva y brillantemente superadas por la habilidad y la falta de prejuicios de Bismarck, que desde 1862 dirigía el gobierno prusiano.

En las relaciones con el Parlamento, Bismarck había heredado una situación difícil, sobre todo a causa de las divergencias con los liberales sobre la posición constitucional del ejército. Hasta la guerra de Crimea, los generales y el estado mayor urgían que se reforzara el ejército. El debate se concentró principalmente en la demanda de elevar el tiempo de servicio de dos a tres años y en el destino que se daría a la milicia territorial. En 1857, al agravarse su enfermedad mental, Guillermo IV fue obligado a retirarse y se nombró regente a su hermano, que a la muerte del rey (1861) ascendió al trono con el nombre de Guillermo I. En este período las fuerzas liberales prusianas hicieron un extremo esfuerzo para someter la organización militar y la administración del Estado al régimen parlamentario. El proyecto fracasó ante la resistencia del soberano y de la casta militar abroquelada en torno al núcleo nobiliario representado por los Junker. Bismarck, con los triunfos conseguidos en la política de unificación y de grandeza nacional, logró dividir a la oposición y obtener que el Parlamento legitimara las medidas anticonstitucionales de los gobiernos precedentes y del suyo.

La tensión creció en 1861, cuando el partido progresista, recientemente fundado, logró un éxito imprevisto en las elecciones, pese a un sistema electoral que privilegiaba el voto de los contribuyentes más ricos. Ni siquiera la elección del Parlamento y los nuevos comicios de 1862 atenuaron la oposición del Parlamento a la reforma militar y a la aprobación del presupuesto. Se dibujaba una crisis institucional. En esas circunstancias, Bismarck fue llamado al gobierno. Pertenecía a la tradicional nobleza terrateniente prusiana (Junker) y tenía larga experiencia política y diplomática. Había participado en la dieta de 1847, expresando sus opiniones conservadoras, y luego había sido embajador ante Petrogrado y París.

Desde su primera declaración a la comisión de finanzas del Parlamento, en septiembre de 1861 expresó sus propósitos: «Alemania no mira al liberalismo de Prusia, sino a su poder... Prusia debe conservar su poder, por el momento favorable, que muchas veces se ha dejado escapar... Los grandes problemas de nuestro tiempo no se resuelven

con discursos y decisiones mayoritarias —éste fue el error de 1848-1849— sino con el hierro y el fuego.»

Estas declaraciones, y el acuerdo con Rusia para la represión en Polonia en 1863 no podían, por cierto, atraerle las simpatías de los liberales y del Parlamento prusiano, pero mientras llevaba adelante la reforma del ejército y obstaculizaba los esfuerzos de Austria para reformar la Confederación alemana, dejaba entrever a la población la posibilidad de elegir una representación nacional con la participación directa de todo el país. Su instrumentación del sentimiento nacional y de la aspiración a la potencia daría cuenta muy pronto de las resistencias liberales y parlamentarias. La cuestión de los ducados daneses del Schleswig-Holstein le ofreció la primera ocasión para llevar a la práctica sus concepciones políticas. Sin entrar en el fondo del complicado problema, bastará decir que en este caso, al reivindicar la pertenencia de los ducados a la Confederación alemana e iniciar la guerra contra Dinamarca, Bismarck, consciente de las dificultades de la situación internacional y de la desconfianza de Inglaterra, se preocupó por llegar a un acuerdo con Austria. El rápido éxito de las tropas prusianas debilitó a la oposición parlamentaria y Bismarck lo aprovechó inmediatamente para obtener un apoyo más amplio a su política nacional sin renunciar a ninguna de las prerrogativas de la corona y del ejército. Sobre esta base, consideraba que un acuerdo con el Parlamento prusiano no sólo era posible, sino aconsejable. No hay que olvidar que el ala más intransigente del conservadurismo, encabezada por Manteuffel, consideraba que una guerra victoriosa debía desembocar en el final del régimen constitucional y en un regreso pleno al absolutismo monárquico.

Prusia reivindicó la anexión de Schleswig-Holstein poniendo a Austria, que no limitaba ni tenía intereses directos con esos territorios en una incómoda situación. Ceder a la exigencia prusiana habría significado, en efecto, renunciar a su intervención y a su presencia en Alemania septentrional, reconociendo implícitamente la iniciativa de Prusia en la unificación alemana.

Se llegó a un acuerdo, anexionando Holstein a Austria y Schleswig a Prusia; pero, entretanto, Bismarck preparaba militar y diplomáticamente la guerra. Se trataba de aislar a Austria y, sobre todo, de evitar la intervención en los asuntos alemanes del «concierto de las potencias europeas», interesado en no romper el antiguo equilibrio. Éste es un rasgo típico de la diplomacia de Bismarck en el primer período (al que siguió, tras la victoriosa guerra contra Francia de 1871, el regreso a una política de concertación europea, apoyada esta vez en el reconocimiento del papel central asumido por la Alemania unificada).

Entre tanto, necesitaba actuar con extrema rapidez. Concluida la alianza con Italia, Bismarck, para procurarse el apoyo de la opinión pública alemana y de los liberales y hundir la vieja confederación, propuso que se reuniera un parlamento alemán elegido por sufragio universal. Pero la decisión estaba supeditada a la suerte de las armas: Francisco José y los ministros austriacos pensaban todavía poder restablecer su declinante prestigio en Alemania con una victoria militar. El resultado fue el éxito decisivo del ejército prusiano el 3 de julio de 1866 en la batalla de Sadowa (Bohemia), que le abrió el camino hacia Viena.

Bismarck aprovechó la victoria con moderación (paz de Praga del 23 de agosto de 1866). Austria fue excluida de la Confederación alemana. Los ex ducados daneses, (Schleswig y Holstein), Hannover, el Hesse-Kassel y la ciudad libre de Frankfurt fueron incorporados a Prusia. Los demás estados, incluso los que se habían alineado junto a Austria no sufrieron amputaciones territoriales, pero debieron pagar una indemnización de guerra y someter sus tropas al mando prusiano en caso de guerra fuera de Alemania. Se constituyó una Confederación de Alemania del Norte, en la que Prusia ejercía la presidencia y el control de la política exterior y del ejército. El Parlamento confederal se elegía por sufragio universal y los Estados confederados estaban representados en un consejo de 43 miembros, de los que 17 eran nombrados por Prusia. Al fin, Bismarck podía resolver el problema constitucional prusiano.

El nuevo Parlamento, elegido justamente en los primeros días de julio de 1866, aun antes de que fuera conocida la victoria de Sadowa, aceptaba, en el nuevo clima político y de exaltación nacional, un compromiso que sustancialmente recompensaba la intransigencia de la corona y de los militares, imponiendo una pesada hipoteca al futuro de la democracia alemana. El gobierno admitía haber violado la constitución ejerciendo sus funciones sin que el Parlamento hubiera aprobado el balance; por su parte, el Parlamento legitimaba los hechos sin obtener a cambio ninguna garantía para el futuro. De cualquier manera, en adelante el debate y la aprobación de estos problemas pasaban del Parlamento prusiano al confederal. Sea como fuere, Bismarck había logrado dividir a la oposición liberal y progresista y crear un partido nacional liberal favorable a su política. De esta manera, el canciller enlazaba al nacionalismo popular alemán con la dinastía de los Hohenzollern y el militarismo prusiano.

El mayor obstáculo para la definitiva unidad alemana era, entonces, el veto de Napoleón III a la expansión de Prusia más allá de la línea del río Main, que separaba el norte del sur de Alemania. Napoleón III, en efecto, imaginaba tener cierta influencia sobre Baviera,

Württemberg, Baden y Hesse meridional que habían quedado fuera de los límites de la nueva Confederación alemana. Tampoco Bismarck estaba interesado en la unidad inmediata, pero se aprestaba a aprovechar o preparar circunstancias favorables para ello. De esta situación nace el incidente, o la provocación, de Ems, que llevó a la guerra, a la derrota de Napoleón III en Sedan, puso fin al Segundo Imperio en Francia y dio a la luz el Reich bismarckiano.

El origen del incidente que montó Bismarck para lograr sus propósitos fue la candidatura de un príncipe Hohenzollern a la corona de España, donde la reina Isabel II había sido destronada por una revolución. La opinión pública francesa y Napoleón III, ya preocupados por los éxitos prusianos y la eventual defensa de los límites orientales, consideraban sumamente peligrosa la presencia de un monarca de la misma dinastía en la frontera española. El rey de Prusia, que pasaba sus vacaciones en los baños de Ems aceptó el retiro de la candidatura, pero no quiso admitir los compromisos para el futuro solicitados por el embajador de Napoleón III. Bismarck manipuló los despachos provenientes de Ems, dándoles un tono provocador que suscitó una oleada de de emoción e indignación en París y la declaración de guerra de Napoleón III. La precipitación con que el gobierno francés recurrió a la guerra todavía no está totalmente aclarada, aunque hay que tener en cuenta que el formidable crecimiento de Prusia y la desilusión de Napoleón por no haber logrado alguna compensación sobre el Rin (habría deseado Luxemburgo) fueron las premisas políticas y psicológicas del conflicto.

Una vez más el ejército alemán actuó con fulmínea eficacia. Derrotó a los franceses en Sedan capturando al mismo Napoleón (3 de septiembre de 1870). En Versalles, el 18 de enero de 1871, Guillermo I fue proclamado emperador del nuevo Reich alemán.

Thiers, triunfador en las elecciones francesas de febrero de 1871 y jefe del nuevo gobierno firmó la paz de Frankfurt el 10 de mayo; Francia cedía Alsacia y Lorena y se comprometía al pago de una indemnización de 5.000 millones de francos.

La victoria alemana fue también una de las causas de la insurrección de París, que durante algunos días tuvo un gobierno popular y socializante (la Comuna, marzo-mayo de 1871), juzgado, en las evaluaciones políticas e historiográficas de algunos, como el último acto de la tradición patriótica y jacobina heredada de la Revolución francesa; y considerado por otros el primer experimento de un régimen socialista. La reaparición de la revuelta social, la violencia y el terror impuesto por los comuneros, y luego la despiadada represión del gobierno de Thiers, apoyado por el consenso de la mayoría de los países, hostiles a la orgullosa e inquieta capital, dejaban una viva inquietud

en las clases dirigentes y en la opinión pública europea al terminar el período.

9. La confianza en la era positiva y las inquietudes culturales

En general, el epílogo belicoso y cruento de los años sesenta no había quebrado la fe en el comienzo de una era «positiva» y en el progreso de la humanidad, que había comenzado a propagarse y a imponerse antes aun de los años cincuenta y caracterizaría a la cultura más difundida y acreditada, al menos hasta los primeros años del siglo XX. En los veinte años que transcurren entre 1850 y 1870, ya habían madurado en la cultura y en la mayoría de la opinión pública europeas ideas, concepciones y enfoques del mundo que, con variedad de acentos, inspiraciones y expectativas, adquirían conciencia de las transformaciones en curso y compartían un sustancial optimismo justificado por el nuevo prestigio de la «ciencia». Del positivismo de Comte, al materialismo dialéctico y el socialismo de Marx —el *Manifiesto comunista* había sido publicado en 1848, y el primer volumen de *El Capital*, en 1867— las nuevas teorías aspiraban, sobre todo, a ser «objetivas», «científicas».

El prestigio de la «ciencia» había crecido enormemente gracias a las investigaciones y los resultados conseguidos en el campo de la física, la química y la biología. Los estudios de la termodinámica, la electricidad y la luz abrían nuevas perspectivas a la concepción del mundo. Fue de particular importancia la elaboración del concepto de energía. La física se presentaba entonces como «el estudio de un único proceso dinámico de la naturaleza, en cuyo ámbito, los fenómenos mecánicos, eléctricos, térmicos y luminosos eran manifestaciones paralelas de un solo dualismo: materia y energía».

Probablemente las investigaciones y descubrimientos de Pasteur repercutieron más inmediata y eficazmente en la opinión pública, por su amplia divulgación y por su rápida aplicación práctica: por ejemplo, la «pasteurización», que impedía la fermentación permitiendo conservar durante mayor tiempo algunos productos perecederos, como el vino y la leche; el análisis de la descomposición por obra de las bacterias, que llevó a la medicina a preocuparse por las medidas antisépticas (Lister 1865). En el plano ideológico, y en el de una concepción general del mundo fueron todavía más influyentes las teorías de la evolución, de la selección natural y artificial, enunciadas y razonadas en las obras de Charles Darwin *El origen de las especies* (1859) y *El origen del hombre* (1871). Prescindiendo de la enorme im-

portancia que el estudio de las bacterias o de la energía, la bioquímica o los principios evolucionistas hayan tenido en el campo de la investigación científica y de las aplicaciones prácticas, las nuevas concepciones, y sobre todo la teoría sobre los orígenes del mundo y de la especie, aparecían en abierta contradicción con la verdad literal de la Biblia. De ahí nacía una áspera polémica y una neta antítesis en dos frentes. Por un lado, ciencia, cultura moderna, liberalismo y radicalismo, reunidos en un grupo que considera cada vez con mayor suficiencia las ideas religiosas y tradicionalistas. Por la otra parte, una gran institución religiosa como la Iglesia católica, encerrada en una defensiva e insostenible posición de rechazo, cuyo ejemplo es la total condena del mundo moderno con la nueva edición del *Índice* (1864). Particularmente significativos en lo político eran la plena reafirmación del poder temporal del papa y la condena del liberalismo, del principio de la soberanía popular y de la separación de la Iglesia y del Estado.

En el campo de la literatura y del arte hay que tener cuidado, sin embargo, de caracterizar a esta época de una manera simplista y unívoca. Si es verdad que parecen imponerse, en algún momento, las tendencias realistas, más directamente influidas por la observación «científica», no hay que olvidar que ya afloraban el impresionismo y el psicologismo, y persistía la herencia del romanticismo. Lo variado de la situación está bien representado en este fragmento: «Es característico de este período de la literatura aceptar y rechazar vastas generalizaciones históricas con igual vigor. Los escritores presentan, en efecto, una excepcional conciencia histórica y, persuadidos de que la suya es una época que exige intuiciones, interpretaciones y actitudes de pensamiento radicalmente nuevas, debaten sus problemas en el ámbito de las "exigencias del tiempo". Pero esta conciencia no es, por otro lado, más que un síntoma de la disolución de toda espontánea creencia común, un hecho negativo que hace difícil encontrar para esta época un común denominador positivo.

»¿Son tiempos de ideas científicas, materialistas, positivistas? Sí, es la época de Comte, Feuerbach, Darwin, Marx y Herbert Spencer. Y, sin embargo, también es una época romántica, idealista, ansiosa de servir al espíritu del hombre y de salvaguardar su patrimonio cultural. Sin duda se daría una imagen desnaturalizada y desenfocada de la historia intelectual de estos años si no se recordara a Carlyle, Emerson, Ruskin, Matthew Arnold, al escritor austriaco Adalbert Stifter, al historiador Jacobo Burckhardt. ¿Son tiempos indiferentes a los problemas religiosos? Ciertamente. Y, sin embargo, los sentimientos religiosos —y no sólo los sentimientos— alcanzan un nivel

CUADRO 1. *Bibliotecas europeas y americanas más importantes, 1848-1880*

	Bibliotecas		*Número de volúmenes (miles)*	
	1848	*1880*	*1848*	*1880*
Reino Unido	28	202	1.542	3.770
Francia	107	505	3.975	7.298
Alemania	80	594	3.053	4.070
Rusia	12	145	451	950
Austria	41	577	2.193	5.476
Italia	45	493	2.274	4.349
España y Portugal	24	90	963	1.200
Bélgica	10	105	400	610
Holanda	10	220	330	800
Escandinavia	13	94	968	1.250
Europa	370	3.025	16.149	29.773
Estados Unidos	20	59	600	2.263

Fuente: C. M. Cipolla. *Istruzione e sviluppo*, Turín, UTET, 1971.

de extrema tensión espiritual. Tiene pensadores de profunda y sufriente religiosidad, como Kierkegaard y el cardenal Newman, y tiene, en la literatura, el genio profundamente religioso de Dostoiewski. ¿Son tiempos consagrados especialmente a la prosa? Es muy probable; sin embargo, es también la época que dio vida a la teoría de la "poesía pura" y la aplicó con pasión, que se abandonó al éxtasis emocional de la música de Richard Wagner. ¿Son tiempos en que se creyó en la innata capacidad del hombre para seguir el camino peligroso de un progreso sin final? Daría espontáneamente una respuesta afirmativa si no fuera por el entusiasmo con que espíritus nada mediocres acogieron el pesimismo metafísico de Schopenhauer» (E. Heller).

10. **Fuera de Europa**

Uno de los acontecimientos más importantes ocurridos fuera de Europa durante este período fue la guerra civil norteamericana (1861-1865), que terminó con la derrota de los estados esclavistas y secesionistas del Sur y las enmiendas constitucionales que abolían la esclavitud y aseguraban la paridad de derechos a «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos».

La abolición de la esclavitud en los estados del Sur puede, en algunos aspectos, recordar a la casi contemporánea abolición de la servidumbre de la gleba en Rusia, y ambas medidas podrían considerarse como confirmación del triunfo de una época de reformas liberales y librecambistas, anunciada también por otras señales (el ya recordado tratado comercial anglo-francés de 1860, por ejemplo). Estos enfoques no son totalmente infundados cuando se recuerda que tanto la «liberación de los campesinos», como la abolición de la esclavitud empalman con las ideologías del siglo XVIII y la era de la Revolución francesa; pero son por cierto descartables cuando se les pretende dar un carácter ideológico absoluto, ignorando la especificidad del contexto histórico en el que ocurren.

A las consideraciones ideológicas y humanitarias, se suman la salvaguardia y la promoción de los intereses económicos y la conservación o el cambio de los equilibrios políticos. En Estados Unidos, el conjunto de estos motivos es particularmente evidente. La Unión había nacido a la sombra de la era industrial, cuando todavía los intereses agrícolas y comerciales eran exclusiva o claramente preponderantes y las regiones meridionales habían tenido cierta inicial superioridad política. Los equilibrios se habían ido modificando en el curso del siglo XIX, pero, sobre todo, se habían agudizado las diferencias económicas, sociales y de mentalidad entre los estados del Sur y los del Norte. En efecto, en el Sur, las grandes plantaciones de algodón, de caña de azúcar, de tabaco y arroz se regían por el sistema económico fundado en el trabajo de esclavos negros y necesitaban exportar libremente sus productos: deseaban, por lo tanto, una política económica librecambista. En el Norte, en cambio, comenzaba la industrialización, las estructuras económicas se basaban en la fuerza de trabajo libre y era necesaria una política comercial que protegiera sus nacientes industrias. Hasta los años cincuenta no fue posible establecer una política consensuada como había sido el acuerdo alcanzado en 1820, cuando ingresó en la Unión el nuevo estado de Missouri, cuyo sistema de producción era esclavista. Para impedir que se quebrara el equilibrio político se decidió también entonces la admisión del Maine, donde la esclavitud no era legal. Se decidió, además, que el sistema y la institución esclavista se aceptaría más allá del paralelo 30. La cuestión volvió a presentarse en 1845, cuando el territorio de Texas, perteneciente entonces a México, pero habitado y colonizado por norteamericanos originarios de los estados del Sur, se constituyó en Estado independiente y solicitó la adhesión a la Unión con sus instituciones esclavistas. Tras la guerra mexicana, otros extensos territorios, como California, se sumaron a los Estados Unidos. Como contrapeso de la incorporación de Texas

esclavista, el acuerdo de 1850, admitía también al Estado «libre« de California, y endurecía las medidas para capturar y devolver los esclavos fugitivos a sus amos con el fin de alejar la amenaza de secesión de los sudistas.

Las disposiciones contra los esclavos evadidos fueron muy combatidas por los antiesclavistas más convencidos y radicales e inspiraron la obra de Harriet Beecher Stowe *La cabaña del tío Tom* (1852), que tuvo una considerable influencia en la opinión pública norteamericana y mundial sobre una cuestión no muy sentida hasta entonces. En el primer año se vendieron casi 400.000 ejemplares del libro.

Con la expansión económica, las obras ferroviarias, los primeros grandes flujos migratorios desde Europa y la colonización del Oeste, sobre todo por parte de colonos libres —la frontera se convierte en una verdadera institución norteamericana y luego también una norma de interpretación historiográfica— el compromiso alcanzado fatigosamente en 1850 tenía escasas posibilidades de resistir. Mientras ganaba terreno la opinión de que el sistema esclavista, además de inmoral, era poco conveniente económicamente, las clases dirigentes de los estados del Sur, representadas principalmente por grandes propietarios esclavistas, y con una confusa mentalidad paternalista y agraria, amenazados en sus intereses y su cultura, pensaban cada vez más que la secesión era la única posibilidad de defender el derecho a la autodeterminación y a su modo de vida y de organización económica y social.

El nuevo partido republicano era la expresión de los sentimientos y los intereses antiesclavistas; su principal representante, Abraham Lincoln, no hacía de la abolición de la esclavitud una cuesión de principio, pero, convencido defensor de la superioridad económica y moral del trabajo libre, excluía la legalización de la esclavitud en nuevos territorios como pretendían los sudistas. El esclavismo, reducido a su espacio tradicional, sin posibilidad de reproducirse, veía próximo su final. Cuando, en noviembre de 1861, Lincoln fue elegido presidente, Carolina del Sur tomó la iniciativa de la secesión, a la cual muy pronto se adhirieron otros estados constituyendo, en febrero de 1861, la Confederación sudista. Lincoln consideró que la separación era, además de inconstitucional, un verdadero acto de rebelión. La inevitable guerra fue muy dura y sangrienta. Las operaciones militares se iniciaron en abril de 1861 y se prolongaron hasta 1865. Una batalla importante, ganada por los nordistas, que tenían superioridad de medios y de hombres, fue la librada en 1863, en Gettysburg (Pennsilvania); pero la resistencia del Sur no terminó hasta que las tropas del Norte ocuparon Georgia y forzaron la rendición del ejército adversario (abril de 1865).

La XIII enmienda, que abolía totalmente la esclavitud en Estados Unidos y en todo lugar sujeto a su jurisdicción, solucionó radicalmente el problema, aunque de manera muy diferente de las intenciones iniciales de Lincoln y de la mayoría moderada.

Lincoln fue asesinado en el mismo mes de abril de 1865 exasperando la situación y haciendo más dura la represión en las regiones del Sur, conmocionadas también por las alteraciones causadas por la emancipación de los esclavos. Las XIV y XV enmiendas (ratificadas respectivamente en julio de 1868 y marzo de 1870) intentaron asegurar a los negros emancipados los derechos civiles y el ejercicio del voto. Pero el gobierno y la reconstrucción del Sur fueron extremadamente difíciles, y la inserción de los negros a título pleno no pudo realizarse hasta muchas décadas después.

Terminada la ocupación militar y el predominio de gobiernos radicales sostenidos por los nordistas y por la minoría negra, los blancos del Sur rechazaron con intransigencia, y a menudo con episodios de violencia, la igualdad de derechos para la población negra, practicando una evidente discriminación racial, sobre todo en el uso de los servicios públicos y de la escuela, hasta un pasado muy reciente.

En el Lejano Oriente, la sublevación de las tropas bengalíes y de las provincias septentrionales de la India (1857-1858) inició la decadencia definitiva de la Compañía de las Indias y llevó al gobierno y la corona ingleses a asumir responsabilidades más directas en la administración de la colonia.

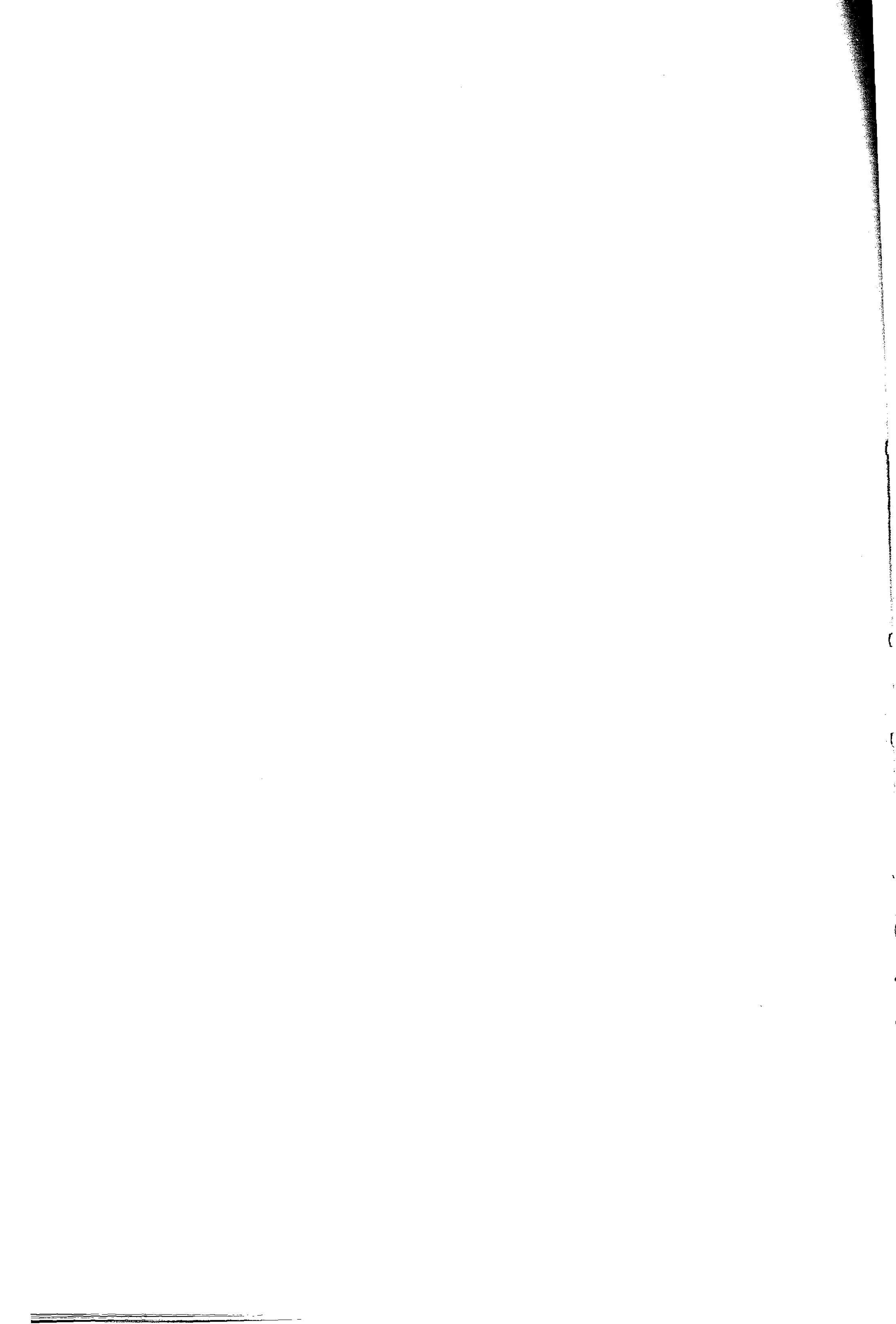
Probablemente algún nexo con la penetración occidental en el Lejano Oriente tuvo también la insurrección china de Tai-ping (1850-1866) contra la dinastía manchú, propagada por la China meridional hasta casi amenazar Pekín, la capital del Imperio. Razones religiosas y sociales inspiraron principalmente a los rebeldes y los reformadores.

En Japón la revolución que terminó con el poder shogun, fundado sustancialmente en el poder feudal y de la casta militar de los samuráis, ocurrida en 1868, se inspiró, seguramente, en el deseo de imitar a las instituciones occidentales, que habían dado a las mayores naciones europeas y a Estados Unidos la fuerza necesaria para expandirse en el mundo (véase capítulo 8, § 6). Restaurado el poder del emperador (restauración Meiji), la nueva clase dirigente quemó etapas hacia la occidentalización de las instituciones civiles y militares, la modernización económica y la centralización burocrática, desbaratando numerosas tentativas de resistencia. La cohesión de las nuevas estructuras estatales ahondaba sus raíces en una fuerte ideología de exaltación del espíritu y de las tradiciones nacionales, reforzadas por

una concepción político-religiosa (el shintoísmo) autoritaria y casi teocrática. La occidentalización era, por lo tanto, puramente instrumental; sólo buscaba la eficacia y el poderío: muy pocos de los valores culturales, liberales y democráticos penetraron entonces en la sociedad japonesa.

Segunda parte

1871-1914



PREMISA

VISIÓN PANORÁMICA

Entre 1870 y 1914, se hicieron todavía más evidentes que en las décadas inmediatamente anteriores, las manifestaciones de una «sociedad de masas» en el ordenamiento económico y la organización política de los países que tenían una base industrial suficiente para alimentar un proceso que se autopropulsara y crear un poder militar autónomo. Analizándolos preliminarmente en términos muy sumarios, los años que transcurren entre 1870 y 1914 muestran las siguientes características:

1. Un largo período de paz entre las mayores potencias europeas, muy notable si se lo compara con el agitado período 1848-1871, que había sido teatro de una sucesión de conflictos (las guerras de Crimea, 1854; de Italia, 1859; austro-prusiana, 1866; franco-alemana, 1870).

No faltaron enfrentamientos ni amenazas de guerra, pero fueron rápidamente neutralizados o sólo interesaron marginalmente a Europa. La crisis balcánica de 1877-1878, de la que trató de aprovecharse Rusia y que originó el reino de Bulgaria, fue solucionada en el congreso de Berlín antes de que se extendiera a las grandes potencias. El conflicto colonial entre Francia e Inglaterra, que alcanzó su punto de máxima tensión en la carrera hacia el poblado sudanés de Fashoda, se resolvió con una serie de acuerdos. Las crisis marroquíes de 1905 y 1911, aunque fueron importantes señales del grave deterioro de la situación internacional, no tuvieron consecuencias inmediatas. Los estados europeos se vieron envueltos en verdaderas guerras y en importantes operaciones bélicas, pero fuera de los límites de Europa: los etíopes derrotaron a Italia en Adwa en 1896; España se enfrentó a Estados Unidos y perdió Cuba y las Filipinas (1898); los ingleses combatieron duramente contra los bóers, descendientes de los colonos holandeses, en Sudáfrica (1898-1900); un cuerpo expedicionario internacional, típico ejemplo de intervención imperialista, sofocó en China la

sublevación de los bóxers; Rusia chocó contra Japón y sufrió una derrota naval plena de consecuencias en Tsushima (1905). En la guerra contra China en 1894, Japón ya había demostrado la fuerza resultante de su rápida marcha hacia la «modernización».

La guerra volvió al Mediterráneo y a Europa en 1911 y 1912, con las operaciones italianas contra Turquía para conquistar Libia y la segunda crisis balcánica. Son las primeras chispas, casi el preludio del conflicto que dos años después abrasaría el corazón de Europa y alcanzaría dimensiones mundiales.

2. El prolongado período de estabilidad política en Europa, contrasta igualmente con los veintidós años anteriores, que se abren con la revolución de 1848 y se cierran con la Comuna de París, y están marcados profundamente por cambios políticos y territoriales ligados a la formación de dos nuevos estados nacionales, Alemania e Italia.

Entre 1871 y 1914, parece triunfar el régimen liberal-democrático, caracterizado por la separación de poderes, el refuerzo del sistema representativo parlamentario, la ampliación del sufragio, la organización de los partidos socialistas y otras grandes formaciones u organizaciones políticas inspiradas especialmente en el ejemplo de la socialdemocracia alemana. Como la guerra, las revoluciones también se exportan fuera de Europa; aunque en 1905 estalla una contra el régimen autocrático de la Rusia zarista, que hasta entonces había rechazado las instituciones democráticas liberales.

Pero estabilidad política no quiere decir ausencia de tensiones, incluso agudas, de conflictos de clase, de inflamada lucha política, como se verá en el examen más detallado de las circunstancias particulares; sólo quiere decir que las tensiones, las controversias y las luchas se desarrollaron dentro de un marco institucional capaz de contenerlas, tal vez modificándose, pero sin sufrir excesivos trastornos.

3. ¿Tendía Europa a exportar las guerras y las revoluciones fuera de sus territorios? Esto sólo es verdad dentro de ciertos límites, porque antes aun de 1870 se habían producido guerras y revoluciones fuera de Europa, y en algunas de ellas, desde el siglo XVI al XVII, los europeos habían tenido una participación nada desdeñable. Más que guerras y revoluciones, lo que Europa produce y exporta como nunca antes, son hombres, manufacturas, capitales y servicios, y extiende su supremacía directa conquistando y administrando territorios coloniales, o indirecta en todo el mundo, mediante la subordinación económica y política. Los únicos obstáculos reales, y los únicos competidores extraeuropeos que encuentra en su expansión mundial son Estados Unidos y Japón, que —con un proceso espontáneo, al menos en

parte, Estados Unidos, y una opción política deliberada Japón— han seguido los modelos de desarrollo económico, organización capitalista y producción industrial europeos.

En las dos últimas décadas del siglo XIX, la industrialización se extiende con distinta intensidad por Europa, desde una zona relativamente restringida que abarca principalmente a Inglaterra y Bélgica, hasta un área mucho más amplia que va desde Francia y el norte de Italia hasta Alemania, Suecia y algunas regiones de Rusia; triunfa en Estados Unidos y progresa en Japón. Al mismo tiempo, la expansión colonial europea se muestra en toda su crudeza en el frenético reparto de África. Pero todavía más significativa e importante es la integración económica de todo el mundo en el sistema capitalista dominado por las grandes potencias industriales. Se teje una compleja trama de relaciones nacionales e internacionales, económicas y estratégicas, que acerca las distintas partes del mundo, transfiere conflictos y tensiones de Europa a África y Asia, altera las condiciones de vida y de trabajo de grandes masas humanas y modifica equilibrios sociales tradicionales. La afirmación mundial del sistema capitalista establece una jerarquía de potencias fundada, no sólo en el número de soldados, sino también en la capacidad para movilizar y armar a millones de hombres con armas automáticas cada vez más potentes, producidas en los modernos complejos industriales. Los grandes buques de guerra, los acorazados, en cuya construcción se combinan dos de las ramas más importantes de la joven industria pesada, la siderúrgica y la armamentista, son casi un símbolo del nuevo poderío. Se ha definido como *era del imperialismo* a esta época en que las grandes potencias se lanzan desenfrenadamente a la conquista de colonias para fundar imperios, en que se compite económica y políticamente y la conflictividad se propaga por todo el mundo.

Es una definición que —comprendida en toda la intensidad y el dinamismo del sistema económico y de las relaciones de poder, y sin caer en esquemas e interpretaciones que, como la clásica de Lenin, fueron estimulantes y políticamente operativas pero que hoy parecen históricamente inadecuadas— puede ser aceptada como la que mejor y más sintéticamente expresa la fuerza expansiva de la nueva economía industrial y su dimensión mundial.

CAPÍTULO 4

LA ECONOMÍA MUNDIAL

1. La crisis de 1873 y la larga depresión

Uno de los aspectos más destacables del período 1870-1914 es la integración económica del mundo en el sistema capitalista dominado por las potencias industriales. Sobre este tema hay que hacer algunas precisiones. Los orígenes de la economía mundial —o internacional—, ámbito de importantes operaciones comerciales y financieras aunque con distintos límites, se pueden rastrear muy atrás en la historia, aunque la actividad se intensifica a partir del siglo XVI, cuando comienza la colonización europea de América, con el consiguiente crecimiento del intercambio atlántico. Junto a esta economía mundial persistía una economía de subsistencia y de intercambios locales que, más o menos afectada por ella y sólo parcialmente integrada, abarcaba en esa época a la mayor parte de la población campesina del mundo. Hay que dar su justo valor en la reflexión histórica a estas formas económicas y sociales que en los últimos cien años se habían transformado en Europa a un ritmo muy intenso.

En cuanto a la economía mundial, a la que nos estamos refiriendo específicamente, se puede afirmar que, alrededor de 1870, estaba dominada por Gran Bretaña, el primer país que había conocido la Revolución industrial y desarrollado el capitalismo.

La posición económica de Gran Bretaña y la organización del Imperio, del que la India era la joya más preciada, habían constituido el llamado imperialismo del libre comercio *(imperialism of free trade)*: una posición y un monopolio asegurado por la misma primogenitura industrial, exaltada por los librecambistas como resultado de la acción espontánea de las fuerzas productivas y de una división del trabajo armónica en el plano nacional e internacional. Efectivamente, en las dos décadas que transcurren entre 1850 y 1870, pareció que triunfaba el librecambismo económico y que la libre circulación de mercaderías y

capitales podía promover dondequiera que fuese el desarrollo y el bienestar económicos. Dejando de lado los aspectos teóricos y polémicos de una discusión que con distintos enfoques, todavía continúa, en los años setenta del siglo XIX surgieron en el sistema económico internacional algunas dificultades que provocaron una crisis probablemente originada en la superproducción y en la especulación alentada por las altísimas tasas de desarrollo de la producción y del intercambio de los años precedentes. Los dos países que más sufrieron la coyuntura desfavorable fueron Alemania y Estados Unidos, que, justamente por aquellos años, se esforzaban particularmente en su industrialización. Un índice del empeño norteamericano se puede advertir en el impulso dado a la red ferroviaria, que pasó de 49.000 km en 1860 a 106.000 en 1873. Alemania, tras la victoriosa guerra contra Francia, la anexión de Alsacia y Lorena y el cobro de una indemnización bélica fabulosa para su tiempo, había experimentado una expansión muy notable, sobre todo, en el sector siderúrgico, que, pese a ser objeto de especulación, revalorizó fuertemente los títulos industriales. La crisis se manifestó entre mayo y septiembre de 1873. El sistema cambiario internacional, en el que Londres actuaba como cámara de compensación, también arrastró a Inglaterra a la crisis. Francia fue la menos perjudicada gracias a que su desarrollo era más lento que el de las otras grandes potencias industrializadas o en vías de industrializarse.

La crisis de 1873 no era excepcional, ni era la primera que afectaba al sistema industrial. En 1866, por ejemplo, la quiebra de una importante sociedad financiera británica, la Overend Gurney, había tenido graves repercusiones en el mercado inglés, francés y estadounidense. Pero la crisis de 1873 llamó más la atención porque el progreso y la difusión de la estadística permitieron medirla mejor, y analizar, además de los efectos financieros, los que influyeron en la producción industrial; y también porque señaló el comienzo de un largo período de dificultades económicas que habría durado hasta 1896, años que fueron llamados *de la gran depresión*, título que luego cedieron a la crisis iniciada en 1929. Se comenzaba a comprobar que la economía capitalista tenía un comportamiento cíclico, cuyas crisis —fácilmente reconocibles especialmente por las quiebras financieras y la caída de los precios— marcaban la inversión de la tendencia «en sucesivas oleadas de expansiones y depresiones».

2. Los ciclos de la economía capitalista

En 1860, el francés Clement Juglar había fijado en una periodicidad aproximada de ocho años los ciclos que luego llevarían su nom-

bre (o «ciclos mayores»). Juglar había analizado los intercambios comerciales, estudiando su movimiento en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que eran por entonces los mayores protagonistas de la vida económica.

Joseph Schumpeter, profundizó la teoría de los ciclos e intentó convertirla en un instrumento para interpretar la economía capitalista, valiéndose, además de las investigaciones de Juglar, de las observaciones de Kitchin (1923) de ciclos más breves (de cerca de cuarenta meses) y, sobre todo, de las fluctuaciones de los precios a largo plazo descubiertas por Kondrat'ev (1926). El análisis de Schumpeter se basa particularmente en datos de Estados Unidos, pero también tiene en cuenta a Gran Bretaña y Alemania. La originalidad y el interés de la teoría schumpeteriana radican en que señaló a la «innovación» como motor del desarrollo capitalista y del movimiento cíclico; o sea, a la iniciativa innovadora de los empresarios. Las innovaciones se concentran en determinados períodos, porque su aparición rompe antiguos equilibrios y favorece el surgimiento de nuevas capacidades empresariales y nuevas inversiones. Los relativos desfases espaciales se explican por la variedad de los tiempos de gestación, absorción y propagación de los efectos de la innovación.

Reducir esencialmente a un solo factor la compleja y contradictoria marcha de la economía es una tesis inquietante y parece demasiado simplificadora. Más allá del análisis de los cuatro movimientos cíclicos: expansión, prosperidad, recesión, depresión, que se repetirían periódicamente y de la superposición entre ciclos menores, ciclos mayores y ondas Kondrat'ev, el estudio de los ciclos ha contribuido a establecer una periodicidad apta para aplicar a la historia económica del siglo XIX. Se distinguen: *una primera fase (1789-1848)* marcada por la aplicación de los primeros inventos técnicos a escala industrial en el ramo textil y por el empleo generalizado del vapor como fuente de energía; *una segunda fase (1848-1896)*, caracterizada por la difusión del ferrocarril y la manufactura del acero, y *una tercera fase* —que se manifiesta claramente después de 1896— que, por sus innovaciones y cambios será definida más tarde como la segunda revolución industrial. Los años 1873-1876 representarían, por lo tanto, la fase descendente del segundo ciclo Kondrat'ev, que había tenido su fase ascendente en los años cuarenta con las grandes inversiones ferroviarias y concidiría con una etapa de *boom* y de alza de los precios, que en Estados Unidos se prolongó de 1849 a 1866, y en Inglaterra de 1849 a 1873. La crisis de 1873, al ubicarse al comienzo de la larga fase de depresión, habría tenido especial gravedad e intensidad. Una nueva crisis, en 1893, señala el momento culminante de la fase depresiva y acelera y completa el proceso de reestructuración del sistema, elimi-

nando los elementos más débiles y atrasados, y superando antiguas formas industriales entonces ligadas sobre todo al tendido de líneas ferroviarias.

En las últimas décadas se han puesto muchas objeciones a la metodología y los resultados del análisis de Schumpeter. Las más fundadas se refieren a la insuficiencia de los datos estadísticos (Kondrat'ev, aunque pretende tener en cuenta la evolución de la producción, termina por basarse especialmente en la conducta de los precios) y a las dificultades para hallar coincidencias y relaciones entre los distintos ciclos sin manipular los datos. Por otra parte, la teoría de la «innovación» y de los empresarios dinámicos como principal motor del desarrollo ignora o subestima la intervención de otras fuerzas y, en primer lugar, de la banca y el Estado, que justamente en los años que consideramos, tuvieron cada vez mayor peso en la promoción y la difusión de la industria.

El desarrollo económico capitalista y el camino de la modernización y de la industrialización se volvieron más ásperos e intrincados precisamente a partir de los años setenta, cuando surgió, con mayor o menor evidencia, el problema de las relaciones entre países ya industrialmente avanzados y económicamente maduros y países que deseaban y podían dotarse de una estructura industrial. Además, la integración económica mundial que comenzaba a delinearse, es decir, la intensificación de las relaciones económicas que los países industrialmente avanzados habían establecido y establecían con otras partes del mundo en nombre de la libertad de comercio o de la supremacía de la civilización del hombre blanco, creaba nuevas relaciones de interdependencia y de intercambio que complicaban más el panorama. Frente a una situación tan variada y compleja resultaban del todo insuficientes las explicaciones puramente económicas.

Sin embargo, se pueden extraer al menos dos conceptos claves de la teoría de los ciclos económicos:

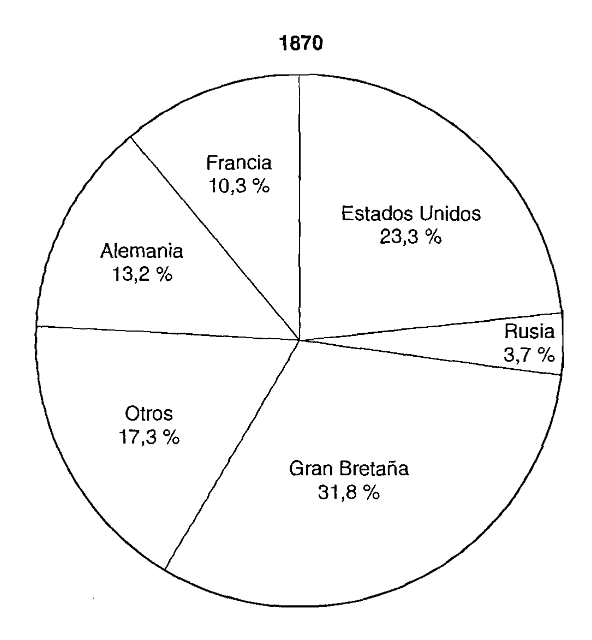
1) En primer lugar, está probado que, en los períodos que estamos considerando, la economía industrial siguió, a través de periódicas oscilaciones y fluctuaciones, fases de expansión y de recesión; una evolución en espiral ascendente en lo que se refiere a la capacidad y el volumen de la producción. Ninguna crisis, por grave que fuera, anulaba totalmente los resultados obtenidos anteriormente y, pese a las recesiones y depresiones, el equilibrio —si se puede hablar de equilibrio en un movimiento tan particular— siempre se restablecía en un nivel más alto; tal vez disminuía la intensidad del crecimiento, sobre todo en las economías maduras y en los momentos de dificul-

tades financieras, pero la expansión del proceso aseguraba, de cualquier manera y en términos generales, un aumento del volumen de la producción.

2) Luego, se confirma también la relación entre las grandes fases de desarrollo y la renovación tecnológica: estallido de la primera revolución industrial; tendidos ferroviarios y expansión de la industria siderúrgica; compenetración cada vez más estrecha entre investigación científica y producción industrial; aprovechamiento de la energía eléctrica, enormes progresos de la industria química, motor a explosión, estadarización y producción masiva. La expresión «renovación tecnológica» tal como aquí se usa, implica bastante más que una simple referencia a procesos técnicos y económicos; abarca también la organización de la producción y del trabajo y, en consecuencia, las condiciones de vida de grandes masas de la población. Basta pensar en la aparición de las fábricas y la formación del proletariado durante la primera revolución industrial.

3. De la larga depresión a la nueva fase de desarrollo

El período 1870-1914 puede ser, por lo tanto, subdividido en lo económico, en dos etapas: 1) la gran depresión (1873-1896); 2) la reanudación de la expansión hasta, o poco más, el comienzo de la guerra. La gran depresión es verdaderamente tal para Inglaterra, que ve debilitarse y tambalear su liderazgo mundial. Estados Unidos y Alemania progresan impetuosamente, aunque deben sortear algunas dificultades y perturbaciones propias del sistema; incluso Francia, entre los países que habían partido con retraso, se esfuerza en adecuarse al ritmo general del mercado. Por otra parte, justamente entonces, otros estados comienzan a afirmar su presencia industrial (Rusia, Japón e Italia) y «países nuevos», como Canadá, Australia y algunas regiones de América Latina desarrollan sus economías. Una comparación entre la situación de 1870 y de 1913 en la distribución mundial de los productos industriales puede ser particularmente significativa. La producción aumenta casi cuatro veces; este dato es suficiente para comprender que la gran depresión no había sido obstáculo para un desarrollo muy notable que, si fue muy rápido y más extendido después de 1896, ya estaba preparado, e incluso se había realizado en las dos décadas anteriores. Pero todavía más interesantes son los cambios de las posiciones relativas de los países. En 1870, Gran Bretaña participaba en la producción con el 32 por ciento y cayó, en 1913 al 14 por ciento; Estados Unidos, en cambio, pasaban del 23 al 36 por ciento, y Alemania, del 13 al 16 por ciento.



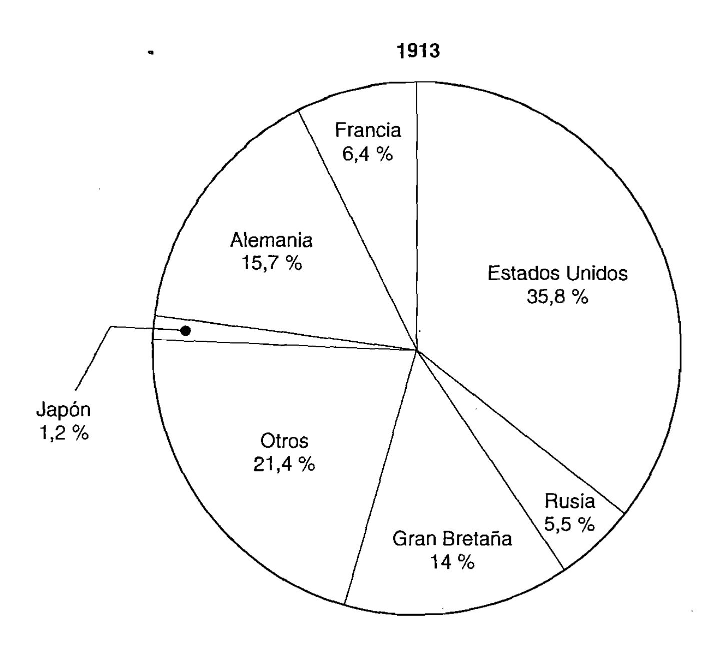


FIG. 1. *La producción industrial en 1870 y 1913.*

Sin embargo, sería un error no dar ninguna importancia a la caída de los precios, que es el signo habitual y más evidente de la depresión de 1873-1896 y que se manifiesta especialmente en la producción agrícola, provocando la llamada crisis agraria. También en este caso se muestra claramente insuficiente el análisis puramente económico. Las repercusiones más graves fueron políticas y sociales porque, con el argumento de proteger las agriculturas nacionales, especialmente los cultivos de cereales, se volvieron a adoptar medidas proteccionistas que muy pronto se extendieron a los productos industriales. Se tambaleaba la confianza en las ventajas de la libre competencia; la protección de los productos y de los mercados internos, y acaso la conquista de nuevos mercados, se convertían en un deber patriótico, una obligación de gobierno, y no solamente de los productores y los empresarios; la grandeza de la patria se asociaba a la capacidad de tener un poderío industrial propio y de defender los intereses de los propietarios y de los industriales, lo que para muchos significaba el mejor seguro para la existencia y el trabajo de campesinos y obreros; se echaban las bases de un nacionalismo exasperado y de la competencia imperialista. La defensa de los intereses industriales, amenazados o apremiados por la crisis y por peligros reales o exagerados a propósito, tenía también importantes efectos en la estructuración o reestructuración administrativa. No eran menos importantes las transformaciones en el campo. Donde más acelerado era el proceso de industrialización —como en Alemania—, siguiendo el modelo trazado por los ingleses, la población rural y los agricultores tendían a disminuir más francamente, y, mientras las antiguas ciudades experimentaban un gran crecimiento demográfico, nacían otras nuevas casi de la nada. En el ámbito de la economía nacional, allí donde las industrias y el desarrollo de los servicios urbanos no bastaban para absorber la superpoblación del campo, los mercados interno e internacional del trabajo alimentaban flujos migratorios considerables. Así sucedía desde Polonia hasta las zonas industrializadas de Alemania; así, sobre todo, y más visiblemente, la fuerte demanda proveniente de la expansión económica de Estados Unidos arrastraba a millones de campesinos europeos a instalarse definitivamente del otro lado del Atlántico. En Italia, por ejemplo, primero el Véneto y luego las regiones del sur de la península hicieron un aporte importante a esta emigración masiva.

En todos los países de Europa occidental se producían procesos de integración nacional alentados por la extensión de las vías férreas y la educación elemental obligatoria. En el caso de Francia, aunque no vivió cambios traumáticos, se ha podido hablar, refiriéndose particularmente a la modificación de la mentalidad y de la tradicional vida ru-

ral, de la transformación del *campesino* en *francés*, o sea, de una unificación cultural que, si bien tenía bases y precedentes lejanos en la antigua unidad nacional del país, sólo en estos años alcanzó efectos masivos mediante amplios sistemas de comunicaciones, intercambios y educación.

CAPÍTULO 5

EL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO

1. Inglaterra conserva su primacía

Gran Bretaña perdía terreno en casi todas las áreas de la producción industrial y debía recurrir cada vez más a los mercados exteriores para abastecerse de alimentos y materias primas; sin embargo, mantenía el liderato del sistema monetario y financiero. Era precisamente este monopolio, o semimonopolio, el que le permitía atenuar los efectos de la caída de su producción. La tradición de Londres como centro financiero internacional era muy antigua, pero el despuntar de un sistema monetario internacional basado en el patrón oro, con supuestas reglas precisas de comportamiento, está ligado al nacimiento de una economía mundial (en los términos en que se indica en estas páginas) que corresponde al paso del monopolio inglés al oligopolio, con el ascenso y la presencia de poderosos competidores y una jerarquía nueva y más ordenada en las relaciones económicas internacionales.

La superioridad inglesa se fundaba en el llamado patrón oro, o *gold standard*. «Se dice que un país tiene un sistema monetario con patrón oro cuando el oro se emplea como moneda circulante del país y/o cuando los otros medios usados como moneda corriente, cambiables por el Estado o por la banca, son inmediatamente convertibles en oro a pedido de los acreedores. Se habla de un sistema internacional con patrón oro cuando el oro constituye la moneda corriente en la mayoría de los países y/o cuando los otros medios utilizados en los distintos países como moneda corriente son inmediatamente convertibles en oro a pedido de los portadores» (De Cecco).

Las monedas que se usaron más frecuentemente, sobre todo en las grandes transacciones comerciales, fueron el oro y la plata; pero, a medida que se propagaba la circulación monetaria, se emitieron cada vez más títulos de crédito (letras de cambio, papel moneda). El siste-

ma aseguraba su funcionamiento en la confianza de que era posible convertir inmediatamente los títulos en oro y plata. A comienzos del siglo XIX, la relación entre ambos metales era de 1 a 15 aproximadamente. Para que esta relación fuera estable, era necesario que también lo fuera la proporción entre las cantidades de oro y de plata disponibles en el mercado. Pero los metales monetarios no bastaban para cubrir las crecientes necesidades de la circulación monetaria de economías que se desarrollaban a un ritmo muy intenso. Por ello, el crédito y los bancos se hicieron cada vez más necesarios para financiar la expansión económica y asegurar la liquidez monetaria. Se ha calculado que la moneda bancaria (órdenes de pago y otros títulos) representaba, a comienzos del siglo XIX, solamente un tercio de la moneda circulante en los principales países del mundo; en 1913 había aumentado hasta el 83 por ciento.

Para el período 1885-1913 se tienen datos más precisos, de los que se desprende:

1) La caída de la plata, que del 21 por ciento pasó al 7 por ciento de la masa monetaria.
2) La relativa estabilidad del oro, que aumentaba algunos puntos en valor absoluto (de 2.400 a 3.200 millones de dólares), pero caía del 17 al 10 por cierto en porcentajes.
3) El éxito de la moneda bancaria, que crecía en valor absoluto (de 8.800 a 27.600 millones de dólares) y en porcentajes (del 62 al 83 por ciento de la circulación monetaria).

El oro servía, o debía servir, para regular principalmente los pagos internacionales. Pero el mecanismo funcionaba no tanto por la casi universal adopción de *gold standard*, como porque había una moneda, la libra esterlina, que se imponía sin discusión en el comercio internacional. El intercambio se regulaba por compensaciones en libras más que por transferencias y pagos en oro. No eran, ni material ni físicamente, la existencia y las fluctuaciones del metal precioso los que cumplían el papel decisivo, sino la red de intermediaciones, de relaciones, de intercambio de mercaderías y capitales que se tejía en la plaza de Londres. Por su posición, adquirida históricamente, la libra esterlina era al mismo tiempo la moneda nacional del Reino Unido y la moneda internacional. Los operadores financieros ingleses obtenían grandes ventajas de esta situación. Pero hay que tener en cuenta que la posición de la libra no se asentaba en el desarrollo y la capacidad de las organizaciones financieras, sino sobre una base mucho más firme: la supremacía industrial y comercial que Gran Bretaña había conservado durante casi un siglo. Sobre estos cimientos se había cons-

truido un edificio que parecía mantenerse por sus propias fuerzas y protegía a Gran Bretaña de los cambios repentinos del equilibrio económico internacional. La acumulación de experiencia y de capitales era un importante recurso, pero no era inagotable. Ya en los primeros lustros del siglo XX comenzaba a ser evidente que Estados Unidos era la mayor potencia económica. Es verdad que el comercio internacional norteamericano todavía era limitado, y que, en ciertos aspectos, su organización bancaria era primitiva. Pero, como antes había sucedido en Gran Bretaña, el enorme poderío industrial y productivo constituía, también en Estados Unidos, la base de una presencia financiera cada vez más importante en el mercado mundial. La guerra de 1914-1918 acelerará la decadencia inglesa y el ascenso estadounidense.

2. Bimetalismo y monometalismo: la adopción del *gold standard*

En los años cincuenta, el aumento de la producción de oro debido a la explotación de las minas californianas, hizo pensar que se aproximaba la devaluación del precioso metal. La amenaza decidió a algunos países, entre ellos el Reino de Nápoles, España y la India, a establecer el monometalismo fundado en la plata (o sea la desmonetización del oro). Pero en los años siguientes, sobre todo a partir de la década de los setenta, aunque continuó aumentando la producción y la circulación del oro, las de la plata crecieron aún más acelerando su devaluación. Al final del siglo, la relación entre ambos metales —que en los primeros años del siglo XIX correspondía, como se ha señalado, a un valor que rodeaba el 1:15 (franco de Germinal: 1:14,26)— se ubicaba en torno a 1:30. Esta pérdida acarreaba algunos problemas a los países que habían permanecido fieles al bimetalismo (es decir, la convertibilidad de monedas de uno u otro metal según las tasas legales) y a los que, sobre todo en Asia, habían adoptado sistemas basados en la plata.

Para comprender una situación tan compleja es necesario partir de algunas premisas históricas, por calificarlas de alguna manera. Gran Bretaña, que alrededor de 1870 tenía una posición dominante consolidada en el tráfico internacional, había adoptado el patrón oro *(gold standard)* en 1816. La circulación monetaria y las transacciones internacionales dependían de organismos especializados que tenían su sede principal en Londres.

Podían actuar, y lo hacían, diversos y contradictorios intereses en favor de uno u otro sistema. Los que ensalzaban el *gold standard* destacaban sus beneficios: en primer lugar, su capacidad para regular au-

tomáticamente el cambio internacional asegurando la estabilidad monetaria. La idea derivaba del esquema, elaborado sustancialmente por David Ricardo de la división internacional del trabajo y del cambio sobre la base de una presunta paridad de los participantes. El nivel de desarrollo de los distintos países involucrados en el sistema era diferente y, por lo tanto, no sólo no había paridad, sino que tampoco era de esperar que la hubiera a medio o largo plazo. La intercambiabilidad de las partes sólo era pura hipótesis teórica. El famoso ejemplo de un cambio de posiciones entre Inglaterra y Portugal, por el cual, a través del mecanismo de los precios y la transferencia de oro hubiera podido suceder que a Inglaterra le conviniera «producir todo el vino y a Portugal todos los tejidos que ambos consumían», indica una concepción que se ha definido acertadamente de «estática» y madurada cuando todavía no se percibían todos los problemas planteados por la difusión de la Revolución industrial y el desigual desarrollo de las relaciones de intercambio.

El patrón oro —o, mejor dicho, el sistema de la libra esterlina, que eso fue en realidad— se configura por lo tanto no como un mecanismo ideal, capaz de conducirse admirablemente en cualquier tiempo y lugar, sino como la forma que asume el sistema monetario en determinadas circunstancias históricas que permiten su funcionamiento. En vísperas de la primera guerra mundial, el sistema se aproximaba a una crisis a causa de los profundos cambios de la vida económica, que habían desplazado de Gran Bretaña a Estados Unidos y Alemania el centro de la producción mundial, y de los conflictos políticos que, junto con la ilusión de un arreglo pacífico de las relaciones internacionales destruían el mismo *gold standard*.

El hecho de que, a partir de 1870 todas las grandes potencias adoptaran, aunque fuera gradualmente, el *gold standard*, el patrón oro, es una prueba del poder financiero de la libra esterlina, o sea, de Gran Bretaña, y de la creciente importancia, signo de la integración económica mundial, que también tenía el intercambio internacional en la política interna de cada Estado. En efecto, el predominio comercial y financiero de Inglaterra determinaba que los pagos internacionales se hicieran sobre la base del *gold standard*. En 1854, Portugal, vinculado económicamente a Gran Bretaña, adoptaba el patrón oro. Entre 1871 y 1875 Alemania, Noruega y Suecia también optaban por el monometalismo del oro. Más complicados fueron los casos de Francia, Italia, Bélgica y Suiza que en 1865 habían constituido la Unión Monetaria Latina para concertar una política monetaria común. A ellas se sumó Grecia en 1868. Francia tenía una antigua tradición de bimetalismo, e Italia la había imitado después de la unificación. Antes de que la devaluación de la plata fuera imparable había esperanzas de mantener

el bimetalismo con algunas ventajas en la especulación cambiaria. Después, se vio rápidamente la necesidad de adherirse al patrón oro; pero chocó con la gravísima situación financiera de Italia, que, en 1866, había obligado al gobierno a decretar la circulación forzosa; en otras palabras, la inconvertibilidad de la moneda legal. Para afrontar la devaluación de la plata, y sin poder adoptar oficialmente el monometalismo del oro a causa de la situación italiana, Francia y Bélgica limitaron y suspendieron la acuñación de monedas de plata, practicando una política que fue llamada «el bimetalismo cojo». De hecho, en los años ochenta, superada la crisis italiana, también los países de la Unión latina se sumaron al patrón oro.

Austria-Hungría lo adoptó en 1892, y Rusia en 1897. La decisión de estos países, cuya producción era por entonces eminentemente agrícola, se puede interpretar como una señal de que prevalecían nuevas actitudes orientadas hacia una rápida industrialización. En efecto, la circulación de la plata, con su correspondiente devaluación favorecía particularmente a las exportaciones, especialmente las de materias primas y productos agrícolas, que dentro del país pagaban mercaderías y salarios en moneda devaluada y cobraban en el exterior en oro, lucrando también con el cambio. Pero la medalla tenía otra cara: depender de la plata también significaba inflación e inestabilidad y, en consecuencia, dificultades para atraer las importantes inversiones de capital necesarias para la construcción de infraestructuras y la industrialización. Los inversores extranjeros pretendían percibir sus beneficios en oro. En este sentido, es muy significativo el caso de Rusia, cuyo ministro Witte, que sistemáticamente aplicaba una política de modernización, realizó la reforma después de una larga preparación.

Más complejos fueron los acontecimientos que, en 1900, llevaron también a Estados Unidos a la plena adopción del *gold standard*. La república norteamericana partía de un sistema bimetálico pero, tras la guerra de secesión, la difícil situación de sus finanzas impuso la circulación forzosa, que duró hasta 1879. Entre tanto, suspendiendo la acuñación de plata en 1873, se preparaba para el monometalismo con patrón oro. Los círculos financieros, industriales y comerciales que se movían en torno a Nueva York, cuyas actividades se concentraban en el Este, eran claramente favorables a la reforma. Pero se encontraron con la dura resistencia del Sur y, sobre todo, de los agricultores del Oeste, que se oponían a una política deflacionaria y de promoción industrial: en la plata, y en su defensa, veían el símbolo de un mítico pasado democrático, antiurbano y anticapitalista. En la década de los noventa, la batalla estaba indecisa, como lo demuestran disposiciones contradictorias: la *Sherman Act*, de 1890 disponía que el gobierno comprara plata, sugiriendo que el porvenir del metal blanco estaba

asegurado. Pero en 1893 se derogaba la ley. En la campaña electoral de 1896 se recrudeció la antítesis con el debate entre Bryan, sostenido por los círculos agrícolas del Oeste y McKinley, apoyado por los grupos industriales y financieros del Este. Venció McKinley, y un poeta se refirió al episodio escribiendo: «Derrota de Bryan / Derrota de la plata occidental / Derrota del trigo...» Se trataba de una simplificación, porque en los años siguientes la agricultura norteamericana prosperó como nunca lo había hecho. Pero el sector agrícola, aunque vigoroso, perdía peso ante el impetuoso desarrollo industrial y urbano: triunfaban las grandes corporaciones, los grandes *trusts* que operaban en la industria y las finanzas. La suerte de la plata estaba echada. El descubrimiento de oro en Klondike, en 1898, aceleró la caída y el *gold standard* se adoptó en 1900.

3. El mercado financiero de Londres

Merece la pena analizar cómo se había construido y se regulaba el mecanismo financiero londinense. Se descubren, por lo menos dos aspectos de particular interés: la plaza de Londres es un ejemplo de la complejidad de los servicios que requiere el funcionamiento de una economía capitalista madura, y es, también, el centro de la distribución mundial de capitales. La distancia que separaba el mercado financiero de la base productiva, pudo sugerir que el capitalismo, dominado por quienes vivían de la renta, y no por empresarios, que lo hacían de la expansión de la producción, estuvo próximo al fracaso.

La superioridad británica en el campo financiero —dejando de lado consideraciones más generales sobre los vínculos entre sistema financiero, monopolio industrial y relaciones imperiales— se asentaba en el Banco de Inglaterra, que asumía funciones de banco central con especiales y privilegiadas relaciones con la Tesorería del Estado, y en la nutrida red de bancos comerciales de depósitos y descuentos que cubría el territorio nacional. Los *Bill brokers*, asumieron una importante función de intermediación, pero luego los bancos multiplicaron sus ventanillas por todo el país drenando los ahorros, favoreciendo la transferencia de los depósitos de las zonas rurales a las industriales y la circulación rápida del dinero a través de las letras de cambio y luego, sobre todo, los cheques de cuenta corriente, los agentes privados.

El Banco de Inglaterra entregaba anticipos al gobierno, descontaba los títulos emitidos por el Tesoro; los papeles del Estado tenían un lugar preeminente en su cartera, y los anticipos estaban garantizados por los impuestos territoriales y los ingresos aduaneros. Además, ad-

ministraba la deuda pública a largo plazo, que había tenido, y tenía, gran importancia en las finanzas inglesas. Custodiaba las reservas de oro del país y podía emitir billetes de banco aunque no tuviera el monopolio de la emisión. O sea, ejercía las funciones que luego serían propias de un «banco nacional», o «banco central».

Comparada con esta actividad de interés público, la de los bancos privados era menos significativa porque, además, al comienzo no pagaban intereses y por lo tanto no era rentable depositar en ellos. Sin embargo, a partir de la década de los ochenta florecieron en todo el país, contribuyendo cada vez en mayor medida a la captación de dinero, recibiendo depósitos y abriendo cuentas corrientes; reuniéndose y actuando de común acuerdo estos bancos comerciales concentraron un enorme poder. Como quiera que fuese, la oligarquía financiera sólo incluía a los directores del Banco de Inglaterra y la clase de la que provenían: grandes comerciantes-banqueros, los *merchant bankers*, que tenían en sus manos el comercio internacional. Entre 1850 y 1970 aumentaron su influencia las grandes casas mercantiles, herederas de una tradición secular que se había formado en simbiosis con la expansión imperial británica y con el dominio de los mares y del tráfico internacional. Fue el triunfo del libre cambio. Impulsado por la fase ascendente del ciclo, el comercio internacional creció de manera inusitada, si se atiende a la velocidad de la tasa de crecimiento y no al volumen, que obviamente, con el aumento de la producción de mercaderías y la creación de nuevos modelos de consumo, debía multiplicarse en las décadas siguientes. El sistema funcionaba eficazmente, pese a los intereses contradictorios que oponían a los distintos protagonistas del mundo financiero, y especialmente, entre la fuerza emergente de los bancos de descuento y depósito y la consolidada oligarquía que giraba en torno a las firmas comerciales y al Banco de Inglaterra. Los recursos financieros de Gran Bretaña, que por entonces era el primer país industrial y el más rico del mundo, circulando a través de la abundante red de los bancos de depósitos y descuento, financiaban en todo el mundo el enorme movimiento de mercaderías, gracias a la especialización y a las relaciones internacionales de los *merchant bankers* y al amparo de la garantía y el control del Banco de Inglaterra. La financiación del comercio internacional implicaba sobre todo compromisos a corto plazo, pero el mercado financiero londinense también proporcionaba los capitales que exigían otros países empeñados en su propio desarrollo industrial. En los primeros tiempos, Estados Unidos fue el mercado preferido, el más amplio y atrayente; le seguían los «nuevos países», que integraban los *dominions* blancos del Imperio *(Commonwealth)* como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y otros no tan blancos pero igualmente susceptibles de de-

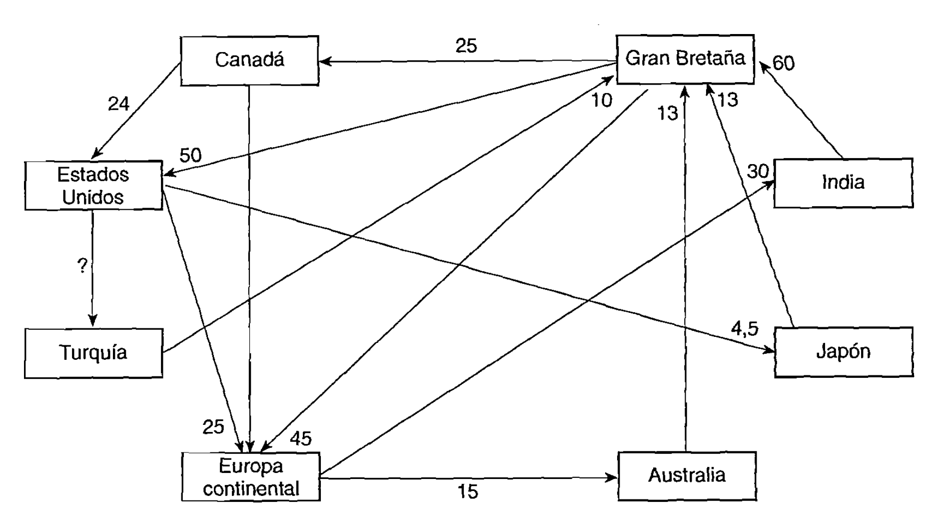
sarrollo, como Sudáfrica. Más adelante dedicaremos un párrafo aparte a la India, que era el eje de todo el sistema.

América Latina, particularmente Argentina, también dependía casi exclusivamente de la intermediación londinense. Precisamente la crisis de 1890, que tuvo repercusiones mundiales y amenazó con trastocar todo el sistema, está relacionada con Argentina y con una desafortunada inversión de la casa mercantil *(merchant house)* Baring, una de las más poderosas de la City. Sin embargo, el sistema fue capaz de resistir y sobrevivir, aunque comenzaban a hacerse evidentes algunos elementos de tensión y de inestabilidad. El acontecimiento que desencadenó la crisis fue una revolución en la Argentina que hundió el valor de las obligaciones con vencimiento a largo plazo emitidas por el gobierno argentino con el aval de la Baring. La solidaridad y el apoyo de la oligarquía financiera y del gobierno impidieron la quiebra de la Baring; pero era evidente que, ante el crecimiento impetuoso y la unión de los bancos de depósito *(Joint Stock Banks)*, había decaído la capacidad de control del Banco de Inglaterra sobre la liquidez y la política monetaria. Los nuevos banqueros se lanzaban al asalto del monopolio concentrado alrededor del Banco de Inglaterra, y ya estaban en condiciones de amenazar las posiciones de los *merchant bankers*, interviniendo en los negocios internacionales. Favorecía sus propósitos la naturaleza de la libra esterlina, que era a la vez moneda nacional, o sea la materia prima de su actividad en el país, y moneda internacional. No obstante estos enfrentamientos internos, que pertenecen más a la historia de los grupos sociales y de las clases dirigentes inglesas, el sistema continuó funcionando regularmente en el comercio internacional y las inversiones de capital. Posteriores dificultades, y el preanuncio del final llegaron, en cambio, del progresivo deterioro de la situación internacional, consecuencia de los cambios en el equilibrio estratégico y económico que se manifestaron al expirar el siglo y en los primeros años del siguiente.

4. El imperialismo inglés

Este mecanismo era, por así decirlo, el instrumento técnico que permitió el predominio del mercado financiero de Londres aun cuando la supremacía productiva inglesa estaba en decadencia. Lo había perfeccionado el patrimonio de experiencia internacional acumulado por las instituciones financieras británicas y, sobre todo, por los *marchand bankers*, desarrollados al abrigo del Imperio británico.

En este esquema, la India asume posiciones y funciones esenciales: comprenderlas significa aclarar el verdadero sentido del lugar co-



Fuente: S. B. Saul, *Studies in British Overseas Trade*, Liverpool, 1960, p. 6; cit. en M. De Cecco, *Moneta e impero. Il sistema finanziario internazionale dal 1890 al 1914*, Turín, Einaudi, 1979.

FIG. 2. *Principales intercambios en 1914 (las flechas indican la dirección de las exportaciones y las cifras están en millones de libras esterlinas).*

mún que la llama «la perla del Imperio». No se trataba, en efecto, de un adorno precioso, como podría hacer imaginar la difundida y habitual expresión, sino de una parte vital, insustituible en el intercambio de mercaderías y en la balanza de pagos que regulaban el mercado internacional. La defensa de la India y la seguridad de las vías de comunicación con la colonia, son objetivos irrenunciables de la política exterior inglesa que llevan, paso a paso, a una extensión territorial del Imperio y a empresas militares, una y otras no siempre deseadas y frecuentemente hostigadas en nombre de una concepción librecambista, compartida hasta los últimos años del siglo por buena parte del electorado y por políticos influyentes y acreditados como Gladstone.

Es un hecho que Inglaterra, desplazada en los mercados europeos y norteamericanos por la competencia de los productos y los métodos comerciales alemanes, aunque continuaba con una política librecambista, logró mantener una reserva insustituible en su Imperio, y sobre todo en la India. Algunos datos son elocuentes. En 1899 Estados Unidos importaba manufacturas por valor de 253 millones de dólares (a precios de 1913); Gran Bretaña aportaba a esta cifra 93 millones; Alemania, 66 millones. En 1913, el total había subido a 414 millones de dólares; la contribución alemana había saltado de 66 a 127 millones,

la inglesa sólo había progresado levemente en cifras absolutas (de 93 a 110 millones), pero había caído fuertemente en porcentajes. Los progresos alemanes eran particularmente sensibles en los sectores tecnológicamente más avanzados: productos químicos, equipos eléctricos e instrumentos de precisión. En Europa se advierten las mismas tendencias. Entre 1899 y 1913, las exportaciones de manufacturas inglesas hacia Francia pasan de 59 a 79 millones de dólares; las alemanas, de 31 a 117. En Noruega y en Suecia los ingleses pierden algún punto, mientras Alemania avanza de 15 a 25 millones en Noruega y, como si esto fuera poco, de 4 a 38 en Suecia. Analizando los sectores comerciales se comprueba que si bien Inglaterra conservaba el primer lugar en el tradicional sector textil y, aunque muy amenazado, en los materiales de transporte, Alemania la superaba en los sectores químico, metalúrgico y mecánico. Todo esto era consecuencia del nuevo equilibrio productivo y de los avances tecnológicos que, como veremos, habían alcanzado las dimensiones de una segunda revolución industrial.

Gran Bretaña conseguía defender, no sin cierta dificultad, sus posiciones en Japón y, sobre todo en América Latina, donde, sin embargo, la acosaban, además de Alemania, el creciente poderío industrial y la proximidad geográfica de Estados Unidos. Se trataba de posiciones sostenidas por fuertes intereses financieros radicados en esos países y por vínculos diplomáticos y políticos. Pero era en los territorios del Imperio y en la India que las exportaciones británicas se mantenían en óptimo grado. Es muy significativo el ejemplo de las exportaciones de productos mecánicos, una industria que se había renovado totalmente en los últimos años. En 1912, en cifras redondas, Gran Bretaña exportaba productos mecánicos a Francia, Italia y Rusia por un valor de 7 millones de libras, contra 15 millones exportados por Alemania; vendía a Argentina, Brasil y Chile, por 4,7 millones de libras, contra 4,4 de Alemania, y exportaba por 18 millones de libras a los territorios del Imperio, contra 1,8 millones de Alemania.

Pero veamos en particular el caso de la India. La competencia alemana no había conseguido imponerse, pese a ganar algún punto en sectores especiales, como los productos metalúrgicos. En conjunto, sobre el total de exportaciones industriales a la India, Gran Bretaña conservaba en 1913, una cuota del 80,40 por ciento. Alemania participaba solamente con el 8,5 por ciento, mientras exportaba manufacturas a la propia Inglaterra por el 32,3 por ciento del total de las importaciones inglesas de estos rubros y cubría el 30,6 por ciento de las importaciones de manufacturas de Estados Unidos (De Cecco).

A la vitalidad del sistema financiero inglés contribuían, además de las exportaciones industriales en el Imperio, y sobre todo a la India,

los fletes marítimos, asegurados por una flota mercante cuyo primado mundial apenas había sido perjudicado por la competencia y que, entre 1905 y 1908, afirmó significativamente su casi exclusiva presencia en los transportes del Imperio. Otro punto de apoyo eran las inversiones de capitales en el exterior, cuyos beneficios contribuían a compensar el creciente déficit de la balanza comercial (o sea, el mayor valor de las mercaderías importadas respecto a las exportadas) y a que el saldo final de la balanza de pagos fuera positivo.

Pero todavía hay que referirse a la particular misión que tenía asignada la India y a su función esencial en el sistema monetario y en el mecanismo de compensación que favorecía a Gran Bretaña. En los primeros tiempos, Gran Bretaña se beneficiaba principalmente de la diferencia de cambio entre el oro y la plata. La India conservó en su sistema monetario el monometalismo basado en la plata hasta 1893 y, como hemos visto, el metal blanco se devaluaba cada vez más frente al oro. La devaluación podía resultar ventajosa para los exportadores anglo-indios que en el exterior cobraban en oro y pagaban en la India con plata devaluada. Pero la balanza de pagos india estaba fuertemente endeudada con Gran Bretaña, y el saldo se contaba en oro. Como lo muestran las mismas fuentes inglesas, comparando las remesas de los años 1873-1874 y 1892-1893, la devaluación, sobre una suma total de 16 millones y medio de libras había costado a la India más del 50 por ciento a causa de las variaciones de cambio entre rupias de plata y libras de oro. Aun cuando se adoptó el patrón oro, la dependencia política india continuó jugando a favor de Inglaterra a través del mecanismo financiero que prefiguró el *gold change standard*, al que se intentó fijar el sistema monetario internacional después de la guerra y ya caduco el *gold standard*. Sustancialmente, las reservas de oro del gobierno de la India y el activo de la balanza comercial, que habían crecido enormemente entre 1893-1894 y 1912-1913, permanecían depositados en Londres. Una parte pagaba las importaciones de manufacturas inglesas y otra alimentaba el flujo de capitales que desde el mercado londinense financiaban a corto plazo la mayor parte de las transacciones en el mundo y, a largo plazo, las inversiones de capitales en el exterior.

5. La decadencia del *gold standard*

La dependencia de la India, y el fuerte aumento de sus exportaciones eran, por lo tanto, factores de estabilidad para el sistema monetario internacional basado en la libra esterlina. En cambio, un factor de inestabilidad, era Estados Unidos que carecía de un banco central y

de una organización crediticia capaz de regular y compensar los flujos estacionales.

Todavía en los últimos veinte años del siglo, la agricultura, los grandes cultivos desarrollados en las extensas haciendas del Centro y el Oeste, y la ganadería abarcaban una parte importante de la economía norteamericana. La financiación de las operaciones agrícolas, que alimentaba la demanda de créditos y de capitales, la venta de los productos y los consiguientes depósitos tenían un pronunciado carácter estacional y, dada la naturaleza de las instituciones de crédito norteamericanas, no era fácil el movimiento de capitales entre las distintas zonas del país, sobre todo entre Nueva York, principal centro financiero, y las regiones del Sudoeste. Estas dificultades elevaban las tasas de interés hasta puntos tan altos que durante la crisis de 1907, en el mercado de Nueva York, llegaron hasta el 125 por ciento. Cuando, tras varias alternativas, que principalmente tienen importancia para la historia interna, también Estados Unidos adoptó definitivamente el *gold standard,* la clara separación, casi incomunicación, entre la administración del Tesoro federal y las instituciones de crédito creó nuevas dificultades en el mercado monetario internacional entorpeciendo aún más la función mediadora y reguladora de Londres. El Tesoro norteamericano tendía a constituir sus propias reservas de oro, y por lo tanto se resistía a poner en circulación el metal precioso. La amplia participación inglesa o, mejor dicho, de la libra esterlina en la financiación de las actividades económicas estadounidenses obligaba a intervenir al Banco de Inglaterra, que a la postre debía asumir las responsabilidades de banco central también en Estados Unidos.

El predominio inglés se tornaba insostenible a medida que la expansión de la economía de Estados Unidos absorbía mayores cantidades de oro, que el Tesoro norteamericano se cuidaba muy bien de depositar en la capital británica. Por otra parte, también las plazas financieras de París y Berlín comenzaban a competir con Londres. Se tambaleaba el *gold standard,* que en realidad había sido el reinado de la libra esterlina (la unificación económica del mundo se había hecho bajo este signo). La guerra mundial le dio el golpe decisivo, y fueron vanos los intentos de resucitar el mismo sistema o cualquier otro que se le pareciera. Como se ha repetido mucho, había cambiado sustancialmente el equilibrio estratégico y económico que permitió el funcionamiento del sistema. Los ejemplos de la India y de Estados Unidos son particularmente significativos y muestran con toda claridad la interdependencia de los factores políticos y económicos. El dominio financiero de la libra esterlina, una vez perdida la sólida base de su antigua superioridad productiva, sólo podía mantenerse por vínculos de dependencia política como los que ligaban la India a Gran Breta-

ña. La misma adopción universal del *gold standard*, y sobre todo la preferencia que le daban las mayores potencias, obstruía gravemente lo que, se suponía, debía ser el «natural» funcionamiento del sistema, o sea, el libre flujo del oro según conveniencias puramente económicas.

La política monetaria y la existencia de una reserva de oro adecuada planteaban un problema tan importante que obligaba a los gobiernos a intervenir en los bancos centrales y las tesorerías para defender lo que consideraban los supremos intereses nacionales. En los últimos quince años se acentuaron las contradicciones que desde el comienzo habían caracterizado al período de 1870-1914.

Después de 1896 se vivió una notable recuperación económica originada en los cambios estructurales del campo industrial. Inmediatamente se notaron sus repercusiones en la expansión sin precedentes de las transacciones internacionales. Pero comienza a decrecer el clima de paz que había permitido, y aún lo hacía, el sistema monetario y de intercambio de mercaderías, y el flujo de hombres y capitales. Se reiteran cada vez más los motivos de conflicto, que tampoco habían faltado en los años anteriores; se van perdiendo la voluntad y la confianza necesarias para una solución pacífica de las controversias entre los distintos bloques que se oponen en Europa; profundos sentimientos de insatisfacción y de inquietud crecen en los círculos intelectuales, y las luchas sociales se hacen más ásperas.

CAPÍTULO 6

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

1. La era del acero

La producción de acero a bajo costo fue la novedad tecnológica más importante de las últimas décadas del siglo XIX; tanto, que el período merece ser llamado «la era del acero».

Las cualidades del acero ya eran bien conocidas en el pasado: su dureza y resistencia, sumadas a su elasticidad y plasticidad, permitían múltiples aplicaciones. Pero los procesos de refinado eran extremadamente lentos y costosos. Gracias a las mejoras introducidas por Bessemer, Martin-Siemens y Thomas, la producción de acero en Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica, pasó de cerca de cuatrocientas mil toneladas en 1870 a 32 millones de toneladas en 1913, con un aumento porcentual semejante (10,8 por ciento anual). Si se tiene en cuenta que los progresos en Estados Unidos eran aún más rápidos y espectaculares, con descubrimientos técnicos muy importantes como el acero de alta velocidad, y que la industria siderúrgica era la base de la industrialización de nuevos países, como Rusia, Japón o Italia, se puede comprender que la denominación «edad del acero» caracterice eficazmente esta fase del desarrollo industrial. Pero muy pronto se advierte que es insuficiente y parcial.

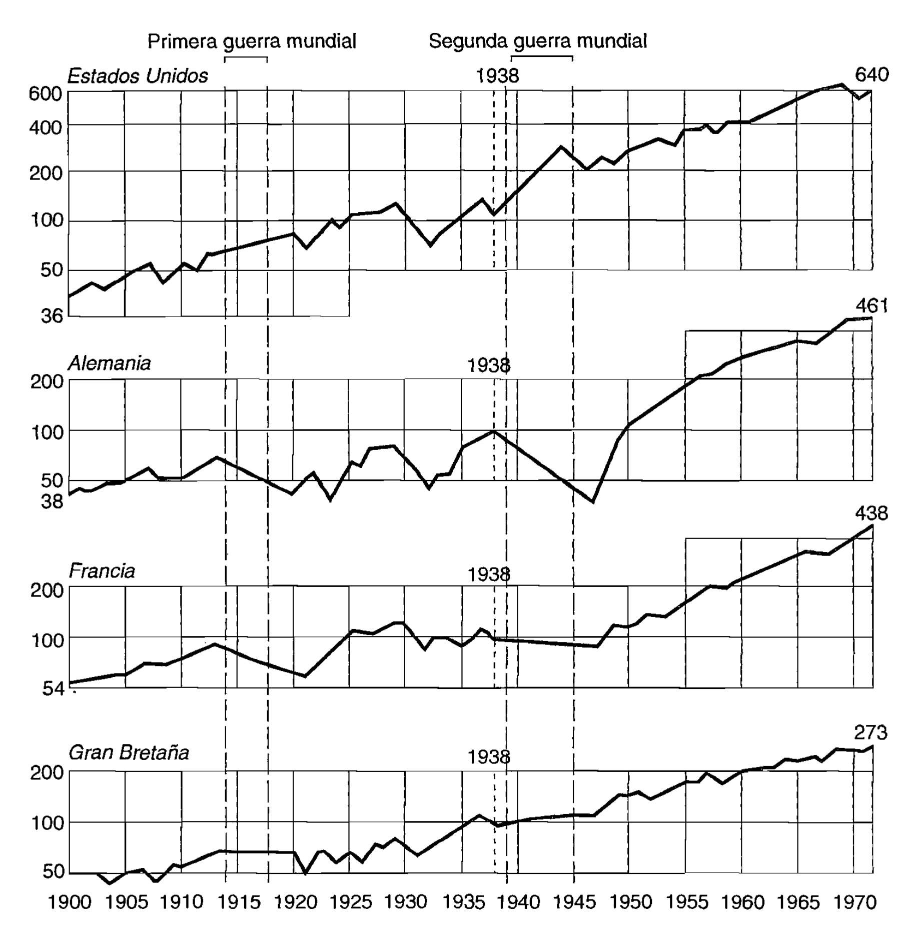
Las innovaciones y el aumento de la producción también tenían consecuencias decisivas en otros sectores de la industria, en las dimensiones de las empresas, en la inversión de capitales y en la organización del trabajo. Los principales descubrimientos y las primeras aplicaciones de los nuevos métodos se habían hecho en Inglaterra, el país más avanzado en el campo de la metalurgia durante los años setenta. Pero en pocas décadas la situación cambió radicalmente. Estados Unidos y Alemania, con la magnitud de sus establecimientos, la integración de los ciclos de producción, desde el transporte de materiales hasta la fundición, la laminación y el corte, y la rigurosa estan-

darización de los productos, despojaron a Inglaterra de su antiguo primado. Las fábricas británicas eran pequeñas, su producción muy poco integrada y la estandarización menos avanzada por una serie de razones, entre las que destacaban el sentimiento de superioridad y casi despreocupación de quienes gozaban de una cómoda ventaja, con el consiguiente hábito y apego a la tradición y a descansar en inversiones que ya se habían efectuado. Los ingleses se negaban a considerar obsoletas sus viejas fábricas y a renovarlas con la rapidez que exigían las aceleradas innovaciones tecnológicas, y los nuevos métodos de organización industrial. Se pueden distinguir claramente dos momentos en el desarrollo de la industria del acero: El primero, de reestructuración, reconversión y concentración, que modifica notablemente el funcionamiento del sistema industrial; especialmente Estados Unidos y Alemania, los países más recientemente industrializados, experimentan y adoptan los nuevos métodos, y organizan los cárteles y *trusts*. En el segundo momento, se alcanza una gran expansión productiva y, junto a sectores siderúrgicos consolidados que fabrican herramientas y armas, se abre camino la producción masiva de bienes durables. Pero, al finalizar el proceso de reestructuración y en el curso de la expansión que le siguió, el hecho de mayor interés es la transformación de las relaciones que mantenían los grandes países industriales: Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania. Se puede hablar con propiedad de un sistema internacional, de una integración económica mundial, pero no hay que olvidar que los estados nacionales y los imperios coloniales son las unidades y los ámbitos políticos y territoriales que concretan el sistema. Esta sola consideración basta para subrayar hasta qué punto la economía es, por así decirlo, siempre economía política, y que a lo largo de la historia, los intereses económicos y la vida política y social están estrechamente vinculados.

2. Industria mecánica y producción masiva

La sustitución del hierro por el acero, la calidad del nuevo metal y el enorme aumento de su producción son aspectos de fondo del desarrollo industrial. La siderurgia —ejemplo típico de la industria pesada, productora de bienes instrumentales— implica fábricas con nuevas dimensiones; exige el ciclo productivo completo, desde el mineral hasta el laminado, los lingotes, los cables, los tubos; requiere grandes inversiones de capital; impone la concentración y obliga a la nueva organización del trabajo que fue característica principal de este período.

El acero se presta a múltiples usos, pero, sobre todo, es especialmente apto para la construcción de máquinas y contribuye a la difu-



Fuente: M. Flamant y J. Singer-Kerel, *Crises et récessions économiques*, París, PUF, 1974.

FIG. 3. *Crecimiento comparado de la producción industrial desde 1900 hasta 1972 (1938 = 100).*

sión de bienes de consumo durables que cambiarán las condiciones y la calidad de vida del hombre contemporáneo. Los metales —y muy pronto se sumarán a los metales ferrosos los no ferrosos y, en particular, más tarde, los materiales plásticos, creación prodigiosa de una nueva actividad en constante crecimiento, la química industrial— son la materia prima para la construcción de maquinarias. Las máquinas pueden ser de diversos tipos y dimensiones. En primer lugar están las máquinas que construyen máquinas, herramientas esenciales para las fábricas que producen bienes de consumo durables, productos textiles, y para las que transforman y conservan productos alimenticios. El

progreso tecnológico y la amplia difusión del acero vuelven obsoletos los antiguos establecimientos, y exigen reconversiones sustanciales, adaptaciones y, a menudo, drásticas transformaciones. Eran necesarios equipos y aparatos que permitieran trabajos de precisión y lograran la estandarización necesaria para que las piezas fueran totalmente intercambiables. De los viejos taladros, tornos y cepillos, de las herramientas que hábiles artesanos y obreros especializados habían usado durante siglos para montar las máquinas y empalmar y ajustar las piezas una por una, se pasaba a la mecanización de todo el proceso, desde el perfeccionamiento del torno de torreta giratoria, la fresadora y las técnicas de pulido, hasta la cadena de montaje. Se llegaba así a la pérdida de peso y de prestigio de las corporaciones de trabajadores especializados, de los *maestros* que antes trabajaban a destajo y se distinguían, por sus remuneraciones y nivel de vida, de los obreros asalariados. La nueva tecnología nivelaba las distintas tareas convirtiéndolas en una repetición automática de gestos, convirtiendo al hombre en máquina, o colocándolo a su servicio, y organizando los tiempos de trabajo para obtener mayor eficiencia; según el sistema enunciado luego por Taylor de quien tomó el nombre de taylorismo.

Estas novedades aparecieron en las fábricas que producían las máquinas en función de la creciente demanda de bienes de consumo durables, o sea, de la necesidad de otras máquinas más pequeñas de uso individual que cualquier familia podía adquirir, extendiendo la mecanización a todos los momentos de la vida.

Como ha sucedido a menudo en la historia del progreso técnico, las exigencias bélicas estimularon el desarrollo de la mecanización y la orientaron hacia la producción masiva de armas, especialmente, pistolas y fusiles. Estados Unidos estaba a la vanguardia, sobre todo en la producción de pistolas, usadas habitualmente por los ciudadanos del país, como nos muestran las imágenes cinematográficas de la conquista y la vida del Oeste. La producción destinada a la guerra, o sólo a equipar los ejércitos y las flotas, es una pieza importante del sistema económico e industrial que se configuraba por estos años. Sin embargo, sólo cuando la población civil pudo acceder al mercado se disparó el impetuoso desarrollo de la industria mecánica; las etapas y, en cierta manera, la genealogía, son bastante elocuentes: máquina de coser, máquina de escribir, bicicleta y automóvil.

Queda por analizar el problema de la relación entre la oferta y la demanda, la condición que ofreció la ocasión favorable para crear un nuevo modelo de desarrollo o, más directamente, una nueva civilización, la «sociedad de consumo», que con el tiempo alcanzó su plena realización hasta el punto de que hoy sus contradicciones más llamativas son un tema de actualidad. Pero, al terminar el siglo XIX y en las

primeras décadas del XX echa raíces este árbol de frutos abundantes y sabrosos, capaces de alimentar y sostener un nuevo tipo de sociedad, pero también de envenenarlo. Estados Unidos asume la vanguardia; eventualmente se hacen inventos y prototipos en Europa, pero es del otro lado del Atlántico donde alcanzan una difusión masiva. El acceso al mercado de bienes durables es un problema de renta, amplitud y riqueza del mercado interno. En esa época sólo Gran Bretaña tenía algo semejante en Europa. Gran parte de los recursos y la producción industrial de Alemania, que crecían vertiginosamente, se destinaba a la creación de una industria de base, al equipamiento de nuevos sectores, químicos y eléctricos, y a las exigencias militares. No existía por entonces una demanda civil masiva de las mismas proporciones que en Estados Unidos. La diferencia de recursos a favor de Norteamérica era muy grande y ya no se podían comparar la amplitud del territorio, ni la capacidad demográfica, ni los recursos mineros y petroleros, ni la riqueza de la agricultura y de la ganadería, ni la extensión de la red ferroviaria, ni la multiplicación de las ciudades, ni el acelerado desarrollo industrial. Entre la demanda de bienes durables debemos mencionar la vivienda, y también en este terreno el desarrollo urbano de Estados Unidos no tenía competencia y, sobre todo, el ritmo de crecimiento urbano tenía efectos acumulativos y creaba una demanda agregada de enormes proporciones. Por otra parte, la producción en masa de máquinas para uso civil, en especial la más compleja y prodigiosa de todas, el automóvil, sólo podía desarrollarse en Estados Unidos.

El ejemplo del automóvil, cuya producción sólo alcanzó importancia al final del período que tratamos, sirve muy bien para mostrar la participación de distintos componentes en la complementación e integración del proceso de renovación y transformación industrial. La eficiencia y la economía del motor a combustión interna, uno de los adelantos de la mecánica del siglo XIX, no hubiera sido posible sin la refinación de la gasolina y el desarrollo y perfeccionamiento de la industria química y de la transformación de los productos derivados del petróleo. La propagación del uso del petróleo es otro de los rasgos que caracterizan a esta época. Si bien el carbón continuaba siendo la materia prima predominante en la creación de energía, en Estados Unidos la industria petrolífera alcanza tasas altísimas de inversión y crecimiento: De 2,5 millones de barriles en 1865 se pasa a 265,8 en 1914, con una tasa anual de aproximadamente el 10 por ciento y una inversión de capital agregado que va de 2.766 a 10.470 dólares. El valor total alcanzado aumenta, entre 1879 y 1914, de 106 a 892 millones de dólares. Pero, más que en la extracción del petróleo, aquí interesa insistir en su transformación, que abre el camino a una serie de sub-

productos y a los materiales plásticos. En este aspecto, la industria química fue decisiva: se hacían estudios muy profundos y sistemáticos experimentos de laboratorio que confirmaban la estrecha unión entre ciencia, técnica e industria y planteaban el problema de la educación técnica y, más en general, de la investigación científica y de la instrucción pública y masiva en la sociedad moderna.

3. Química y electricidad. Su influencia en los sistemas de producción

Los progresos de la química aplicada se enlazan con el empleo y la distribución de la electricidad, mostrando las influencias recíprocas y los condicionamientos de un proceso de desarrollo acumulativo. Ambos completan las innovaciones tecnológicas introducidas en estos años, destinadas a producir sus efectos revolucionarios en las décadas siguientes. El procedimiento electrolítico, por ejemplo, que permite extraer económicamente el aluminio de la bauxita (1886), fue posible cuando se logró disponer de grandes cantidades de energía eléctrica a bajo costo.

El control de las reacciones químicas tenía gran importancia en toda una serie de operaciones que afectaban tanto a la metalurgia como al uso mismo de la electricidad. Pero, probablemente, las innovaciones de más peso se consiguieron en la fabricación de sosa con el método Solvay. La extracción de la sosa del amoníaco volvía anticuado y antieconómico el sistema Leblanc y aumentaba considerablemente la producción de álcalis. En el área de los colorantes y el sector afín de la química orgánica, muy pronto los alemanes conquistaron una primacía indiscutible, seguidos, a cierta distancia, por los suizos. Se abrían perspectivas interesantísimas para la creación de nuevos materiales: sin hablar de los explosivos, bastará recordar el celuloide, las fibras artificiales y la baquelita. De la misma manera, en los laboratorios químicos nacía la moderna industria farmacéutica.

Hemos insistido en las conexiones y en los efectos acumulativos de los nuevos descubrimientos, o mejor dicho, en las aplicaciones industriales y la adaptación y perfeccionamiento de los antiguos principios conocidos desde tiempo atrás. Resulta difícil juzgar cuál de las innovaciones a las que hemos aludido fue la más importante. Quizás sólo se pueda afirmar que la electricidad modificó las condiciones de vida y de trabajo de grandes sectores de la población de manera más inmediata y profunda que los resultados revolucionarios conseguidos más tarde por el automóvil y la motorización masiva. «La electricidad no es una fuente, sino una forma de energía. La dínamo eléctrica y los

generadores son, esencialmente transformadores que cambian el agua y el vapor u otra fuerza primaria en corriente que puede ser acumulada en baterías, usada directamente para la iluminación, la calefacción o las comunicaciones, o la convierten en movimiento por medio de motores» (Landes). La facilidad de transmisión y la versátil convertibilidad son características esenciales y únicas de la electricidad que favorecieron su rápida difusión y la hicieron casi insustituible. Una vez resueltos problemas teóricos y prácticos nada simples, relacionados con la transformación y distribución de la corriente eléctrica, y perfeccionados la lámpara de filamento incandescente y los motores eléctricos —y todo ello sucedió en unas décadas, sobre todo a partir de los años ochenta— pudo aprovecharse la nueva forma de energía, que ofrecía luz, calor o fuerza motriz según la voluntad del usuario, los equipos disponibles y la potencia de las instalaciones. Se tomaba la cantidad, grande o pequeña, de energía necesaria y se la adaptaba a una u otra aplicación «sin cambios que implicaran pérdidas de tiempo o sacrificios de eficiencia»: y se pagaba lo que se consumía.

Las implicaciones revolucionarias de estas características, aun cuando parezcan evidentes, merecen ser recalcadas explícitamente. Hasta que la electricidad no pudo ser transportada hasta las fábricas, había que instalar las máquinas cerca del «primer motor» para que funcionaran. Ya se tratara de una caída de agua, o de vapor, la transmisión de la energía y su transformación en movimiento debían realizarse a través de complicados engranajes —árboles de transmisión, para simplificar— que no podían superar cierta longitud. Es verdad que se intentó obviar esta limitación transportando gas y fluidos con sistemas hidráulicos y neumáticos, pero muy pronto la electricidad demostró ser muy superior y más versátil.

Las centrales eléctricas comenzaron a funcionar a principios de los ochenta, en Inglaterra antes que en otros países, y entre los pioneros se destacaron los hermanos Siemens; en breve, Alemania ocupó el primer lugar en Europa. Las primeras instalaciones se dedicaban especialmente a suministrar energía para la iluminación. También en el campo de los transportes hubo experiencias y aplicaciones precoces: tranvías y ferrocarriles eléctricos se multiplicaron después de que Siemens, ya en 1879, presentara un prototipo en la exposición industrial de Berlín. Pero habrá que esperar a los comienzos del siglo XX para comprobar el poder insospechado de la energía eléctrica como fuerza motriz para la producción industrial. El perfeccionamiento del motor eléctrico a inducción con corriente alterna y de los sistemas de corriente alterna polifásica abre entonces nuevas e inmensas perspectivas.

«Cómoda y dúctil como era, la electricidad transformó la fábrica. El motor podía ser adaptado a la herramienta y ésta llevada hasta la

pieza que debía elaborar; una ventaja particularmente importante en mecánica y en otras industrias dedicadas a la manufactura de objetos pesados. Y así se podía disponer de espacios libres en vez de la jungla de cigüeñales, engranajes y correas de transmisión que había sido la característica más llamativa de las salas de máquinas del tiempo de las hilanderías hidráulicas, entre 1770 y 1780; un peligro para los trabajadores, una fuente de averías y un desperdicio de energía.

»Pero la electricidad no se limitó a cambiar la técnica y la imagen de los establecimientos. Al suministrar energía, además de a las fábricas, a un amplio mercado fuera de ellas, invirtió una tendencia histórica secular, dio nuevo aliento y abrió nuevos horizontes a la dispersa industria casera y a los pequeños talleres, y modificó el modo de producción. En particular permitió una nueva división del trabajo entre unidades grandes y pequeñas. Mientras antes ambas se oponían dentro de un determinado sector industrial —unas prósperas que utilizaban las nuevas técnicas y otras en decadencia, sujetas a los antiguos métodos—, ahora era posible la complementación. Ambas podían servirse de equipos modernos; las fábricas se concentraban en objetos de grandes dimensiones o en la producción estandarizada, que requería técnicas muy costosas, mientras el pequeño taller se especializaba en procesos que exigían un trabajo más intenso y empleaban máquinas eléctricas ligeras. A menudo, la complementación se convirtió en simbiosis: la estructura moderna de subcontratación de la manufactura de bienes de consumo durables se basaba en la eficiencia tecnológica del pequeño taller mecánico» (Landes).

4. *Trusts* y corporaciones: la concentración industrial

En el período que finaliza en 1914, y que hemos tratado en las páginas anteriores, se atisbaban perspectivas y anticipaciones del futuro. La característica predominante, también en cuanto a la electricidad, seguía siendo la construcción de grandes infraestructuras básicas: centrales hidroeléctricas, establecimientos siderúrgicos, astilleros y fábricas para la industria mecánica. Con la conversión y reestructuración de las empresas se buscaban mayores dimensiones y capacidad de producción. Todo ello implicaba crecientes inversiones de capital y una organización del trabajo más rigurosa.

Las sociedades por acciones eran uno de los sistemas que permitían, al ampliar la base de captación de capitales, superar las limitaciones de las empresas familiares. Las compañías podían adquirir dimensiones enormes y se abría el camino hacia la concentración, las fusiones, los grupos de sociedades, *holdings*, y las participaciones ma-

yoritarias y minoritarias en los capitales que hoy constituyen la estructura de las modernas empresas industriales y financieras. No por ello hay que pensar que desaparecieron las pequeñas empresas; incluso aumentaron en números absolutos, pero su peso en la vida económica era menos importante y ya no caracterizaban la actividad económica y productiva. También es significativo que el proceso de concentración fuera más acentuado y eficaz en los dos países, Estados Unidos y Alemania, cuyo desarrollo económico mantenía el ritmo más intenso.

Una vez más, Estados Unidos marchaba a la vanguardia. Se suele mencionar a la Standard Oil Company como ejemplo del primer *trust*, o sea, la primera sociedad monopólica. Aun antes de fundar la sociedad, en 1882, su propietario, John D. Rockefeller, había logrado asegurarse el control de casi todas las refinerías de petróleo que operaban en Cleveland. Al comenzar los años ochenta, la Standard Oil controlaba el 90 por ciento de las refinerías de todo el país. La etapa de concentración más intensa, el período de nacimiento y consolidación de las grandes corporaciones norteamericanas, se ubica en los veinte años que transcurren entre 1882 y 1901: la fecha inicial es, como hemos dicho, la de la fundación de la Standard Oil, la final corresponde a la fusión de las mayores empresas siderúrgicas en la United States Steel, impulsada por el banquero John Pierpont Morgan.

La extensa red de ferrocarriles afirmaba las bases del poderío financiero e industrial del capitalismo norteamericano. En este aspecto, el ascenso de Morgan es ilustrativo. Había alcanzado su posición organizando y financiando obras ferroviarias. La crisis de 1893 le permitió ampliar aún más su imperio: tenía en sus manos algunas de las líneas más importantes de Estados Unidos. Muchos datos confirman la importancia de los ferrocarriles y de los transportes en general, en las nuevas dimensiones que adquiría la actividad económica. Bastará recordar que la Standard Oil logró vencer a los productores petroleros que intentaron oponerse a su monopolio gracias al control de los medios de transporte y a las tarifas ferroviarias preferenciales.

El control de las tarifas de los ferrocarriles y la coordinación de las distintas sociedades privadas que los administraban exigieron la intervención del gobierno federal con una serie de medidas, a veces inspiradas en principios antimonopólicos. Pero, generalmente, las disposiciones *antitrust* fracasaron. Las grandes corporaciones continuaron siendo el fundamento de la estructura capitalista norteamericana, y las intervenciones del gobierno, en definitiva, sólo consiguieron eliminar algunos litigios y excesos peligrosos para el régimen oligopólico que se había creado. Ni entonces ni después se consiguió un verdadero monopolio, ni una regulación y un control completos de la pro-

ducción; no obstante la creciente integración económica mundial, lo impidieron la fragmentación territorial y política y la conciencia o la exaltación de opuestos «supremos intereses nacionales». Sin embargo, el avance hacia la socialización de la producción fue rápido e imparable, y los colosos industriales y financieros, las primeras empresas multinacionales, tuvieron un papel protagónico.

En lo que respecta a Estados Unidos, el catálogo de las actividades y compañías en las que tenía intereses Pierpont Morgan (en la primera década del siglo XX) incluye algunas de las empresas norteamericanas más activas, tanto en el país como en el exterior. La United States Steel (la corporación del acero) incluía ciento cincuenta y ocho sociedades y tenía un capital de 1.400 millones de dólares. Hay que tener presente que Estados Unidos se había convertido en el mayor productor mundial de acero: entre 1865 y 1910 el salto hacia adelante había sido espectacular, la producción de arrabio y de acero había pasado de veinte mil toneladas a veinticinco millones de toneladas, casi de 100 a 1.500 veces más. Más tarde, Morgan fundó la International Harvester Company, en un sector, el de la maquinaria agrícola, que comenzaba a tener creciente importancia en otros países; organizó luego una empresa naviera, la International Mercantile Marine; tenía una considerable participación en algunas otras firmas gigantescas, como la New York Rapid Transit Company, la General Electric y la American Telephone and Telegraph, y muchas más.

La mención de la General Electric, el enorme *trust* que dominaba el sector eléctrico en Estados Unidos, recuerda el análogo proceso de concentración ocurrido en Alemania en beneficio de la Allgemeine Elektrizitäts Gesellchaft, más conocida por las siglas AEG. Alrededor de 1910, esta empresa había absorbido, o participaba en la dirección de cerca de doscientas sociedades y era una de las primeras del mundo por su magnitud. También en el sector del acero, las fusiones y combinaciones habían conducido a la industria alemana a constituir sociedades gigantescas. Inglaterra quedó atrás en este proceso de reestructuración, aun cuando no faltaron ejemplos destacables. Pero, en general, las empresas británicas fueron más pequeñas y menos competitivas que los gigantes alemanes o norteamericanos que dominaban la producción industrial, principalmente en los sectores más modernos.

5. **Banca e industria: el capital financiero**

En este período, el pasaje del llamado capitalismo competitivo al capitalismo monopólico u oligopólico, se produce mediante acuerdos

más o menos permanentes entre empresas que conservan su independencia de gestión. Se establecían políticas de precios comunes, se pactaban los niveles y tipos de producción y se repartían los mercados. Los llamados «cárteles», tuvieron éxito, sobre todo en Alemania, donde eran legales y se beneficiaban de una estructura industrial y financiera particular en la que los bancos, que tenían intereses en algunas industrias, podían intervenir para eliminar la competencia (perjudicial para ellos) entre sus clientes, vigilar y garantizar los acuerdos.

La intervención de los bancos en la financiación de la industria y, a veces, en la misma gestión de la política empresarial, es otra característica de esta época, e indujo a algunos críticos socialistas de la sociedad industrial, en particular a Lenin, a subrayar, o mejor dicho, a denunciar el choque entre intereses financieros e industriales. Para Lenin, uno de los cinco síntomas del imperialismo, era la «fusión del capital bancario con el capital industrial y la formación de una oligarquía financiera sobre la base de este "capital financiero"». En efecto, los ejemplos de banqueros norteamericanos como Morgan, o de la función que cumplieron los bancos en la industrialización de Alemania, confirman los estrechísimos vínculos existentes entre el capital financiero y el industrial. Pero Lenin, al insistir en el carácter, además de monopólico, parasitario y corrupto del capitalismo de su tiempo, subestimaba la importancia de los progresos tecnológicos y de la capacidad de producción del nuevo sistema industrial que hemos mencionado en las páginas precedentes; subestimaba también la enorme cantidad de capital fijo, el aumento de la productividad, la función del mercado interno en los países más avanzados y la marcha hacia la producción masiva, para detenerse, en cambio, en la importancia de la exportación de capitales comparada con la exportación de mercaderías. De esta manera sólo emitía un juicio parcial acerca de la «primacía del capital financiero sobre todas las otras formas del capital» o de «la posición predominante del rentista y de la oligarquía financiera» en la vida económica.

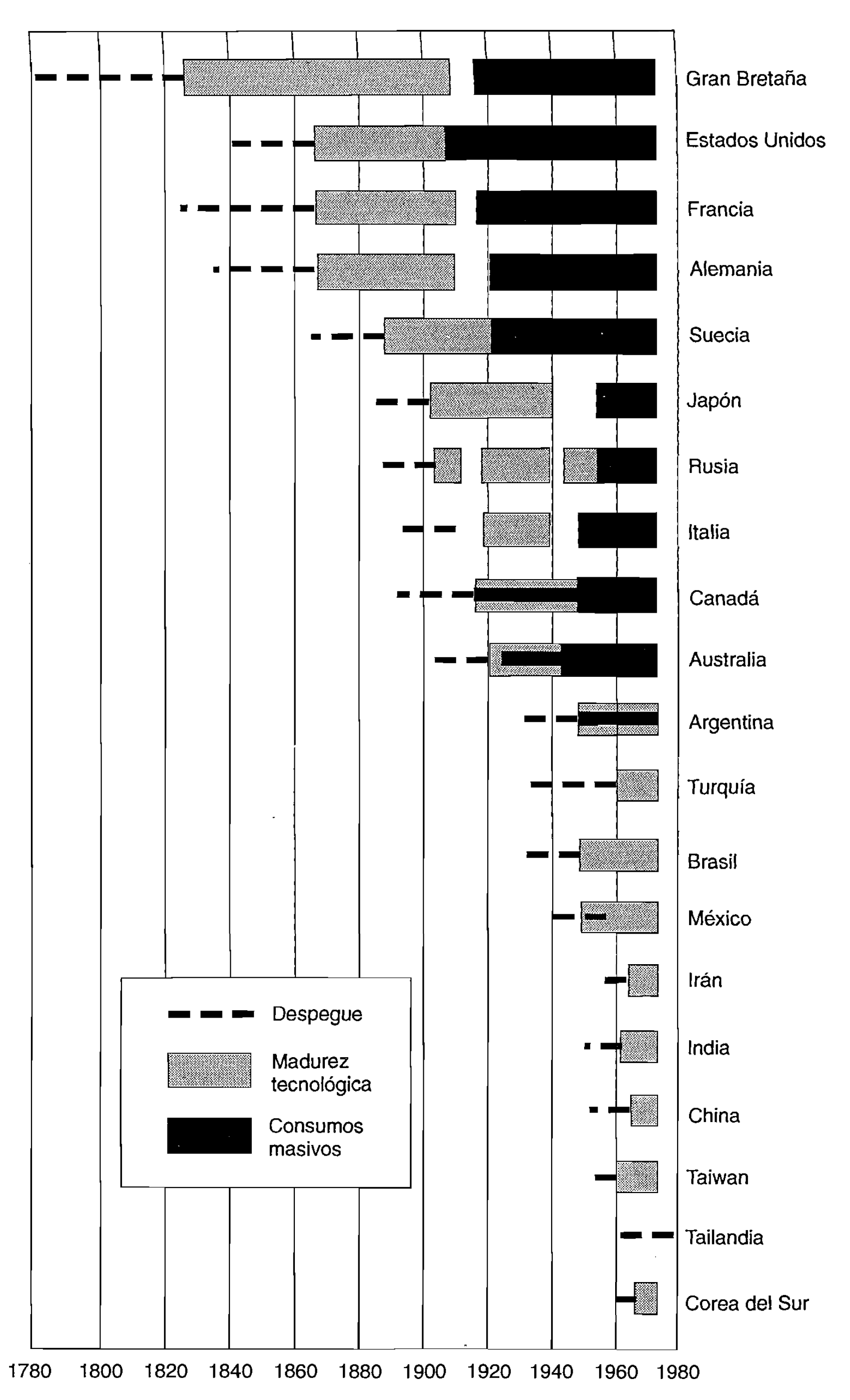
6. El problema del despegue industrial: la banca mixta

No obstante, la financiación de las industrias por la banca continuó siendo un aspecto fundamental del período 1870-1914, ligado a la ampliación del área industrial más allá de los territorios, relativamente restringidos (Inglaterra, el norte de Francia, Bélgica) donde había transcurrido la primera fase de la industrialización. En efecto, el carácter sobresaliente del período es la aparición de nuevas potencias in-

dustriales. Un investigador norteamericano, Watt W. Rostow, ha identificado una serie de requisitos que, en parte, se podrían medir estadísticamente, que precisan el momento del paso (el *take off*, el «despegue») de la sociedad prenewtoniana al desarrollo industrial.

El despegue, el momento del salto cuantitativo necesita un período de gestación en el que se crean las condiciones previas. En esta etapa tienen más importancia las transformaciones sociales, políticas y culturales que los aspectos económicos y técnicos. Sería la fase de formación de una mentalidad burguesa. «Se generaliza la idea de que el progreso económico no sólo es posible, sino que es una condición necesaria para alcanzar cualquier otro fin considerado bueno, ya se llame dignidad nacional, provecho privado, bienestar general, o una vida mejor para los hijos... Aparece en la economía privada, en el gobierno de la cosa pública, o en ambos campos a la vez, un nuevo tipo de hombres de acción, decididos a invertir ahorros y a asumir riesgos en la búsqueda del beneficio o de la modernización. Surgen bancos y otras instituciones dedicadas a mover el capital.» Sobre todo, como se diría hoy, es decisiva la voluntad política; por lo tanto, aparece el Estado nacional centralizado como requisito previo insustituible. Se debe producir una transferencia sustancial de recursos y ganancias. «Los beneficios de los terratenientes que superen el mínimo necesario para su mantenimiento, deben pasar a manos de quienes los gastarán en la calle, en ferrocarriles, en escuelas y fábricas, y no en casas de campo y servidores, adornos personales y templos.»

Se acepten o no las fases del desarrollo y los requisitos propuestos por Rostow, es imposible negar que, entre 1860 y 1914, además de Estados Unidos y Alemania, que figuraron con pleno derecho entre los países industriales, Suecia, Japón, Rusia, Italia y Canadá, y probablemente también Checoslovaquia y Austria, construyeron una base industrial capaz de autopropulsarse. Las condiciones para el desarrollo en estos países fueron tan diferentes que no se puede generalizar. Plantean la cuestión, fundamental para el mundo contemporáneo, del desarrollo desigual y de las posibilidades y medios para superar el atraso económico. Lo que resulta muy evidente es que la situación particular que se había dado en Inglaterra, precisamente por su precursora originalidad, no podía repetirse mecánicamente en otros lugares. La misma existencia de países ya industrializados planteaba nuevos problemas. Algunas de las características que hemos visto, como la dimensión de las instalaciones, la ingente cantidad de capital social fijo (infraestructuras, transportes) y, más en general, la magnitud de las inversiones necesarias para establecer una manufactura de base y avanzar hacia la industrialización, hacían muy complicado el despegue. Los factores espontáneos y originarios, por llamarlos de al-



Fuente: W. W. Rostow, *The World Economy. History and Prospect*, Austin, University of Texas Press, 1978, p. 51.

FIG. 4. *Fases del desarrollo económico, 1780-1980.*

guna manera, que habían actuado entre el final del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, debían sustituirse por otro tipo de agentes que, justamente por eso, se denominan «sustitutos». Entre éstos tenían particular trascendencia la banca y el Estado.

El ejemplo histórico en el caso de la banca nos lo ofrece, en la Francia del segundo imperio, el Crédit Mobilier, de los hermanos Pereire y los que se asociaron con ellos para financiar la construcción de ferrocarriles, canales, puertos, la reestructuración edilicia y la ampliación de las ciudades, y los establecimientos mineros e industriales. De la iniciativa de los Pereire nació la «banca mixta», una creación principalmente alemana que cumplió un importante papel en la industria de ese país y de Italia, y operó también con eficacia en Austria, Rusia y otros países de Europa continental. La «banca mixta», como su nombre lo indica, no se limitaba a la financiación de las actividades industriales como habían hecho los hermanos Pereire (inversiones en instalaciones fijas y, por lo tanto, capital inmovilizado a largo plazo), sino que ejercía también de institución de crédito comercial, o sea negocios a corto plazo, y de banca de depósito (recaudación y custodia de ahorros, apertura de cuentas corrientes y circulación de órdenes de pago). Estas últimas operaciones eran características del sistema crediticio inglés, que había dado vida y visto florecer los bancos de depósito y descuento comercial. Los bancos mixtos llevaron adelante una clara política industrial y, sobre todo, favorecieron en Alemania, Austria e Italia, el desarrollo de la minería, la siderurgia, la electricidad, la mecánica y la química, o sea los sectores industriales más modernos. Tampoco les faltó financiación a las industrias textil y de la alimentación, pero el interés por estas manufacturas fue mucho menor. Por lo demás, conviene recordar, en una perspectiva de largo plazo, que en estos años ya se producía la redistribución de los sectores productivos, que culminará en el siglo XX. Al terminar el siglo XIX, los textiles y la alimentación participaban con un 47 por ciento en la producción manufacturera europea, y con un 44 por ciento en la norteamericana; la metalurgia y la mecánica, con un 16 por ciento en Europa y un 10 por ciento en Estados Unidos; en 1950, textiles y alimentación habían descendido en Europa al 21 por ciento y en Estados Unidos, al 19, mientras que la metalurgia había crecido el 34 por ciento en Europa y el 41 por ciento en Estados Unidos.

El crecimiento y la concentración de las instituciones de crédito seguía los mismos pasos, y a menudo precedía a la concentración y la organización en cárteles de la industria. Como se ha señalado, el compromiso de los bancos en las inversiones industriales imponía la especialización y la participación en la política empresarial. «Solía de-

cirse que un banco alemán acompañaba a una empresa industrial de la cuna al ataúd, desde su fundación hasta su liquidación, a través de todos los vaivenes de su existencia. Por medio del mecanismo de los créditos y las cuentas corrientes, formalmente a largo plazo pero en realidad a corto plazo, los bancos adquirieron un poderoso ascendiente sobre las empresas industriales y, con el desarrollo de los consejos de administración como los órganos más poderosos de las sociedades, extendieron su influencia a las decisiones empresariales y de dirección.» Desde su posición privilegiada de control de las fuentes de financiación, los bancos también podían aconsejar y concretar fusiones y otras combinaciones; pero, especialmente, alentar la formación de cárteles para evitar la competencia entre empresas y sectores industriales en los que estaban comprometidos directamente.

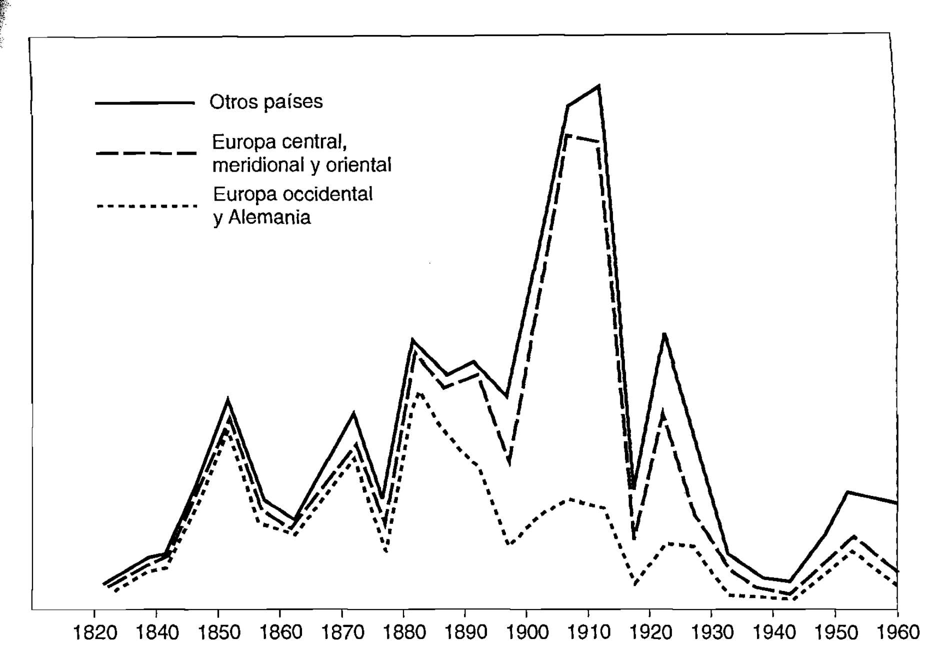
7. La intervención del Estado

Mientras las ganancias industriales fueron importantes —y, salvo algún momento de crisis, esto sucedió durante todo el período que analizamos, especialmente después de 1896— las inversiones de los bancos fueron particularmente ventajosas y los depósitos de los ahorristas no corrieron peligro. Pero la situación cambiaría apenas se presentaran dificultades para el desarrollo industrial. La inmovilización de capitales amenazaba la disponibilidad de los depósitos de miles o millones de ahorristas. Ante las crisis, el Estado se vio obligado a intervenir para apuntalar la confianza pública y el crédito, y salvar a la colectividad de pesadas pérdidas que podían provocar daños irreparables, incluso a la industria. La iniciativa y el capital privados eran incapaces de hacer frente a los problemas de funcionamiento del sistema. Pero, antes aun de que fuera necesaria la intervención del Estado para salvar bancos e industrias, la política económica y social de los gobiernos demostró ser el instrumento decisivo y, en algunos casos, característico de este período. Mientras se extendía el régimen político liberal-democrático hasta ser considerado la forma política inherente e inseparable de la modernización económica, llegaba al ocaso la antigua ortodoxia librecambista del *laissez faire*, y del Estado «guardián». En todas partes la política de los gobiernos había tenido siempre una incidencia importante en la economía: pero ahora su intervención asumía mayor amplitud y, en algunos casos se dirigía prioritariamente a dotar al país de una industria moderna, considerada con razón la base del poder político-militar. Lo prueban los ejemplos de Rusia en las últimas décadas del siglo XIX y de Japón a partir de los años setenta. También en Alemania y en Italia el apoyo a la mo-

dernización económica y al desarrollo industrial son importantes. La garantía y el aliento del Estado eran especialmente indispensables para las inversiones de capital social fijo (ferrocarriles, infraestructuras) en los países que todavía tenían una red crediticia primitiva y era difícil encontrar capitales disponibles. Es verdad que, en un análisis más profundo, conviene distinguir entre diferentes situaciones, tradiciones y niveles de desarrollo de las fuerzas económicas y sociales. En los países donde ya existía cierto desarrollo de las relaciones comerciales, los instrumentos jurídicos y las iniciativas empresariales, el impulso hacia la industrialización podía, en cierto modo, surgir de la base, y era suficiente que el gobierno lo secundara, en ocasiones compartiendo el esfuerzo con otros intereses. En cambio, allí donde las condiciones eran mayormente débiles, prevalecían los intereses agrarios y los contactos con los países económicamente más avanzados eran superficiales o inexistentes, la acción del gobierno y los órganos del Estado eran la palanca principal para remover obstáculos y promover la industrialización. Las resistencias a vencer podían ser enormes, a veces insuperables, y los métodos autoritarios eran bastante más eficaces que los liberales y parlamentarios. Pero de ello hablaremos al examinar los casos particulares; bastará recordar aquí, una vez más, el ejemplo de Japón. Hay acuerdo unánime entre los investigadores sobre la función estratégica central de los medios de comunicación, desde los ferrocarriles hasta el transporte naval en el proceso de industrialización: se trata de las infraestructuras, del capital social fijo que son los cimientos sobre los cuales se asienta el edificio industrial.

8. **Crisis agraria y emigración**

Es necesario subrayar los profundos cambios que la nueva red de transportes terrestres y marítimos provocó también en el sector agrícola, en la dispersión de la población y en la disponibilidad de fuerza de trabajo. Los cereales, en particular el trigo, eran la base de la alimentación europea. En los años ochenta los mercados ofrecían abundancia de cereales a bajo precio. Provenían de Rusia, Australia y, sobre todo, de las fértiles llanuras de Estados Unidos, donde se aplicaban a los cultivos los novedosos fertilizantes químicos y la agricultura estaba totalmente mecanizada. El aumento de la productividad era espectacular: para cosechar dieciocho hectolitros de cereal por hectárea con los métodos normales de cultivo en 1830 se necesitaban ciento cuarenta y cuatro horas de trabajo; en 1896, con las máquinas que se empleaban habitualmente en los campos norteamericanos eran sufi-



Fuente: Reinhard y otros, *Storia della popolazione mondiale*, Bari, Laterza, 1971.

FIG. 5. *La emigración europea a Estados Unidos entre 1820 y 1960.*

cientes veintidós horas. Los ferrocarriles, y los grandes buques a vapor estaban listos para transportar toneladas y toneladas de granos a las regiones europeas donde la densidad de la población o el nivel de ingresos no permitían adquirirlo fácilmente. Competían la oferta y la demanda, pero las consecuencias económicas y sociales eran perturbadoras. El precio del trigo en el mercado inglés, que no impuso ninguna barrera aduanera, cayó a más de la mitad entre 1871 y 1895. Por eso los años ochenta fueron los de la crisis agraria, que golpeó sobre todo a aquellos países cuya productividad era baja y el rendimiento de los cultivos era muy escaso. Se imponía una urgente reconversión de la agricultura; Gran Bretaña, donde la población dedicada a la agricultura ya era muy reducida y la productividad alta, se apresuró a reaccionar adoptando los métodos más modernos de cultivo, máquinas y fertilizantes, o desechando los terrenos menos aptos y, especialmente, impulsando la ganadería.

Dinamarca se lanzó decididamente por el mismo camino, convirtiéndose en un caso ejemplar de reconversión agrícola: de una producción orientada a la obtención de cereales, pasó en un lapso muy

corto a la ganadería y logró un fortísimo aumento de la producción lechera y de caseína, que vendía principalmente en el mercado inglés. El perfeccionamiento de las descremadoras favoreció el proceso de transformación y, además, el espíritu asociativo creó una extensa red de cooperativas eficientes que permitió la supervivencia y aun el enriquecimiento de los pequeños productores campesinos.

Otros países, entre ellos Italia, Francia y Alemania respondieron a la invasión de cereales norteamericanos con el proteccionismo. En los dos últimos, al amparo de la protección aduanera, la agricultura se afirmó derivando hacia la ganadería, la industria láctea y el desarrollo de cultivos hortícolas y especializados; el saneamiento y la transformación de la agricultura italiana, en cambio, chocaron con un obstáculo muy grave en la miseria y el atraso económico y social de algunas regiones, especialmente las del Sur. Mientras en la llanura del Po el nivel de la producción, la integración de agricultura y ganadería y la especialización arrocera conseguían ser competitivas, la situación en el Sur caía pese a cultivos mediterráneos como la vid y el olivo. Además, en las regiones septentrionales, el desarrollo industrial absorbía el excedente de población rural que quedaba «libre» por la creciente productividad obtenida con los modernos sistemas agrícolas; al contrario, el crecimiento demográfico de las regiones meridionales, a falta de otras actividades productivas, pesaba sobre los recursos limitados de una agricultura pobre. El caso italiano, particularmente el flujo migratorio transoceánico alimentado por las poblaciones del Sur, permite recordar otro de los aspectos que caracterizaron el período 1870-1914: la emigración masiva, la formación de un mercado de trabajo «atlántico», signo de la posterior integración económica mundial. Se confirma, entonces, que Europa exportaba mercaderías, hombres, capitales y servicios: mercaderías, capitales y servicios, los países más ricos; fuerza de trabajo, los más pobres. Para apreciar la intensidad que asume en estos años el fenómeno migratorio, hay que considerar que de los 55 millones de europeos emigrados en más de un siglo, de 1821 a 1924, alrededor de 21 millones partieron entre 1870 y 1900. En unos pocos años, Estados Unidos absorbió cerca de un millón de inmigrantes anuales. Solamente en Italia, entre 1876 y 1918 hubo 14 millones de expatriados.

La facilidad de los transportes —el precio del billete para Estados Unidos y América en general era relativamente accesible, porque los barcos que transportaban productos alimenticios y materias primas a Europa quedaban disponibles en su viaje de regreso— creó durante algún tiempo una verdadera complementación entre la oferta y la demanda de trabajo. Sólo el tráfico de esclavos puede, en ciertos aspectos, compararse con este gran movimiento humano, pero con una di-

ferencia sustancial: millones de negros fueron transportados a América en el curso de dos siglos, mientras que los millones de europeos viajaron en apenas treinta o cuarenta años. A través de la emigración masiva de fuerza de trabajo, sobre todo hacia Estados Unidos, el desarrollo industrial de América se vincula con el de las antiguas estructuras rurales de Europa.

CAPÍTULO 7

ESTRUCTURAS CONSTITUCIONALES, VIDA POLÍTICA Y TENDENCIAS CULTURALES EN EUROPA

1. **Monarquía y república**

En 1870 se impone en Europa el Estado monárquico. Italia y Alemania —que precisamente en aquellos años conseguían su unidad nacional y, por lo tanto, se encontraban frente a la posibilidad de otra opción— confirmaron plenamente el prestigio, la fuerza y el peso de la tradición y de las instituciones monárquicas: los Hohenzollern y los Saboya asumieron las coronas del nuevo Reich alemán y el nuevo reino de Italia.

La derrota de 1870 —con la caída del segundo imperio napoleónico— puso también a Francia frente a una decisión institucional. Las dificultades y las resistencias que encontró el abandono de las instituciones monárquicas se manifestaron en este caso de una manera clara e interesante, mostrando cómo, más allá del aspecto jurídico y formal, pesaban las posiciones de las fuerzas políticas e ideológicas. La república estaba asociada históricamente a la tradición democrática y jacobina de la Revolución francesa y, por ello, su nombre suscitaba desconfianza y temores en los ambientes aristocráticos, moderados y liberales que dominaban la vida política. Los ideales y concepciones monárquicos de estas fuerzas eran muy variados y, en algunos casos, muy diferentes; pero en Europa occidental, la monarquía, en su forma constitucional —y luego, parlamentaria—, contrapuesta a la idea de la república democrática, conseguía reunir a estos círculos en un frente bastante amplio que encontraba en la monarquía un punto común de referencia y de equilibrio. Parecía que el principio de la soberanía popular y nacional, que ya no podía ser ignorado, no rechazaba la presencia de la monarquía hereditaria; las fórmulas de compromiso, explícitas o tácitas, eran numerosas. No se planteaba la alternativa «rey» o «pueblo», derecho hereditario y divino contra so-

beranía popular; en cambio, se insistía en que la monarquía representaba la continuidad del Estado, el símbolo de la unidad nacional, la garantía del sistema constitucional, ubicada, como estaba, árbitro de la lucha política, por encima de grupos y partidos.

Allí donde las instituciones representativas eran más recientes y la dinastía estaba más arraigada, se formaban en torno a la monarquía poderosos grupos de presión de la antigua y la nueva aristocracia. Habitualmente se reclutaban entre estas clases los oficiales del ejército, los diplomáticos y otros altos cargos de la burocracia. Sin embargo, muchos demócratas sinceros creían que la monarquía era capaz de ejercer con eficacia su función de garante de las instituciones parlamentarias y de encarnar el ideal de la unidad nacional.

Generalmente, más alla de las razones políticas, la monarquía era popular. Como el soberano se situaba por encima de los grupos y partidos no era difícil idealizarlo. La riqueza, el esplendor y las ceremonias de la realeza fascinaban a la gente común despertando su fantasía e imaginación. Todavía en 1905, Noruega, que se había separado de Suecia, fue convocada a un plebiscito para pronunciarse por la república o la monarquía y eligió a esta última por una gran mayoría.

Aunque no es ni indiferente, ni insignificante, la monarquía es sólo uno de los elementos del marco institucional y del modelo de organización política que se extiende y se consolida en Europa entre 1870 y 1914. También caracterizan y califican a este modelo los poderes reales de representación política, las formas en las que se expresa la voluntad popular (libertad de prensa, de asociación, sistema electoral), la amplitud de la jurisdicción y las competencias de la administración pública. Por eso la distinción entre monarquía y república es cada vez menos importante para determinar el régimen político e institucional.

En este sentido, pueden servir de ejemplo el régimen que se instaura en Francia después de 1870 y las formas en que evoluciona. Tras la caída de Napoleón III no se proclamó formalmente la república y en la asamblea nacional, elegida por sufragio universal, se impusieron las tendencias monárquicas y conservadoras, reforzadas por el temor inspirado por la Comuna de París. Solamente en 1875, y con una mayoría de un solo voto se introduce la palabra «república» en las leyes constitucionales, no como forma explícita del nuevo Estado, sino refiriéndose al «presidente de la república», que debían elegir cada siete años los miembros de ambas cámaras en sesión conjunta. La restauración monárquica fracasó por las disidencias de las fuerzas monárquicas, divididas entre orleanistas, bonapartistas y legitimistas, y la intransigencia del conde de Chambord, que se negó a aceptar la bandera tricolor, pretendiendo volver al pabellón de los lises. Pero el poder del presidente de la república era semejante al de un monarca consti-

tucional, o quizás mayor. Acumulaba los poderes de jefe del Estado y jefe del gobierno. Los ministros eran responsables ante la Asamblea, pero también ante el presidente, que podía disolver la Cámara y convocar a nuevas elecciones.

2. La república parlamentaria en Francia

La presidencia de la república había sido confiada al mariscal legitimista Mac Mahon (mayo de 1873) después de que Thiers despertara los recelos de la mayoría monárquica. Las elecciones de 1876 modificaron la situación instalando una mayoría republicana en la Cámara. El Senado continuó dominado por los monárquicos. Mac Mahon se valió de su derecho de disolver la Cámara de los diputados. Después de una encendida campaña electoral —en la que se distinguió Gambetta—, quedó confirmada la mayoría republicana y, en 1879, la nueva tendencia se hizo sentir también en la renovación parcial del Senado. Mac Mahon buscó un pretexto para dimitir y fue sustituido en la presidencia por Jules Grevy. De hecho, nacía la tercera república, que perduraría hasta 1940. Formalmente, continuaron vigentes las leyes constitucionales votadas en 1875, pero después que Grevy declaró que renunciaba al derecho de disolver por propia iniciativa las cámaras, y afirmó que nunca se opondría a «la voluntad nacional» expresada en los órganos constitucionales, se impuso la práctica del régimen parlamentario en Francia. El gobierno no era responsable ante el jefe del Estado, sino ante la mayoría parlamentaria. La confianza o desconfianza del Parlamento eran decisivas para la permanencia y la actividad del gobierno. El Parlamento, que tras la derrota de la Comuna se había reunido en Versalles, se trasladó nuevamente a París, *La Marsellesa* volvió a ser el himno nacional y el 14 de julio, día de la toma de la Bastilla, fue proclamado fiesta nacional.

La derrota de los conservadores y de los monárquicos se debía al ascenso de nuevas clases dirigentes y «notables» pertenecientes a la pequeña y media burguesía que, especialmente en las ciudades de provincias se había opuesto con éxito a la tradicional influencia de la aristocracia terrateniente y de los grandes propietarios. Triunfaban los médicos, los notarios, los abogados, los profesores, los comerciantes y los pequeños industriales. Los viejos notables se apoyaban en tradiciones antiguas y contaban particularmente con el apoyo de la Iglesia católica; los nuevos tenían diversos orígenes y formación y se inclinaban hacia los valores laicos y las tendencias positivistas. Como lo aclararán mejor los acontecimientos que siguieron, pese a que los republicanos y los radicales, que representaban a las nuevas fuerzas, lo-

graron arrebatar la mayoría y con sus decisiones aportaron algunas reformas fundamentales al nuevo Estado —instrucción elemental pública, laica y gratuita (1881-1882), plena libertad de prensa, libertad de asociación sindical—, la diferencia entre la mayoría y la oposición no era muy grande. Las posiciones de la derecha seguían siendo fuertes en el país.

Sin embargo, los temas del debate político tendían a cambiar; el problema institucional —monarquía o república— pasaba a segundo plano o perdía importancia. En su lugar emergían preocupaciones económicas y sociales y pasaba a primera línea el deseo de una revancha contra Alemania que alimentaba un fuerte sentimiento nacionalista y contribuía a exaltar la función del ejército. El servicio militar obligatorio, introducido según el ejemplo alemán, y su larga duración, de tres a cinco años, acrecentaban el peso de las instituciones armadas y del cuerpo de oficiales en la vida del país, sumándose a tradiciones de diversos orígenes. La represión de la Comuna había quitado a los obreros y a las fuerzas de extrema izquierda toda posibilidad de expresarse públicamente y de hacer sentir su presencia al menos por una década. Ya en los años ochenta, la situación estaba cambiando y comenzaban a sentirse voces alternativas al sistema político y social. Sin embargo, se trataba de expresiones minoritarias que, fueran de derechas o de izquierdas, se concentraban especialmente en París. La clase política republicana había conseguido conquistar las provincias acelerando un proceso de integración nacional favorecido por la extensión de la red ferroviaria y por la difusión de la instrucción elemental pública y obligatoria. El maestro era el propagandista de la nueva ideología republicana, laica y nacional en los pueblos franceses.

La lucha política se desarrolla de manera a veces áspera y fogosa; numerosos escándalos que denuncian la confusión entre intereses políticos y económicos, oscurecen los primeros lustros de la república. Los republicanos se dividen en «oportunistas», inclinados a aguardar el momento «oportuno» para cada reforma, y «radicales», partidarios de poner en marcha un programa general de cambio, de laicización y de reparto de las cargas fiscales. Gambetta y Ferry fueron los principales exponentes de los oportunistas, y el joven Clemenceau, de los radicales. Numerosos grupos estaban representados en la Cámara: no sólo hay que tener en cuenta las diferencias en el campo republicano, sino también entre los orleanistas, los legitimistas y la extrema izquierda. Al no poder funcionar un sistema bipartidista, como en Inglaterra, se formaron gobiernos de coalición.

Pero, más allá de las divisiones, existía un bloque de poder bastante amplio, capaz de movilizar el consenso popular a través de las

elecciones y convencido de que la vía parlamentaria era la más adecuada para resolver los problemas del país y salvaguardar el orden social. En una Francia en la que todavía tenían un peso determinante la población rural y las actividades agrícolas, el apoyo que el régimen tenía en el campo era un factor de estabilidad. En ambos extremos del espectro político aparecieron nuevas tendencias, con la derecha nacionalista y revanchista e incluso monárquica, de Paul Déroulède, Maurice Barrès y Charles Maurras, y la izquierda, cuya manifestación más activa era el sindicalismo revolucionario de Georges Sorel. Pero al menos durante treinta años, o sea hasta comenzar el siglo XX, la nueva burguesía republicana, aun con su separación en moderados y radicales, contribuyó a crear y consolidar el régimen parlamentario en Francia.

3. **De Boulanger a Dreyfus**

El primer peligro que afrontó y logró superar el régimen fue el conato boulangista de 1889. No se podría comprender la imprevista popularidad del general Boulanger —que por un momento pareció ser capaz de instaurar en Francia un nuevo régimen personal— si no se recordara que la república y una parte de la clase política republicana habían quedado debilitadas tras los episodios que llevaron a la quiebra del banco Union Nationale y, sobre todo, por el escándalo de las condecoraciones, que había comprometido y obligado a dimitir a uno de los fundadores del nuevo Estado, el presidente Jules Grevy. Los radicales habían nombrado a Boulanger ministro de la Guerra en 1886 porque lo consideraban uno de los generales más fieles a la república; en efecto, había depurado el ejército de muchos oficiales realistas y se había hecho popular mejorando la situación de los soldados. A la modernización del ejército y la exaltación de su función nacional, popular y patriótica se sumaba la idea de una próxima revancha contra Alemania. Sobre estas bases, el general se había ganado un consenso que abarcaba tanto a los círculos militaristas de la derecha como a los ambientes extraparlamentarios de la izquierda. Alejado del gobierno, destinado a un comando periférico y retirado del servicio, el general se había dedicado a la política activa consiguiendo un gran éxito personal en las elecciones de 1889 a través de varias candidaturas. Aunque se adhirió a un proyecto subversivo que lo dejaba fuera de la legalidad republicana, en el momento crítico dudó de intentar el golpe de Estado pese a la insistencia de sus numerosos partidarios parisienses. La capacidad de resistencia de la república no fue puesta a prueba gracias a la debilidad melodramática del personaje, que terminó suici-

dándose en Bélgica. Ni siquiera el gravísimo escándalo financiero del canal de Panamá, que conmovió a la opinión pública poniendo en evidencia la corrupción de la clase política, pudo dar el golpe de gracia al régimen, aunque por cierto no contribuyó a su prestigio. El antiparlamentarismo alimentado en la derecha por la exasperación nacionalista, y en la izquierda por las críticas socialistas a la economía y las instituciones burguesas, encontraba motivos válidos para la protesta. En las elecciones de 1893 hubo una abstención del 50 por ciento pero, lo que es más significativo, se manifestaron nuevas tendencias con la elección de cuarenta y ocho diputados ligados de una u otra manera a las ideas o a las organizaciones socialistas.

En 1894, un oficial judío, el coronel Dreyfus, es condenado por espionaje y se inicia un proceso judicial de gran importancia para la democracia francesa. Un conjunto de fuerzas en el que confluían el antisemitismo, el militarismo y el nacionalismo exaltado asumió la tesis de la culpabilidad del imputado, pese a las pruebas cada vez más notorias de su inocencia. La alineación en uno u otro bando aclaró las posiciones, y la victoria de los «inocentistas» dio un respiro a la democracia francesa acercándole nuevas fuerzas sociales y políticas, especialmente algunos sectores importantes de inspiración socialista. El año decisivo, 1898, se inauguró con la publicación del artículo *J'accuse*, de Emilio Zola (14 de enero) que confirmó la incidencia de las campañas de prensa en la formación de la opinión pública. El periodismo de derechas había estado muy activo en los años anteriores sosteniendo la inoportunidad de reabrir el proceso y poner en duda la buena fe y la veracidad de la documentación presentada por el ejército. Zola denunciaba las falsedades del estado mayor y las complicidades políticas. El escritor fue condenado en primera instancia y en la apelación por atentar contra el honor del ejército. Pero la verdad comenzaba a abrirse paso. En agosto, la confesión del oficial que había falsificado algunos documentos hizo inevitable la revisión del proceso, para lo que se había movilizado toda la izquierda a través de la prensa y en grandes actos callejeros. También la derecha había convocado a sus partidarios y las manifestaciones y contramanifestaciones se sucedían. Sólo un gobierno de unidad nacional, encabezado por Waldeck-Rousseau logró retomar el control de la situación. En 1900 París celebraba su gloria de gran capital moderna, democrática y progresista con la exposición universal. La exhibición era una gran reseña de las conquistas de la civilización europea y del mundo capitalista e industrial que, superada la larga depresión (1873-1896), inauguraba un nuevo ciclo de expansión y entraba en los años de la *belle époque*.

4. Incertidumbre y crisis en la evolución parlamentaria del reino de Italia: el gobierno de la derecha

En 1870, la caída de Napoleón III, que en los últimos años se había convertido en garante de la supervivencia del Estado pontificio, permitió la integración de Roma al Estado unitario de Italia consolidando la monarquía constitucional de los Saboya, que se fundaba en el estatuto albertino y en la política de gobierno cavouriana. La dialéctica política giraba en torno al enfrentamiento entre la derecha «histórica», heredera de Cavour, que había dirigido el gobierno en los últimos diez años unificando el país sobre el modelo de las instituciones piamontesas, y la izquierda, heredera de las tradiciones del partido de la acción del Resurgimiento, que había renunciado a sus prejuicios republicanos y defendía un programa de desgravaciones fiscales y equilibrio tributario, de ampliación moderada del sufragio, y de una confusa democracia social.

En conjunto, las bases sociales de la clase dirigente eran bastante homogéneas, aunque en la derecha prevalecían los grupos de aristócratas liberales y de la alta burguesía piamontesa, lombarda y toscana, mientras la izquierda convocaba a la mediana y pequeña burguesía y tenía muchos seguidores en el sur de Italia, donde crecía el descontento por los resultados de la unificación. El sufragio, fundado esencialmente sobre bases fiscales, era restringido y sólo tenían derecho al voto poco más de seiscientos mil electores entre más de treinta millones de habitantes. En un país principalmente agrario, pero con centros urbanos de cierta envergadura y tradición, dominaban los propietarios, representados por una clase política que había elaborado sus programas y conquistado el poder en las luchas del resurgimiento contra los legitimistas y clericales. Justamente en los años setenta, esta representación entró en crisis ante los problemas que planteaba la creación de un Estado moderno y la competencia de intereses económicos y sociales en la política interna y la internacional. El crecimiento económico y la desigualdad que lo acompañaba ponían en primer plano los intereses de grupos y de clases a los que se sentían ajenos y superiores los «hombres del Resurgimiento». La izquierda, encabezada por Depretis, que en 1876 sustituyó al gobierno de la derecha en la operación denominada «revolución parlamentaria», se apresuró a convertirse en intérprete del nuevo clima. El «transformismo», o sea la disolución de los movimientos del Resurgimiento en un reagrupamiento variado de fuerzas que anuncia el paso a nuevas formas de organización, interpretaba las profundas transformaciones que experimentaba la sociedad italiana y que se reflejaban en la vida política. Pero solamente a partir de los años noventa se crearon partidos

modernos sobre el modelo del partido socialista, fundado en 1892 que, a su vez, seguía el ejemplo de la socialdemocracia alemana. Como los republicanos lo habían hecho en Francia, la mayoría «transformista» consolidó en Italia el sistema parlamentario.

La reforma electoral de 1882, que aumentó los electores a más de dos millones y sumó al requisito censitario el del alfabetismo, amplió el consenso de las instituciones. Todavía estaba lejos el sufragio universal, pero conviene recordar que en la Inglaterra de aquellos años el porcentaje de electores era poco más alto que el de Italia. La abolición del impuesto a la molienda, que constituía el soporte del sistema tributario y había permitido a los gobiernos de derecha equilibrar el balance financiero, era una prueba de la intención de encarar una reforma fiscal que atendiera, en alguna medida, a las exigencias de las capas más pobres. La ley de instrucción elemental obligatoria —aunque no tuvo resultados inmediatos— confirmaba el propósito de luchar contra el analfabetismo, muy difundido sobre todo en el Sur, y conseguir una integración nacional más profunda que la lograda por las medidas de unificación legislativa y financiera. La instrucción pública era un instrumento indispensable para la modernización, para la creación del consenso y los modelos de comportamiento inspirados en la exaltación de los valores nacionales, unidos a la tradición monárquica y representados en la figura del rey. En el panorama de los sistemas políticos europeos, Italia seguía una evolución semejante a las de Francia e Inglaterra, aunque en algunos momentos tuvo mucho peso el modelo autoritario alemán. La autoridad del Parlamento contradecía la letra del estatuto albertino y las prerrogativas de la corona, pero se afirmaba en la práctica de la responsabilidad del gobierno ante las cámaras. Estas ambigüedades nunca fueron totalmente superadas aun cuando el régimen pareció haber triunfado definitivamente tras la crisis del final del siglo. En efecto, comparadas con las de Inglaterra y la misma Francia, las instituciones liberales y democráticas eran muy recientes y mucho menores la homogeneidad social del país y la fuerza de la clase dirigente.

5. La izquierda y el transformismo

Durante los años del transformismo, y de la dirección de Depretis, el gobierno cambió su orientación en alguna medida para responder —pese a las dificultades provocadas en la economía italiana por la crisis agraria— a los problemas del desarrollo industrial y elaborar una política exterior que se concretó en la Triple Alianza (1882).

El primer gobierno de Francesco Crispi (1887-1891), con la cola-

boración de Giuseppe Zanardelli como ministro de Justicia y de Giovanni Giolitti como ministro del Tesoro, continuó las reformas emprendidas por Depretis. En 1889 se promulga el nuevo Código que elimina la pena de muerte, permite la libertad de asociación y otorga el derecho de huelga a obreros y campesinos. Entre tanto, hace escuela el ejemplo bismarckiano y, precisamente cuando declina la estrella del canciller, las circunstancias inducen a Crispi a inspirarse, al menos en parte, en el modelo alemán.

Una situación semejante parece presentarse también en la economía. A los ojos de los representantes de las nuevas clases industriales y agrarias, el librecambismo de molde cavouriano resulta insuficiente para superar los problemas originados por la competencia y sentar las bases de estructuras industriales independientes. La mayoría de la clase política también se convierte al proteccionismo: el modelo ya no es Smith y la escuela de Cobden, sino más bien List y los principios de la «economía nacional». Las tarifas aduaneras de 1887 son una importante etapa en el camino, emprendido algunos años antes, hacia la armonización de los intereses de los grupos más poderosos del sector agrario e industrial: los productores de cereales y los accionistas de las empresas siderúrgicas.

El poderío nacional —justamente cuando el colonialismo vive una expansión espectacular con el rápido reparto de África— no puede afirmarse plenamente sin la conquista de alguna colonia. Sin embargo, en Italia, las ganancias de las masas populares son sumamente bajas; el proletariado rural de las empresas agrarias del valle de Po se organiza sindicalmente mientras los campesinos del Sur y de Sicilia sufren la explotación de contratos usurarios. El desarrollo de la base industrial y los primeros intentos de expansión colonial fueron acompañados por el aumento de las tensiones y los conflictos sociales. La confusión entre intereses políticos e intereses económico-financieros producida por la penetración capitalista salta a la luz con el escándalo del Banco Romano que arrastra al primer gobierno de Giolitti (1893). El choque entre las reivindicaciones de los campesinos en Sicilia y los primeros conatos de organización socialista originan el importante e inesperado movimiento de los *Fasci* sicilianos que sobresalta a los propietarios y a las clases dirigentes. Se apela al hombre fuerte y a las actitudes duras. Se piensa que Crispi y el estado de sitio resolverán el problema. Crispi impone el orden en Sicilia, disuelve el partido socialista y retoma la política colonial, iniciada en 1891, intentando someter Etiopía al protectorado italiano. Pero, en Adwa (1896), el negus etíope inflige una dura derrota al cuerpo expedicionario italiano truncando la carrera política del viejo estadista siciliano y sus proyectos de gobierno autoritario. En 1879, Sidney Sonnino

denuncia abiertamente la inseguridad de la situación política italiana en su artículo, *Torniamo allo Statuto*. El político toscano veía en el parlamentarismo la causa principal de la inestabilidad y las dificultades del gobierno. En la Cámara prevalecían los intereses particulares expresados a través de la voluntad de los electores; la dependencia del gobierno de la confianza del Parlamento hacía que faltara «en la alta dirección de la cosa pública la representación del interés colectivo y general». Podía encontrarse remedio a esta situación en el respeto literal del estatuto albertino, o sea, limitando los poderes de la Cámara electiva y reforzando, en cambio, los de la Corona, el ejecutivo, y el Senado, independientes de la voluntad popular expresada por el voto. En concreto, Sonnino denunciaba dos peligros, y convocaba para enfrentarlos a «todos los hombres de buena voluntad, liberales y conservadores a un tiempo, para organizar un gran partido». Los peligros eran el clericalismo y el socialismo; describía al clericalismo como «un movimiento conservador, casi reaccionario, que se inclina cada vez más hacia la jerarquía eclesiástica, como representante y portadora de una ley divina de moralidad social que se opone al utilitarismo individual»; del socialismo, alimentado por el descontento causado por la exasperada competencia individual, los sentimientos de simpatía humanitaria y el deseo de igualdad, Sonnino denunciaba la concepción colectivista de un Estado enemigo de la libertad. Él, que en otros tiempos había deplorado el egoísmo de los propietarios terratenientes y la miseria de los campesinos sicilianos, auspiciaba una suerte de conservadurismo social, un paternalismo salpicado de tonos iluministas, una gestión del Estado en manos de hombres ubicados por encima de las partes. Pero, más allá de sus intenciones, y sobre todo, de sus ilusiones, el llamado del estadista toscano y su programa, constituyó, por un momento, la plataforma de un nuevo reagrupamiento de la derecha que intentó dar un giro autoritario a la política italiana.

6. La crisis del final de siglo

La nueva tendencia sufrió una dura prueba en el bienio 1898-1900, cuando se extendieron por el país los motines causados por el aumento del precio del pan y la miseria popular, y pusieron dramáticamente en evidencia las contradicciones del proceso de desarrollo económico. En efecto, mientras Italia sentaba las bases de su desarrollo industrial, el hambre provocaba verdaderas sublevaciones. El ejército, encargado de la represión y el control de los motines actuó con extrema dureza. En mayo de 1898 se decretó el estado de sitio en Milán, y el general Bava Beccaris no vaciló en recurrir a los cañones para de-

moler las barricadas. Una oleada represiva alcanzó a todas las asociaciones, pero apuntaba, sobre todo, a las organizaciones y periódicos socialistas y católicos que desarrollaban actividades de base. Militantes y periodistas fueron entregados a los tribunales y severamente condenados (Turati, por ejemplo, fue condenado a doce años de cárcel). Pero cuando el gobierno de Pelloux intentó que la Cámara aprobara medidas que limitaran la libertad de prensa y de asociación, chocó contra el obstruccionismo de la extrema izquierda a la que se unió un grupo de liberales que no estaba de acuerdo con el cambio autoritario de la política oficial

En aquella ocasión, Giolitti trazó un programa que contenía vías de desarrollo y enfoques totalmente opuestos al enroque propuesto por Sonnino. Partiendo de un análisis realista de la situación social, de la diferencia entre el país «real» y el país «legal», afirmaba que «el camino de la reacción sería fatal para nuestras instituciones porque las pondría al servicio de los intereses de una pequeña minoría y levantaría contra ellas a las fuerzas más vivas e irresistibles de la sociedad moderna... La profunda transformación de las corrientes políticas, la primacía de las cuestiones económicas y la influencia cada vez más creciente de las clases populares no es un fenómeno particular de Italia, sino común a todos los pueblos civilizados».

En principio, podía no haber divergencias entre Giolitti y Sonnino al proclamar que «el gobierno sea, y aparezca en todos sus actos como el tutor de las clases populares, el defensor de sus derechos y sus legítimos intereses»; sólo que Sonnino consideraba que debían gobernar hombres ilustrados que no dependieran demasiado estrechamente de la voluntad y los caprichos de los representantes del pueblo; Giolitti, en cambio, mostraba confianza en la capacidad del pueblo para organizarse y expresar sus legítimos intereses que mediante una hábil acción de gobierno podían colaborar en el bien del país. Con la victoria del enfoque giolittiano, el régimen parlamentario pareció definitivamente afirmado en Italia y, tras el asesinato del rey Umberto (julio de 1900), Vittorio Emmanuele III inauguró su gobierno respetando una práctica que mantenía tácitamente los poderes de la monarquía dentro de límites mucho más restringidos que los reconocidos en el estatuto albertino. Pero, no sólo proseguía con nuevas fuerzas y formas nuevas la polémica contra el parlamentarismo y su degeneración, sino que incluso un acto tan decisivo como el ingreso de Italia en la primera guerra mundial se decidió luego fuera del Parlamento.

7. El Reich y la vía prusiana hacia el capitalismo

Como el Reich alemán constituido en 1871 después de la victoria sobre Francia era un Estado federal, las antiguas instituciones político-territoriales no desaparecieron totalmente (como había sucedido en Italia) y conservaron su personalidad jurídica y una relativa autonomía política. En la unión confluían cuatro reinos, seis grandes ducados, cinco ducados, siete principados, tres ciudades libres y el territorio imperial de Alsacia y Lorena, que Francia había cedido como consecuencia de su derrota. Esta distribución estaba representada en el Bundesrat, el consejo federal, que cumplía las funciones de Cámara alta en el sistema constitucional y reunía a 58 representantes de los estados. Los estados menores tenían un solo delegado, Baviera seis, y diecisiete el reino de Prusia, la suma de votos daba la posibilidad a estos últimos de vetar cualquier reforma constitucional para lo que se requería una mayoría de los tres cuartos.

Prusia tenía en el Reich una preeminencia absoluta que correspondía a su peso demográfico, económico y militar y a su protagonismo en los episodios que habían conducido a la unidad del país. A Prusia pertenecían el 65 por ciento de la superficie y más del 60 por ciento de la población, las tres principales regiones industriales (el Saar, el Ruhr y Alta Silesia), y las grandes explotaciones agrícolas de los territorios orientales. El rey de Prusia era el emperador de Alemania; tenía el mando de las fuerzas armadas, ejercía el poder ejecutivo por medio de un canciller que sólo era responsable ante él. En este marco, el Reichstag, la Cámara baja, que representaba la unidad nacional del país y era elegida por sufragio universal masculino (la edad mínima para votar era veinticinco años), tenía poderes más bien limitados, tanto más cuanto el control de los presupuestos del Estado y la aprobación de impuestos le estaban parcialmente vedados por la particular organización del sistema fiscal y por las normas que preveían la apertura de crédito plurianual en vez de anual. Tal era, por ejemplo, el caso del presupuesto de las fuerzas armadas, que se aprobaba cada siete años.

Si bien el Reichstag se elegía por sufragio universal, es importante recordar, dado el peso político que tenía Prusia en el imperio, que el Parlamento prusiano se elegía con el sistema de las tres clases, que aseguraba una clara superioridad a los nobles y a los mayores contribuyentes. Baste un ejemplo: en 1908 se necesitaron seiscientos mil votos para llevar a seis socialistas al Landtag prusiano, mientras que, con cuatrocientos dieciocho mil votos se eligieron doscientos doce representantes de los partidos conservadores. El canciller Bismarck dirigió durante veinte años la política interior y exterior del

Reich. El prestigio y la habilidad del estadista prusiano, y normas constitucionales que favorecían una gestión autoritaria y personal, permitieron esta insólita continuidad en el gobierno. No hay que creer, sin embargo, que la vida política era un remanso en Alemania. Todo lo contrario, los problemas económicos y sociales planteados por un rápido proceso de industrialización convirtieron al Reich en un importante campo de experimentación; tanto que se pudo hablar de un desarrollo capitalista prusiano opuesto al inglés. Se trata de generalizaciones que investigaciones históricas más puntuales desautorizan o complican hasta el punto de volverlas irreconocibles. Sin embargo, se puede mantener la idea general de que en Alemania, pero sobre todo en Prusia, su Estado líder, una clase noble, feudal y militar —los *junker*— conservó explícita o tácitamente, una serie de privilegios y posiciones de fuerza, incorporándose al proceso de desarrollo capitalista e industrial. Mientras en otros países de Europa occidental, la renovación económica había trastocado o transformado profundamente las antiguas clases nobles, permitiendo la aparición de la burguesía y las clases medias portadoras de las nuevas ideologías liberales y democráticas, en Prusia, los *junker* mantuvieron firmemente el poder, imponiendo soluciones autoritarias y llevando a la nueva potencia industrial hacia arriesgados proyectos de conquista mundial.

Un enfoque tan simple —producto de un análisis que, no sin cierta razón, ve que la caída del sistema feudal en Prusia, terminó, paradójicamente, con ventajas para los propietarios feudales y la expropiación de los campesinos— pareció confirmado por los acontecimientos que condujeron a la primera y segunda guerras mundiales. En esta demonización de la historia alemana, Bismarck, como noble prusiano, y Guillermo II, como jefe y expresión de la nobleza, serían claros ejemplos de la ambición de poder y el espíritu regresivo de los *junkers* que dominaron el Estado alemán.

La realidad es mucho más compleja y la responsabilidad mucho más indefinida aunque es innegable la existencia de un agresivo militarismo alemán arraigado en la tradición de la nobleza prusiana.

Es verdad que el Reich nacía de una gran victoria militar que había humillado a la mayor potencia del continente europeo, pero Bismarck, principal artífice del acontecimiento supo administrarlo prudentemente, con mucha habilidad diplomática, convencido de que aún era necesario mantener sin alteraciones el orden europeo.

8. Bismarck: desde la lucha contra los católicos hasta las leyes antisocialistas

Simultáneamente, en Alemania se desarrollaba una intensa actividad política a pesar de las limitaciones constitucionales. Para culminar la unificación del Estado alemán, Bismarck había encontrado apoyo no tanto en los conservadores prusianos como en el partido nacional liberal, que representaba mejor el espíritu unitario y estaba abierto a los aportes que pudieran llegar de las distintas regiones y de las más modernas corrientes culturales. En 1871, los católicos habían constituido su propio partido (*Zentrumpartei*, partido del centro) creando el modelo, como también sucedía en Bélgica, de una formación política esencialmente confesional. Eran los tiempos en que la Iglesia católica, en los últimos años del pontificado de Pío IX, alterada por la destrucción de su poder temporal y la ocupación italiana de Roma, parecía encerrarse a la defensiva, oponiéndose claramente al mundo moderno con las posiciones abiertamente antiliberales del *Índice*. El Concilio Vaticano, proclamando en 1870 la infalibilidad del papa, después de que Pío IX, en 1854 había definido el dogma de la Inmaculada Concepción, confirmaba su intransigencia. En todos los estados donde los católicos eran mayoría o fuertes minorías, se planteaba una y otra vez el problema de la relación entre Estado e Iglesia y el comportamiento político de los fieles. La aconfesionalidad y el laicismo eran el presupuesto de las doctrinas constitucionales dominantes en Europa occidental, aunque en la práctica se adoptaban distintas fórmulas de compromiso para no exasperar la lucha política ni ofender los sentimientos religiosos del pueblo.

La formación de un partido católico, y la participación de los fieles como tales en las elecciones y en la vida política constituían un hecho nuevo que preocupó mucho a Bismarck. Reaccionó promoviendo una campaña cultural y de propaganda contra la Iglesia católica (el *Kulturkampf*) y adoptando medidas para controlar rígidamente al clero, cortando o atenuando sus vínculos con el jefe de la Iglesia romana. Expulsó a los jesuitas. Los eclesiásticos que se negaban a someterse a la jurisdicción civil fueron multados, arrestados y privados de la ciudadanía.

La persecución fue particularmente dura entre 1873 y 1875, y los resultados que logró Bismarck fueron más bien escasos, sobre todo en el plano político. En efecto, el partido del centro aumentó su representación parlamentaria pasando de cincuenta y siete diputados a ochenta y seis en 1874 y a noventa y cuatro en 1878. Pero entre tanto habían ocurrido cambios importantes: pasaban a primer plano los problemas económicos y sociales ligados a la crisis agraria y al acele-

rado proceso de industrialización; crecía la influencia de los socialistas que en el congreso de Gotha (1875) se habían unido en un único partido y encontraban en las transformaciones de la sociedad y el crecimiento del proletariado industrial el ambiente propicio para echar profundas raíces; con la muerte de Pío IX y el advenimiento de León XIII (1878), la actitud de la Iglesia se inclinaba al compromiso y se interesaba por las exigencias de la sociedad moderna, preludio de la aceptación y difusión del catolicismo social *(Rerum novarum)*.

El partido nacional liberal, todavía sensible a las teorías librecambistas, quedó marginado y dividido por la opción proteccionista que, tanto los grandes industriales, especialmente siderúrgicos, como los grandes terratenientes y los agricultores de la llanura prusiana, impulsaron e impusieron para remediar la caída del precio de los cereales y dotar a Alemania de un instrumento capaz de crear una estructura que resistiera la competencia de Inglaterra, la mayor potencia industrial de entonces.

Alemania precedió a otros países decretando tarifas proteccionistas que oponían el modelo de una economía nacional protegida por el Estado a la ilusión librecambista de un armónico desarrollo internacional. Bismarck hizo propio este enfoque y, entonces, el centro católico se convirtió, junto con los representantes del grueso de los intereses agrícolas e industriales, en el elemento esencial de una coalición de fuerzas tendente a transformar a Alemania en una gran potencia, respaldada por la expansión y la fortaleza de un inmenso aparato productivo. La cuestión esencial consistía en contener y reprimir la reacción del sistema ante el desarrollo de la nueva sociedad industrial; o sea, la ideología socialista y sus organizaciones.

Dos atentados contra el emperador dieron a Bismarck el pretexto que buscaba para hacer aprobar, en 1878, las leyes represivas de la actividad socialista. En principio, las nuevas normas, votadas por una reforzada mayoría conservadora, eran provisionales y tenían vigencia durante dos años, pero luego se renovaron hasta la caída del canciller. Al comienzo la persecución desbarató las filas del partido socialdemócrata y de las recién nacidas asociaciones obreras y golpeó duramente a la joven prensa socialista. Pero el proceso de transformación social que vivía Alemania, y la fuerza de penetración de las nuevas ideas eran tales que la legislación «excepcional» —que, por lo demás, no suprimió el derecho de huelga— demostró no ser eficaz a largo plazo. En el plano cultural, la difusión y debate del marxismo comenzaban a adquirir creciente importancia, y aumentó el apoyo electoral de la socialdemocracia.

9. Penetración del capitalismo y articulación social

La política represiva de Bismarck fue acompañada por algunas medidas de asistencia social, como los seguros contra enfermedades, accidentes y vejez que —con el abstencionismo liberal— inauguraban una línea de decidida intervención del Estado en la regulación de las relaciones laborales y la protección obrera. El ejemplo alemán tuvo gran resonancia; aunque hay que tener en cuenta que la legislación sobre las fábricas había comenzado en Inglaterra, y que Disraeli ya había formulado un programa coherente de conservadurismo social. El problema más frecuente que se planteaba a los gobiernos de aquellas décadas era el de la integración de las masas populares —que ya no eran una plebe indiferenciada, sino profesionalmente especializada por la división capitalista del trabajo y consciente de la necesidad de organizarse en defensa de sus propios intereses— en la comunidad nacional sin perder la hegemonía, más o menos tradicional, de las clases dirigentes. O sea, entraban manifiestamente en crisis las concepciones liberales y librecambistas de la organización social y política, propias de la burguesía en ascenso, y se avanzaba hacia la que luego sería definida como «sociedad de masas». Los cambios económicos y sociales alteraban incluso el orden de los estados que todavía conservaban instituciones monárquicas autoritarias, como Rusia, y, por falta de canales de expresión, a veces lo hacían de manera más brutalmente directa. La relación entre gobernantes y gobernados se volvía mucho más compleja y mucho más cambiantes las relaciones políticas y sociales. Las clases dirigentes ampliaban su participación, organizada o indirecta, en la vida social incorporando nuevos ámbitos y modalidades de acción y cambiaban el reclutamiento de sus integrantes.

El hecho más llamativo del período es el crecimiento de la clase obrera, sobre todo en países como Alemania, cuya acelerada industrialización implicaba la aparición de grandes complejos fabriles. En veinticinco años, entre 1882 y 1907, la mano de obra ocupada en el sector industrial pasó de dieciséis millones de personas a veintiséis millones. Pero las nuevas estructuras, ya fueran rurales o urbanas, exigían también nuevos dirigentes e intermediarios, no sólo en los niveles altos, sino, sobre todo, en los medianos. Las nuevas actividades económicas, y la «modernización» en general, desarrollaban una red de servicios dirigidos por una nueva clase de empleados que, aunque provenientes de las capas populares y dedicados a misiones subalternas, tiende a diferenciarse del obrero manual. Surgían, además, negocios pequeños y medianos que también alimentaban el crecimiento y la reproducción de la clase media. En el campo, la penetración capi-

talista también originaba y aceleraba procesos de diferenciación social impulsando la emigración hacia las ciudades y las fábricas. Si el jornalero agrícola pudo fácilmente adherirse a formas de lucha y de organización similares a las del proletariado industrial, el campesino propietario o administrador de una pequeña o mediana finca, se sintió ligado a la tierra, en la que, pese a la crisis agrícola, la caída de los precios, el castigo fiscal y las expropiaciones, continuaba viendo, si no un medio de enriquecerse, al menos una fuente de trabajo y manutención para sí y su familia. Por ello se sintió amenazado ante la perspectiva colectivista que mostraba la propaganda socialista.

Si no se advierten la complejidad y la articulación de la nueva sociedad emergente, tampoco se pueden comprender su desarrollo y sus consecuencias políticas. La polarización y la contraposición —burguesía capitalista *vs.* proletariado industrial— del esquema marxista parece válida sólo para las últimas décadas del siglo XIX, cuando la complejidad social todavía no era muy evidente. El choque frontal, y los éxitos revolucionarios ocurrieron justamente donde las estructuras políticas y sociales eran más elementales y menos elásticas, y no permitieron que se formara una clase media consistente, que rechazara el proyecto colectivista y la asimilación a las condiciones de vida y, más todavía, a la ideología, proletarias. El obstáculo más poderoso para la protesta socialista fue generalmente la exaltación de los valores nacionales a los que era particularmente sensible la clase media, que aceptó y apoyó la política de potencia y la expansión imperialista. Sobre tales posiciones, las antiguas y nuevas clases dirigentes —nobleza conservadora, terratenientes, burguesía industrial y cultura académica—, encontrarán un punto de confluencia y, con la adhesión de la clase media, continuarán ejerciendo una función hegemónica que integrará fácilmente a las zonas rurales y se hará sentir también en las tendencias de algunos grupos obreros y socialistas.

10. El nacionalismo: elemento de cohesión en el Reich y de disgregación en el Imperio de los Habsburgos

La política represiva de Bismarck contra la socialdemocracia fue un fracaso; no se puede decir lo mismo de las medidas proteccionistas aprobadas en el mismo año y en el mismo clima, que fueron la base del impulso nacionalista y de la política de potencia que se convertirían en un obstáculo insuperable para el internacionalismo nacionalista y que, unidas a la capacidad de crecimiento del capitalismo industrial, llevarían primero a la expansión imperialista y luego a la primera guerra mundial.

La colaboración entre el canciller Bismarck, habituado a dominar la política del Reich durante veinte años, y el nuevo emperador Guillermo II, decidido a imponer su voluntad, era imposible. El resultado de las elecciones de 1890, en las que el partido liberal conquistó el 20 por ciento de los electores, porcentaje que, de haber mediado el sistema proporcional, lo habría convertido en el grupo más fuerte del Reichstag, confirmó el fracaso de las leyes antisocialistas que Bismarck pretendía hacer más severas y permanentes. El descalabro electoral, sumado a las divergencias sobre las relaciones con Rusia, dieron a Guillermo II la oportunidad que buscaba para deshacerse del viejo estadista. Lo sucedió el general Von Caprivi. El nuevo canciller no pertenecía a la aristocracia prusiana, era capaz de dialogar e impuso una línea de gobierno orientada a escuchar la voluntad de los partidos y el Parlamento y eliminar las diferencias más agudas entre el ordenamiento constitucional del Reich y el de Prusia.

Pero la resistencia prusiana fue irreductible; la posición de Von Caprivi se volvió insostenible cuando intentó también atenuar las medidas proteccionistas, atrayéndose las iras de la *Bund der Landwirte*, la liga de agricultores en la que los grandes propietarios conservadores, en nombre de la defensa de los intereses agrícolas, habían logrado incorporar también a los pequeños labradores independientes. En 1894, dimite Von Caprivi, y Guillermo II nombra canciller al príncipe de Hohenlohe, quien, según con los propósitos de la corte, debía disimular con su pasado liberal un vuelco decididamente reaccionario que retomaba las leyes antisocialistas y limitaba la libertad de asociación. Los planes fallaron por la resistencia del Reichstag e, incluso, de la Asamblea prusiana (el Landtag) aunque ésta todavía era elegida por el rígido sistema de las tres clases.

Entre tanto, el almirante Von Tirpitz y el barón Von Bülow aumentaban su fuerza en el gobierno. Promoviendo una ley para reforzar la marina, Von Tirpitz lanzaba, en 1898, el programa de armamento naval que terminaría por enfrentar a Alemania con Inglaterra. Von Bülow, que muy pronto obtuvo la confianza de Guillermo II y asumió el cargo de canciller, se inclinaba en alguna medida al parlamentarismo. En efecto, en los primeros años del siglo XIX se superó la oposición que hasta entonces había caracterizado las relaciones entre el gobierno y la Asamblea. El llamado a la solidaridad nacional en nombre de la política de potencia mundial resultaba más eficaz que las leyes antisocialistas y el enfrentamiento entre la autoridad del canciller imperial a las tendencias de los partidos políticos y del Reichstag. El amplio consenso de que gozaba el imperialismo entre los políticos y en la opinión pública facilitaba la tarea de aislar a los socialdemócratas. Ello se comprobó, por ejemplo, en las elecciones de 1907, cuando

el electorado castigó a los socialdemócratas por oponerse a la represión de la insurrección de los Hotentotes en la colonia alemana de África sudoccidental.

Austria-Hungría, en cambio, no podía contar con los sentimientos nacionales para superar las dificultades internas y promover una política de expansión y de potencia. Las diferencias entre las distintas nacionalidades debilitaron y finalmente disgregaron el imperio de los Habsburgos que durante algunos siglos había dominado en Europa central. Un episodio significativo, casi una anécdota, de las tendencias y sentimientos opuestos que existían entre los pueblos del imperio es que, entre 1876 y 1877, mientras los ciudadanos de Budapest ofrecían una espada al vencedor turco de los serbios, los checos le entregaban otra al jefe serbio derrotado.

La necesidad de hallar alguna solución para el problema de las autonomías nacionales había conducido al «compromiso» de 1867 que establecía la «monarquía dual». Se reconocía la preeminencia política de los alemanes en la parte austriaca y de los magiares en la húngara; ambas nacionalidades eran las más numerosas, con cerca de diez millones de individuos cada una. Pero la población total del imperio sumaba más de cuarenta y cinco millones de habitantes y, considerando solamente las nacionalidades más numerosas, en cifras redondas había más de seis millones de checos, casi cinco de polacos, poco menos de cuatro de rutenos, casi dos de eslovacos y minorías serbias, croatas y eslovenas que contaban, cada una entre uno y dos millones de almas. Los italianos eran unos setecientos mil pero constituían un problema político a tener en cuenta dada la atracción que ejercía el reino de Italia, recientemente unificado, y la fuerte presión que desplegaba para la liberación de las «tierras irredentas». El río Leitha era el límite que separaba a Hungría de Austria (llamada por eso Cisleitana) políticamente unidas en la persona del monarca que era a la vez rey de Hungría y emperador de Austria. Cada país tenía su propia Cámara de representantes, elegida por sufragio restringido que, especialmente en el caso de Hungría, tendía claramente a excluir las minorías étnicas. También administraban cada Estado gobiernos separados, sólo eran comunes el ministro de la Guerra y de relaciones exteriores y un ministro de finanzas para los presupuestos conjuntos, que se cubrían en un 70 por ciento con ingresos provenientes de Austria, la parte más rica y económicamente desarrollada de la doble monarquía. La superioridad de Austria y de la tradición habsburga en el ejército y en la política exterior era un constante motivo de insatisfacción para los húngaros, encerrados en un nacionalismo excluyente. También había notables diferencias en las estructuras sociales: algunas regiones de los dominios austriacos, como Bohemia y la ciudad de

Viena poseían industrias mineras y siderúrgicas, ópticas, mecánicas y textiles, mientras que en el conjunto del país se destacaban las actividades agrícolas con escaso desarrollo urbano. En 1900, no más del 20 por ciento de la población vivía en localidades con más de cinco mil habitantes. En tanto que, a comienzos de los años noventa, se calculaba que en Hungría casi el 95 por ciento de la población era rural, y las grandes propiedades de los nobles ocupaban millones de hectáreas.

El conflicto entre las nacionalidades empezaba a convertirse en un poderoso motivo de disgregación; sin embargo, en las últimas décadas del siglo XIX, las fuerzas estabilizadoras todavía lograban controlar el país: en primer lugar, la monarquía; después, la iglesia, la burocracia y el ejército aseguraban una cohesión, que luego destruirían el aumento de las tensiones internas y las alternativas de la guerra.

El prolongado reinado de Francisco José (1830-1916), que ascendió al trono muy joven, en 1848, contribuyó a la estabilidad y a la continuidad pese a la importante reforma constitucional, la ampliación del sufragio y la aparición de nuevos partidos. Incluso el Imperio realizó notables progresos en el campo económico, participando en el desarrollo capitalista e industrial de Europa y ubicándose en el cuarto puesto, detrás de Gran Bretaña, Alemania y Francia. Con la fundación del Creditanstalt, de los Rothschild, Viena se convirtió en una activa plaza financiera y, en 1873, originó una crisis que, aunque no fue muy intensa, tuvo repercusiones mundiales (véase capítulo 4). Especialmente destacable fue la renovación edilicia de Viena, en 1858, cuando se destinó a nuevos edificios el terreno que ocupaban las antiguas murallas de la ciudad. Las obras de la famosa Ringstrasse duraron algunas décadas y dieron un aspecto monumental a la ciudad, mostrando su ambición de emular a Berlín y, sobre todo, a París. El Teatro de la Ópera y su entorno se convirtieron en el centro mundano de la capital renovada, que no sólo confirmó su primado musical, sino también expresó una prominente y originalísima cultura cosmopolita. En el plano político, después de los años ochenta surgió el partido socialdemócrata y, sobre todo, se afirmó el partido cristiano social fundado por Karl Lueger en 1891. En 1897, los cristianos sociales vencieron en las elecciones municipales de Viena y cumplieron un importante programa de traspaso de los servicios públicos al ayuntamiento (gas, electricidad, transportes). La penetración del nuevo partido en las masas se fundaba en una solidaridad católica anticapitalista y antiindustrialista que a veces apelaba a los difundidos prejuicios antisemitas señalando a la rica burguesía israelita instalada en la Ringstrasse como exponente del demonizado capitalismo financiero. Así se reforzaba un mito que terminará por alcanzar en la simbología política, y gracias sobre todo a Hitler, un gran poder movilizador y destructor.

11. Reformas electorales, conservadurismo e imperialismo social en Inglaterra

Los acontecimientos políticos que vivió Gran Bretaña entre 1860 y 1914, ilustran muy bien el paso de un régimen liberal a otro liberal-democrático. Formalmente, habían adoptado el sufragio universal masculino la Confederación Alemana del Norte hasta 1866 y el Reich bismarckiano, la Francia de Napoleón III y la Tercera república. Esta institución estaba muy lejos de abrir por sí sola el camino hacia un ejercicio efectivo de la «voluntad popular», que podía ser contenida, equilibrada y eludida por otros poderes: la autoridad del monarca, la Cámara alta, la independencia del gobierno y de los poderes ejecutivos respecto de los representantes del pueblo. Algunos juristas distinguen entre una democracia gobernada, en la que la iniciativa y la autoridad del gobierno interpretan y guían la voluntad popular, y una democracia gobernante, en la que la Cámara baja, o sea la Asamblea de los representantes elegidos por el pueblo (a veces secundada por una segunda cámara, o Senado, también electiva) detenta la soberanía, y practica el parlamentarismo puro. También podían tener un peso considerable, a veces decisivo, en los regímenes formalmente constitucionales y parlamentarios, las presiones directas o indirectas de personas y de grupos que representaban a intereses económicos, militares, dinásticos o corporativos; los grupos de presión podían actuar a través de las fuerzas políticas, los partidos o las asociaciones libres, participando en el juego democrático; pero habitualmente lo hacían de manera oculta y reservada, valiéndose de los vínculos de clase, casta o amistad que unían a los círculos dirigentes y políticos. En todo caso, el sistema electoral es parte importante de un régimen político. El caso inglés demuestra la resistencia a superar el precepto liberal que liga el derecho de ciudadanía y de voto a la propiedad o a una actividad que implique el pago de un tributo, cuya recaudación y administración debían controlar en principio los representantes electos. La reforma electoral de 1867 siguió la tradición: bajó el límite del censo, pero había que ser contribuyente para ser elector.

La base electoral aumentaba de poco más de un millón a cerca de dos millones de personas, incluyendo, sobre todo, a trabajadores y clase media de las ciudades. El sufragio universal estaba muy lejano. Además, el voto no era secreto. Sólo con las enmiendas de 1872-1873 y, finalmente, con la extensión del sufragio a las zonas rurales en 1884, se consagró el voto secreto y los electores aumentaron a cuatro millones y medio. Todavía quedaban excluidos del voto los hijos que vivían en la casa paterna, aunque fueran mayores de edad, y los criados. En algunos casos se podía votar con listas abiertas. Entre tanto, la com-

posición de la Cámara de los Comunes comenzaba a reflejar los cambios del cuerpo electoral con una apreciable reducción del número de propietarios y rentistas en favor de los profesionales, comerciantes e industriales.

Durante este período dominaron la vida política inglesa las personalidades de Disraeli (1804-1881), el novelista, publicista y político de origen judío que dirigía el partido tory, y de Gladstone (1809-1898), el estadista que, tras una experiencia juvenil en el campo conservador se había convertido en guía y símbolo del partido y la tradición liberales y librecambistas (whigs). El bipartidismo británico favorecía el antagonismo personal, y profundas divergencias separaban a los dos hombres y a los dos partidos; existían, sin embargo, importantes puntos de convergencia y, a veces, en la práctica de gobierno, sobre todo en política exterior, Gladstone arrastrado por los intereses imperiales británicos debió alejarse de sus principios contrarios a la expansión y favorables a la retracción *(retranchment)*. Por ejemplo, la reforma electoral de 1867, que tenía adversarios tanto entre los tories como entre los whigs, se aprobó gracias al acuerdo entre Gladstone y Disraeli. En las elecciones de 1868 la mayoría parlamentaria pasó a manos de los liberales, justificando la oposición a la reforma de aquellos conservadores que reprochaban a Disraeli una apertura suicida. Pero el conservadurismo social y el imperialismo popular que Disraeli levantó como programa en un famoso discurso de 1872, mostraron ser poderosas herramientas para la movilización de las masas e interpretar mejor que algunas doctrinas liberales las exigencias y las tendencias de la sociedad industrial inglesa.

Disraeli oponía al cosmopolitismo de los liberales, «muy influidos por la política del continente», el renovado nacionalismo de los conservadores fieles a las instituciones, en primer lugar a la monarquía, y a los ideales que ella representaba: «la majestad de la ley, la administración de la justicia, la fuente de la clemencia y del honor», según lo expresaba el mismo Disraeli. Asociadas a la monarquía, estaban la Iglesia del Estado y la Cámara de los Lores. La parte más interesante del discurso de Disraeli es el ataque al liberalismo, que había desamparado a las clases trabajadoras. A su juicio, la reforma parlamentaria de 1867-1868 buscaba remediar esta situación. Expresaba su confianza de que el voto de los trabajadores reforzaría a las instituciones tradicionales y al imperio. La gran masa de la población de este país —afirmaba— es conservadora. «Cuando digo "conservadora", uso el término en su significado más puro y elevado. Quiero decir que el pueblo de Inglaterra, y sobre todo las clases trabajadoras de Inglaterra, están orgullosos de pertenecer a un gran país, y desean mantener su grandeza; están orgullosos de pertenecer a un gran país imperial, y, si

pueden, están decididas a mantener su imperio; creen acertadamente que la grandeza y el imperio de Inglaterra se deben a sus antiguas instituciones.»

Bajo la bandera de los tres principios —defensa de las antiguas instituciones, refuerzo del Imperio y mejora de las condiciones sociales de los trabajadores— enunciados con toda claridad, en 1874 Disraeli llevaba al éxito y al gobierno a los tories, y se empeñaba en una política que se refleja en la adquisición de acciones del canal de Suez, la atribución del título de Emperatriz de la India a la reina Victoria y la ocupación de la isla de Chipre. También inauguraba una política de intervención más activa del Estado en área social, regulando las condiciones de trabajo; en la actividad edilicia y en la marina mercante. El sucesor de Disraeli, que murió en 1881 no fue el líder conservador Randolph Churchill, sino un tránsfuga de las filas liberales, Joseph Chamberlain, activísimo alcalde radical de Birmingham y modelo de un nuevo tipo de organizador político que reforzaba las relaciones entre electores y elegidos y creaba nuevas formas de clientelismo propias de la naciente sociedad de masas. Chamberlain fue el principal exponente del imperialismo social, que celebró su triunfo hacia el final del siglo, logrando un amplio consenso en las masas exaltadas por un acentuado orgullo nacional. Tendremos oportunidad de volver sobre este tema cuando hablemos de la expansión imperialista. Conviene recordar aquí que en la campaña electoral de 1879 Gladstone hizo una importante contribución a las nuevas formas de actividad política que más tarde se desarrollaron con la afirmación de la sociedad de masas, logrando arrebatar el favor popular a su rival. Fue casi un escándalo que el líder liberal hablara en las calles, en grandes manifestaciones populares, de problemas de política interna y exterior, apelando directamente al pueblo y acusando a los tories de ser una camarilla de grandes familias, incapaces de defender los grandes intereses de la nación.

El segundo gobierno de Gladstone (1880-1885) demostró que las propuestas liberales perdían vigencia en el nuevo clima político de los años ochenta. Paradójicamente el estadista que predicaba una política de retracción y se oponía a las aventuras coloniales se vio obligado a intervenir en Egipto (1882) y, luego, implicado en la cuestión del Sudán. Las vacilaciones de Gladstone en este caso llevaron al desastre de Jartum, a la muerte del general Gordon y a la derrota de los liberales en 1885.

El liberalismo tradicional estaba en crisis, y el mismo funcionamiento del bipartidismo peligraba ante el obstáculo de la presencia irlandesa en el Parlamento, que había aumentado considerablemente desde que las reformas electorales permitieron a los labradores de Irlanda expresarse libremente. En vez de integrarse en los partidos in-

gleses, los diputados de Irlanda formaban un bloque cerrado que defendía sus intereses nacionales. La situación se había complicado todavía más con la participación en la vida política de las *Trade Unions*, las organizaciones sindicales de trabajadores que, tras obtener el reconocimiento legal en 1871, aspiraban a tener representación autónoma y se habían constituido en un verdadero partido político.

En 1886, entraba en Westminster, sede del Parlamento inglés, un grupo de ochenta y cinco diputados irlandeses encabezados por Parnell que trastornaba el tradicional juego parlamentario. Gladstone, que siempre había mantenido una política muy abierta a las exigencias de los nacionalistas irlandeses —coherente con su apoyo a las nacionalidades oprimidas que desde finales de los años cincuenta lo llevó a defender la unidad italiana y, en 1877-1878, lo enfrentó a Disraeli contra la protección a Turquía—, presentó, de acuerdo con Parnell, un proyecto de ley que otorgaba a Irlanda la plena autonomía *(Home rule)*. El país tendría su propio Parlamento, y, al eliminar a los irlandeses de la Cámara de los Comunes, se recuperarían las condiciones —esperaba Gladstone— para el funcionamiento del bipartidismo en Inglaterra. La propuesta desencadenó una oleada de exasperado patriotismo. El estadista liberal fue acusado de atentar contra la unidad de Gran Bretaña, la preeminencia inglesa y los derechos y existencia de los protestantes de Irlanda. Joseph Chamberlain abandonó el partido y fundó una nueva organización, los liberales unionistas, que se sumó a la oposición conservadora. La *Home rule* fue rechazada. Se convocaron nuevas elecciones y el resultado fue una verdadera catástrofe para el partido de Gladstone. Era una clara señal de que empezaba una época nueva: se imponían las tendencias imperialistas y la política nacionalista de potencia. La confirmación se produjo entre 1892 y 1895: los liberales habían logrado volver al gobierno, pero tampoco esa vez pudieron aprobar la ley de autogobierno para Irlanda. El problema continuó sin solución hasta 1921, y ni siquiera entonces se resolvió definitivamente. Gladstone se había retirado de la política en 1894. La opinión pública y el gobierno estaban preocupados por los problemas del imperio, y los mismos liberales se vieron obligados a tener en cuenta el nuevo clima y dedicarse más directamente a las cuestiones sociales y fiscales para reconquistar el favor de los electores.

12. La reforma agraria y los comienzos de la industrialización en Rusia

En el panorama de las estructuras constitucionales y de la vida política que caracterizan a Europa en las décadas que siguen a 1870 no

se puede dejar de lado a Rusia, aunque en su caso no se puede hablar de verdaderas instituciones constitucionales ni de vida política como las de los países de Europa occidental y central. En el imperio zarista, todo el poder se concentraba en las manos del zar sin que existiera ninguna garantía constitucional. El monarca —según las leyes— era jefe del Estado y de la Iglesia y soberano autócrata y absoluto por derecho divino. Los ministros —ocho hasta 1900 y después catorce— cumplían las órdenes del zar. Un consejo imperial tenía funciones consultivas, y una suprema corte, creada en 1864 transformando el antiguo Senado, administraba justicia.

En estas condiciones puede tener alguna validez una división en períodos según los años de reinado de cada monarca. La tiene, por cierto, en cuanto se refiere al reinado de Alejandro II (1855-1881), el zar que inauguró una época de importantes reformas y fue asesinado después de haber salido indemne de seis antentados anteriores. Estos actos terroristas denuncian el malestar y la tensión de la sociedad rusa y, a falta de otros medios de expresión más libres y eficaces, el nivel de la vida política.

Con la emancipación de los siervos (1861), la reforma del sistema judicial y la representación electiva de las provincias (los *zemstvo*, 1864), Alejandro II había dado un impulso notable a la transformación social. El zar y sus consejeros eran conscientes de que la modernización del Estado era incompatible con las viejas instituciones y por ello aceptaban algunos modelos del desarrollo de Europa occidental. Pero las reformas —fue imponente la agraria, que rompió el equilibrio rural y probablemente hubiera sido inconcebible en un régimen constitucional que representara a las clases propietarias— se producían en un anacrónico clima de despotismo, aunque fuera ilustrado.

No hay que olvidar que los cambios se decretaron y emprendieron al comienzo de los años sesenta, cuanto triunfaban las previsiones optimistas de un desarrollo pacífico y progresivo, que habría podido conciliar la autocracia zarista con el progreso social. La rebelión polaca de 1863, la guerra franco-prusiana y la Comuna de París demostraron que la realidad era mucho más difícil y contradictoria.

La servidumbre de los campesinos, que dependían personalmente de los señores y los terratenientes, era una característica esencial de la situación que se vivía en las zonas rurales antes de 1861. Los siervos podían ser vendidos con o sin tierra, solos o con sus familias. La novela de Gogol, *Las almas muertas*, es a la vez una violenta sátira y una descripción realista de la servidumbre de la gleba vigente y las operaciones comerciales que podía propiciar. La emancipación creó enormes problemas. En principio, la reforma reconocía que la tierra era propiedad de los señores, pero obligaba a los propietarios a asig-

nar a los campesinos, o a la comuna agraria *(obscina)*, viviendas y parcelas suficientes para mantener a sus familias. Los campesinos estaban obligados a pagar a largo plazo las tierras y viviendas con la ayuda del Estado y quedaban liberados del trabajo personal obligatorio.

La reforma tenía proporciones gigantescas, alcanzaba a cerca de veinticinco millones de campesinos que, si bien dejaban de ser siervos, permanecían ligados a las comunidades *(obscina mir)*, en las antípodas del individualismo agrario que en el resto de Europa hacía, o había hecho, desaparecer el antiguo espíritu comunitario. Además, al separar las fincas campesinas de la propiedad señorial, los campesinos perdían parte de las tierras que antes cultivaban como siervos: si se tiene en cuenta que durante el largo proceso de la reforma, la población creció, pasando de cincuenta y siete millones en 1987 a ochenta millones en 1898, se comprende hasta qué punto también aumentó la presión demográfica sobre la tierra, creando un estado de tensión social agravado y multiplicado por el proceso simultáneo de industrialización que afectaba a las grandes ciudades.

El análisis de las condiciones del campo en Rusia sugirió un original socialismo agrario que se expresó en el «populismo». Veía en las comunidades agrarias y la solidaridad campesina los elementos que garantizarían futuras formas igualitarias y socialistas sin pasar por la experiencia individualista y capitalista. La imposibilidad de manifestar opiniones públicamente y de organizar agrupaciones políticas abiertamente reforzaba entre los jóvenes intelectuales las tendencias radicales, revolucionarias y anárquicas y alimentaba el terrorismo.

Entre 1874 y 1881 se recrudecieron los atentados terroristas, sobre todo de la organización «Voluntad del pueblo», cuyos miembros estaban convencidos de que bastaba el asesinato del zar para sublevar a los campesinos y abrir el camino a las reformas constitucionales. Sucedió todo lo contrario. Alejandro III (1881-1894) acentuó la política autoritaria y represiva, reduciendo drásticamente las competencias de los consejos de provincias, distritos y comunas, a la administración de los asuntos locales y sometiéndolos a la dirección y el control de los «capitanes de campaña», instituidos en 1889, que dependían de los gobernadores y del gobierno central. Suprimió, además, la mínima autonomía conseguida por las universidades durante el período reformador de Alejandro II, alejando su régimen de los círculos intelectuales embarcados en una oposición más decidida. Reforzaba esta oposición una considerable minoría de cerca de seis millones de judíos sometidos a disposiciones que limitaban su libertad de movimientos, residencia, instrucción y actividad profesional. Muchos *progrom*, ataques a las personas y los bienes de los judíos, fueron instigados o alentados por la policía zarista.

La modernización económica —que se manifestaba en la acelerada construcción de la red ferroviaria— las contradictorias consecuencias de la reforma agraria y el comienzo de la industrialización empezaban a incidir en las estructuras tradicionales de la sociedad rusa. Con la difusión del marxismo también se volvían más encendidos los términos de las polémicas intelectuales, enfrentando a los partidarios de una renovación basada en los valores comunitarios del campesino y la confianza en el movimiento espontáneo de las masas, con los que sostenían la necesidad de un rápido desarrollo capitalista, que crearía y reforzaría el proletariado industrial, única clase revolucionaria.

Sobre todo en la década de 1890-1900, mientras no ocurren cambios notables en el plano político, puesto que el nuevo zar, Nicolás II (1894-1917) reafirma su total fidelidad y confianza en el gobierno absoluto, avanzan el desarrollo económico y los cambios sociales, favorecidos por un ministro de excepcional capacidad como Witte, convencido de que, para sostener la industrialización, había que terminar con las comunidades rurales, alentar las inversiones extranjeras, proteger la industria nacional y extender la red ferroviaria. Fue Witte quien, pese a los costos enormes, inspiró y llevó a cabo la construcción del ferrocarril transiberiano. La producción industrial de Rusia se triplicó largamente durante la década sentando las bases de la gran industria pesada que concentraba, especialmente en Moscú y Petrogrado, un fuerte proletariado. Lenin, agudo observador de los nuevos acontecimientos, escribió entre 1896 y 1898 un libro sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia. Aunque tendía erróneamente a acentuar la incidencia de las transformaciones, sobre todo en el medio rural, advertía exactamente el sentido de los cambios que profundizaban las contradicciones sociales, incorporaban nuevos elementos de juicio y abrían nuevas perspectivas de acción política, haciendo anacrónico el programa de los populistas.

13. Nuevas tendencias culturales y artísticas entre los siglos XIX y XX

Entre la última década del siglo XIX y la primera del XX, maduraron importantes novedades en todos los campos de la cultura europea. En términos muy generales y rigurosos podría afirmarse que entraron en crisis las ideas positivistas que se afirmaron a partir de los años cincuenta al ritmo de la triunfal expansión de la ciencia y de la industria. No obstante esta generalización, habría que distinguir entre creaciones originales de un pensamiento profundo y confusas reacciones y reelaboraciones en distintos niveles de una sociedad que vi-

vía con una intensidad y una rapidez desconocidas la alfabetización, la culturización y la integración.

Por otra parte, las relaciones entre cultura y política, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales, son referencias esenciales y a veces determinantes. Los condicionamientos políticos y las tradiciones nacionales que pesan no sólo en la cultura académica y oficial, sino también, a veces en investigaciones más libres o superficiales, confirman la fuerza histórica del nacionalismo de Europa en el final del siglo XIX y contribuyen a explicar la aceptación y la participación en la gran guerra. En términos políticos, el problema se plantearía como la búsqueda y conquista del consenso a través de instituciones culturales y de escuelas. Probablemente, al tiempo que las nuevas concepciones filosóficas y científicas y las nuevas creaciones y experimentos artísticos y literarios herían de muerte al positivismo, triunfaban en las escuelas y en la cultura media el mito de las leyes objetivas, el desarrollo económico, y el progreso de la humanidad junto con las más pegadizas máximas del darwinismo social. En este aspecto no hay que olvidar que en este período comenzaron a adquirir dimensiones masivas la instrucción pública, la prensa cotidiana y periódica y la industria editorial.

Hay que recordar también la aparición de nuevas tendencias que durante las décadas siguientes dejaron su huella en la cultura mundial, testimoniando la indiscutida hegemonía europea en el campo cultural. Por mencionar algunas fechas y nombres, podemos decir que en 1900, Freud publicó *La interpretación de los sueños*, Husserl sus *Investigaciones lógicas*, Russell la crítica de la filosofía de Leibniz y Planck propuso las principales líneas de su teoría cuántica de la física. Pero es obvio que no podemos limitarnos a un año y a estos pocos nombres por significativos que sean. Para tener una idea, aunque sea sumaria, de la transformación del clima cultural y el rumbo que seguían las artes y las letras debemos considerar, por lo menos, un período de veinte años, atentos a la complejidad de las interrelaciones y superposiciones, continuidades y rupturas que suceden en este campo. Sería vano y superficial cualquier intento unificador, porque las razones y los puntos de partida y de llegada fueron muchos, variados y a menudo contradictorios. Son los años en que, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche (1844-1900) conquista los ánimos más despiertos y abre las perspectivas más inquietantes. Los años en que madura el pensamiento de Benedetto Croce (1876-1952), que ya en 1893 incluía a «la historia bajo el concepto general del arte», iniciando la crítica de la objetividad de la historiografía positivista que luego desarrollará en un acabado sistema filosófico. Los años en que publica sus primeros escritos un estudioso excepcional, Max Weber (1864-1920), cuya im-

portancia en la orientación de los estudios históricos y de las ciencias sociales sólo fue plenamente valorizada y ampliamente reconocida en las décadas que siguieron a su muerte. Los años en que Henri Bergson (1859-1941) domina la escena filosófica francesa, con su rechazo de toda interpretación mecanicista de los procesos mentales y su concepto del impulso vital *(élan vital)*, destinado a despertar entusiastas, y también fáciles y superficiales adhesiones. Un eco profundo del bergsonismo se encuentra en la obra de Marcel Proust (1871-1922), *En busca del tiempo perdido*, donde las vivencias se internan en la dimensión de la memoria individual en una original descomposición y recomposición del tiempo.

Algo parecido o más revolucionario sucedía en las artes figurativas. Ya en los años setenta, Claude Monet y los impresionistas abrían nuevos caminos a una generación de grandes pintores que los recorría con audaces investigaciones espaciales y colorísticas. Los nuevos artistas convirtieron París en el más importante laboratorio de la pintura contemporánea. En estas experiencias se formaba Pablo Picasso (1871-1963).

También en el campo de la física se modificaban profundamente los conceptos de espacio y tiempo. Las investigaciones sobre la radioactividad originaron nuevos descubrimientos y nuevas teorías. Se configuraba el paso del tradicional y básico concepto de *materia* al relativamente nuevo de *energía*. En 1905, Albert Einstein (1879-1955) formulaba la intercambiabilidad de espacio y tiempo según la posición relativa del observador. «La posición espacial y temporal de un cuerpo sólo puede ser definida en relación a la de otro cuerpo.» La teoría de la relatividad, pese a lo incomprensible que pudiera parecer al sentido común, inauguraba una nueva era en la investigación científica y contribuía a deshacer antiguas certezas; superponiéndose a ataques provenientes de todas partes, «la nueva concepción de la física teórica, a partir del comienzo del siglo, demuele las clásicas imágenes del universo estático, formado por partículas cuyo movimiento obedece a las leyes de la mecánica. El mundo físico de la ciencia moderna todavía sigue compuesto por partículas: pero todas pueden transformarse en otras y ninguna es eterna en el sentido newtoniano» (Lichteim).

Pero es necesario aclarar también que la idea de la transformación perenne y el primado de la experimentación no eran ajenos a la mejor tradición positivista, por lo que no sorprende que luego reivindicaran el título de «positivismo lógico» algunas de las tendencias más activas de la ciencia y de la filosofía contemporánea, nacidas en la atmósfera particularmente propicia de los estudios y el intercambio cultural de la decadente Viena del imperio de los Habsburgos. Considerable importancia tuvo la personalidad de Ernst Mach (1838-1916)

—profesor de física en la Universidad de Viena entre 1867 y 1895, y de filosofía entre 1895 y 1901—, que puede ser considerado «el eslabón entre la escuela neokantiana, muy influyente en Alemania después de 1880, y el posterior nacimiento del positivismo lógico. Así como Einstein, Freud también heredó de Mach la tendencia al empirismo y una coherente indiferencia ante la metafísica tradicional. En este aspecto, el positivismo lógico, el psicoanálisis y la nueva física legada por Einstein pertenecen a la misma familia espiritual» (Lichteim).

Se pueden discutir e incluso rechazar estos enfoques; pero un hecho es cierto: la excepcional importancia que en la cultura europea y mundial, aun masivamente, ha ido asumiendo la psicología del inconsciente a la que Freud dedicó su actividad de investigador y médico. Pese a que la preeminencia absoluta que Freud daba a la pulsión sexual se convirtió en tema de discusión y de división, el psicoanálisis descubría y exploraba dimensiones desconocidas del hombre. Junto con el psicoanálisis, las distintas tendencias de la psicología y el estudio de las estructuras mentales han influido en todos los campos de la actividad humana, desde los sistemas educativos hasta la literatura y la historia, contribuyendo a la formación de una nueva visión del mundo y nuevos comportamientos públicos y privados.

Con Freud y la escuela psicoanalítica se da un salto cualitativo y una específica apertura del análisis; pero, en un plano completamente distinto, desde 1985 Gustave Le Bon había llamado la atención sobre la psicología de la multitud en relación con las primeras manifestaciones de las asociaciones de masas y de la democracia participativa. Se trataba de consideraciones más bien superficiales que, no obstante, fueron apreciadas por hombres como Hitler y Mussolini, miserables organizadores del consenso de las masas. En el campo de las ciencias humanas y sociales, sin embargo, los ejemplos que merecen recordarse de los años que nos ocupan son muy diferentes.

En la economía se afirmaba la escuela marginalista, o neoclásica. No le había sido fácil. Se podrían recordar los avatares académicos del francés Léon Walras (1834-1910), fundador, como se autoproclamaba, de la economía matemática y autor de la teoría, «de cristalina consecuencialidad lógica» (Schumpeter), del equilibrio económico, que no encontró buena acogida. Walras no consiguió una cátedra en su patria y hubo de dar sus lecciones en la Academia de Lausana, donde luego le sucedió Wilfredo Pareto. El triunfo y la larga hegemonía de la escuela neoclásica tienen un símbolo en el indiscutido prestigio y largo magisterio en Cambridge de Alfred Marshall (1842-1924), cuyos *Principios de economía*, se convirtieron en un texto clásico, reimpreso muchas veces y traducido a muchísimos idiomas. En Cambridge se for-

maba, hacia el final del siglo y en el primer decenio del siglo XX, John Maynard Keynes (1883-1950), cuyas evolución y contribuciones innovadoras maduraron durante y después de la guerra mundial.

Entre tanto, en la Viena de los Habsburgos terminaba sus estudios —y en 1912 publicaba una obra fundamental sobre la teoría del desarrollo económico— Joseph A. Schumpeter (1883-1950), discípulo de Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914). Schumpeter había sido compañero de estudios de dos de los más agudos exponentes del austromarxismo: Otto Bauer y Rudolf Hilferding, este último autor de *Capitalismo financiero* (1910), uno de los análisis más completos de las relaciones entre el capital financiero y el capital industrial. Este libro ejerció gran influencia sobre Lenin y sobre algunas interpretaciones económicas y propuestas políticas de la Tercera Internacional. El libro de Schumpeter (*Teoría del desarrollo económico*, 1912), cuya importancia pasó en parte desapercibida por el estallido de la guerra, intentaba elaborar, con una original reinterpretación de las ideas de Walras y de Marx —las que más influyeron en las suyas, según reconoce explícitamente—, «un modelo teórico del proceso de trasformación económica en el tiempo». «Intentaba responder —como escribe en el prefacio a la edición japonesa de la obra— a la pregunta de cómo el sistema económico genera fuerzas que lo transforman incesantemente.» De ahí la teoría del ciclo económico, de las innovaciones múltiples y de la función del empresario, muy diferente de la del dueño de capitales o del rentista.

La Casa Tasell en Bruselas, en 1892-1893, proyectada por Víctor Horta (1861-1924), es la primera manifestación madura del *Art Nouveau*, considerado el punto de ruptura con la arquitectura tradicional y el «primer programa internacional para una total renovación de la arquitectura, que había empezado realmente en el siglo XIX». El *Art nouveau* fue como una llamarada que se agotó muy pronto, pero, sin embargo, marcó un importante momento en el tránsito hacia formas más simples y nuevas que caracterizan a la arquitectura del siglo XX. La originalidad y la gracia de los proyectos y los edificios de Horta, que, siempre atento a no sacrificar la funcionalidad, adaptaba con elegantes formas onduladas las estructuras de hierro, diseñaba interiores decorados con refinada coherencia, creaba fantasiosas distribuciones entrelazando líneas en los espacios internos y las fachadas (*Maison du peuple*, Bruselas, 1896-1899), conquistaron rápidamente a Europa, y durante un tiempo se pusieron de moda, degenerando también en imitaciones recargadas y barrocas. Por su originalidad, uno de los ejemplos más significativos de la corriente modernista es el urbanista español Antonio Gaudí (1852-1926).

La técnica de la construcción en hierro, material que en las déca-

das anteriores había demostrado todas sus posibilidades en los arcos de los puentes, en los arbotantes, en las audaces combinaciones con amplias superficies de vidrio —podemos recordar la galería de las máquinas en la Exposición Universal de París (1889), los puentes y la torre de Eiffel— alcanzó en el *Art nouveau*, y sobre todo en el genio de Horta, un refinamiento difícil de imitar, como se puede ver en las estaciones del metro de París, donde Héctor Guimard muestra una vulgarización no carente de eficacia pero, por cierto, inferior al modelo.

La difusión del *Art nouveau* consiguió, por lo menos, dos resultados importantes: rompió con la tradición clásica y abrió el camino a las líneas simples de la arquitectura «moderna» —muchas veces en implícita o explícita polémica contra un estilo considerado demasiado decorativo—, ligada a la nueva técnica del cemento armado. Mientras el *Art nouveau* fue la moda que dominó durante unos veinte años, a principios de siglo, por obra de algunos grandes arquitectos comenzaba una historia totalmente nueva, destinada a perdurar durante décadas y todavía hoy en pleno desarrollo. Las posibilidades que el cemento armado (cuya patente obtuvo Joseph Mourer en 1877) ofrecía a los proyectos y las obras eran enormes. En consecuencia, también en este campo, como en tantos otros, la primera década del siglo XX señalaba un cambio cuyas consecuencias durarían mucho tiempo. Los pioneros fueron el francés Auguste Perret (1874-1954), el alemán Peter Beherens (1868-1940), el austriaco Adolf Loos (1870-1933), vinculados directa o indirectamente a las experiencias norteamericanas que habían encontrado geniales pioneros en Louis Henri Sullivan (1856-1924) y la escuela de Chicago y grandes continuadores en Frank Lloyd Wright (1877-1939), Walter Gropius (1883-1969) y Le Corbusier (1887-1975).

Si al recordar estos nombres se subrayan especialmente las innovaciones estilísticas y técnicas, no hay que olvidar la importancia económica y social que asumía cada vez más la industria de la construcción en una sociedad de masas que veía crecer rápidamente, a veces de manera monstruosa, las dimensiones de sus ciudades.

Al lado de la arquitectura comenzaba a conquistar su autonomía otra disciplina estrechamente conectada con ella pero que tenía implicaciones sociales más amplias y directas: el urbanismo. No el edificio aislado, sino los problemas de las viviendas populares y obreras, de las ciudades jardín, de la circulación, del control y la sistematización de los espacios, que exigían planificación y voluntad política para programarlos y solucionarlos.

También en el área de la biología fueron numerosos los descubrimientos y los progresos científicos, desde la técnica quirúrgica, del

neumotórax de Carlo Forlanini (1847-1892) a los estudios sobre la fecundación del biólogo suizo Fol (1845-1892) y a las investigaciones bacteriológicas de Laveran, Pasteur, Koch (tuberculosis y cólera) y Nicolaver (tétanos).

Finalmente, no debemos olvidar que en este período nacen el cinematógrafo, el motor a explosión y, en 1895, Guillermo Marconi hace el primer experimento de radiotelegrafía.

CAPÍTULO 8

LA EXPLOSIÓN IMPERIALISTA

1. Del librecambio al proteccionismo

El examen de las estructuras constitucionales, y de algunos aspectos de la vida política muestra, en primer lugar, diferencias entre varios tipos de Estado: desde la república parlamentaria de Francia hasta el imperio autocrático de Rusia. Pero, ¿es posible identificar problemas comunes a pesar de estas diferencias? O, mejor dicho, ¿cuáles son las tendencias de fondo ante las cuales cada país reacciona de manera diferente?

En el plano cultural, los años centrales del siglo XIX en Europa se caracterizaron por el liberalismo y el nacionalismo, que condujeron a la afirmación de los estados constitucionales y nacionales. Se producía, aunque muy lentamente, un relevo de las clases dirigentes; la burguesía de los profesionales, de los despachos y de los negocios conquistaba cada vez mejores puestos en el poder, sustituyendo o, más a menudo, acompañando a las viejas clases de la aristocracia terrateniente. El modelo con mayor prestigio era el inglés, que parecía asegurar un gran desarrollo económico y recorrer el nuevo camino de la industrialización sin graves conmociones políticas garantizando las libertades individuales y civiles. También en Francia, este modelo continuaba siendo un punto de referencia, si bien menos seguro. A partir de la revolución, Francia aparecía como el campo de batalla de las corrientes democráticas y autoritarias, la patria de los entusiasmos jacobinos, de explosiones revolucionarias y de reacciones absolutistas y militaristas. También podía ser tomada como ejemplo de un progreso económico y civil más equilibrado, en el que el campo, y una variada articulación del mundo rural conservaban su peso, frenando los temidos excesos de una transformación industrial demasiado rápida. Especialmente en el plano del ordenamiento legislativo y del funcionamiento estatal, la administración francesa continuaba siendo un mo-

delo que se destacaba por las tradiciones colbertianas y absolutistas renovadas y modernizadas por la experiencia napoleónica.

Entre los años 1860 y 1870 se puede fijar la fecha del breve triunfo de la doctrina del libre cambio, que se asociaba a la hegemonía cultural y económica inglesa. Richard Cobden había muerto en 1860, pero su intensa propaganda de las ideas smithianas de armonía universal, resultado del libre desplegarse del interés individual, luego de haber ganado Gran Bretaña, reunía adhesiones y conseguía un éxito importante en el continente europeo y en el mundo. Las razones de importantes acontecimientos de esta década pueden encuadrarse en este marco liberal y librecambista: la guerra de la secesión norteamericana por la liberación de los esclavos, la emancipación de los siervos de la gleba y la institución de los consejos provinciales en Rusia o, más específicamente, el tratado de comercio entre Gran Bretaña y Francia, y la política librecambista del reino de Italia después de la unificación. También la política bismarckiana pudo aprovecharse no sólo del clima favorable a la unificación nacional, sino también del apoyo de los liberales alemanes, convencidos partidarios del libre cambio.

Durante esos años, la expansión del comercio internacional y de los medios de transporte fue prodigiosa. Pero las consecuencias resultaron muy diferentes de las que esperaban los librecambistas y llevaron, al cabo de algunos lustros, a guerras comerciales, a una exasperada competencia y a la protección de los mercados nacionales, aunque se hiciera dentro de una economía que ya era mundial. La división internacional del trabajo predicada por los librecambistas chocaba contra el propósito de los estados y las grandes potencias de desarrollarse autónomamente, defender posiciones de grupos económicos y sociales y, sobre todo, no renunciar a la creación de estructuras militares e industriales propias.

El giro proteccionista, ya maduro por la necesidad de defender las nacientes industrias nacionales contra la supremacía británica, se aceleró hasta hacerse inevitable por la caída de los precios agrícolas y la consiguiente crisis agraria, que castigaba intereses tradicionalmente fuertes en los mayores países europeos. La caída del precio del trigo amenazaba especialmente a la producción cerealera, que tenía un peso político relevante por ser la base más habitual de la alimentación nacional. Se reagrupaban las fuerzas y, frente a ellas, los atrasados partidarios del libre cambio, aun representando intereses legítimos, parecían doctrinarios principistas.

Los gobiernos no podían dejar de intervenir con medidas proteccionistas, y el camino fue señalado y emprendido por Alemania, seguida luego por Italia y Francia. En cambio, Inglaterra y Dinamarca son ejemplos de una solución diferente que permitió el libre juego del

mercado favoreciendo el paso de la agricultura a la ganadería y a la gran expansión del sector lechero. No hay que olvidar que en la opción inglesa pesaron la insularidad del país, la relativamente escasa población dedicada a la agricultura, el dominio de los mares y la superioridad industrial que, si bien precisamente en aquellos años empezaba a peligrar, era lo suficientemente fuerte como para permitirse una política económica distinta del resto de las grandes potencias europeas. Los otros países que permanecieron fieles al libre cambio eran pequeños estados, y el caso de Dinamarca estaba estrechamente ligado a sus exportaciones a Gran Bretaña.

Por otra parte, el desarrollo económico de Alemania consiguió los más deslumbrantes éxitos, superando a Gran Bretaña en muchos sectores y sentando las bases para una política mundial. Subrayemos que las victorias militares sobre Austria y Francia y el espectacular crecimiento económico, especialmente industrial, originaron a partir de los años setenta y delinearon en las décadas siguientes cada vez con mayor nitidez un nuevo modelo: el alemán.

De las instituciones, la historia, la economía y la cultura de Gran Bretaña, Francia y Alemania se puede extraer la imagen de Europa al final del siglo. Una imagen y una realidad con múltiples facetas que permiten hacer distintas interpretaciones y extraer ideas no siempre convergentes. Simplificando, los rasgos predominantes parecían corresponder a estados nacionales fuertemente cohesionados, dotados de garantías constitucionales y complejos ordenamientos administrativos, judiciales y docentes, dueños de la nueva tecnología industrial, protagonistas de la economía y de la política mundiales.

2. **Imperialismo y socialismo**

Europa es el centro del mundo, y en una parte de Europa —sobre todo Londres, París y Berlín— se teje una densa red de relaciones políticas, económicas y diplomáticas que, en algunos lugares más estrecha, en otros más ampliamente, envuelve a todos los países. A partir de los años ochenta se hacen evidentes las manifestaciones de esta poderosa fuerza expansiva que llega al paroxismo en los últimos años del siglo. Es la era del imperialismo.

Es posible rastrear los antecedentes del expansionismo y del imperialismo europeos en tiempos más o menos lejanos, recordando los grandes imperios portugués, español y holandés, o las más recientes conquistas coloniales inglesas y francesas. Es posible, también, refiriéndose especialmente a Inglaterra, hablar además de un imperialismo *free trade*, del libre cambio (términos aparentemente contradicto-

rios) y subrayar sus elementos de continuidad. Aún más, es lícito recordar que empresas espectaculares, como el reparto de África, se vieron facilitadas por situaciones circunstanciales, por vacíos de poder, por la disgregación interna del continente negro. Sin embargo, es innegable que a partir de los años ochenta, se produce un estallido imperialista que, justamente por su carácter explosivo, se distingue claramente de cualquier otra expansión colonial anterior y se conecta con formas maduras de capitalismo industrial que multiplicaban el poderío y la capacidad expansiva y militar de los países europeos en primer lugar, y luego de Estados Unidos y Japón, naciones que también han modernizado sus instituciones políticas y sus estructuras industriales. Es innegable que, frente a la confianza en el progreso armónico y pacífico que habría asegurado la victoria del libre comercio, los antagonismos comerciales y políticos se agudizaron después de los años setenta y, si bien el estilo de las relaciones diplomáticas no cambia, tiende a hacerlo el clima general que implica a la opinión pública y a las masas populares. La exaltación de la potencia nacional e imperial, de la primacía de la raza blanca, o británica, o alemana, el triunfo del darwinismo social y del cientificismo positivista acompañan y sostienen la política de expansión colonial y económica. La gran mayoría de la opinión pública europea y norteamericana comparte la conciencia de la superioridad del europeo y del *yankee* sobre los habitantes de otros países del mundo. Durante estas décadas, por lo tanto, la vanidad imperialista es un rasgo común de la civilización europea y habrá que examinar cómo se traduce en actos concretos.

Pero el movimiento socialista es otra característica común y original de este mismo período que, en muchos aspectos, se opone a las ideologías nacionalista e imperialista dominantes. El socialismo nace de una clara aspiración a superar las divisiones entre naciones y razas, a unir a los trabajadores y a los explotados de todo el mundo, a sustituir la guerra entre los pueblos por la lucha de clases. Luego sucederá que, al articularse y diferenciarse el movimiento, los ideales internacionalistas y humanitarios cederán a veces ante la presión hegemónica de los nacionalismos triunfantes y la necesidad política del compromiso. Queda en pie el hecho de que, los últimos veinte años del siglo XIX, vieron crecer, junto al sistema de las fábricas y la penetración del capitalismo en el campo, al proletariado industrial y rural que, tras algunos experimentos de asociaciones de socorros mutuos, tiende a organizarse de manera autónoma en defensa de sus condiciones de trabajo y para dotarse de un programa político propio, de una alternativa más o menos radical a la sociedad existente.

3. Las dos conferencias de Berlín: de Europa a África

En estas décadas, la esfera de las relaciones internacionales tiende, cada vez más, a superar los límites europeos y las relaciones diplomáticas tradicionales. Pero debemos partir de las relaciones entre los estados europeos y de algunas cuestiones que absorbían la atención de las cancillerías.

Después de 1870 se pueden fijar al menos dos ejes: Uno es la rivalidad anglo-rusa, o sea entre dos grandes imperios, uno esencialmente terrestre y el otro marítimo, que no compartían fronteras pero sí tenían opuestos intereses en zonas de influencia que desde los Dardanelos a Persia y China abarcaban el Cercano, Medio y Lejano oriente. La cuestión china adquirirá importancia al finalizar el siglo; pero la cuestión de los estrechos y de Turquía, que incluía la intrincada situación balcánica, se hizo crítica ya en los años 1877-1878.

La otra constante era la rivalidad franco-alemana, para la que se podían encontrar ilustres y lejanos antecedentes históricos, pero que sustancialmente, en términos contemporáneos, derivaba de la irritante derrota sufrida por Francia en 1870 y de la pérdida de Alsacia y Lorena. Por sí sola, Francia no podía tomarse la revancha de Alemania, cuyo poderío industrial y militar estaban en evidente crecimiento y eran el elemento determinante para la paz o la guerra en el centro de Europa: Bismarck era muy consciente de esta situación. El canciller, los grupos dirigentes y la opinión pública alemana estaban satisfechos de los resultados obtenidos y esperaban mantener la paz por lo menos durante un plazo breve o mediano. Y, en efecto, entre 1870 y 1914 Europa conoció, comparada con su pasado, una etapa de paz excepcionalmente prolongada; hubo episodios bélicos, es cierto, pero fueron marginales: se pudo evitar cualquier encuentro directo entre las grandes potencias.

Cuando la guerra estalló en 1914, la situación había cambiado totalmente: aunque surgió en el corazón del continente, no fue una guerra solamente europea: fue la «primera guerra mundial»; fue la confirmación definitiva de los nuevos lazos que unían a Europa con el mundo en todos los campos de la actividad humana, de los que es una importante manifestación el complejo fenómeno de la expansión imperialista.

En esta perspectiva podría ser más relevante el conflicto entre Rusia y Gran Bretaña, ya en una dimensión extraeuropea e imperial, que el complejo juego diplomático de Bismarck, tendente a crear un sistema de aislamiento de Francia y a conservar para Alemania la posición de árbitro de las relaciones entre las grandes potencias. Pero adherir-

se indiscriminadamente a tal interpretación —que satisface la justa exigencia de superar la historia puramente diplomática y eurocéntrica— sería aceptar una visión demasiado simple y esquemática que oculta la complejidad de los hechos y el camino tortuoso de la historia. En efecto, en 1914, Rusia y Gran Bretaña se aliaron con Francia para combatir contra Alemania y Austria-Hungría.

Por lo tanto, hay que recordar brevemente la política bismarckiana que celebra su triunfo en el congreso de Berlín (1878), donde se reunieron los estadistas más acreditados de Europa, evocando los fastos diplomáticos del congreso de Viena. La evocación sólo era ilusoria: los problemas a resolver, aunque delicados, eran menos comprometidos. Rusia, con las excusas del incumplimiento turco de sus compromisos de reformas políticas y la represión contra los búlgaros, había intervenido militarmente obteniendo algunos éxitos pero encontrando también una resistencia inesperada. El Imperio turco, el «gran enfermo», sostenido por el gobierno de Disraeli, no cayó. Rusia impuso el tratado de San Esteban, que le aseguraba importantes ventajas, pero frente a la reacción inglesa, la desconfianza austriaca y la mediación alemana, aceptó someter las cláusulas a un congreso internacional. En Berlín le quedó muy poco de lo que había ganado en Turquía. Austria-Hungría se introdujo en las negociaciones haciéndose asignar el control de Bosnia-Herzegovina. Gran Bretaña recibió la isla de Chipre en pago de la ayuda prestada al Imperio turco. Alemania confirmó su interés por la paz y su función de árbitro.

El relieve y la resonancia que la reunión de Berlín tuvo en el pasado entre los investigadores de la historia y en los manuales escolares y, al contrario, el juicio más desapasionado que autorizadamente se le da en la actualidad, son ejemplos del cambio de perspectivas: los mismos acontecimientos de la historia contemporánea sugieren un estrecho enfoque eurocéntrico, o inducen a proyectarse sobre más vastos horizontes. Escribe A. J. P. Taylor: «En Berlín se encontraban, en un número sin precedentes, los más grandes estadistas de su tiempo. Sin embargo, todo lo que pudieron discutir fue la suerte de unas pocas aldeas de los Balcanes. Y algo más singular: la crisis de Oriente continuó dominando las relaciones internacionales durante muchos años después del congreso de Berlín; modeló y determinó las alianzas, que se multiplicaron luego como setas tras un chaparrón, y cada ministro del Exterior basó en ella su política. No obstante, nunca se concretó nada. Las interminables crisis de Oriente se asemejaban a otras tantas maniobras militares, en las que se hacía mucho alarde de habilidad y, por la noche, cada cual regresaba incólume a su casa.»

Algunos años después, entre noviembre de 1884 y febrero de 1885, se reúne una nueva conferencia internacional en Berlín. Raramente se

la menciona en los manuales, por más que transcurre en un momento importante para la historia del imperialismo y muestra los vínculos que existían entre la política exterior de las potencias europeas y la expansión colonial. Una vez más, la iniciativa fue de Bismarck que, justamente en 1884, había decidido que Alemania participara en la carrera colonial, proclamando oficialmente, y sin más, sus intereses y su protectorado sobre algunos territorios de África, y del Pacífico Sur, donde operaban sociedades comerciales alemanas. Así nacieron las colonias de Togo y Camerún, África occidental y África oriental alemanas.

Cualesquiera que fueran las opiniones de Bismarck sobre la real conveniencia de una política colonial, el momento elegido fue excepcionalmente oportuno. Las relaciones entre las dos mayores potencias coloniales —Francia e Inglaterra—, tras un largo período en que, si no fueron cordiales tampoco tuvieron grandes conflictos, se habían vuelto tensas en 1882, cuando Gran Bretaña ocupó Egipto excluyendo de hecho a Francia del control en condominio que ambas ejercían hasta entonces sobre el país y sobre el canal de Suez. En las costas de África occidental y, tierra adentro, a lo largo de las cuencas del Senegal, el Níger y el Congo, se creaba una situación de competencia cargada de peligros. Sobre todo los franceses estaban muy activos, moviéndose desde el Senegal hacia el Níger avanzaban hacia el Este, amenazando cortar las vías de comunicación del comercio costero, mayormente en manos de los ingleses. Si hasta 1882, el gobierno francés había frenado las ambiciones expansionistas de los comandantes militares de las colonias, ahora la rivalidad con los ingleses les dejaba mayor libertad de movimientos. En esos años había nacido el proyecto de avanzar desde la costa senegalesa hasta el lago Chad y poner bajo influencia francesa toda la zona subsahariana que, en el futuro, podría unirse a Argelia.

También en esos años tomaba forma, justamente en África occidental, más al Sur, en torno a la cuenca del Congo, una singular creación político-comercial. Leopoldo II de Bélgica, original figura de soberano emprendedor, apasionado de las exploraciones geográficas, confiado en los recursos económicos de África y en el provecho de su explotación capitalista, había convocado en Bruselas, en 1876, a una conferencia geográfica internacional y fundado la Asociación internacional africana. Reclutó al gran explorador angloamericano Stanley, y organizó expediciones en el Congo que, con el fin declarado de una cruzada antiesclavista y civilizadora, inducían a los jefes de las tribus locales a reconocer la soberanía de la Asociación.

Esta intensa actividad preocupaba a los franceses y a los ingleses: los primeros aceptaron reconocer las conquistas de Leopoldo II a con-

dición de que les concediera el derecho de preferencia, esperando poder heredar la audaz empresa cuando ésta fracasara. Los segundos intentaron oponer a la iniciativa del rey de Bélgica antiguos derechos sobre el Congo cedidos por los portugueses. En esta situación, cuyas complejidad y peligrosidad se dibujan con claridad en los primeros meses de 1884, Bismarck está preparado para aprovechar la ocasión, no sólo para afirmar —como se ha dicho—, la presencia de Alemania entre las potencias coloniales, sino para ejercer, una vez más, la función de árbitro. La neutralidad de Bélgica y la necesidad de evitar que los mayores imperios coloniales pudieran extraer ventajas, el uno perjudicando al otro, de la colonización del Congo, favoreció el éxito de la aventura de Leopoldo II: fue reconocido el Estado libre del Congo, cuyo gobierno fue confiado a título personal al rey de Bélgica. Para no humillar a ingleses y portugueses, la nueva colonia tenía sólo una pequeña salida al mar, mientras se desplegaba ampliamente en el interior por la cuenca del Congo.

4. **Libertad de comercio y ocupación efectiva**

La importancia de la conferencia de Berlín de 1884-1885 no reside solamente en haber resuelto este problema, sino, sobre todo, en haber reconocido y regulado la conquista de territorios coloniales por parte de las potencias firmantes en nombre del «libre comercio y de los derechos de la civilización». En las actas, la referencia específica era el África occidental, pero la extensión del principio podía ser universal. Quien ocupaba las costas podía extender la ocupación hacia dentro siempre que no encontrara «esferas de influencia» de otros ocupantes. La ocupación debía ser efectiva y notificada a los firmantes del acuerdo.

Se trataba de la sanción formal de prácticas y usos que tenían precedentes. Las conquistas coloniales no habían comenzado en 1884, y un acuerdo diplomático no podía regular y contemplar las múltiples y complejas razones del imperialismo. No obstante, el acuerdo es significativo porque señala con claridad el momento del cambio, sobre todo en lo que se refiere al reparto de África, y también porque revela una contradicción de fondo entre los propósitos declarados y las finalidades reales de la «efectiva ocupación», o sea, del control territorial de las colonias. Pasamos por alto los fines humanitarios y la misión civilizadora: sobre este punto está abierta la discusión; no se puede ignorar el cinismo de muchos políticos y la crueldad de muchos colonizadores, pero también es indudable la sinceridad de las intenciones de muchos otros, convencidos de la superioridad racial y cul-

tural del hombre blanco y de los benéficos efectos de su gobierno. Como quiera que sea, los medios utilizados y los resultados conseguidos han suscitado frecuentemente una profunda y justificada reacción.

El tema, con específica referencia a los años ochenta, es, por una parte, la proclamación del principio de la libertad de comercio, heredera de las ideas librecambistas, y por otra parte, la práctica del monopolio comercial y del control exclusivo que la ocupación efectiva debía garantizar de acuerdo con las nuevas tendencias proteccionistas. Todavía a mediados de los años ochenta Inglaterra —y no es casualidad que el gobierno estuviera entonces en manos del liberal Gladstone— tardaba en tomar conciencia de los cambios acontecidos y tendía a hacer una distinción, cada vez más difícil, entre los intereses privados de los comerciantes y empresarios y los intereses estratégicos y políticos nacionales. Sobre todo se demoraba en comprender que durante algunas décadas, aunque predicando la política de la libertad de comercio y de «puertas abiertas», había podido ejercer de hecho, gracias a la absoluta preeminencia industrial, financiera y naval, un monopolio que ahora era más o menos abiertamente discutido y desafiado.

La intervención en Egipto y su ocupación por los ingleses no fueron bien recibidas, justamente porque fueron hechas por el gobierno liberal de Gladstone, que, aunque era reacio a la expansión, no era irreductible frente a la realidad. Las reacciones que desencadenó la decisión británica originarán, al menos parcialmente, el acelerado reparto de África. No obstante las promesas y los compromisos, los ingleses no se retiraron de Egipto. El control del canal de Suez se había convertido evidentemente en un interés estratégico imperial.

Pero los acontecimientos de los años ochenta, y las consecuencias de la conferencia de Berlín contribuyeron a que las nuevas tendencias también maduraran en Inglaterra. Los ingleses empezaban a comprender que en una situación de competencia exacerbada, de proteccionismo e intervención estatal, era imposible, en algunos casos, defender los intereses comerciales sin la ocupación de los territorios. La Cámara de Comercio de Liverpool lo manifestaba claramente en 1892, expresando una opinión ampliamente aceptada: «Los gobiernos ingleses de la última década se han dejado superar por Alemania y Francia en África occidental; Gambia ha perdido territorios; Camerún ha sido tomado; dos potencias extranjeras se han introducido entre Lagos y las colonias de la Costa de Oro, áreas que debían ser limítrofes; los franceses se han lanzado sobre Senegal y Gambia... La Cámara [de Comercio de Liverpool] piensa que en todos los casos en que había superioridad comercial inglesa en los territorios africanos, entonces au-

tónomos, los intereses ingleses debieron ser defendidos declarando que dichos territorios pertenecían a la esfera de influencia inglesa.»

De hecho la política inglesa cambió, los antecedentes, los puntos de apoyo, el poderío comercial y naval, la experiencia y los compromisos eran tales que, finalmente, se impuso el dominio británico en varias regiones de África confirmando un primado colonial amenazado en algún momento por la actividad francesa. De los episodios de esta conquista se pueden recordar especialmente dos que fueron sobresalientes: la controversia con Francia, terminada en Fashoda en 1898, y la guerra contra los bóers que consolidó y extendió la presencia británica en Sudáfrica.

La polémica historiográfica sobre la influencia de los intereses económicos o políticos y estratégicos en las iniciativas que llevaron a la explosión imperialista se está volviendo ociosa, aunque fue útil para aclarar una serie de hechos y conceptos. La misma distinción entre economía y estrategia político-militar, es un punto de partida equivocado cuando los protagonistas de la expansión imperialista son las mayores potencias industriales. Reducir el problema a los intereses particulares de algunos empresarios privados o a alguna sociedad comercial —cuyas acciones y presiones no fueron irrelevantes— significa olvidar las transformaciones que se producían en el propio campo de la economía y de las relaciones internacionales en una época que veía caer la supremacía británica y la doctrina del libre cambio, ante la competencia económica y política, en la cual, cada vez más a menudo el Estado debía intervenir directamente.

Algunos políticos eran conscientes de los nuevos problemas, como lo demuestra la intervención de Jules Ferry en el debate que se desarrolló sobre la política colonial en el Parlamento francés en 1885. Ferry expresó algunos puntos de la nueva tendencia subrayando el nexo entre la política de expansión y los intereses económicos, especialmente en la búsqueda de nuevos mercados para la exportación de mercaderías y capitales. Insistió, además, en que «las razas superiores» tenían «el derecho y la obligación de civilizar a las razas inferiores». La política colonial era «el elemento propulsor que mueve actualmente a todas las potencias europeas».

5. El reparto de África

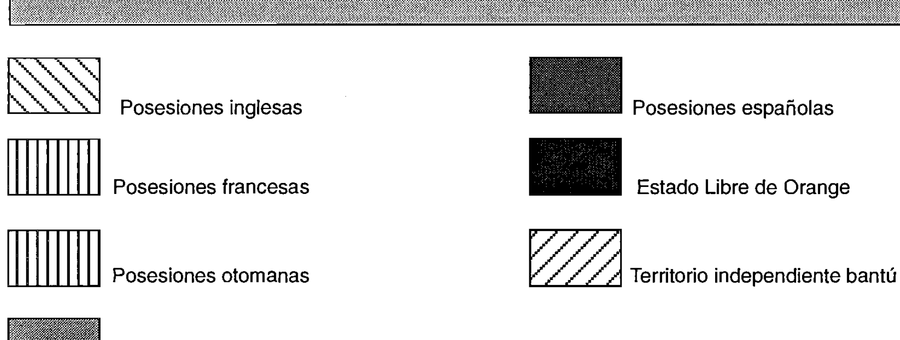
Como pretexto o justificación de la intervención militar y el dominio directo de los territorios se apelaba a la violación de compromisos contractuales o financieros, la incapacidad de asegurar las condiciones para el «libre comercio», o la protección de los «extranjeros». Los

casos de Tunicia y Egipto son buenos ejemplos. Este último, como hemos dicho, originó una reacción en cadena que aceleró el reparto de África.

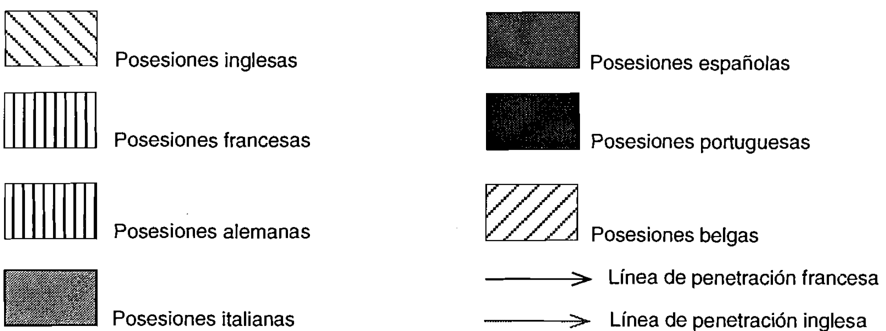
El control franco-inglés de las finanzas egipcias y la injerencia extranjera en la vida del país provocaron la insurrección de Arabi Bajá, que sirvió de excusa para la intervención inglesa. La protección de los dividendos financieros, de la vida de los ciudadanos ingleses y de los intereses estratégicos, especialmente en relación con el imperio de la India, muestran claramente la clase de razones que hacían «inevitable» la intervención inglesa. El gobierno del liberal Gladstone habría preferido recrear las condiciones que habían permitido un control indirecto en el pasado reciente. Pero la presión fiscal y las interferencias extranjeras sobre los regímenes políticos locales no permitían conservar ninguna autoridad sin la ocupación directa. Si los intereses europeos —políticos y económicos— debían prevalecer sobre cualquier aspiración egipcia, era necesario imponerlos por la fuerza mediante «pacificación». Era una manera de imponer la civilización de las razas superiores a las inferiores, incapaces o reacias a respetar las cláusulas financieras de los contratos y del nuevo orden público.

La resistencia a los invasores extranjeros asumió en esos años diversas formas, ingenuas y contradictorias, según las diferentes situaciones que se daban en un continente tan vasto como África, con una enorme variedad de organizaciones políticas y sociales que iban desde formas tribales a verdaderos organismos estatales. Maduró luego la conciencia nacional, y las luchas por la independencia y la descolonización se desarrollaron también bajo el impacto de los acontecimientos que se iban sucediendo. De la resistencia «primaria» se pasó al proceso de descolonización a través de la experiencia de la colonización, de relaciones complejas y de diferente signo con la cultura europea y, finalmente, de la participación en las dos guerras mundiales.

La superioridad militar de los ejércitos coloniales era aplastante, pero las tropas de ocupación sufrieron reveses aislados que encontraron eco en la opinión pública y tuvieron repercusiones políticas. Ligada a la ocupación británica de Egipto estuvo la expedición del general Gordon a Sudán, donde los egipcios habían intentado imponer su dominio provocando el levantamiento religioso y milenarista mahdi entre la población derviche. El ejército mahdí conquistó, en 1885, la ciudad de Jartum, ocupada por Gordon, que fue asesinado. La sublevación mahdí contribuyó a que se pensara que la presencia militar en Egipto era indispensable para la defensa de los intereses británicos. La otra derrota militar europea en África fue infligida por el negus de Etiopía Menelik a los italianos en Adwa, en 1896 (véase capítulo 7, § 5) y permitió, gracias a un conjunto de circunstancias favorables, la su-



El reparto de África (1880).



El reparto de África (1880-1914).

pervivencia de un Estado independiente africano hasta la agresión fascista (cfr. P. Villani, *La edad contemporánea, 1914-1945*, Primera parte, capítulo 4, § 6).

Los episodios de Sudán no habían terminado definitivamente. Durante algunos años, los ingleses adoptaron una política prudente, manteniéndose en las fronteras egipcias, pero la constitución del Estado libre del Congo, la presencia alemana en África occidental y en Tanganica, el avance francés que a partir de las costas occidentales se movía ambiciosamente hacia el Alto Nilo, y la misma derrota italiana en Adwa, indujeron al gobierno inglés a definir su propia esfera de influencia y a extender la ocupación efectiva. Las etapas más importantes de este proceso fueron la penetración, entre 1890 y 1893 en Kenia y en Uganda hacia el nacimiento del Nilo y la aventura de Cecil Rhodes en África centro-meridional donde fundó y dio su nombre a la nueva colonia de Rhodesia. De este avance, que se suma a la explotación de los grandes recursos minerales de Sudáfrica y de los diamantes y el oro del Transvaal, nacerá el enfrentamiento con los antiguos colonos holandeses, los bóers (*boer* significa campesino), que en el éxodo llamado la «gran marcha» se habían retirado de los territorios costeros de la colonia del Cabo hacia el interior para sustraerse al dominio británico.

A mediados de los años noventa se define la estrategia general para que las grandes potencias coloniales solucionen sus conflictos y se repartan el continente africano. Se van restringiendo los espacios libres y los márgenes de maniobra. Abrumada por Francia e Inglaterra, Alemania piensa en apoderarse de las posesiones portuguesas. Para ello trata de obtener el apoyo y la participación británica, poco probables y que finalmente se le niegan. Después de la derrota de Adwa, la iniciativa italiana queda paralizada. En consecuencia progresan esencialmente dos líneas, la francesa, que avanza desde la costa occidental hacia África oriental y amenaza con cortar horizontalmente el continente; y la inglesa, que tiende a establecer una continuidad territorial desde El Cairo a El Cabo. El punto de encuentro está en el Alto Nilo: el pueblo de Fashoda se hace famoso en Europa en 1898 porque allí llegan, casi al mismo tiempo, un pequeño destacamento francés y una expedición inglesa que había dominado la rebelión de los derviches sudaneses. La rivalidad entre las dos grandes potencias llegó a su punto álgido, parecía inminente una declaración de guerra y la opinión pública estaba muy excitada. Pero Francia era evidentemente inferior y no podía esperar ninguna ventaja de un conflicto con Inglaterra. Por otra parte, Gran Bretaña tenía sus propias preocupaciones causadas en África por la encarnizada resistencia de los bóers, en Asia por la persistente e inminente amenaza rusa a Persia y a China y en el mun-

do por el creciente poderío industrial, comercial y naval de Alemania. Se encontró una solución diplomática satisfactoria al incidente y los franceses se retiraron. Desvanecidas las razones para un enfrentamiento, en el fondo marginales, las relaciones entre ambos países mejoraron rápidamente e Inglaterra aceptó apoyar a Francia en la crisis marroquí (véase § 8 de este capítulo).

Inglaterra ya tenía las manos libres para desatar por la fuerza el nudo bóer empeñándose en una verdadera guerra que coincidió con el momento culminante de la expansión imperialista mundial y del apoyo de la opinión pública europea a las empresas coloniales. Son los años del conflicto entre España y Estados Unidos, que —con la conquista de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Hawai— entra en la liza imperialista (cfr. P. Villani, *La edad contemporánea, 1914-1945*, Primera parte, capítulo 1, § 5); de los proyectos para repartir a China en zonas de influencia, de la rebelión de los bóxers y la represión de los sublevados por un cuerpo expedicionario internacional comandado por un general alemán.

6. La modernización de Japón y la cuestión china

Hacía tiempo que el poderío comercial y naval inglés había obligado al gobierno chino a abrir sus puertas al «libre cambio». Pero muy pronto los chinos comprendieron que Gran Bretaña no era el único protagonista de la expansión imperial, cuando tuvieron que hacer frente al ataque francés desde las fronteras indochinas, a la amenaza rusa sobre Manchuria y a la intervención, más directa y peligrosa, que no llegaba de las potencias europeas, sino del vecino Japón.

En poco más de treinta años, Japón había experimentado una profunda transformación. Forzados a salir de su secular aislamiento en virtud de los principios del libre cambio y de la «puerta abierta», introducidos esta vez por los norteamericanos, los grupos dirigentes japoneses, tras dramáticas revoluciones y enfrentamientos, habían decidido seguir el camino occidental de la modernización del Estado y la producción industrial. En el rápido cambio tecnológico impuesto, sufrido o aceptado, la relación entre economía, política y religión, entre clases dirigentes y masas populares, entre tradición y renovación es todavía objeto de gran interés y de importantes investigaciones históricas y sociológicas, actualizadas mucho más ahora por la posición que ha conquistado Japón en la economía mundial después de la catastrófica conclusión y los desastres atómicos de la segunda guerra mundial.

Ante todo surge la pregunta acerca de las razones por las cuales China y Japón respondieron de diferente manera a la penetración oc-

cidental. Los contactos de los europeos, y de los occidentales en general, con China habían sido más antiguos y estrechos que con Japón. Antes de la expedición del norteamericano Perry, en 1853, sólo los holandeses habían mantenido relaciones con los japoneses, enviando un navío al puerto de Nagasaki una vez al año. Pero mientras los grupos dirigentes chinos siempre rechazaron, por lo menos hasta los primeros años del siglo XX, los aportes de la civilización europea, considerada como una expresión de pueblos inferiores y bárbaros, los japoneses asimilaron rápidamente la tecnología y algunas formas de los sistemas políticos, adaptándolas a sus fines de afirmación económica y militar.

La rapidez y la eficacia de la respuesta japonesa se debe a varios factores. Ante todo, la insularidad había favorecido la formación de un espíritu nacional, que ayudó mucho a la cohesión social y a superar el régimen feudal. La concepción universalista e imperialista que se afirmó en China no admitía teóricamente la pluralidad de estados y poderes. Los japoneses, incluso por la experiencia de su organización feudal, comprendieron más fácilmente el sistema europeo y entraron en el juego político y diplomático. En efecto, la jerarquía feudal creaba una serie de relaciones verticales más estrechas y orgánicas de las que existían en China, donde el poder imperial se irradiaba desde el centro a la periferia a través de un aparato burocrático (los mandarines) superpuesto, pero no íntimamente ligado, a la gran masa de la población. Además, las dimensiones territoriales, relativamente pequeñas de Japón y la obligación que tenían los señores feudales de residir durante cierto tiempo en Edo (luego Tokio), sede del shogun (poder), permitía contactos, transacciones económicas, intercambio de ideas y de informaciones que circulaban por todo el país. La existencia de varios centros de poder —la corte imperial en Kioto, el gobierno de los shogun en Edo, las cortes de los señores feudales (daymo) en cada feudo— alimentaba las tendencias autonomistas, las rivalidades tradicionales entre algunas familias feudales, y podía ofrecer alguna esperanza de cambio al descontento y la inquietud de algunos elementos de la casta militar y burocrática, los samuráis. Estas condiciones explican por qué las presiones de los norteamericanos y de los europeos rompieron los antiguos equilibrios y pusieron en movimiento algunas fuerzas que en pocos años transformaron las estructuras políticas y económicas de Japón.

El cuadro no quedaría completo si se olvidara el proceso de comercialización que ya estaba bastante avanzado en la mitad del siglo XIX. El desarrollo de grandes mercados para el arroz había demandado una circulación monetaria adecuada y la implantación de sistemas de crédito. En el período de la hegemonía de la familia To-

gukawa, que detentaba el shogunato desde comienzos del siglo XVII, la paz había favorecido la expansión económica, sobre todo la producción agrícola y algunas actividades manufactureras ligadas a ella, como la fabricación de la seda y de la paja.

A mediados del siglo XIX la situación política se volvía inestable. Los Togukawa habían impuesto tributos a los otros señores feudales y habían decretado que, en años alternados, los jefes feudales con su séquito de samuráis residieran en la capital, reconociendo de esta manera el primado de los shogun. Nominalmente, el shogun estaba sometido a la autoridad del emperador, que residía en Kioto con su propia corte, pero éste no tenía fuerza ni autoridad para ejercer el poder real. A partir del siglo XVIII se había desarrollado un movimiento doctrinal y político que, a través de la renovación del shintoísmo trataba de revalorizar la figura simbólica y el poder efectivo del emperador. El movimiento dio una fuerte base al resurgimiento del poder imperial que, sostenido por las fuerzas de algunos feudos, entre los que se destacaron Choshu y Satsuma, puso fin, en 1868, al shogunato de los Togukawa, aprovechando la confusión e incertidumbre provocadas por la apertura de los puertos a las potencias europeas y a Estados Unidos. Se habló entonces de la restauración Meiji, nombre de la dinastía imperial que tomaba el poder, pero en realidad se trató de una revolución que abría a marchas forzadas el camino de Japón hacia la modernización industrial y la conquista de una posición importante entre las grandes potencias.

Hubiera podido suceder que alguna de las familias más poderosas ocupara el puesto de los depuestos Togukawa, asumiendo los antiguos poderes shogunales y conservando el régimen feudal. El rasgo más original de la revuelta fue que, surgida de los feudos llevó, por obra de un grupo más bien reducido de nobles de la corte imperial y de samuráis, a la abolición del sistema feudal sin excesiva resistencia por parte de los señores a los que se asignaron sustanciales pensiones. Depositados en los bancos, estos fondos constituyeron una apreciable fuente de financiación para la renovación económica. Los samuráis también recibieron rentas del Estado, pero a menudo las cantidades eran insuficientes, cuando no irrisorias. Además, la introducción del servicio militar obligatorio privó a los samuráis de sus tradicionales privilegios militares. Finalmente, también les fue prohibido llevar las dos espadas, símbolo de su antigua jerarquía de guerreros. Sus intentos de rebelión fueron fácilmente reprimidos por el nuevo ejército imperial, reclutado entre campesinos y adiestrado y armado según criterios modernos.

Por lo tanto, se trató de una auténtica revolución desde arriba. El gobierno central, dominado por una oligarquía bastante homogénea y

modelado sobre la experiencia occidental eficazmente asimilada, asumió rápidamente todos los poderes y obtuvo el consenso de la sociedad gracias a los hábitos de obediencia y de respeto al principio de la fidelidad predicados por el confucianismo y por la difusión de la religión shinto de culto al emperador.

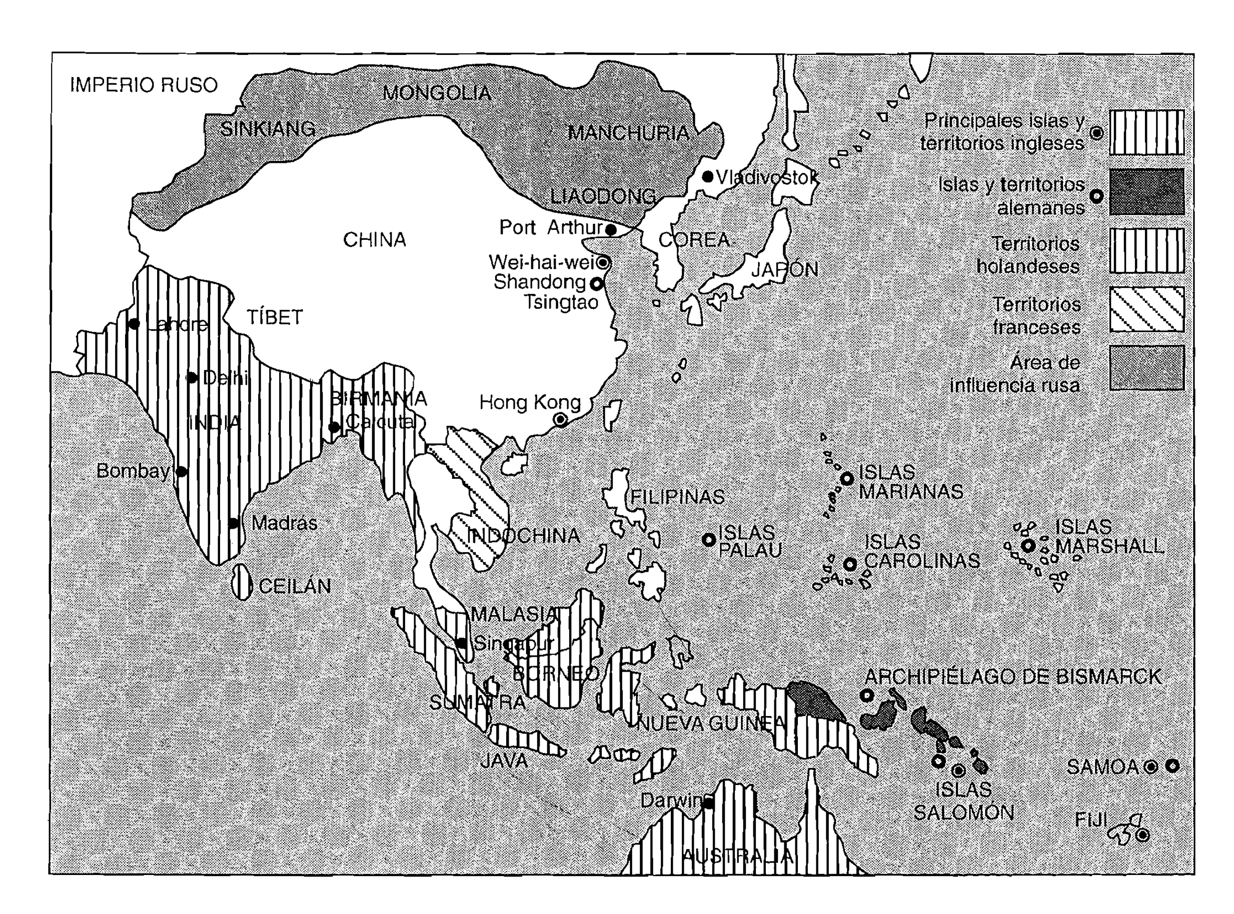
Se imitaron tenazmente las instituciones y, a veces, las costumbres occidentales con fines inspirados esencialmente en el oportunismo político y la utilidad práctica. La adhesión real a algunos valores del mundo occidental sólo podía ser limitada y superficial, por lo que algunas formas de imitación gratuitas se abandonaron cuando se consiguió el objetivo prioritario: la paridad de fueros y derechos con los países occidentales. Sustancialmente prevaleció una actitud pragmática y utilitaria, que se expresó en una gran flexibilidad y adaptabilidad e impidió también peligrosos enfrentamientos en la cúpula política.

En esta perspectiva se ubica también la adopción del sistema parlamentario y representativo, que aunque no tenía antecedentes en el Japón, ni en exigencias democráticas ni en tradiciones, era otro medio —junto con las reformas judicial y burocrática— para modernizar el país y lograr que se lo aceptara en paridad de derechos en la comunidad internacional, regulada por las relaciones entre las grandes potencias occidentales.

Significativamente los japoneses eligieron el modelo constitucional alemán, acentuando sus características autoritarias y oligárquicas. Se aseguró un lugar importante al consejo privado del emperador, en el que se reunían los más calificados representantes del nuevo régimen. El ejército pasó a depender directamente del emperador, gozando de una autonomía considerable respecto del gobierno y del Parlamento. El cuerpo electoral abarcaba a cerca del uno por ciento de la población.

En un principio, la intervención directa del Estado orientó el importante progreso de la producción manufacturera y, una vez encaminada la industria, las mayores fábricas se cedieron a empresarios privados con la obligación de sostener y potenciar la economía nacional.

Al principio, la industria textil progresó espectacularmente, aunque también crecieron los sectores de armamento, siderúrgico-mecánico y eléctrico. Sobre todo en la primera década del siglo XX el desarrollo mantuvo un ritmo muy rápido, resultado del enome aumento de la inversión de capitales en la producción, que obligó al país a salir de su aislamiento. Todos los esfuerzos se encaminaron a la «modernización» técnica, industrial y militar. El nuevo poderío nipón se manifestaba al mundo en 1894-1895, cuando atacaba a China obligándola a renunciar a todo derecho sobre Corea y a cederle la isla de Formosa y la península de Liaodong. Francia, Gran Bretaña y Rusia dejaron de lado



El Lejano Oriente en 1914.

por un momento sus rivalidades para limitar los éxitos japoneses. La plena paridad de derechos fue sancionada luego por la alianza con Gran Bretaña, concluida en 1902. China salía gravemente debilitada del conflicto de 1894-1895 y quedaba a merced de sus poderosos vecinos. Los alemanes se hicieron ceder el puerto de Tsingtao y la península de Shandong; los rusos, la península de Laodong, que los japoneses habían abandonado, y mostraron su evidente interés por Manchuria; los ingleses obtuvieron el puerto de Wei-hai-wei. Las disputas y los intereses enfrentados auguraban la delimitación y el reparto de amplias esferas de influencia política y económica en aquel inmenso país que, para modernizarse —como parecía necesario a amplios sectores del gobierno— necesitaba la ayuda de las potencias industriales.

Los préstamos internacionales eran indispensables e implicaban la penetración del capitalismo y, sobre todo, una organización y un control del sistema fiscal y financiero que habría limitado poderosamente la soberanía del país. Se ha hablado, y se habla, de la creación de una «semicolonia». El fracaso en la llamada guerra del opio había conmovido la autoridad del gobierno imperial, y una primera e imponente manifestación de las tensiones sociales existentes en su interior fue la rebelión de los Taiping, que desde el sur de China se había extendido hacia el centro y luego ramificado en todas direcciones entre 1853 y 1863. Entre 1860 y 1890 la penetración, comercial, financiera y política, se había desarrollado de distintas maneras. Algunas etapas de esta penetración, sobre todo inglesa, francesa y rusa, fueron la apertura de nuevos puertos, el crecimiento de Shangai, donde el cuerpo consular extranjero tenía particulares derechos y privilegios, la imposición de la presencia del cuerpo diplomático extranjero en la ciudad imperial de Pekín, la fundación de la Hong Kong and Shanghai Bank Corporation y la instalación de misiones católicas y protestantes.

Estos hechos alteraban el orden político y social del imperio y provocaban una grave crisis en las clases dirigentes, habituadas a considerar a todos los extranjeros como bárbaros comparados con la tradición china. Las posiciones se dividían: algunos consideraban necesario, como hacían los japoneses, sacar provecho de la lección y modernizar rápidamente la sociedad y el Estado según los nuevos modelos; otros pensaban que era mejor resistir y permanecer fieles a la tradición. De todo esto nacían también vacilaciones y ambigüedades en el comportamiento de la corte y del gobierno.

7. De la insurrección de los bóxers a la república de Sun Yat-Sen

La crisis se precipitó después de la agresión japonesa de 1894, cuando se vio que el imperio ni siquiera era capaz de defenderse de su vecino asiático. Parecía que, entre 1897 y 1900 la China se desmembraría y sus distintas partes pasarían al control directo de potencias que ya se habían asegurado amplias esferas de influencia. Pero la insurrección de los bóxers, el apoyo norteamericano a la política de puertas abiertas, la rivalidad entre las grandes potencias, ante todo, la inquietud de Gran Bretaña por la actitud expansionista rusa, las dificultades para establecer una administración colonial en un país tan extenso y con tradiciones tan antiguas, impusieron la solución del control indirecto.

La revuelta de los bóxers —cuyo verdadero nombre era Milicia de la Justicia y de la Concordia (el nombre de *boxers*, o sea «púgiles» deriva de que los sublevados practicaban formas de pugilismo sagrado)— estalló en el norte de China en 1898. En ella confluyeron distintas razones: malestar, esperanzas mesiánicas y creencias mágicas y religiosas. La insurrección era xenófoba y apuntaba especialmente a los chinos que se habían convertido al cristianismo, muchos de los cuales fueron asesinados. La corte imperial, en cuyo seno había fuertes discordias y conflictos dinásticos y prevalecía la tendencia conservadora y antioccidental de la emperatriz madre, mantuvo una actitud equívoca: en un primer momento cedió ante la presión de los diplomáticos extranjeros que exigían una enérgica y rápida represión; cuando luego la insurrección alcanzó a Pekín y Tientsin, reconoció su legitimidad y declaró la guerra a las potencias extranjeras (21 de junio) que, por su lado, preparaban la intervención armada.

Un cuerpo expedicionario de dieciséis mil hombres —rusos, franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos, japoneses, austriacos e italianos— se concentró en Tientsin y en agosto ocupó Pekín liberando el barrio de las embajadas que durante dos meses había sufrido el asedio de los insurrectos. También la dirección del sitio por parte de los chinos fue equívoca, y no se tomó ninguna medida real para terminar con la resistencia occidental.

Las investigaciones y la polémica historiográfica sobre los acontecimientos de 1898-1900 y sobre la insurrección de los Yihetuan (nombre chino de los bóxers) han tenido un notable desarrollo hasta hoy por la resonancia que tuvieron en la opinión pública occidental, la única que entonces tenía una tradición e interés historiográficos. En su momento se destacaron los aspectos más negativos y fanáticos de la insurrección, la crueldad y el oscurantismo frente a los luminosos

valores de la civilización occidental. Hoy, obviamente, con el desarrollo de la historiografía antiimperialista, salen a la luz también, o solamente, otros aspectos: se intenta principalmente ubicar el movimiento en el contexto de la historia china y en el marco de la actividad de numerosas sociedades secretas, y comprender el particular tipo de respuesta de la sociedad china a la penetración de las potencias occidentales y la crisis del orden. En este plano es indudable que la reacción tuvo caracteres tradicionalistas, destructores y exaltados (por ejemplo, se atacaban las líneas férreas), pero expresa también, aunque de manera espontánea y elemental, una protesta nacional y antiimperialista.

Las consecuencias de estos acontecimientos condujeron al posterior endeudamiento y sometimiento de China (se le impusieron algunas medidas que atentaban contra su soberanía y el pago de una indemnización de sesenta y siete millones de libras esterlinas que se doblaba por los intereses y las fluctuaciones del cambio) y constituyó el golpe de gracia para la dinastía imperial. Sin embargo, se preservó la unidad nacional, aunque de hecho se reforzaron los poderes de los gobernadores de las inmensas provincias que, en la disolución del Estado que siguió, se convirtieron en «señores de la guerra» independientes.

La nueva derrota de 1901, impulsó al gobierno imperial a encarar una serie de reformas que, sobre el modelo occidental, innovaban en el campo de la instrucción pública, la organización militar, la administración provincial y las instituciones políticas. A través de representaciones, primero limitadas al ámbito provincial, se intentó implantar un régimen constitucional. Pero este mismo intento, confirmando la debilidad de la antigua estructura imperial, animaba a las fuerzas de la oposición a proponer proyectos de transformación más radicales y, en primer lugar, a movilizar el naciente nacionalismo chino contra la dinastía y los grupos de poder manchúes. Las nuevas fuerzas, expresión principalmente de las clases comerciantes e intelectuales influidas por la cultura y la historia occidental crecieron sobre todo en el sur y el centro de China y se apoyaron en la burguesía de Shangai. No es casualidad que el movimiento revolucionario de 1911, del que Sun Yat-Sen es el exponente más caracterizado, fijara la capital del nuevo Estado republicano en Nankín, en oposición a la capital imperial de Pekín.

La adhesión que recibió la república de la mayoría de las provincias, más que una prueba de la consolidación de la nueva unidad nacional, lo era de la debilidad y el descrédito del gobierno imperial. Sin embargo, en Pekín, y sobre todo en manos de Yuan Shih-Kai, existía una considerable y moderna fuerza militar (el ejército Beiyang) que

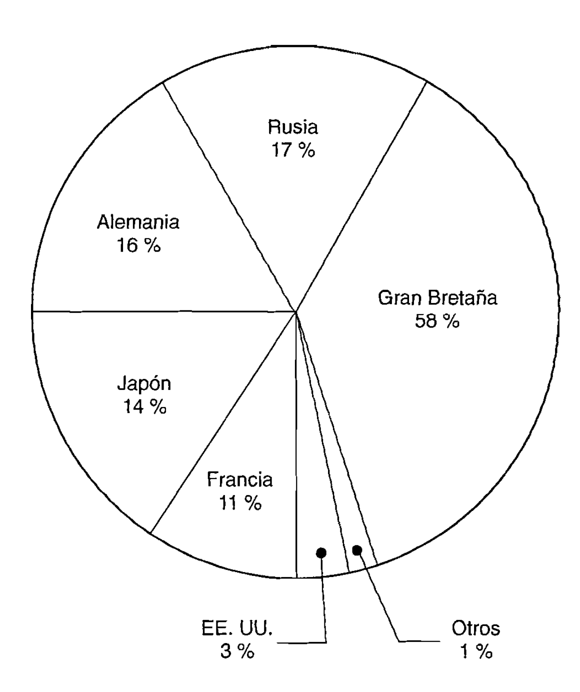


FIG. 6. *Inversiones extranjeras en China en 1914.*

habría podido decidir la suerte de la revolución o, al menos, retardar su triunfo. Sun Yat-Sen, que había sido proclamado presidente de la república el 1 de enero de 1912 se declaró dispuesto a dejar su cargo a Yuan Shih-Kai si éste conseguía que abdicara el emperador y aceptaba el régimen constitucional. Sobre la base de este compromiso, y en un clima de confusas ideas y superioridad del poder personal de Yuan Shih-Kai, comenzó la actividad política y constitucional de la república en China. La transformación político-institucional estaba condicionada al pleno reconocimiento y al respeto —que no dejó de proclamar con realismo Sun Yat-Sen— de los intereses de las grandes potencias imperialistas, aun cuando en las filas nacionalistas chinas ya se denunciaba la injerencia extranjera y se exigía eliminarla o al menos limitarla.

Desde una perspectiva lejana y teniendo en cuenta los problemas de fondo de una sociedad rural que se transforma, es posible que la solución de la cuestión dinástica, y el comienzo puramente formal y precario del régimen constitucional sugieran que la revolución republicana china tuvo resultados más bien frustrantes. Puede parecer que sólo era una etapa de la disolución del antiguo imperio manchú, no el

comienzo de la reconstrucción nacional, tanto más cuanto que, con la muerte de Yuan Shih-Kai (1916), prevalecieron las posiciones autonomistas de los señores de la guerra sobre la unidad que hasta entonces había sido preservada. Por lo demás, el mismo poder de Yuan Shih-Kai y el intento de restaurar en su persona el régimen imperial se fundaban en la fidelidad personal del ejército de Beiyang y, en muchos aspectos, Yuan Shih-Kai puede ser considerado el primero de los generales que inauguraron la era del militarismo y del regionalismo. Sin embargo, aunque fue seguida por una serie de fracasos, la revolución de 1911 marca un cambio importante. Es la superación de la insurrección xenófoba, ingenuamente milenarista, y el planteo en términos modernos del problema del desarrollo, es la primera configuración de una «nación» china. «Se delinean distintas corrientes y nuevas concepciones políticas. Por primera vez se abre un debate que tendrá notable influencia en la formación de cuadros políticos, militares e intelectuales, aunque pronto se viera limitado por fuerzas autoritarias. En conjunto, la revolución removió suficientemente el antiguo orden, para imponer la urgencia de soluciones inéditas» (Bastid, Bergère, Chesneaux).

8. Nuevo orden en Europa: el aislamiento de Alemania

Hacia el final del siglo, las relaciones entre las grandes potencias todavía eran fluidas en la orgía imperialista. Una expedición como la organizada para reprimir a los bóxers indica los valores comúnmente aceptados y podían caracterizar la colaboración internacional. La lista de los participantes es, también, la de las mayores potencias del mundo; a los estados europeos (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria-Hungría, Rusia e Italia) se sumaron no sólo Estados Unidos, sino también Japón, en virtud del grado de desarrollo económico, industrial y militar que habían alcanzado. Esta reunión de potencias es el hecho más significativo de la escena mundial de aquellos años. La evidencia y la importancia de las nuevas serán cada vez mayores con el pasar de los años y las décadas.

La presencia nipona ya había transformado el equilibrio de fuerzas en el Lejano Oriente. En un principio, a Gran Bretaña no le disgustaron los cambios, considerando que había encontrado un valioso aliado para oponerse al avance ruso hacia Manchuria y el mar Amarillo. La guerra ruso-japonesa, consecuencia de esta situación, y la inesperada dimensión de la derrota rusa tuvieron grandes repercusiones en la historia europea y mundial. Los rusos fueron batidos en la batalla

de Tsushima, en el mar que separa a Japón de Corea, y en la batalla de Mukden, en Manchuria. Los japoneses se apoderaron de Port Arthur y de la península de Liaodong, confirmaron su protectorado en Corea y sus aspiraciones sobre Manchuria. La expansión rusa quedaba bruscamente detenida; dentro de Rusia la derrota contribuía a cebar la revolución política y social de 1905 (cfr. P. Villani, *La edad contemporánea, 1914-1945*, capítulo 6, § 5), además hacía necesario un acuerdo general con Inglaterra, del que es testimonio el tratado de 1907 que establecía esferas de influencia en Persia, Afganistán y el Tíbet, con el típico procedimiento de la época imperialista, o sea ignorando absolutamente la voluntad de los pueblos y los gobiernos que eran objeto de las negociaciones y del mercado.

También en Europa se definían nuevas alineaciones, más rígidas que las que había construido hábilmente Bismarck. La disolución pacífica de los antagonismos coloniales e imperiales que habían enemistado a Gran Bretaña, Francia y Rusia hacía que emergieran algunos conflictos que terminarían por enfrentar a Inglaterra con Alemania y serían una de las causas de la primera guerra mundial.

Se intentaron y proyectaron varios acuerdos para conseguir la armonía y la cooperación anglo-alemana, pero eran muy difíciles de lograr, en primer lugar por la obstinada firmeza con que Alemania reforzaba su marina de guerra, y luego por crecimiento económico generalizado que amenazaba en todo el mundo la preponderancia de los ingleses.

En los años noventa, Alemania ya había superado al Reino Unido en la producción de acero, componente esencial de la moderna economía industrial y del poderío militar. Particularmente aguerrida y temible era la competencia de manufacturas de la industria alemana en todos los mercados europeos y también en América Latina, campo tradicional, y en un tiempo exclusivo, de las exportaciones inglesas (véase capítulo 5, § 4). El fortalecimiento de la flota de guerra alemana estaba en directa relación con la creciente capacidad productiva y con las ambiciones políticas internacionales del país.

La crisis marroquí, un episodio menor de la política imperialista, fue importante porque mostró las nuevas relaciones internacionales y los bandos que se delineaban. El 31 de marzo de 1905, Guillermo II desembarcó en Tánger, pretendiendo proclamar con su presencia el interés de Alemania por la soberanía y el sultanato de Marruecos y el derecho de intervenir ante cualquier eventual cambio en el *status* de la región. En primer lugar, era un golpe directo contra Francia, que se había asegurado el consenso de Inglaterra y de Italia para ocupar una

posición dominante en el sultanato. La cuestión fue dilucidada en una conferencia internacional reunida en Algeciras (enero de 1906), en la que Alemania pudo constatar su aislamiento. Incluso Italia, ligada a Alemania por la Triple Alianza, se puso en contra. La *entente cordiale* —entre Francia e Inglaterra— que los gobernantes alemanes habían intentado quebrar, salió reforzada de la conferencia. Sólo Austria-Hungría permaneció fiel a su aliado alemán. El acuerdo entre ambos emperadores (Hohenzollern y Habsburgo), que Bismarck había concebido sólo como base de un sistema amplio y elástico de seguros y reaseguros, se convertía en el único fundamento de una ambiciosa política mundial. La política de expansión mundial, por una parte, y los lazos con el imperio de los Habsburgos, sujeto al intrincado embrollo balcánico, por la otra, precipitaron en pocos años a Alemania, Europa y el mundo en el más desmesurado conflicto que se conoció hasta la guerra de 1939-1945.

9. **Hacia la guerra**

El mismo año 1906, se aprobó el tercer proyecto para reforzar la flota de guerra alemana con el pleno apoyo del Reichstag y de la opinión pública, galvanizada por la propaganda de la Liga naval *(Flottenverein)*. Fueron vanos todos los intentos de llegar a un acuerdo con Inglaterra sobre el armamento naval. A su vez, el almirantazgo británico emprendió un plan de construcciones para mantener y reforzar su tradicional superioridad en los mares. Las relaciones entre ambos estados se hicieron cada vez más tensas en medio de una exasperada exaltación de los sentimientos y la rivalidad tradicionales.

Aprovechando la revolución turca de 1908, con la que un grupo de oficiales progresistas ligados al movimiento de los «jóvenes turcos», había restaurado la constitución y el régimen parlamentario en Macedonia (cfr. P. Villani, *La edad contemporánea, 1914-1945*, capítulo 2, § 2), y el apoyo que Alemania ya no podía negarle, Austria-Hungría decidió anexarse, en octubre, los territorios de Bosnia-Herzegovina, provocando una reacción de Italia y Rusia que debilitó la Triple Alianza y consolidó el entendimiento entre Francia y Rusia. En 1911 se reabrió la cuestión de Marruecos con la llegada, espectacular y amenazante, de un crucero alemán al puerto de Agadir que provocó el entusiasmo de la opinión pública en Alemania. Se intentaba impedir que Francia, que había enviado un cuerpo expedicionario a Marruecos para reprimir graves desórdenes, se apoderase definitivamente del país sin que Alemania obtuviera una compensación adecuada. En todos los países, las explosiones de opuestas y exasperadas posiciones

nacionalistas preanunciaban a través de la prensa un clima de guerra y de manipulación de la opinión pública. Sólo tardíamente se llegó a un compromiso diplomático con el intercambio de territorios en el Congo francés y el Togo alemán que, finalmente, dejó insatisfechos a todos. Los grupos más intransigentes de la marina alemana, y en primer lugar el almirante Von Tripitz, se valieron del episodio para insistir en la necesidad de reforzar la flota de guerra.

Alemania parecía inclinada a llevar adelante por la fuerza su política de expansión, ya que no podía obtener por la vía diplomática ninguna satisfacción a sus aspiraciones de potencia mundial frente al bloque franco-inglés. En 1912, el peligro de la guerra rondaba las cancillerías y se intensificaban los preparativos militares. Nuevas complicaciones se presentaron con la intervención italiana en Libia (septiembre de 1911), que dio un nuevo golpe a la estabilidad y la integridad del imperio turco. En efecto, con el consentimiento de las potencias europeas, Italia había iniciado la conquista de Libia y proclamado la anexión de Tripolitania y Cirenaica. La situación en los Balcanes se precipitó: Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro se lanzaron contra Turquía. Los búlgaros consiguieron importantes victorias. La diplomacia internacional intervino para extinguir el nuevo foco de tensiones. Después de haber vencido a Turquía, los estados balcánicos disputaron entre sí por el reparto del botín: Serbia y Grecia arrebataron a Bulgaria gran parte de sus recientes conquistas. Serbia en particular, con gran disgusto y preocupación de Austria-Hungría, salió de la segunda guerra balcánica con mucho prestigio y un considerable aumento territorial. En este clima de tensiones y de inestabilidad, pese a las tentativas de la diplomacia, tanto inglesa como alemana, para atenuar los motivos de discordia, estalló el incidente que desencadenaría la guerra: el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando y el drástico ultimátum austriaco a Serbia.

No se comprendería cómo un episodio semejante que, aunque tenía su importancia, no era de ninguna manera irreparable, desembocó en la guerra entre las mayores potencias de su tiempo, si no se tuviera en cuenta, además de las profundas diferencias de intereses que hemos mencionado, el clima político y moral alentado por la exasperación nacionalista y por la convicción de que hacer la guerra era un derecho y un deber y tenía efectos catárticos. «En alemania, Friedrich von Bernhardi, en su conocidísimo libro *Deutschland und der nächste Krieg* (Alemania y la próxima guerra), habló no sólo del "derecho a la guerra", sino, apoyándose en Lutero, Clausewitz y Treitschke, del "deber de hacer la guerra". Y en Francia, Lyautey, uno de los grandes partidarios del imperialismo francés, declaró en una conferencia en la

École des Sciences Politiques, entre el aplauso frenético de los estudiantes que: "lo que más aprecio de la juventud actual es que no teme a la guerra; ni a la palabra, ni al hecho". A la transfiguración idealista de la guerra, que había arrancado a los pueblos de su estado de tranquila satisfacción para ponerlos ante nuevas y grandes empresas heroicas, se sumó el fatalismo paralizante de los espíritus más lúcidos» (Mommsen).

Capítulo 9

INTERNACIONALISMO OBRERO Y MOVIMIENTO SOCIALISTA

1. **Internacionalismo obrero y difusión del marxismo**

No todos asumieron una actitud de fatal resignación o de entusiasta adhesión a la política del imperialismo y ante la perspectiva de una guerra. El mayor número de opositores surgió de las filas del movimiento socialista. Era una minoría: la presión hegemónica de las culturas nacionales produjo divisiones, desacuerdos y posiciones diferentes en el seno del movimiento, pese a compartidas ideas internacionalistas y pacifistas.

La experiencia de la Primera Internacional había sido significativa: existían divergencias sustanciales entre proudhonianos, marxistas y anarquistas, pero todos reconocían la necesidad de coordinación y unidad de todos los trabajadores, sin distinción de nacionalidades ni de razas, en la común aspiración a un orden que superase las diferencias de clase, estableciera la igualdad económica y social y aboliera la guerra. En el congreso de Bruselas (1868) se había llegado a amenazar con la huelga general ante la eventualidad de una guerra, a la que se debía considerar una lucha fratricida impuesta a los trabajadores por las clases dominantes. Fundada en Londres el 28 de noviembre de 1864, por iniciativa de Marx y Engels, la Asociación Internacional de los Trabajadores (Primera Internacional) era un pequeño movimiento que en muchos países actuaba en la clandestinidad, o en la semiclandestinidad, y se resentía de las divergencias entre los seguidores de la teoría espontaneísta y anárquica de Bakunin, y la «científica» e industrialista de Marx. No sorprende que las afirmaciones internacionalistas y pacifistas no surtieran ningún efecto dos años más tarde, cuando estalló la guerra franco-prusiana. Sin embargo, hay que recordar que Wilhelm Liebknecht, fundador junto con August Bebel del partido socialdemócrata alemán, se negó a votar los créditos para

gastos militares, se opuso a la anexión de Alsacia y Lorena y pidió que la vencida Francia fuera tratada con honor y magnanimidad. Fue procesado por alta traición y condenado a dos años de prisión.

Los internacionalistas ni siquiera fueron los protagonistas de la Comuna de París (1871) —luego exaltada como el primer ejemplo de gobierno proletario y de dictadura del proletariado—; la mayoría era jacobino-blanquista. Aunque fue disuelta en 1876, la Primera Internacional ya agonizaba en 1872 a causa de la paralizante discordia interna. La Segunda Internacional, fundada en 1889 por iniciativa del partido socialdemócrata alemán, heredaba de su antecesora las propuestas internacionalistas y pacifistas. Entretanto, el marxismo se había afirmado como el más sólido fundamento teórico del movimiento socialista y de los partidos obreros que se organizaban en Europa. Marx había muerto en 1883 y sólo había podido ver publicado el primer volumen de su obra más importante *El Capital* (1867). Su amigo y fiel colaborador, Federico Engels, editó el segundo y el tercero en 1885 y 1894.

Al menos son dos las razones de la incidencia política del marxismo en Europa continental a partir de los años ochenta: la rápida propagación de la industrialización, con procesos de concentración capitalista y proletarización que formaron una clase obrera según la interpretación que Marx había elaborado analizando especialmente la realidad inglesa, y la fundación y el crecimiento del partido socialdemócrata alemán, que se convirtió en modelo de organización política para el movimiento socialista. Pero estos puntos de referencia, aparentemente simples, se ubican en un marco muy variado y complejo, en el que aparecen peculiaridades nacionales y locales, posiciones conceptuales e interpretaciones diferentes, en una realidad política y social en continua transformación.

Con la teoría de la plusvalía y la caída tendencial del tipo de interés, Marx proponía una interpretación «científica» de la explotación del trabajo asalariado por una parte, y de la imposibilidad de supervivencia del sistema de producción y reproducción capitalista por la otra. La convocatoria a la organización, a la unión y a la rebelión de los oprimidos y de los explotados, conducidos por la nueva clase revolucionaria, el proletariado industrial, se incorporaba a un poderoso análisis económico e histórico y a la «crítica de la economía política» madurada en la atenta lectura y conocimiento de los clásicos del pensamiento económico. La teoría de Marx, en la que hoy es fácil advertir los límites positivistas y «progresistas», las previsiones infundadas y las contradicciones no resueltas entre «valor» y precio, demostró tener una excepcional vitalidad y se convirtió en una fuerza histórica que se desarrolló en muchos aspectos autónomamente y a

veces en contradicción con las convicciones y los propósitos de su autor.

En lo que atañe en particular a la teoría del valor y del plusvalor, se ha dicho, por ejemplo —cualquiera sea la valoración científica que se le quiera dar— que fue muy eficaz: «Dio a los dirigentes de la clase obrera, en los países alcanzados por su influencia, la sensación de estar no sólo de parte de la justicia, sino también de la razón. Marx siempre había sostenido que el socialismo no se formulaba como aspiración utópica, sino como doctrina científica, y parecía que esa exigencia quedaba esencialmente satisfecha. La teoría marxista proporcionó un sistema, construido con una lógica formidable, que resistía a cualquier argumento que pudiera oponer quien no compartía los supuestos básicos, y logró relegar a las sombras el hecho de que los presupuestos en sí no estaban ni probados, ni eran susceptibles de demostración o de verificación objetiva, como exigiría el método científico. La teoría marxista fue, en efecto, un poderoso símbolo en el que creer y por el que actuar, y en este sentido pragmático era "verdadera" para el fin que se proponía» (Cole).

2. El movimiento socialista en Inglaterra, Francia y Alemania

El marxismo triunfó en los partidos socialistas de Europa continental después de 1889, con la fundación de la Segunda Internacional, de la que provienen los fundamentos ideológicos, y con el nacimiento, al cabo de pocos años, de los partidos que se inspiraban abiertamente en esa ideología. Sin embargo, no hay que olvidar que en los dos países occidentales, Inglaterra y Francia, en donde las estructuras económicas y sociales eran más avanzadas y la lucha política se desarrollaba en el marco de instituciones liberales y parlamentarias más arraigadas, el marxismo, aun ejerciendo una notable influencia, no tenía una posición predominante ni exclusiva en el campo socialista.

En Inglaterra era particularmente fuerte el movimiento de organización sindical, el tradeunionismo, pero en el plano político se expresaba apoyando las corrientes reformistas de los partidos tradicionales, especialmente las tendencias radicales del partido liberal. Probablemente el marxismo contribuyó de manera determinante, a partir de los años ochenta, a orientar a grupos de obreros y de intelectuales, asociaciones políticas de izquierda y sindicatos, hacia la formación del partido político autónomo de los trabajadores que más tarde sería el partido laborista. Pero la ideología marxista, el principio de la lucha de clases, la aspiración y la expectativa, por no decir la acción revolu-

cionaria, fueron marginales, mientras no sólo se confirmaba el especial tipo de relaciones con las *Trade Unions*, sino que adquirían importancia grupos filantrópicos de investigación y acción social, como la Sociedad Fabiana. Expresión de los intelectuales y profesionales londinenses que, contra las impaciencias y los entusiasmos revolucionarios, se adherían a la táctica contemporizadora del general romano Quinto Fabio Máximo (de quien tomaba nombre la asociación), los fabianos realizaron gran cantidad de estudios sobre las condiciones sociales y una penetrante obra de propaganda a favor de un socialismo moderado, reformista y gradual, que se concretaría ineludible y pacíficamente dentro de un régimen democrático. Por más que la importancia del fabianismo haya sido subestimada frecuentemente en la historia del socialismo, indica la peculiar situación inglesa y el peso que en los enfoques políticos pudo tener un pequeño grupo de intelectuales y una asociación privada que encontró en el matrimonio Webb, y en el escritor George Bernard Shaw a algunos de sus representantes más notables y combativos.

También en Francia la situación era especialmente compleja por la presencia de antiguas tradiciones de lucha popular, de ideales igualitarios y socialistas y de múltiples organizaciones. La corriente jacobina-blanquista, que podía adherir a los ideales igualitarios de la revolución y la práctica babuvista, si bien perdía terreno en su versión más arcaica, constituía, junto con la tendencia proudhoniana —que se diferenciaba de ella en muchos aspectos e incluso podía parecer totalmente opuesta por la exaltación de la acción espontánea—, un terreno fértil para nuevas doctrinas y prácticas, como la acción directa o la huelga general del sindicalismo revolucionario. Por otra parte, la penetración del marxismo se unía a la confianza en las posibilidades y en la capacidad de organización política de la clase obrera y en el empleo de la vía parlamentaria y de las instituciones democráticas; el rígido enfoque clasista hacía, sin embargo, que el uso de las libertades «burguesas» fuera puramente instrumental y marcaba una diferencia con los socialistas que cosideraban irrenunciables esas libertades, concebían la democracia como fin y no como medio, y pensaban que era posible la colaboración con la «burguesía» en el Parlamento y en el gobierno para llevar adelante una política de reformas. Jaurès será luego, en Francia, un exponente de este socialismo democrático. Pero, en este punto llegamos a las discusiones que se abrirán en el ámbito de la Segunda Internacional, del marxismo y de los partidos socialistas al finalizar el siglo.

En otros países, como Italia, y sobre todo España, a la difusión y la hegemonía del marxismo en el movimiento popular y la todavía débil organización de los obreros industriales se oponía la persistencia

de tendencias anarquistas, alentadas por la prédica y el ejemplo de Bakunin y sus seguidores, que parecían adaptarse mejor a una sociedad todavía principalmente rural y escasamente organizada.

En Alemania, el prestigio y la fuerza de la socialdemocracia se consolidaron con la resistencia que opuso a la represión antisocialista de Bismarck. La unidad conseguida en Gotha en 1875 de los socialistas partidarios de Ferdinand Lasalle con el grupo marxista conducido por Wilhelm Liebknecht y August Bebel mostró ser vital. El programa de Gotha había sido criticado por Marx, pero sus amigos alemanes y él mismo, consideraron que no era oportuno hacer públicas las críticas para mantener la unidad lograda, que era el resultado más importante. En efecto, al menos en el plano programático, como lo demostró el congreso de Erfurt (1891), los marxistas triunfaron plenamente. No se puede decir, sin embargo, que el socialismo con sello nacional de Lasalle no constituyese una idea fuerza destinada a obrar profundamente más allá de cualquier posición internacionalista.

La lucha contra las leyes antisocialistas de Bismarck, pero más aún la estructura fuertemente cerrada y jerárquica de la sociedad alemana dotaron de otra característica a la socialdemocracia alemana: la constitución de una especie de cuerpo separado, también en el campo cultural, con una doctrina propia que tendía a convertirse en una verdadera fe. Esta homogeneidad cultural y esta posición doctrinaria fueron una gran fuerza que siguió animando, aún más rígidamente después de la revolución bolchevique, a algunos de los partidos marxistas y marxistas leninistas. En sociedades más abiertas, como las de Francia, Inglaterra e Italia, la circulación de las ideas fue muy amplia y contribuyó a debilitar las posiciones dogmáticas.

3. **Organizaciones obreras y vida política**

En conjunto, lo que aparece como el rasgo fundamental de los años ochenta y noventa es el surgimiento y consolidación de organizaciones autónomas de la clase obrera en el plano sindical y político en casi todos los países de Europa. Estas organizaciones, aunque tenían distintos orígenes, se adherían cada vez más a una ortodoxia marxista que se expresaba en las declaraciones de la Segunda Internacional y encontraba un modelo en el programa de Erfurt de la socialdemocracia alemana, propagado y comentado por Kautsky, el mayor teórico marxista de aquellos años. Cronológicamente, el momento en que la cuestión social y las luchas obreras tienden a asumir nuevos carácter y dimensiones se puede ubicar entre 1889 y 1891. En el congreso de París de 1889 se funda la Segunda Internacional, que proclama el 1 de

mayo jornada de lucha mundial de todos los trabajadores y reivindica la jornada laboral de ocho horas. En ese mismo año finaliza la huelga general de los trabajadores portuarios de Londres, cuya victoria imprime un poderoso impulso a la difusión de las organizaciones sindicales. También en 1889, los mineros del Ruhr, del Saar y de Silesia consiguen éxitos parciales por medio de la huelga y el apoyo de la opinión pública. 1891 es el año del programa de Erfurt y de la *Rerum Novarum*.

El uso cada vez más frecuente de la huelga como arma, la propaganda socialista y la presencia de organizaciones políticas y sindicales de los trabajadores modifican los términos y el marco de la vida política introduciendo una serie de elementos nuevos. La tensión social aumenta. La reivindicación obrera de mejores condiciones de vida y de trabajo, que en los años ochenta había sido acogida con simpatía por una parte de las clases dirigentes, y considerada una exigencia justa que merecía una respuesta paternalista, asociada ahora a reivindicaciones políticas, a exigencias de reformas radicales y a la propaganda de la lucha de clases, generan preocupación y endurecimiento que acentúan los contrastes. Las soluciones a los nuevos planteos y problemas podrán ser diferentes, pero la presencia y la participación de los trabajadores organizados se convierte en un aspecto característico de la sociedad de masas que está naciendo.

También los empresarios y los empleadores se asocian y buscan quebrar el frente sindical o con medidas paternalistas, o con la organización de «sindicatos amarillos», o «libres». Se reprimen o toleran mal las manifestaciones del 1 de mayo. Se intenta lanzar o reintroducir una legislación que ponga trabas a las asociaciones obreras y castigue la huelga. Incluso en un país libre como Inglaterra, una sentencia de 1901 considera responsables a los sindicatos y a los trabajadores de los perjuicios que las huelgas provocaban a las empresas. Sólo en 1906, una ley anuló las barreras que esa sentencia había opuesto a la actividad de los sindicatos y a la lucha de los trabajadores.

La reacción contra la organización de los obreros y las ideas socialistas asumía un carácter policial y brutalmente represivo allí donde las instituciones liberales y democráticas eran más recientes y más débiles. Es típico el caso de Italia en los años noventa: el importante movimiento de reivindicaciones campesinas de Sicilia en 1894, los *fasci* sicilianos, y las revueltas causadas por el hambre de 1898 fueron reprimidas con el estado de sitio. Se disolvieron las organizaciones socialistas y las Cámaras del trabajo. Pero el caso italiano es también un ejemplo de cómo en un régimen constitucional y parlamentario se abrieron posibilidades de resolver los conflictos apelando a la mediación política y cultural a través del reconocimiento de algunos dere-

chos a las nuevas fuerzas sociales y del intento de asimilarlas e integrarlas en la comunidad nacional.

El problema de las relaciones de los partidos y de las organizaciones socialistas con las instituciones del Estado «burgués», las formas de participación política y de alianza con otras fuerzas se convirtieron en el tema central del debate en el ámbito de la Segunda Internacional y de los congresos nacionales. La estrategia y la táctica para avanzar en la revolución hacia el socialismo eran discutidas abiertamente donde lo permitía la libertad de prensa y de expresión. Una contribución a la perspectiva de una evolución pacífica y democrática pareció llegar en 1895 de Engels, en el prefacio a la nueva edición de *La lucha de clases en Francia*, de Marx, en el que, comparando la situación en los años noventa con la de 1848, se reconocía la fuerza importante que había adquirido la socialdemocracia y la posibilidad de futuros éxitos que podían obtenerse con una acción gradual.

4. Revisionismo y ortodoxia

Si la perspectiva revolucionaria no era excluida ni rechazada totalmente, sí se la relegaba a un futuro remoto. Pero tampoco era exacto —como ya se ha dicho— que la única teoría de la revolución social fuera la de Marx y, justamente en esos años, en el mismo campo del marxismo, la abierta manifestación de una corriente «revisionista» confirmaba hasta qué punto la participación en la vida política, la presencia organizada en la vida social y el uso de las instituciones democráticas no podían ser meramente instrumentales, sino que influían en la elaboración de la doctrina. Fue Eduard Bernstein quien, en 1899 enunció la nueva posición que, aunque partía de Marx, y aceptaba algunas líneas del pensamiento marxista, hacía una crítica de la teoría del valor y, con una evaluación ecléctica, aceptaba algunos resultados de la economía marginalista, constataba que la polarización prevista de las clases sociales no se concretaba y, en el plano político, sostenía que era necesario colaborar con las fuerzas progresistas de la burguesía renunciando a la perspectiva de la dictadura del proletariado, aunque fuera transitoria, y desarrollar las instituciones democráticas. Este socialismo reformista y democrático, que atenuaba los enfrentamientos clasistas, correspondía sustancialmente a las posiciones de Jean Jaurès, que había alcanzado mucho ascendiente en los socialistas franceses. Pero fue muy atacado por la socialdemocracia alemana y por Kautsky y Bebel en la Segunda Internacional, donde defendieron el socialismo «ortodoxo».

Mientras se desarrollaba el debate sobre el revisionismo de Berns-

tein en el plano ideológico y teórico, también se planteaba la cuestión más inmediatamente política de la actitud de los socialistas hacia las instituciones burguesas, y más precisamente, la cuestión de la alianza con la izquierda radical y la eventual participación en el gobierno. El caso concreto se enlaza con los acontecimientos políticos de Francia, donde la crisis provocada por el caso Dreyfus había sido resuelta con la formación de un gobierno de izquierdas en el que participaba el socialista Millerand. La colaboración con el ministerio radical de Waldeck-Rousseau se justificaba por la necesidad de defender a la república democrática de la amenaza de la derecha. Pero la participación directa encontró una enconada oposición en los partidos socialistas y en la Internacional. Se admitió, para satisfacer las exigencias de los socialistas democráticos, expresadas particularmente por Jaurès, que se podría apoyar desde fuera a los gobiernos liberales y progresistas; se admitió, también, que en caso de emergencia, los socialistas podían participar en gobiernos burgueses, pero con una serie de limitaciones que hacían imposible o muy precaria e improbable esa participación. Millerand fue aislado y, sobre la base del compromiso asumido, fue posible, en 1905, formar en Francia el Partido Socialista Unificado, en el que confluyeron la corriente marxista ortodoxa de Guesde y la reformista de Jaurès.

La unidad de los partidos franceses secundaba la condena del revisionismo acordada por abrumadora mayoría por la socialdemocracia alemana, la confirmación del principio de la lucha de clases y del carácter revolucionario del partido, que no se contentaba con «reformar la sociedad burguesa», sino que pretendía instaurar un orden socialista (congreso de Dresde, 1903). En el congreso de la Internacional de Amsterdam (1904), se aceptaron estas posiciones, aunque se enunciaron con mayor vaguedad y con mucha prudencia para evitar fracturas y expulsiones. La mayor preocupación fue mantener la unidad; se proclamó formalmente que era necesario que en cada país existiera «un solo partido socialista así como existía un solo proletariado». Este esfuerzo unitario pareció prevalecer, como lo demuestran la unificación francesa y la constitución del partido laborista inglés, pero en el fondo era ilusorio. La diversidad y las particularidades de las situaciones nacionales, y la complejidad de los problemas políticos y de las condiciones sociales tendían a acentuar las diferencias. Es verdad que existía un presupuesto unitario en la tendencia general del desarrollo del capitalismo y en la formación de un proletariado industrial; pero los diferentes grados de desarrollo económico, las diferentes conformaciones sociales, las tradiciones históricas y el pluralismo de la sociedad civil, eran elementos que resaltaban los caracteres distintivos de diferentes socialismos.

Además, el internacionalismo socialista era esencialmente eurocéntrico. Si bien estaba abierto a la consideración de problemas más generales, al menos hasta 1910-1912, la conciencia de las dimensiones mundiales del desarrollo económico y social era más bien limitada. El socialismo se quedaba en un movimiento difundido principalmente en Europa occidental «plegado sobre sí mismo, enredado por las preocupaciones internas y específicas del socialismo europeo que lo confinaban en el obrerismo». Como observaba en Stuttgart (1907) De Leon, delegado de Estados Unidos: «Cuando en Europa se habla de América, hay compañeros que imaginan que el mundo termina en las fronteras de su continente.»

5. **La revolución rusa de 1905**

La presencia del movimiento socialista había modificado muchos caracteres de la vida política de Europa, acelerando algunos procesos de maduración de la sociedad de masas, reforzando el ejercicio de una democracia más participativa y extendida, adiestrando a nuevos dirigentes en la conducción de los sindicatos y de los partidos obreros y contribuyendo, en los regímenes todavía absolutistas, a motines revolucionarios que, con la intervención del proletariado y el sucederse de las huelgas, asumían aspectos nuevos.

Es verdad que la revolución rusa de 1905 fue consecuencia de la guerra emprendida contra Japón y de la derrota. Pero el «domingo sangriento» del 9 de enero en Petrogrado surge en circunstancias tales que demuestran cómo la cuestión y las asociaciones obreras —incluso las de origen ambiguo— eran el elemento decisivo. Aun antes de que el ejército disparara contra la enorme multitud que, siguiendo al pope Gapón se había dirigido a la plaza del Palacio de Invierno para presentar una petición, los obreros metalúrgicos de las fábricas Putilov y de otras factorías de la ciudad estaban en huelga. El mismo hecho de que el pope Gapón fuera animado por la policía a organizar una asociación obrera, y que la asociación se hubiera vuelto activa en muchas fábricas demuestra que el gobierno tenía muy presente el problema del control de los obreros e intentaba encauzarlo por cualquier medio, aun cuando esta opción se mostró ineficaz y desgraciada.

Grandes huelgas sacudieron todo el país. En mayo, en el puerto de Odessa, los marineros del acorazado *Potemkin* se amotinaron y se unieron a los huelguistas. En octubre, una nueva oleada de agitaciones y huelgas, en las que participaron los ferroviarios y los empleados de correos, paralizó las comunicaciones. También se habían movilizado los campesinos guiados, sobre todo, por los socialistas revolucio-

narios. En Petrogrado y en Moscú se habían constituido los primeros soviets (consejos) obreros. El zar Nicolás II prometió, finalmente —retirando un proyecto de asamblea consultiva que ya estaba totalmente superado— una constitución que preveía un parlamento (duma) electo por un extenso sufragio y dotado de amplios poderes legislativos. Pero, concluida la guerra con Japón, y restablecida en parte la disciplina del ejército, Nicolás II se apresuró a limitar muchas de las concesiones ya hechas y vaciarlas de contenido. El primer ministro Witte dio orden de arrestar a los miembros del soviet de Petrogrado, y en Moscú, el 22 de diciembre, una gran insurrección obrera fue una vez más ahogada en sangre.

La represión golpeó en primer lugar a los nuevos organismos de representación obrera y a las distintas agrupaciones socialistas. La primera duma, en la cual todavía estaban vivas las ideas revolucionarias y se habían podido expresar proyectos de reforma agraria, fue disuelta después de pocos meses (abril-julio de 1906). Stolypin, que había sucedido a Witte en 1906, instituyó cortes marciales y gobernó con decretos-leyes. Abrigó luego la esperanza de obtener la colaboración de la segunda duma para su diseño de reforma agraria, dirigido a favorecer la formación de pequeñas y medianas propiedades individuales y a quebrar la oposición de los socialistas y de los terroristas. Al no conseguir una pronta y plena adhesión, disolvió la asamblea (junio de 1907) y modificó la ley electoral, cerrando de esta manera el experimento de un régimen liberal y constitucional. La tercera duma, electa sobre la base de un sufragio censitario restringido, era una simple pantalla que encubría la restauración de la autocracia zarista.

Los acontecimientos de 1905 habían mostrado qué explosivo era el terreno en el que se desarrollaban estas maniobras y habían reforzado, en los grupos de la oposición, entre los cuales el bolchevique encabezado por Lenin asumiría una función cada vez más importante, el convencimiento de que no sólo era necesaria una insurrección para abatir el régimen zarista, sino que también era posible. Decididos a sostener sus posiciones intransigentes sin compromisos, los bolcheviques, que eran el ala mayoritaria del partido socialdemócrata ruso, fundado en 1903, se separaron en 1912 de los mencheviques (la minoría), acusándolos de haber renunciado a la revolución.

6. Igualdad fiscal y problemas constitucionales en Gran Bretaña

Entre tanto, la lucha política había seguido un curso totalmente diferente en Gran Bretaña, donde las instituciones liberales y parla-

mentarias eran más antiguas y estaban más arraigadas. Tras una década de gobierno conservador casi ininterrumpido, que había coincidido con la fase más exasperada de la expansión colonial e imperialista, las elecciones de 1906 dieron un resultado de dimensiones inesperadas a los liberales, que en más de un colegio electoral se habían aliado, abierta o tácitamente, con los representantes de las *Trade Unions* y de las formaciones socialistas.

Entre 1886 y 1913, el número de los inscritos en los sindicatos ingleses pasó de menos de un millón a cuatro millones. En los años noventa, en relación con la transformación del trabajo industrial y la mayor articulación de las categorías profesionales, el tradeunionismo dejó de ser un movimiento limitado a los maestros especializados para convertirse en un amplio movimiento de masas al que se adherían obreros semiespecializados y no especializados. También cambiaron las formas de acción: se constituyeron federaciones nacionales cada vez más amplias y poderosas, se difundieron las huelgas solidarias y se perfeccionó la técnica de la contratación, que afectó a categorías completas consiguiendo un alcance nacional y colectivo.

Hasta los primeros años del siglo XX, la distinción, o mejor dicho, la separación, entre actividad sindical y participación directa en la vida política fue generalmente muy clara. El sentido de ajenidad de las clases trabajadoras respecto al mundo político estaba muy difundido y arraigado por el carácter aristocrático de las elites políticas inglesas. El mundo de la política era considerado por los obreros, pese al gradual extenderse del sufragio electoral, como un mundo aparte y «no sólo la continuidad institucional, sino también la continuidad del personal político dirigente demostraba que lo era de verdad» (Grendi).

El carácter «aristocrático» derivaba no solamente del peso y del prestigio, por entonces muy considerable, de los lores, todavía fundado en grandes propiedades y ricos patrimonios, sino especialmente en las tradiciones y la formación cultural que, pese las diferencias y las divergencias surgidas a veces entre conservadores y liberales, constituían para la clase política una base común que los destinaba casi naturalmente a gobernar el país. Las funciones de gobierno, a las cuales estaban asociados el Parlamento y la Corona, era prerrogativa de un personal político, casi especializado, y reclutado en una base más bien estrecha. A las *Trade Unions* correspondía, sobre todo, la defensa de las condiciones de trabajo y de vida de las clases trabajadoras, directamente con los medios de la libre asociación y de la libre contratación, e indirectamente apoyando en las elecciones a aquellos elementos de la clase política dispuestos a acceder a las exigencias sindicales. Obviamente, este apoyo se dirigía con mayor frecuencia a los expo-

nentes radicales y liberales, pero no estaba cerrado totalmente a los miembros del partido conservador.

La idea de fundar un partido autónomo de las fuerzas del trabajo comenzaba a abrirse camino, aunque muy lentamente. En 1893, un minero escocés, Keir Hardie, había fundado el *Independent Labour Party* que no tuvo mucho éxito. Un nuevo paso se dio en 1900, con la creación del *Labour Representation Committee* (LRC), que agrupaba a varios movimientos socialistas y a algunos sindicatos. En las elecciones de 1900, el comité logró imponer dos candidatos propios. El golpe decisivo se produjo en las elecciones de 1906, cuando el LRC llevó a los comunes a veintinueve representantes, mientras otras organizaciones obreras, entre las cuales era especialmente fuerte la de los mineros, conseguían imponer veinticinco diputados. El acuerdo con los liberales había favorecido el ingreso de este considerable contingente socialista y obrero en la Cámara de los Comunes. Hay que subrayar que el nacimiento del *Labour Party*, proclamado inmediatamente después de las elecciones, ocurría sustancialmente en el Parlamento, y no en formales congresos partidarios y con estatutos y programas bien definidos como había sucedido en el continente. En el país, al menos inicialmente, la estructura organizativa del partido se confundía con la de las *Trade Unions*.

Las elecciones de 1906 tuvieron un especial significado, no sólo porque por primera vez se sentó en los comunes un grupo de diputados laboristas; sino también porque señalaron la clara derrota de los conservadores, que en años anteriores habían aprovechado la oleada imperialista y se aprestaban a establecer una unión aduanera imperial con tarifas proteccionistas, renegando del libre cambio que durante más de medio siglo había sido la doctrina dominante de la política económica inglesa. Los liberales entraron en la liza para defender el libre comercio internacional y presentaron un programa de avanzadas reformas sociales, instituciones escolares más libres y eficientes y se declararon, aunque con cautela, dispuestos a resolver el problema irlandés en la línea ya señalada por Gladstone. La mayoría de los electores votó por los liberales y por los grupos más o menos cercanos a su programa (radicales, laboristas), demostrando su preferencia por una apertura democrática más decisiva. Inmediatamente la lucha política se volvió más dura y tocó algunos puntos, como las medidas fiscales y la extensión de la legislación social, que se convertirían en las décadas siguientes en los ejes de la construcción del *Welfare State* y habrían asegurado a Gran Bretaña el primer lugar en este campo. El Estado asumía una importantísima función en la redistribución de la renta, con intervenciones que terminaban por violentar algunos de los principales postulados del liberalismo, en cuyo nombre —sobre todo

en relación con las tarifas aduaneras—, los liberales habían regresado al gobierno. En efecto, fueron los radicales quienes asumieron la conducción del movimiento; no por casualidad, el representante más combativo fue David Lloyd George, al que se unió en esta estapa el joven Winston Churchill. La profundidad y la incidencia social de las reformas, que infligían un sensible golpe a las rentas y al patrimonio de las clases propietarias y a las estructuras tradicionalmente aristocráticas, llevaron a una batalla constitucional de la cual los poderes de la Cámara de los Lores salieron disminuidos.

Las elecciones de 1906, es conveniente recordarlo, habían renovado también el Parlamento; sobre 670 diputados, 318 entraban por primera vez con una variada representación de las clases sociales y profesionales que ampliaba la base tradicional de reclutamiento de los parlamentarios.

Algunas de las medidas aprobadas en los primeros meses de la legislatura indican las tendencias de la mayoría. Una ley de diciembre garantizaba la plena libertad de huelga y permitía la propaganda en su favor, consintiento de hecho la institución de los piquetes y liberando a los sindicatos de cualquier responsabilidad sobre los daños que la huelga hubiera podido acarrear a las empresas. La ley anulaba así la sentencia de 1901 que había limitado fuertemente la acción de los sindicatos haciéndolos responsables de los daños sufridos por las empresas a causa de las huelgas. Otra ley mejoraba y extendía la asistencia a los obreros impedidos de trabajar e incluía entre ellos a los afectados por enfermedades profesionales.

En el ministerio de Asquith, que sucedió al líder liberal Campbell Bannerman, retirado por enfermedad en 1908, Lloyd George asume las importantes funciones de *Chancellor of the Exchequer* (ministro de Finanzas) y Winston Churchill, la dirección del *Board of Trade*, al que correspondían algunas competencias propias, en tiempos muy recientes, del Ministerio de Trabajo. Se trazó un programa que preveía formas de seguro y protección social muy amplias, que iban desde las pensiones a la vejez hasta el subsidio por desocupación. Para cubrir los gastos de la intervención del Estado en la política social, Lloyd George aumentó los impuestos directos, ante todo el impuesto a las ganancias *(income tax)* e introdujo la progresión de las alícuotas. La recaudación fiscal crecía con el aumento de la renta. También la tasa sucesoria se percibía en categorías progresivas. Se instituían, además, nuevos impuestos que gravaban el aumento del valor patrimonial, de los arrendamientos y de las propiedades no cultivadas.

Los conservadores —y no solamente en Inglaterra— consideraban las tasas progresivas como escandalosamente socialistas. En 1909, los Lores rechazaron el balance aprobado por los comunes, violando el

principio de que no podían bloquear las leyes de naturaleza financiera. Hábilmente, Lloyd George acusó a los Lores y a los conservadores de violar tradicionales principios constitucionales. El resultado fue, tras nuevas elecciones y diversos acontecimientos, la ley parlamentaria de 1911 *(Parliament Bill)* que abolió el dereho de veto absoluto de la Cámara de los Lores, aunque conservó el derecho de veto suspensivo, suficiente, por lo demás, para obstaculizar reformas poco deseadas. Sin embargo, las restricción de los derechos de los Lores tenía un significado simbólico que llegaba más lejos de sus efectos jurídico-constitucionales. El sistema político tradicional de Inglaterra, con el que una elite aristocrática muy homogénea «había gobernado el país *in trust for the people,* ya pertenecía al pasado. De ahora en adelante no se podría impedir a las masas populares participar activamente en las grandes decisiones políticas» (Mommsen).

Entre tanto crecía el peso político y sindical de las organizaciones obreras. Se usaba frecuentemente la huelga para defender el salario y mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas. Y, si bien se afirmaba en la opinión pública la idea de que la emancipación de la clase trabajadora y las luchas sindicales podían desarrollarse dentro del marco de las instituciones sin desbordes revolucionarios, a menudo los encuentros eran muy duros y la inquietud obrera constituía un motivo de preocupación para el gobierno. La intervención del Estado se hacía inevitable, ya fuera como mediador de los conflictos entre trabajadores y empleadores, ya como promotor, ejecutor y controlador de una legislación social cada vez más amplia.

En la vida política y social de Inglaterra, en vísperas de la primera guerra mundial, adquirió cierta importancia el movimiento feminista, dirigido especialmente a exigir el voto de las mujeres (de ahí el nombre de sufragismo). La acción directa, y episodios impresionantes, como la muerte de Emily Davidson, que se arrojó a las patas del caballo de carrera del rey durante el Derby de Epsom de 1913, llamaron la atención sobre las reivindicaciones del movimiento. Las demandas sólo fueron parcialmente satisfechas después de la guerra, como reconocimiento a la contribución que habían prestado las mujeres durante el conflicto en todas las actividades, incluidas las que tradicionalmente estaban reservadas a los hombres.

Mientras tanto se presentaba crudamente la cuestión irlandesa, que el gobierno liberal hubiera deseado resolver con el proyecto autonómico delineado por Gladstone. Una vez más la oposición conservadora y nacionalista en Inglaterra y en el Ulster fue irreductible. Sólo la postergación del problema a causa de la guerra evitó una crisis política gravísima en julio de 1914.

7. Tensiones sociales e integración nacional en Francia

En Francia, el caso Dreyfus (véase capítulo 7, § 3) había dado nuevas fuerzas a la izquierda republicana, y en particular a la organización radical que expresaba un enfoque laico con aperturas democráticas del Estado; pero la decisión de defender el orden burgués y el mundo de los negocios era firme. Un bloque en el que, con diversas posiciones y en distinta medida, habían participado formaciones socialistas y obreras había conseguido la victoria contra las fuerzas tradicionalistas que se apoyaban en la Iglesia católica y en el ejército. La situación era particularmente delicada y planteaba el problema de la actitud de los socialistas hacia el Estado, las instituciones y las libertades «burguesas».

Las tendencias obreristas más intransigentes consideraban que el caso Dreyfus era una cuestión interna de la burguesía, que acaso se podía denunciar y utilizar como prueba de la corrupción y de la división de la clase que tenía el poder, sin entrar en el fondo del asunto ni preocuparse por la suerte de las instituciones. Más matizada era la otra posición —sostenida por Jaurès— que consideraba interés y deber de los socialistas y de los trabajadores defender la causa de la justicia y apoyar a las fuerzas que luchaban por una república laica y democrática, marco institucional necesario para la realización de un socialismo democrático. El socialista Millerand había llegado hasta ingresar en el gobierno de Waldeck-Rousseau.

Las medidas más importantes de la coalición radical-socialista fueron las leyes contra las congregaciones religiosas (1901), dirigidas sobre todo a confirmar el laicismo de la instrucción pública, y la ley de separación (1905) que puso fin a los vínculos preferenciales que unían a la Iglesia católica al Estado con la denuncia del concordato napoleónico y dio a las organizaciones eclesiásticas el *status* de asociaciones privadas y laicas. La aplicación de la ley —sobre todo la ejecución del inventario de los bienes de la Iglesia— provocó algunos incidentes, pero en conjunto, la operación se efectuó con moderación y no creó graves problemas políticos ni sociales.

La tensión se exasperó en cambio en la lucha por el salario y por el horario de trabajo, a través de la multiplicación de las huelgas espontáneas y organizadas, por la constante intervención del gobierno —sobre todo el de Clemenceau— en la represión de las huelgas y en el mantenimiento del orden público. El proyecto de Millerand de una democracia social fue alterado por el surgimiento de una aguda conflictividad, que en cambio parecía acreditar las tesis de los que auspiciaban la «acción directa» y creían en la fuerza decisoria de la huelga

general para derribar el régimen burgués e instaurar el socialismo. Georges Sorel teorizó esta posición (*Consideraciones sobre la violencia*, 1906) exponiendo la fuerza liberadora de la violencia, haciendo propias las ideas libertarias y anárquicas y considerando la «huelga general» no tanto una acción decisiva como, sobre todo, una idea-fuerza, un mito capaz de generar inquietudes y energías revolucionarias. «El proletariado se organiza para la batalla —escribía— diferenciándose claramente de otras partes de la nación, sintiéndose el gran factor de la historia y subordinando cualquier consideración a la lucha.» Con estos enfoques nacía y se propagaba el «sindicalismo revolucionario» que había encontrado en la *Confédération Générale du Travail* (CGT) su base de masas.

El partido socialista unificado, en cambio, confirmaba en términos marxistas su confianza en la participación en la lucha política y en la vida parlamentaria. En SFIO (Sección Francesa de la Segunda Internacional Obrera), aceptando el llamado a la unidad de la Segunda Internacional, confluyeron en 1905 por una parte los seguidores de Jaurès y por otra los de Guesde. El primero sacrificaba a la unidad cualquier propósito de colaboración con las fuerzas burguesas en el gobierno, aun cuando podía apoyar al gobierno en caso de peligro de las instituciones democráticas.

La tensión social correspondía a la expansión financiera e industrial de Francia, que reforzaban las estructuras burguesas y capitalistas del país, y al movimiento de transformación que afectaba al campo con procesos a menudo contradictorios. Se habían superado los momentos más difíciles de la crisis agraria, pero las condiciones de los viticultores, que representaban el sector principal de la población rural, especialmente en el Sur, eran inestables. En la imposibilidad de detallar las distintas coyunturas y los acontecimientos regionales, conviene subrayar, sobre todo, el aspecto más importante, que consiste no tanto en el peso —decreciente— que todavía tenía el campo en la economía y en la sociedad, como en la plena integración y la participación cada vez más amplia del mundo rural en la sociedad nacional.

Se habían abierto nuevas posibilidades para aprovechar en la industria el material ferroso de Lorena y los sectores mineros y siderúrgicos se desarrollaban rápidamente. En la construcción de automóviles, Francia había conquistado el primer lugar en Europa. Todavía tenían vitalidad el pequeño y mediano artesanado de productos de lujo y el pequeño comercio. El control de los nacimientos y el estancamiento de la población constituían un rasgo característico de Francia en este período y era motivo de preocupación para los políticos y los militares, pero desde el punto de vista de la renta *per capita* esta situación permitía a los franceses mantenerse a la par o directamente

superar el nivel de otros países que tenían un desarrollo económico más rápido.

El número de trabajadores de la industria había llegado a cinco millones, y la formación de este proletariado industrial —aunque muy diferenciado por el salario y las condiciones de trabajo— es una de las causas del movimiento huelguista que se extiende epecialmente entre 1904 y 1907. En 1907, también el Sur agrícola se ve envuelto en las agitaciones sociales. Pero se puede estimar que las capas medias, de los comerciantes a los maestros primarios, de los empleados subalternos a los profesionales y algunos estratos de propietarios de tierras, componían una masa que tampoco era inferior a los cinco millones. Existía, por lo tanto, una situación sumamente variada cuyo elemento esencial y decisivo no es la polarización de las clases delineada inicialmente por el proceso de industrialización. Ante la mejoría general de las condiciones de vida permitida por el aumento de la producción y de la renta, la atención terminó por concentrarse en algunas grandes batallas políticas, como la cuestión de la duración del servicio militar, llevada en 1912 nuevamente a los tres años y el proyecto, muy discutido, de introducir un impuesto general y progresivo sobre la renta.

Pese al difundido antimilitarismo, al gran éxito de los socialistas, que en las elecciones de 1914 obtuvieron 102 diputados, y a los esfuerzos desesperados de Jaurès para salvar la paz, los sentimientos y la solidaridad nacionales prevalecieron sobre cualquier otra consideración ante la inminencia del peligro de guerra contra el tradicional enemigo alemán. El 31 de julio, Jaurès, fue asesinado cuando entraba a una reunión de la Internacional en Bruselas. Su muerte fue como un símbolo de la incapacidad del movimiento socialista para impedir la guerra.

8. **El período de Giolitti en Italia**

La historia de Italia entre el final del siglo XIX y la primera guerra mundial confirma algunas de las tendencias de fondo del desarrollo histórico emergente en los estados europeos con regímenes parlamentarios y con desarrollo industrial, pero también pone en evidencia algunas peculiaridades no subestimables, que diferenciarán claramente el caso italiano en las décadas siguientes. Por la preeminencia de Giovanni Giolitti, varias veces presidente del consejo y manipulador de la vida parlamentaria, se habla de estos años como de la era giolittiana.

Italia participó de la gran recuperación y expansión económica que, tras la larga depresión (1873-1896), hizo crecer las tasas de desa-

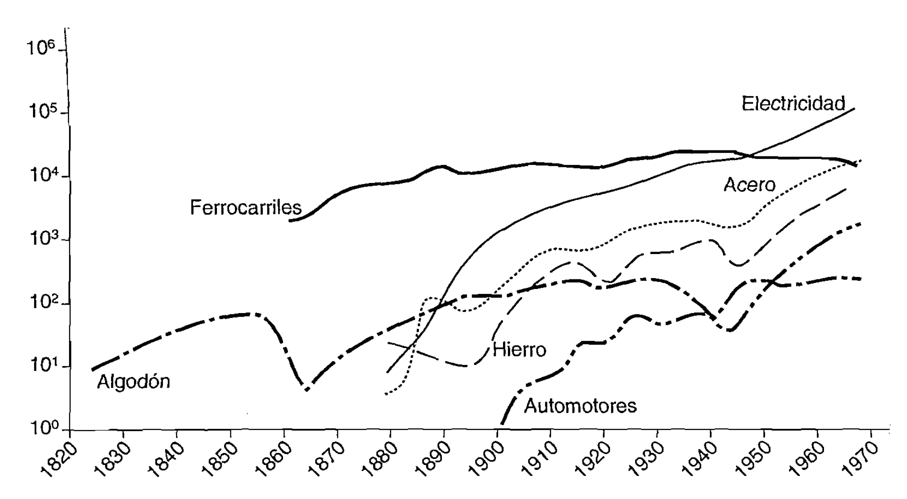
rrollo, sobre todo las industriales. La coyuntura económica favorable y los progresos conseguidos con la unificación nacional, sostenían la ambición italiana de formar parte de las «grandes potencias», aunque fuera el menos poderoso entre los «grandes» de entonces.

Una grave debilidad —de la que se estaba tomando conciencia gracias a las denuncias de Giustino Fortunato— era el desequilibrio económico y social entre las regiones del Centro-Norte (donde se concentraba cada vez más el desarrollo industrial y —en lo que respecta a Roma— las funciones directivas del gobierno y de la administración), y las regiones del Sur, donde prevalecían todavía las estructuras esencialmente agrícolas, a menudo escasamente productivas, y donde la ciudad de Nápoles, perdido su papel de capital se demoraba en encontrar una nueva posición.

Las dificultades, que se manifestaron de manera muy aguda entre 1894 y 1898, habían sacado a la luz la insuficiencia de las estructuras políticas para una realidad económica y social en transformación. La clase dirigente debía tomar posiciones frente a las organizaciones populares que se inspiraban en las ideas socialistas y marxistas y demandaban un nuevo orden social. Había quien veía en el socialismo una amenaza indiferenciada al orden constituido y a la «civilización» y quien, en cambio, comenzaba a distinguir entre las distintas tendencias y estaba convencido de que la libertad, el reconocimiento de algunos derechos y una actitud de benévola neutralidad hacia las fuerzas organizadas del trabajo llevarían a una ampliación de las bases sociales del Estado, a la consolidación del régimen parlamentario y a encauzar las protestas en el marco constitucional.

Esta última posición era sustancialmente la de Giolitti y el sector de la burguesía italiana más abierto a las experiencias políticas y sociales contemporáneas de Francia e Inglaterra. Se observaban con atención e interés las peripecias del tradeunionismo inglés, la aparición de tendencias revisionistas y reformistas en el socialismo marxista, los enfoques y actitudes de Jaurès y el colaboracionismo de Millerand. Se trataba de impedir la polarización en los extremos, la lucha de clases que hubiera podido favorecer la propuesta sonniniana de un único partido conservador y medidas paternalistas en un régimen restrictivo de las libertades.

La posibilidad de que la política giolittiana tuviera buenos resultados dependía de la existencia y el desarrollo en el campo socialista de corrientes que consideraran necesaria una rápida expansión de las fuerzas productivas y del sistema industrial y de que, rechazando el anarquismo y la lucha espontánea, prefiriera la constitución de sindicatos sólidos y la participación del movimiento obrero en la vida política democrática. Estas corrientes se habían formado en Italia en



Fuente: W. W. Rostow, *World Economy. History and Prospect*, Austin, Texas University Press, 1978, p. 443.

FIG. 7. *Italia: 1825-1972. Desarrollo económico.*

la última década del siglo XIX, en el marco de la Segunda Internacional y sobre el modelo de la socialdemocracia alemana. Filippo Turati puede ser considerado la expresión más completa de este socialismo que, sin compromisos en el plano ideológico, y sin ceder a formas de colaboración gubernativa, persigue el proyecto de reforzar las organizaciones autónomas de los trabajadores, sean sindicales o políticas, y concibe la superación del orden burgués como una natural y pacífica evolución democrática. El desarrollo de la sociedad industrial y la república democrática serían el marco en el que se podría realizar el socialismo, asegurando el triunfo general de la democracia y la libertad.

En los primerísimos años del siglo XX, y en particular hasta la huelga general de 1904, la nueva política giolittiana parece muy prometedora y capaz de remover los obstáculos que traban el funcionamiento del sistema. El movimiento de 1904, promovido por los sindicatos revolucionarios como huelga política de protesta contra el gobierno responsable de los perjuicios a mineros y campesinos, perturba el proyecto giolittiano y turatiano, reflotando la realidad de una fuerte conflictividad social. Aparecen cada vez con mayor evidencia los aspectos contradictorios del gobierno de Giolitti, que expresan, por lo demás, el profundo desequilibrio de la situación italiana derivado de las diferencias en el desarrollo del Norte y del Sur, y la necesidad de formar y mantener unida una mayoría parlamentaria y de mediar entre una serie de intereses de grupos sociales. Giolitti pretende tutelar la liber-

tad de organización política y admite la huelga como defensa y acción sindical en las áreas más avanzadas del capitalismo, pero reprime con los habituales métodos de brutal intervención las agitaciones y los motines campesinos del Sur, que alteran el orden público y atemorizan a los propietarios meridionales, ya amenazados política y económicamente por el avance de los intereses industriales.

Esta división también se manifiesta en el socialismo italiano, entre un socialismo urbano reformista y gradualista, y la lucha de los jornaleros en Pulla y Sicilia, que a menudo asumían formas extremas y radicales de antigua *jacquerie*. Sólo la emigración en masa de las regiones meridionales y de las islas conseguía dar una salida a las fuerzas de trabajo excedentes de los pobres recursos locales. Se abría así una «válvula de seguridad» que impedía el estallido de conflictos más graves en las zonas rurales, reduciendo la presión demográfica y social y mejorando, aunque fuera provisionalmente, las condiciones de los contratos de trabajo y el nivel de vida.

La industria pesada se había hecho fuerte, protegida por las tarifas aduaneras y por importantes inversiones de los bancos «mixtos» que se habían desarrollado en Italia después de la crisis crediticia de los años noventa. La concentración de capitales y los intereses compartidos unían en un bloque restringido y poderoso a los astilleros y a la industria de armamentos con la industria siderúrgica (que se había desarrollado en torno a Terni con los establecimientos de Elba y Portoferraio, y los más recientes de Ilva di Bagnoli, nacidos al amparo de las facilidades previstas en la ley de industrialización de Nápoles). El Banco Comercial y el Crédito Italiano eran las principales fuentes de financiación de esta actividad que, por el altísimo costo de las fábricas, exigía una ingente inmovilización de capitales. El sistema sólo se podía sostener por las subvenciones y los pedidos estatales, justificados por intereses estratégicos y militares y por la necesidad de dotar al país de una base productiva autónoma. Se consiguieron importantes resultados con los nuevos establecimientos de ciclo continuo de Piombino, Portoferraio y Bagnoli, a los que se dotó de la más moderna tecnología. Con la fundación del Banco de Italia, la especulación bancaria y financiera quedó sometida a un control más atento.

No obstante los privilegios de que gozaba la industria pesada, y en particular la siderurgia, también hicieron notables progresos, aprovechando la favorable coyuntura económica, las industrias mecánica (fue entonces que se desarrolló la producción de automóviles, y la FIAT nació en 1899), química y, sobre todo, eléctrica. El Banco Comercial y el Crédito Italiano intervinieron con cuantiosas financiaciones también en este sector. La crisis de 1907 amortiguó, pero no interrumpió el desarrollo industrial. No hay que olvidar, sin embargo, que,

en 1911, sobre una población activa de cerca de dieciocho millones de censados, más de diez millones, o sea, más del 50 por ciento, trabajaban en el sector primario, es decir en la agricultura, y los ocupados por la industria en el sentido más amplio, incluidas las empresas pequeñas y artesanales, no eran más de cuatro millones y medio.

Las transformaciones económicas y las inquietudes sociales están documentadas no tanto por las variaciones estadísticas, poco significativas en conjunto, cuanto por el crecimiento de las organizaciones sindicales y los acontecimientos políticos. Las Cámaras del trabajo, estructuras territoriales, caracterizaron originariamente al movimiento sindical italiano, imponiéndose a las federaciones de oficios y encuadrando también, y sobre todo, al proletariado rural del valle del Po. Una prueba de la particular importancia de la lucha en el campo puede deducirse del hecho de que la primera gran organización sindical que superó los límites locales fue la Federterra, fundada en 1901. La Confederación General del Trabajo sólo se constituyó cinco años después (1906).

La radicalización de los conflictos sociales se hizo sentir en el Parlamento socialista. En el congreso de Bolonia, de abril de 1904, el ala reformista de Turati fue derrotada por el grupo de izquierda encabezado por Enrico Ferri y Arturo Labriola. Labriola se inclinaba por la acción directa y la huelga general, siguiendo las teorías del sindicalismo revolucionario. La huelga de 1904 puso a prueba el proyecto político y la práctica giolittiana de no intervención, contrapuesta a la represión exigida por los representantes más tradicionales de la burguesía y de las clases propietarias. La huelga se extinguió en algunos días, y en las siguientes elecciones Giolitti consiguió un éxito importante mientras los socialistas perdieron algunos escaños (pasaron de treinta y tres a veintinueve). Sin embargo, la aplicación de la política giolittiana tropezaba con muchos obstáculos y levantó combativos grupos de oposición tanto en la derecha como en la izquierda. Mientras la mayoría del Parlamento se mostraba dispuesta a sostener a Giolitti o a sus lugartenientes, o a conceder incluso un breve paréntesis de gobierno al más autorizado opositor, Sonnino, la minoría, particularmente activa en el país —en los círculos intelectuales, en la prensa y en las organizaciones políticas y sindicales— desarrollaba la crítica al parlamentarismo, al choque entre intereses burgueses y reformismo socialista, a las conexiones entre la gran industria y la política proteccionista del gobierno, al crecimiento de la burocracia, al abandono del Sur y a la política exterior abdicante, insistiendo en la separación entre el país «real» y el país «legal». En el campo antigiolittiano se alineaban, por lo tanto, a la izquierda, los sindicalistas revolucionarios, los socialistas maximalistas y los liberales antiproteccionistas; a la de-

recha, distintas corrientes que luego confluyeron en el movimiento nacionalista.

Sobre todo después de la crisis económica de 1907, la política giolittiana de control y limitación de las oligarquías financiera e industrial y de asunción directa por parte del Estado de algunos servicios de interés general, encontró cada vez menos consenso en las poderosas clases dirigentes y en el Parlamento, como lo demuestra el desafortunado episodio de la ley que proponía la nacionalización de los seguros. La nueva oposición antigiolittiana, abierta o disimulada, era mucho más poderosa y variada en el frente conservador, que continuaba representando a la vieja clase política rentista y agraria que al final del siglo había intentado reprimir las agitaciones populares, disolver las organizaciones de jornaleros y obreros y vetar la huelga.

Giolitti, que había dimitido en marzo de 1905, volvió al gobierno en mayo del año siguiente y permaneció en él hasta diciembre de 1909. Prosiguió con su moderada política reformadora, que se volvió cada vez menos profunda pero logró importantes resultados en el campo financiero. La tasa de interés de los títulos de la deuda pública bajó, en efecto, del 5 al 3,75 por ciento, permitiendo un considerable ahorro y un equilibrado balance de las cuentas del Estado. En el campo fiscal, Giolitti actuó con mucha cautela para no contrariar los intereses de las clases propietarias, atenuando algunos aspectos radicales de su programa, que parecía orientado —según el reciente ejemplo inglés— hacia una redistribución y nivelación de la renta a través de la presión fiscal y el sostén de los seguros sociales.

En el país, entre tanto, a la oposición de la derecha y la izquierda se sumaba el antigiolittismo de las organizaciones católicas, cuya actividad, sobre todo sindical, se volvía cada vez más viva. La relación de los católicos, estadísticamente la gran mayoría del país, con el nuevo Estado y con las instituciones nacidas de la ruptura entre el poder temporal y el conservadurismo vaticano, tendía a afirmarse sobre nuevas bases y a adquirir nuevos contenidos, aprovechando que los antiguos conflictos territoriales y jurisdiccionales (la cuestión romana) cedían paso a la necesidad de organizar y orientar a las masas populares en un contexto muy diferente, en el cual uno de los temas centrales era el choque entre «capital» y «trabajo» y la organización de las masas.

Después de las elecciones de 1909, Giolitti intentó tener en cuenta el nuevo clima político y las nuevas tendencias sociales con proyectos tendentes a aumentar los impuestos directos y disminuir los indirectos que gravaban indiscriminadamente a toda la población. Propuso, además, un proyecto de ley para renovar y regular las subvenciones marítimas con el criterio de castigar el monopolio privado en este sec-

tor. El Parlamento recibió muy tibiamente estas propuestas y Giolitti dimitió. Pero en marzo de 1911 regresó a la presidencia del consejo formando un cuarto ministerio que duró hasta 1914. Fue un período de grandes realizaciones que, sin embargo, llevaron a la caída del sistema giolittiano.

El estadista retomó la iniciativa con la propuesta del sufragio universal masculino. El número de los votantes pasaba de poco más de tres a casi nueve millones. El sufragio universal era uno de los componentes de la sociedad de masas que emergía de las transformaciones de las últimas décadas. En los comienzos del siglo, Giolitti había sabido captar con perspicacia las perspectivas de desarrollo de la naciente sociedad. Pero ahora, aunque promoviendo algunas reformas electorales, permanecía encerrado en viejos esquemas ligados al antiguo funcionamiento del sistema político fundado en las relaciones personales y clientelistas, en asociaciones electorales provisionales, en las presiones de los funcionarios y en las variaciones parlamentarias. Fundamentalmente justa era su idea de que una política de tolerancia y de apertura favorecería la integración de las fuerzas sociales en la comunidad nacional, pero en el clima de exasperación nacionalista —al cual contribuyó él mismo con la empresa libia— la conducción del proceso y la hegemonía cultural y política pasaron a otras manos, más hábiles para manejar los resortes de la sociedad de masas, influir en la opinión pública y organizar la presión popular.

Junto con la concesión del sufragio universal se desarrolló la guerra contra Turquía por la conquista de Libia, preparada cuidadosamente en el plano diplomático pero no muy desarrollada en el militar. La guerra, sin embargo, mientras consolidaba el frente nacionalista, provocaba reacciones y divisiones en el partido socialista. Bissolati y Bonomi, que encabezaban el ala más proclive a colaborar con el gobierno, fueron expulsados en julio de 1912; el partido se encerró en posiciones de izquierda mientras crecía la influencia de Benito Mussolini y declinaba la de Filippo Turati.

Las elecciones de octubre de 1913 —las primeras con sufragio universal— marcaron el final del sistema giolittiano. Si los católicos confesos eran un pequeño grupo de veintinueve diputados, la mayor parte de los diputados liberales (doscientos veintiocho sobre trescientos cuatro, según el presidente de la Unión electoral católica, Ottorino Gentiloni) habían sido electos con el apoyo del electorado católico después de haber firmado un pacto que tomó el nombre de Gentiloni. En la izquierda, los socialistas aumentaban su número en el Parlamento y adoptaban posiciones más radicales. La mayoría parlamentaria era muy heterogénea y el clima político muy diferente del de comienzos del siglo. Variadas y contrastantes ideas recorrían el país. Giolitti de-

cidió concederse un descanso esperando retomar la situación en un momento más favorable, como lo había logrado muchas veces en los años anteriores gracias a su experiencia parlamentaria y a su conocimiento de los mecanismos del gobierno. El estallido de la primera guerra mundial complicó aún más la situación y volvió irrealizable el proyecto giolittiano.

BIBLIOGRAFÍA

Primera parte: 1800-1871

1. La Inglaterra de la Revolución industrial y la Europa de Napoleón

Sobre la Revolución industrial.
Obras generales

Ashton, T. S., *La rivoluzione industriale (1760-1830)*, Roma - Bari, Laterza, 1978.
Castronovo, V., *La rivoluzione industriale*, Florencia, Sansoni, 1988.
Deane, P., *La prima rivoluzione industriale*, Bolonia, Il Mulino, 1982.
Fohlen, C. *Che cos'è la rivoluzione industriale*, Milán, Feltrinelli, 1976.
Hartwell, R. M., *La rivoluzione industriale inglese*, Bari, Laterza, 1973.
Henderson, O., *Le rivoluzioni industriali in Francia, Germania y Russia (1800-1910)*, Nápoles, Giannini, 1971.
Kemp, T., *L'industrializzazione in Europa nell'Ottocento*, Bolonia, Il Mulino, 1988.
Mantoux, P., *La rivoluzione industriale*, Roma, Editori Riuniti, 1971.
Mori, G., *La rivoluzione industriale*, Milán, Mursia, 1972.
Pollard, S., *La conquista pacifica: l'industrializzazione in Europa dal 1760 al 1970*, Bolonia, Il Mulino, 1990.
Rioux, P., *La rivoluzione industriale*, Milán, Garzanti, 1976.
Salamone, N., *Le cause sociali della rivoluzione industriale inglese*, Milán, Isedi, 1978.
Wrigley, E. A., *La rivoluzione industriale in Inghilterra. Continuità, caso e cambiamento*, Bolonia, Il Mulino, 1992.

Aspectos particulares

Bairoch, P., *Rivoluzione industriale e sottosviluppo*, Turín, Einaudi, 1967.
De Palma, A., *Le macchine e l'industria da Smith a Marx*, Turín, Einaudi, 1971.
Hayek, F. A. (ed.), *Il capitalismo e gli storici*, Florencia, Sansoni, 1967.

Jones, E. L., *Agricoltura e rivoluzione industriale: 1630-1850*, Roma, Editori Riuniti, 1982.
Musson, A. E. y Robinson, E., *Scienza e tecnologia nella rivoluzione industriale*, Bolonia, Il Mulino, 1974.
Thompson, E. P., *Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra*, Milán, Il Saggiatore, 1966.
Williams, E., *Capitalismo e schiavitù*, Bari, Laterza, 1971.
Williams, R., *Capitalismo e rivoluzione industriale*, Turín, Einaudi, 1972.

Sobre la Revolución francesa y el período napoleónico
Títulos clásicos

Bergeron, L., Furet, F. y Koselleck, *L'età della rivoluzione europea: 1780-1848*, Milán, Feltrinelli, 1975.
Furet, F., *Il secolo delle rivoluzioni, 1770-1880*, Milán, Rizzoli, 1989.
— (ed.), *L'eredità della rivoluzione francese*, Bari, Laterza, 1989.
Godechot, J., *L'epoca delle rivoluzioni*, Turín, Udet, 1969.
—, *Le rivoluzioni: 1770-1799*, Milán, Mursia, 1975.
Hobsbawm, E. J., *Le rivoluzioni borghesi, 1789-1848*, Milán, Il Saggiatore, 1972.
Palmer, R. R., *L'età delle rivoluzioni democratiche*, Milán, Rizzoli, 1971.

Sobre Napoleón

Bergeron, L., *Napoleone e la società francese*, Nápoles, Guida, 1984.
Bertrand, J. P., *1799. Bonaparte prend le pouvoir le 18 brumaire*, París, Éditions Complexe, 1992.
Burke, E., *Scritti politici*, Turín, Utet, 1963.
Clausewitz, K. von, *La campagne de 1812 en Russie*, París, Éditions Complexe, 1992.
Crouzet, *L'économie britannique et le bloc continental*, París, 1958.
Chandler, D. G., *I marescialli di Napoleone*, Milán, Rizzoli, 1988.
—, *Le campagne di Napoleone*, Milán, Rizzoli, 1973.
Godechot, J., *Napoleone*, Novara, De Agostini, 1988.
—, *La grande nazione*, Bari, Laterza, 1962.
Herold, J. C., *Bonaparte in Egitto*, Turín, Einaudi, 1965.
—, *Vita di Napoleone*, Milán, Il Saggiatore, 1982.
Herre, F., *Napoleone Bonaparte*, Milán, Bompiani, 1989.
Lefebvre, G., *Napoleone*, Bari, Laterza, 1991.
Nicolson, N., *Napoleone in Russia*, Milán, Rizzoli, 1987.
Tarle, E., *Napoleone*, Roma, Editori Riuniti, 1975.
Villat, L., *La rivoluzione francese e l'impero napoleonico*, Turín, Einaudi, 1940.
Woolf, S. J., *Napoleone e la conquista dell'Europa*, Bari, Laterza, 1990.

Sobre la presencia francesa en Italia

Capra, C., *L'età rivoluzionaria e napoleonica*, Turín, Loescher, 1978.
De Felice, R., *L'Italia giacobina*, Nápoles, Esi, 1965.

Ghisalberti, C., *Le costituzione giacobine*, Milán, Giuffré, 1957.
Giuntella V. E. y Zaghi, C. (eds.), *Bibliografia dell'età del Risorgimento*, Florencia, Olschki, I, 1971.
Rao, A. M., *Esuli. L'immigrazione politica italiana in Francia*, Nápoles, Guida, 1992.
Tarle, E. V., *La vita economica dell'Italia nell'età napoleonica*, Turín, Einaudi, 1950.
Valente, G., *Murat e l'Italia meridionale*, Turín, Einaudi, 1965.
Villani, P. (ed.), «Notabili e funzionari dell'Italia napoleonica», *Quaderni Storici*, n.º 38, 1978.
—, «L'età rivoluzionaria e napoleonica», en *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, vol. II, Bari, Laterza, 1989.
Zaghi, *Napoleone e l'Italia*, Turín, Utet, 1989.

2. La Restauración

Sobre el orden europeo del congreso de Viena

Kissinger, H. A., *A World Restored. Metternich, Castlereagh and the Problem of Peace 1812-1822*, Boston, Houghton Mifflin, 1989.
Nicolson, H., *Il Congresso di Vienna*, Florencia, La Nuova Italia, 1952.
Omodeo, A., *Saggi sull'età della Restaurazione*, Turín, Einaudi, 1976.
Sauvigny, B. de, *La Restauration*, París, Flammarion, 1955.

Historia del período en Francia

Daumard, A., *Les bourgeois en France depuis 1815*, París, Flammarion, 1992.
Dausette, A., *Louis Napoléon et la conquête du pouvoir*, París, Hachette, 1961.
Godechot, J., *La controrivoluzione. 1789-1804*, Milán, Mursia, 1988.
—, *La rivoluzione del 1848*, Novara, De Agostini, 1982.
Guillemin, H., *La première resurrection de la république*, París, Gallimard, 1967.
Rémond, R., *La destra in Francia. Dalla restaurazione alla V Repubblica*, Milán, Mursia, 1970.
Vigier, Ph., *La monarchie de Juillet*, París, PUF, 1962.
—, *La seconde République*, París, PUF, 1967.

Sobre la independencia de América Latina

Keen, B., *History of Latin America*, 2 vols., esp. vol. II: *Independence to the present*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1992.

Sobre las luchas políticas y sociales inglesas

Grandi, E. (ed.), *Le origini del movimento operaio inglese. 1815-1848*, Bari, Laterza, 1973.

Hobsbawm, E. J., *I ribelli. Forme primitive della rivolta sociale*, Turín, Einaudi, 1974.
—, *Lavoro, cultura e mentalità nelle società industriali*, Bari, Laterza, 1990.
Salvadori, L., Villi, C., *Il luddismo*, Roma, Editori Riuniti, 1987.
Thompson, E. P., *op. cit.*

3. De 1848 a 1871

Obras generales (además de las ya citadas para el capítulo anterior)

Albrecht-Carré, R., *Le rivoluzioni nazionali 1848-1914*, Turín, Utet, 1969.
Di Nolfo, E., *Europa e Italia nel 1855-1856*, Città del Castello, 1967.
Pombeni, P. (ed.), *Le trasformazioni politiche nell'Europa liberale, 1870-1890*, Bolonia, Il Mulino, 1986.
Renouvin, P., *Il secolo XIX. L'Europa al vertice della potenza*, Florencia, Sansoni, 1961.
Salvatorelli, L., *La rivoluzione europea del 1848-49*, Milán, Rizzoli, 1949.
Valsecchi, F., *L'Alleanza di Crimea*, Milán, Mondadori, 1968.

Sobre el mundo alemán. Francia

Agulhon, M., *La Repubblica nel villaggio. Una comunità francese tra rivoluzione e Seconda repubblica*, Bolonia, Il Mulino, 1990.
—, *La Francia della II repubblica 1848-1852*, Roma, Editori Riuniti, 1979.
Duverger, M., *Le costituzioni della Francia*, Nápoles, Esi, 1984.
Huard, R., *Le suffrage universel en France 1848-1946*, París, Aubier, 1992.
Lutz, H., *Tra Asburgo e Prussia. La Germania dal 1815 al 1866*, Bolonia, Il Mulino, 1992.
Magraw, R., *Il secolo borghese in Francia 1815-1914*, Bolonia, Il Mulino, 1987.
Rosanvallon, R., *Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France*, París, Gallimard, 1992.
Valsecchi, F., *Il Secondo Impero e la politica europea*, Roma, Ricerche, 1973.

Segunda parte: 1871-1914

Berta, G., *Capitali in gioco. Cultura economica e vita finanziaria nella City di fine Ottocento*, Padua, Marsilio, 1990.
Cameron, R., *Le banche e lo sviluppo del sistema industriale*, Bolonia, Il Mulino, 1975.
Confalonieri, A., *Banche e industria in Italia 1894-1906*, 3 vols., Bolonia, Il Mulino, 1980.
Headrick, D. R., *I tentacoli del progresso. Il trasferimento tecnologico nell'età dell'imperialismo*, Bolonia, Il Mulino, 1990.
Kindelberger, C. P., *Storia delle crisi finanziarie*, Bari, Laterza, 1991.

Landes, D., *Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell'Europa occidentale dal 1750 ai nostri giorni*, Turín, Einaudi, 1978.
Leon, P., *Congiuntura e crisi strutturale tra economia e capitale*, Padua, Marsilio, 1974.
Moustson, A. E. y Robinson, E., *Scienza e tecnologia nella rivoluzione industriale*, Bolonia, Il Mulino, 1974.
Pollard, S., *La conquista pacifica. L'industrializzazione in Europa dal 1760 al 1970*, Bolonia, Il Mulino, 1989.
Sori, E., *L'emigrazione italiana dall'unità alla seconda guerra mondiale*, Bolonia, Il Mulino, 1984.
Weber, E., *Da contadini a francesi. La modernizzazione della Francia rurale 1870-1914*, Bolonia, Il Mulino, 1989.
Weiner, M., *Il progresso senza ali. La cultura inglese e il declino dello spirito industriale (1850-1980)*, Bolonia, Il Mulino, 1985.

La explosión imperialista

Bairoch, P., *Commerce extérieur et développment économique de l'Europe au XIX siècle*, París, Mouton, 1976.
Betts, R., *L'alba illusoria. L'imperialismo europeo nell'Ottocento*, Bolonia, Il Mulino, 1992.
Carocci, G., *L'età dell'imperialismo (1870-1914)*, Bolonia, 1990.
De Cecco, M., *Moneta e impero. Il sistema finanziario internazionale dal 1890 al 1914*, Turín, Einaudi, 1979.
Fieldhouse, D. K., *L'età dell'imperialismo (1830-1914)*, Bari, Laterza, 1975.
Gallager, J. y Robinson, R., «The imperialism of Free Trade», en *The Economic History Review*, II, 6 (1953-1954), n.º 1, pp. 1 y ss.
Girault, R., *Emprunts russes et l'investissements français en Russie 1887-1914. Recherches sur l'investissement international*, París, Colin, 1973.
Headrick, D. R., *Al servizio dell'impero. Tecnologia e imperialismo europeo nell'Ottocento*, Bolonia, Il Mulino, 1984.
Hobsbawm, E., *L'età degli imperi 1875-1914*, Bari, Laterza, 1991.
Kiernan, V., *Eserciti e imperi. La dimensione militare dell'imperialismo europeo 1815-1960*, Bolonia, Il Mulino, 1985.
Lichteim, G., *Storia dell'imperialismo*, Milán, Sonzogno, 1974.
Mayer, A., *Il potere dall'Ancien Régime fino alla prima guerra mondiale*, Bari, Laterza, 1982.
Miege, J. L., *Espansione europea e decolonizzazione dal 1870 ai giorni nostri*, Milán, Mursia, 1976.
Mommsen, W. J., *L'età dell'imperialismo*, Milán, Feltrinelli, 1990.
Semmel, R., *Rise of Free Trade Imperialism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1970.

Internacionalismo obrero y movimiento socialista

AA. VV., *Storia del marxismo*, especialmente vol. II: *Il marxismo nell'età della Seconda Internazionale*, Turín, 1979.

—, *Storia del marxismo contemporaneo*, Milán, Feltrinelli, 1974.
Abendroth, W., *Storia sociale del movimento operaio europeo*, Turín, Einaudi, 1971.
Agosti, A., *La internazionali operaie*, Turín, Loescher, 1973.
Biagini, E. F., *Il liberalismo popolare. Radicali, movimento operaio e politica nazionale in Gran Bretagna 1860-1880*, Bolonia, Il Mulino, 1992.
Cole, G. D. H., *Storia del pensiero socialista*, Bari, Laterza, 1974-1978.
Dolleans, E., *Storia del movimento operaio*, Florencia, Sansoni, 1968.
Droz, J. (ed.), *Storia del socialismo*, Roma, Editori Riuniti, 1973.
Fetscher, I., *Il marxismo. Storia documentaria*, Milán, Feltrinelli, 1969-1970.
Haupt, G., *La seconda internazionale*, Florencia, La Nuova Italia, 1973.
Hobsbawm, E. J., *Studi di storia del movimento operaio*, Turín, Einaudi, 1972.
Kuczynski, J., *Nascita della classe operaia*, Milán, Saggiatore, 1967.
Lichtheim, G., *Le origini del socialismo*, Bolonia, Il Mulino, 1970.
Pinzani, C., *Jaurès, l'Internazionale e la guerra*, Bari, Laterza, 1970.
Renda, F., *I fasci siciliani (1892-1894)*, Turín, Einaudi, 1977.
Salvadori, M. L., *Kautsky e la rivoluzione socialista. 1880-1938*, Milán, Feltrinelli, 1978.
Steinberg, H. J., *Il socialismo tedesco da Bebel a Kautsky*, Roma, Editori Riuniti, 1979.
Tvardovskaja, V., *Il populismo russo*, Roma, Editori Riuniti, 1975.
Venturi, F., *Il populismo russo*, Turín, Einaudi, 1972.
Waldenberg, M., *Il papa rosso Karl Kautsky*, 2 vols., Roma, Editori Riuniti, 1980.
Zilli, V., *La rivoluzione russa del 1905*, Nápoles, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1963.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. **El mundo contemporáneo** 7

PRIMERA PARTE

1800-1871

PREMISA. **Visión panorámica** 15

1. **La Inglaterra de la Revolución industrial y la Europa de Napoleón** 21
   1. La Inglaterra de la Revolución industrial 21
   2. El desarrollo comercial, la mecanización, la cuestión social 24
   3. Napoleón y la Revolución francesa 27
   4. La monarquía administrativa. Consenso y oposición 30
   5. La rivalidad anglofrancesa 32
   6. Guerra y paz en Europa 36
   7. El bloqueo continental 39
   8. Apogeo del Imperio napoleónico 44
   9. De la campaña de Rusia al exilio 47

2. **La Restauración** 53
   1. El congreso de Viena 53
   2. El nuevo orden europeo 54
   3. Fundamentos ideológicos y regímenes políticos 56
   4. Diferencias político-territoriales 60
   5. Las primeras grietas del sistema: la revolución de 1820-1821 62
   6. La represión y el marco internacional 64
   7. La independencia griega y la cuestión de Oriente 67
   8. La independencia de las colonias de América meridional: debilidad estatal e inestabilidad política 69

9. Luchas político-sociales y reforma en Inglaterra (1815-1832) 72
10. De la reforma electoral al librecambismo 76
11. Francia: la restauración borbónica 80
12. Desde 1820 a la revolución de julio 82
13. Desde la revolución de julio hasta 1848 84
14. Crisis en las relaciones internacionales 87

3. **Desde 1848 a 1871** 95
1. Hacia la formación de nuevos Estados nacionales 95
2. Los extraordinarios acontecimientos de 1848 98
3. Francia: la Segunda república 102
4. Francia: el Segundo Imperio 106
5. La unidad italiana 110
6. Moderados, demócratas y la consumación de la unidad italiana 113
7. La unidad alemana 119
8. La iniciativa prusiana y la política de Bismarck 123
9. La confianza en la era positiva y las inquietudes culturales 129
10. Fuera de Europa 131

Segunda parte

1871-1914

Premisa. **Visión panorámica** 139

4. **La economía mundial** 143
1. La crisis de 1873 y la larga depresión 143
2. Los ciclos de la economía capitalista 144
3. De la larga depresión a la nueva fase de desarrollo 147

5. **El sistema monetario y financiero** 151
1. Inglaterra conserva su primacía 151
2. Bimetalismo y monometalismo: la adopción del *gold standard* 153
3. El mercado financiero de Londres 156
4. El imperialismo inglés 158
5. La decadencia del *gold standard* 161

6. **Las innovaciones tecnológicas** 165
1. La era del acero 165
2. Industria mecánica y producción masiva 166
3. Química y electricidad. Su influencia en los sistemas de producción 170

4. *Trusts* y corporaciones: la concentración industrial 172
5. Banca e industria: el capital financiero 174
6. El problema del despegue industrial: la banca mixta 175
7. La intervención del Estado 179
8. Crisis agraria y emigración 180

7. **Estructuras constitucionales, vida política y tendencias culturales en Europa** 185
1. Monarquía y república 185
2. La república parlamentaria en Francia 187
3. De Boulanger a Dreyfus 189
4. Incertidumbre y crisis en la evolución parlamentaria del reino de Italia: el gobierno de la derecha 191
5. La izquierda y el transformismo 192
6. La crisis del final de siglo 194
7. El Reich y la vía prusiana hacia el capitalismo 196
8. Bismarck: desde la lucha contra los católicos hasta las leyes antisocialistas 198
9. Penetración del capitalismo y articulación social 200
10. El nacionalismo: elemento de cohesión en el Reich y de disgregación en el Imperio de los Habsburgos 201
11. Reformas electorales, conservadurismo e imperialismo social en Inglaterra 205
12. La reforma agraria y los comienzos de la industrialización en Rusia 208
13. Nuevas tendencias culturales y artísticas entre los siglos XIX y XX 211

8. **La explosión imperialista** 219
1. Del librecambio al proteccionismo 219
2. Imperialismo y socialismo 221
3. Las dos conferencias de Berlín: de Europa a África 223
4. Libertad de comercio y ocupación efectiva 226
5. El reparto de África 228
6. La modernización de Japón y la cuestión china 233
7. De la insurrección de los bóxers a la república de Sun Yat-Sen 239
8. Nuevo orden en Europa: el aislamiento de Alemania 242
9. Hacia la guerra 244

9. **Internacionalismo obrero y movimiento socialista** 247
1. Internacionalismo obrero y difusión del marxismo 247
2. El movimiento socialista en Inglaterra, Francia y Alemania 249
3. Organizaciones obreras y vida política 251

4. Revisionismo y ortodoxia 253
5. La revolución rusa de 1905 255
6. Igualdad fiscal y problemas constitucionales en Gran Bretaña 256
7. Tensiones sociales e integración nacional en Francia 261
8. El período de Giolitti en Italia 263

Bibliografía 271

Impreso en el mes de septiembre de 1999
en A&M GRÀFIC, S. L.
Polígono Industrial «La Florida»
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)